

# Gobernanza de los recursos naturales y participación social

*Fuentes de rechazo y apoyo a la minería*



Moisés Arce  
Michael S. Hendricks  
Marc S. Polizzi

Fondo  
Editorial



UNIVERSIDAD  
DEL PACÍFICO



# Gobernanza de los recursos naturales y participación social

*Fuentes de rechazo y apoyo a la minería*

Moisés Arce  
Michael S. Hendricks  
Marc S. Polizzi

Fondo  
Editorial



UNIVERSIDAD  
DEL PACÍFICO

Título original en inglés: *The Roots of Engagement: Understanding Opposition and Support for Resource Extraction*. El libro fue publicado por Oxford University Press en noviembre de 2022.

© Moisés Arce, Michael S. Hendricks y Marc S. Polizzi, 2023

De esta edición:

© Universidad del Pacífico  
Jr. Gral. Luis Sánchez Cerro 2141  
Lima 15072, Perú

**Gobernanza de los recursos naturales y participación social: fuentes de rechazo y apoyo a la minería**

Moisés Arce, Michael S. Hendricks y Marc S. Polizzi

1.ª edición electrónica: marzo de 2023

Diseño de la carátula: Ícono Comunicadores

Traducción: Camilo Andrés Ordóñez Zambrano

ISBN ebook: 978-9972-57-512-9

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú: 2023-02396

Disponible en fondoeditorial.up.edu.pe

doi: <http://dx.doi.org/10.21678/978-9972-57-512-9>

---

**BUP**

**Arce, Moisés**

Gobernanza de los recursos naturales y participación social: Fuentes de rechazo y apoyo a la minería / Moisés Arce, Michael S. Hendricks, Marc S. Polizzi. -- 1a edición. -- Lima: Universidad del Pacífico, 2023.

192 p.

1. Recursos naturales -- Aspectos políticos -- Perú

2. Minería -- Aspectos políticos -- Perú

3. Movimientos sociales -- Perú

I. Hendricks, Michael S.

II. Polizzi, Marc S.

III. Universidad del Pacífico (Lima)

333.70985

(SCDD)

---

La Universidad del Pacífico no se solidariza necesariamente con el contenido de los trabajos que publica. Prohibida la reproducción total o parcial de este texto por cualquier medio sin permiso de la Universidad del Pacífico.

Derechos reservados conforme a ley.

# Índice

Prólogo	7
Prefacio	13
1. Introducción	17
2. Fuentes de rechazo y apoyo a la extracción de recursos	29
3. Oportunidades, no amenazas	57
4. La peregrinación por la vida	81
5. No nos moveremos	103
6. Resultados de las encuestas	127
7. Conclusiones	155
Referencias	179
Siglas y abreviaturas	197



## Prólogo

El *boom* de los *commodities* (2004 – 2014) trajo consigo no solo un importante crecimiento para las economías emergentes, sino también un considerable número de conflictos en torno a nuevas operaciones mineras. Estos se manifiestan hoy en día de múltiples maneras y en diversos niveles y momentos. Comprenderlos es, entonces, una tarea inmensa. Ante ello, los autores de este estudio proponen un novel enfoque y aproximación, y concentran su análisis en aquellos conflictos que tienen lugar en lo que ellos llaman la etapa de acceso a los recursos; es decir, en los conflictos que se generan y crecen cuando aún no se ha consolidado el acceso a los recursos minerales y no se iniciado la construcción ni el desarrollo del proyecto minero.

Antes de entrar en el detalle de los proyectos específicos y de los aportes innovadores que los autores proponen, es importante esbozar un breve contexto general. Durante el *boom* de los *commodities*, e independientemente de sus posturas políticas, los gobiernos del Sur Global fomentaron activamente el «imperativo extractivo» y la ampliación de la frontera extractiva en sus países, toda vez que la actividad extractiva permitió a aquellos países con abundantes recursos naturales —especialmente en América Latina y África Subsahariana— reducir, con mayor o menor éxito, sus niveles de pobreza y desigualdad.

A la luz de la transición hacia una economía basada en fuentes de energía renovable —que demandará mayores cantidades de minerales clave como el cobre, zinc, litio y cobalto, entre otros—, es claro que los gobiernos de países emergentes continuarán siguiendo el imperativo de expansión de la frontera extractiva de manera agresiva y competitiva para mejorar sus ingresos. Sin embargo, precisarán

también encontrar mecanismos y políticas que permitan prevenir y mitigar los conflictos en torno a las industrias extractivas.

En tal contexto, los autores de este libro se preguntan qué es lo que determina las actitudes de los individuos que viven cerca de las fronteras extractivas y cómo se forma su percepción de las amenazas y oportunidades que la minería trae en aquellas zonas de frontera en las que aún no se ha iniciado la actividad extractiva. Nos hacen notar que, si bien la literatura que estudia las causas de los conflictos por recursos es sumamente vasta y rica, y son numerosos los aportes que permiten identificar los distintos factores que existen alrededor de los conflictos, los diversos niveles en los que se desarrollan y los múltiples actores que participan, estos estudios se concentran principalmente en las características estructurales de los proyectos mineros. Podemos citar, por ejemplo, las iniciativas de los gobiernos para promover instituciones participativas como la consulta previa, las estrategias de inversión social o responsabilidad social corporativa de las empresas y las incontables mesas de diálogo que se han conformado en el Perú.

Con respecto a la oposición o apoyo a la actividad extractiva, la literatura estudiada por los autores señala que la primera gira en torno a la necesidad de defender el acceso y la calidad del agua, la conservación de la tierra y la actividad económica predominante en la comunidad (generalmente agricultura), la supervivencia cultural de los pueblos indígenas y la defensa del medio ambiente. Sobre el apoyo a la presencia de la minería, nos señalan que la literatura indica que las comunidades buscan una distribución más equitativa y mayores beneficios económicos de la extracción de recursos naturales en su entorno. Pero la bibliografía existente no necesariamente desarrolla de qué manera las personas forman sus opiniones y posturas, sean estas de oposición o apoyo a la actividad extractiva. Sin embargo, sí deja muy claro que oposición y apoyo no son categorías absolutas e inamovibles: hay aspectos de la minería frente a los que un individuo puede estar a favor mientras que permanece en contra en cuanto a otros, y estos no solo no son los mismos en todos los individuos, sino que pueden cambiar en el tiempo.

Asimismo, los autores evidencian que en la literatura sobre conflictos es «común que las zonas de conflicto se presenten como focos de oposición y que a menudo se ignoren las fuentes de apoyo» (p. 54). Para ellos, es importante entender cómo se generan tanto los focos de resistencia como los de apoyo para así lograr una imagen más completa de los conflictos en las zonas de frontera. Y para eso, nos dicen, es preciso centrarse en los individuos que viven cerca de la frontera extractiva donde aún no se ha iniciado la actividad.

La potencial llegada de una empresa extractiva es percibida inicialmente como una amenaza y, a la vez, como una oportunidad. Para algunos, la mina pone en peligro el tejido social y sus actividades económicas tradicionales, especialmente la agricultura. Para otros, es una potencial fuente de empleo, de nuevos ingresos y la posibilidad de nuevas actividades económicas. Sea que estas comunidades asuman una actitud de oposición y rechazo a la actividad o se organicen para aprovechar las oportunidades, hay dinámicas internas que transcurren y movilizan a sus miembros en una u otra dirección. Ambas posturas coexisten y batallan al interior de las comunidades. En esas zonas está claro que la minería no es vista de manera uniforme ni consistente por todos sus habitantes. Entonces, ¿cómo es que una actitud o postura de rechazo se torna más fuerte que una de apoyo?, ¿cuáles son los factores que pesan y se ponen en juego?, ¿cómo se definen las actitudes de esas personas hacia un proyecto minero?, ¿qué conjunto de características sociales separa a los individuos que se oponen de aquellos que la apoyan?, ¿qué hace que, generalmente, la oposición a la extracción sea más contundente? Estas son algunas de las preguntas que nuestros autores buscan responder. Para hacerlo, adoptaron un enfoque singular, aplicando encuestas de opinión en tres comunidades en áreas de frontera extractiva: Tía María en Perú, Rancho Grande en Nicaragua y Fuleni en Kwa-Zulu Natal en Sudáfrica. Es interesante notar que todos estos casos son conocidos por su extrema oposición, por su larga duración, y porque ninguno de ellos está definitivamente cancelado. Los tres se ubican en la etapa de acceso a los recursos, es decir, el conflicto surgió anteriormente y la extracción no se ha dado aún. En Perú, por ejemplo, Southern Perú Copper aún confía que las comunidades vean al proyecto de Tía María como una oportunidad y espera poder iniciarlo en un futuro no lejano.

En todos los casos, los autores examinan aquello que da forma a las opiniones de las personas sobre la extracción de recursos y analizan qué factores pesan para que algunos acepten la actividad extractiva mientras que otros las rechazan. Para esto aplicaron una metodología mixta, la misma que incluyó visitas de campo y encuentros, así como la aplicación de encuestas de opinión. Las visitas de campo ayudaron a informar y mejorar las encuestas y aclarar los resultados de las que quedaron inconclusas. Este enfoque a nivel individual revela la fluidez que persiste en las actitudes sobre la extracción de recursos, incluso en áreas que parecen uniformemente opuestas a la minería, y en los procesos de formación de actitudes enraizados en micropolíticas y comportamientos colectivos, así como una perspectiva interregional sobre las campañas contra la minería. En todos los

casos existen individuos y grupos con disposición a apoyar la actividad minera en determinadas circunstancias o situaciones.

Arce, Hendricks y Polizzi encuentran que la participación social de un individuo —definida como la participación en organizaciones locales, sean juntas de agua, grupos religiosos, asambleas comunitarias, o asociaciones agrícolas— genera un mayor grado de compromiso social. Esto es fundamental para explicar las diferencias que se dan a nivel comunitario en el rechazo o apoyo a la minería. Examinan asimismo aquellos factores a nivel individual que dan forma a las opiniones de una persona sobre la extracción de recursos y analizan qué factores determinan que algunas personas acepten actividades extractivas cerca de sus hogares, mientras que otras las rechazan.

Es, entonces, la participación en la mayor cantidad de organizaciones locales la que da forma y refuerza con más peso las actitudes compartidas hacia factores o amenazas externas. Los individuos socialmente comprometidos gozan de un mayor acceso a información y se identifican más prontamente con las preocupaciones de la comunidad y, por último, «...su participación en organizaciones locales siembra una concepción de comunidad...» (p. 35), lo que les da un mayor nivel de empoderamiento frente a los actores de la industria. Podría uno decir que esto no es nada nuevo, que es algo «que ya se sabe». Pero es aquí donde el trabajo estadístico que el libro presenta en sus diversos capítulos permite una seria evaluación del peso que esta variable de participación social tiene en comparación a otras variables o explicaciones alternativas. Los autores evidencian cómo la participación social separa a los «anti» y a los «pro» minería, y dan cuenta de su importancia al lado de un abanico de explicaciones alternativas.

Las conclusiones del estudio demuestran que la participación social es clave para el éxito de la oposición o rechazo a la actividad extractiva, toda vez que esta permite fortalecer la idea de comunidad, la identidad común de grupo y los valores compartidos, produce información clave y permite a sus miembros priorizar el bienestar de la comunidad por encima de los intereses individuales. Asimismo, el estudio encuentra que existen voces de apoyo, aun si se mantienen silenciosas y menos escuchadas.

Este libro abre el camino para la investigación en torno a dos interrogantes: cómo las organizaciones locales colaboran y generan sinergias con organizaciones nacionales y transnacionales que no se encuentran en el territorio; y, por otro lado, qué aprendizajes ha tenido la industria extractiva en cuanto a la mitigación de conflictos. Dicho esto, es claro que los resultados y conclusiones generados por la investigación de Arce, Hendricks y Polizzi deberían ser con-

siderados seriamente a la hora de diseñar estrategias de prevención por parte de diversos actores, y también para informar las políticas y prácticas de las relaciones empresa-comunidad-Estado. ¿Qué pueden, y deben hacer el Estado y las empresas para mitigar la desconfianza y minimizar las asimetrías de información y poder existentes? ¿Cómo promover la participación social legítima de las comunidades y no una participación coaccionada o impuesta por otros actores y/o intereses?

Gonzalo Delgado

Director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico (CEMS-UP)



## Prefacio

La extracción de recursos naturales se ha convertido en una estrategia económica fundamental para los países del Sur Global. Debido al aumento de la demanda de minerales y otras materias primas, los países de América Latina y África han abierto las puertas a la inversión en el sector extractivo. Si bien estos esfuerzos han sido una bendición para los tesoros nacionales y los actores de la industria, las comunidades que viven cerca de estos proyectos extractivos enfrentan varias externalidades negativas. Las disputas por el acceso al agua, los derechos sobre la tierra, la defensa de los medios de vida de las comunidades y la redistribución de la riqueza de los recursos, por nombrar algunos ejemplos, se han manifestado en campañas pacíficas, y en ocasiones violentas, para impedir la explotación minera o, cuando esto no es posible –como en muchos casos–, para renegociar los términos de la extracción.

La literatura sobre la política de extracción de recursos ha hecho valiosas contribuciones a nuestra comprensión de tales conflictos. En este libro, sin embargo, adoptamos un enfoque diferente. Nos centramos en las actitudes individuales y prestamos atención a las áreas de conflicto donde la extracción parece ser inminente, pero aún no se ha producido. Nuestro objetivo es explicar qué diferencia a los individuos entre sí, a pesar de que enfrentan incertidumbres similares relacionadas con las amenazas y las oportunidades que presenta la minería. Con este fin, nos servimos de las encuestas de opinión pública para obtener una muestra más representativa de los puntos de vista en áreas de conflicto. Nuestro enfoque nos acerca a las raíces, o micropolíticas, de la formación de actitudes sobre la extracción de recursos. Este enfoque también ayuda a informar la trayectoria de los

conflictos y la eficacia de los mecanismos patrocinados por la industria o el Estado para mejorar la gobernanza de los recursos.

La coordinación y realización de múltiples viajes de trabajo de campo en tres países diferentes (Perú, Nicaragua y Sudáfrica), así como la administración de encuestas en cada lugar, hicieron que se necesitaran varios años para recopilar los datos de este libro. Cada uno de nosotros también presentó partes de él en varias conferencias académicas y otros encuentros. Los comentarios que recibimos mejoraron significativamente el libro. Por sus valiosos comentarios y sugerencias en las diferentes etapas de este proyecto, agradecemos a Zara Albright, Paul Almeida, Matthew Amengual, Barry Ames, Omar Awapara Franco, Taylor Boas, Patrick Bond, Darin Christensen, Marcelle Dawson, Todd Eisenstadt, Maria-Therese Gustafsson, Maiah Jaskoski, Pablo Lapegna, Philippe Le Billon, Fabiana Li, Cynthia McClintock, Carlos Monge, Mason Moseley, Shauna Mottiar, Thomas Oatley, Aníbal Pérez Liñán, John Quinn, Pablo Quintanilla, Thea Riofrancos, Lia Roberts, Carin Runciman, Andrés Sandoval, Martin Scurrah, Claudia Sícoli Póslleman, Jessica Steinberg, Erin Tatz, Javier Torres Seoane, Marcela Torres Wong, Takeshi Wada, Kehan Wang y Gisela Zarembeg.

En la Universidad de Tulane, el Grupo de Investigación sobre Movilización, Extractivismo y Acción Gubernamental de Eduardo Silva, una red de académicos que investigan el impacto de la acción contenciosa contra los megaproyectos de desarrollo en el cambio político e institucional, ha sido un recurso increíble para intercambiar ideas y refinar el conocimiento de los intereses comunes de investigación. Un agradecimiento especial a Maria Akchurin, Murat Arsel, Anthony Bebbington, Michael Dougherty, Ludovico Feoli, Julieta Godfrid, Paul Haslam, Denise Humphreys Bebbington, Amalia Leguizamón, Lorenzo Pellegrini, Eduardo Silva, Rose Spalding y Zarái Toledo Orozco.

Este libro no hubiera sido posible sin la ayuda y el apoyo de varias instituciones y organizaciones. Nos gustaría agradecer el apoyo de Sheila Berry, fideicomisaria fundadora de Global Environment Trust (GET) en Sudáfrica; Mario Sánchez González, director del Centro de Análisis Sociocultural de la Universidad Centroamericana en Managua, Nicaragua; quien fuera Oscar Lanchipa Quintanilla, profesor de economía de la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa, Perú; Ludovico Feoli, director ejecutivo del Centro de Política e Investigación Interamericana de la Universidad de Tulane; y Thomas Reese, director ejecutivo del Centro Stone para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Tulane, Estados Unidos.

La financiación de este proyecto de investigación fue apoyada por la Escuela de Artes Liberales de la Universidad de Tulane, y por las becas y premios de investigación de la Universidad de Missouri y el Sistema de la Universidad de Missouri, respectivamente. Este libro es una traducción del manuscrito en inglés *The roots of engagement* (Oxford University Press, 2022). En la casa editorial Oxford University Press estamos muy agradecidos con los revisores y –de manera especial– con Todd Eisenstadt, coeditor de la serie de Estudios sobre Energía Comparativa y Política Ambiental, por su lectura detallada de nuestro manuscrito, así como por sus recomendaciones para las revisiones. También agradecemos a Angela Chnapko, Alexcee Bechthold y Kavitha Yuvaraj por su apoyo editorial durante la publicación del libro.

La traducción del manuscrito no hubiera sido posible sin el apoyo de la Escuela de Artes Liberales de la Universidad de Tulane, la cual brindó los fondos para el trabajo de traducción. Asimismo, agradecemos a Camilo Andrés Ordóñez Zambrano, filólogo por la Universidad Externado de Colombia, por su excelente trabajo de traducción del manuscrito. Agradecemos a la Universidad del Pacífico, en especial a Gonzalo Delgado J., director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS), por su apoyo en promover su publicación. De igual manera, a María Elena Romero Pinillos, presidenta ejecutiva del Fondo Editorial, por su inestimable apoyo editorial durante todo el proceso de publicación. Finalmente, también damos gracias a Andrea Fernanda Segovia Marín, bachiller en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú, por su destacado apoyo a la investigación y edición de este libro.



# 1. Introducción

El proyecto Tía María, desarrollado por la empresa Southern Peru Copper, ha generado uno de los conflictos por recursos más prolongado y violento que ha ocurrido en Perú. Comenzó en 2009, cuando Southern presentó su primer estudio de impacto ambiental para construir una mina de cobre a tajo abierto cerca del valle del río Tambo en la región sur de Arequipa. 12 años después, en Tía María se han producido casi todas las estrategias de movilización y respuestas estatales propias de los conflictos prolongados por recursos. Por ejemplo, se han presentado bloqueos de carreteras y huelgas regionales; también se realizó un referéndum en contra de la minería y se declaró el estado de emergencia; y ha habido violentos enfrentamientos con la policía que se han saldado con ocho muertos y cientos de heridos a lo largo del conflicto, además de la creciente criminalización de los manifestantes. Cuando visitamos el distrito de Cocachacra en 2015, cerca de la zona minera propuesta, notamos una fuerte presencia policial en las calles y casi todas las casas tenían una bandera de color verde neón en su tejado que decía «Agro sí, mina no». Este eslogan representaba la principal fuente de discordia: la incompatibilidad entre la minería y la agricultura. Southern ha puesto en marcha varias estrategias de responsabilidad social empresarial (RSE) con el fin de obtener una licencia social que le permita operar. En el mismo año de nuestra visita, la empresa lanzó un proyecto de relacionamiento comunitario llamado Valleunido. Esta estrategia buscaba que «el proyecto Tía María fuera visto como una oportunidad y no como una amenaza» (citado en Dunlap, 2019, p. 20).

Al otro lado del mundo, en la provincia de Kwa-Zulu Natal, en Sudáfrica, la poco conocida y recién creada empresa Ibutho Coal solicitó un contrato de arrendamiento

para extraer carbón mediante operaciones a tajo abierto en una parte de la reserva de Fuleni. La decisión de aceptar la solicitud de derechos mineros de Ibutho en 2014 pronto causó polémica por la proximidad entre la mina propuesta y la reserva natural más antigua de África, el Parque Hluhluwe-iMfolozi, y su fauna, que está en peligro de extinción; esto también implicaba reubicar al menos 1.600 hogares. Sin embargo, a diferencia de lo que notamos en nuestra visita a Tía María, en este caso no observamos signos visibles y generalizados de oposición al proyecto. Fuleni es una zona rural poco poblada y bastante alejada de alguna ciudad principal. De hecho, el vehículo de alquiler que conducíamos era el único que circulaba por las carreteras sin pavimentar de Fuleni, y en varias ocasiones nos ofrecimos a llevar a los aldeanos. Aunque muchos miembros de la comunidad expresaban su oposición al proyecto pidiéndole a la empresa que «dejara el carbón en el hoyo» (Ka-Manzi & Bond, 2016)<sup>1</sup>, nuestras entrevistas revelaron que algunos aldeanos veían la oportunidad de que el proyecto impulsara el empleo y mejorara las condiciones de la comunidad.

Al igual que los de Tía María y Fuleni, hay cientos de conflictos por recursos en todo el mundo. El Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas), una fuente que cataloga los conflictos por temas ambientales en todo el mundo, registró más de 500 conflictos relacionados con la extracción de minerales a nivel mundial (Scheidel *et al.*, 2020)<sup>2</sup>; más de la mitad de estos ocurrían en América Latina. Al ubicar las explotaciones mineras junto a zonas con conflictos conocidos, encontramos que los eventos más grandes y públicos han ocurrido en países como Perú, México y Chile (véase la figura 1)<sup>3</sup>. África también ha tenido su cuota de conflictos por recursos. Por ejemplo, Steinberg (2019) señala que entre 1990 y 2014 casi el 25% de las 2.500 minas activas de África estuvieron relacionadas con conflictos. En torno a varias de estas minas ocurrieron enfrentamientos importantes y en ocasiones violentos en países tan diversos como Sudáfrica, Ghana y Zambia.

---

<sup>1</sup> Las citas tomadas de originales en inglés han sido traducidas por los autores.

<sup>2</sup> Para un análisis más detallado de la recopilación de datos del EJAtlas, véase Temper, Del Bene, & Martínez-Alier (2015). Como señalan Scheidel y otros (2020, pp. 4-5), el EJAtlas no es una representación estadística de los conflictos por recursos a nivel global. Tiene una cobertura mejor de unas regiones que de otras y más detalles sobre los conflictos en algunos países en comparación con otros. A pesar de estas limitaciones, este conjunto de datos es la muestra más amplia de conflictos por recursos en todo el mundo que está disponible actualmente.

<sup>3</sup> Si delimitamos el universo de casos únicamente a los sitios mineros activos —es decir, en fase de exploración avanzada o superior—, estos datos comprenden información sobre 929 lugares, 158 de los cuales experimentaron conflictos.

Figura 1  
 Sitios de explotación minera activa y zonas con conflictos activos conocidos en América Latina



Fuente: explotaciones mineras y conflictos conocidos codificados a partir de Haslam & Ary Tanimoune (2016).

El auge de los precios de las materias primas (2002-2014) multiplicó la incidencia de estos conflictos debido a la gran demanda y al aumento de los precios del petróleo, los minerales y otras materias primas. Los precios de estos productos continúan siendo relativamente altos, incluso después de ese auge, dada la constante demanda de materias primas por parte de las economías emergentes,

en particular de China e India. Por ejemplo, la participación de China en la demanda mundial de cobre se duplicó: pasó del 23% en 2005 al 46% en 2017, mientras que la de mineral de hierro (aproximada por la producción de acero bruto) aumentó del 31% en 2005 al 49% en 2017 (Farooki, 2018)<sup>4</sup>. Además, en el futuro podría haber un nuevo auge de los precios de las materias primas por la transición hacia fuentes de energía renovable y limpia (Riofrancos, 2022). Según predicciones del Banco Mundial, se necesitan más de 3 mil millones de toneladas de minerales como el litio y el cobalto para producir las tecnologías verdes que se requieren para alcanzar los puntos de referencia descritos en el Acuerdo de París (World Bank, 2020).

Tanto América Latina como África cuentan con abundantes recursos naturales. América Latina es la principal fuente de minerales y la segunda de petróleo en el mundo (Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Eclac, 2013). La región produce alrededor del 18% del oro, más del 50% de la plata y el 45% del cobre del mundo. Perú, México y Chile son los principales productores de oro, plata y cobre, respectivamente (World Mining Data; 2021). África, a su vez, posee aproximadamente el 30% de las reservas minerales y el 12% del petróleo del mundo<sup>5</sup>. Una parte importante de esta riqueza procede del África Subsahariana, con una producción considerable de Sudáfrica. A nivel mundial, este país es el mayor productor de platino (72%) y uno de los cinco principales exportadores de carbón (World Mining Data; 2021). En los últimos años, la producción de cobre en Zambia y de oro en Ghana también aumentó significativamente (World Mining Data; 2021).

Las economías de varios países ricos en minerales de estas regiones se recuperaron gracias al aumento de las inversiones mundiales en el sector extractivo tras el auge de los precios de las materias primas<sup>6</sup>. En el punto máximo de dicho auge, las rentas generadas por los recursos representaban más del 7% del producto bruto interno (PBI) de América Latina y un asombroso 20% del PBI del África Subsahariana (véase la figura 2). En algunos países, como Perú, los productos mi-

---

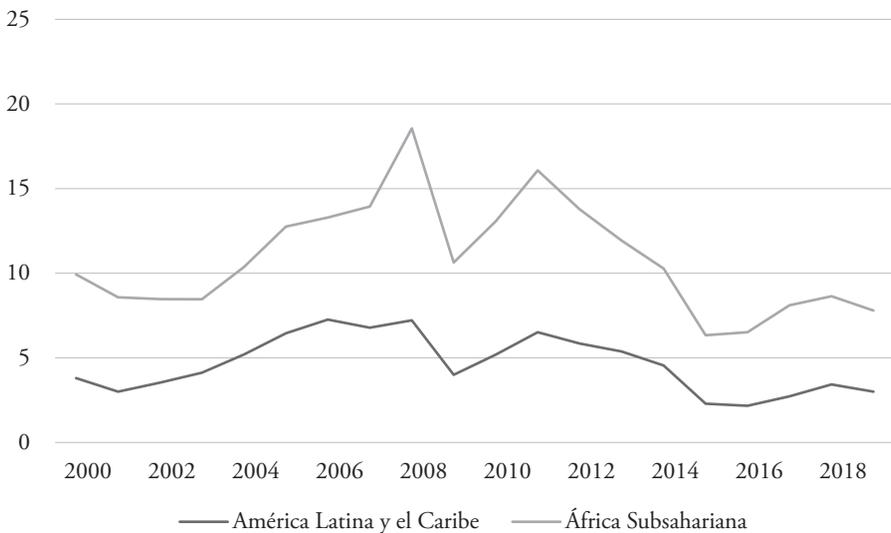
<sup>4</sup> Los observadores financieros pronostican una mayor demanda mundial de cobre y mineral de hierro, níquel y zinc basada en la demanda de China de estos recursos (Farooki, 2018).

<sup>5</sup> La región también posee casi el 90% del cromo y el platino del mundo y cuenta con importantes suministros de oro, cobalto, diamantes y uranio (United Nations Environment Programme, UNEP, s. f.).

<sup>6</sup> Las inversiones mundiales en el sector extractivo se multiplicaron casi por 10: pasaron de 86 mil millones de dólares en el año 2000 a 735 mil millones en 2013 (Eclac, 2013). En África, para 2014 los nuevos proyectos extractivos representaron 22 mil millones y el sector extractivo aportó el 31% de todos los ingresos por inversión extranjera directa (IED) (Steinberg, 2019).

nerales representan casi el 60% de las exportaciones totales del país y casi el 10% de su PBI (García & Pantigoso, 2020). África tiene una tendencia similar, ya que la extracción de minerales se acercó a un promedio del 70% de las exportaciones totales de la región durante el auge de los precios de las materias primas (African Development Bank Group, 2015). Las rentas del carbón alcanzaron el 8% del PBI de Sudáfrica a mediados de este período (World Bank Open Data; 2021)<sup>7</sup>.

Figura 2  
Rentas generadas por los recursos en América Latina y el África Subsahariana, 2000-2018 (en porcentajes del PBI)



Fuente: World Bank Open Data (2021).

En ambas regiones, Gobiernos que representaban diferentes posturas políticas fomentaron activamente la extracción en nuevas áreas como una política de desarrollo viable (Riofrancos, 2020), lo cual se ha convertido en una tendencia internacional. Arsel, Hogenboom y Pellegrini, por ejemplo, hablan del «imperativo extractivo», porque la extracción de recursos «necesita continuar y expandirse» manteniendo al Estado en un papel de liderazgo y obteniendo gran parte de las ganancias resultantes (2016, p. 880). El «imperativo extractivo» ha reforzado las

<sup>7</sup> En una tendencia aun más pronunciada, algunos países dependen de una sola materia prima que genera una gran parte de sus ingresos de exportación. En Malí, por ejemplo, solo el oro representó un promedio del 69% de las exportaciones del país (Chuhan-Pole, Dabalen, & Land, 2017).

asimetrías de poder entre los actores de la industria y las comunidades anfitrionas en perjuicio de estas últimas; de ese modo, facilitó «las necesidades de consumo y acumulación de otros distantes» (Bebbington, 2009, p. 181).

Ciertamente, la extracción de recursos no es nueva en el Sur Global, pero la literatura considera que la expansión actual de la frontera extractiva es diferente a la de los períodos anteriores. Haciendo eco de las palabras de David J. O'Reilly, exdirector general de Chevron Corporation, es el fin de la era del «petróleo fácil» (Klare, 2012). Al haber una mayor demanda de fuentes de energía, los yacimientos de petróleo y gas existentes están madurando y los nuevos hallazgos de estas fuentes se han extendido a zonas ecológica y socialmente vulnerables, donde es más difícil extraer los recursos (Klare, 2012; Conde & Le Billon, 2017, p. 682). Algunas de estas zonas están más cerca de entornos urbanos, valles agrícolas, bosques protegidos y glaciares, por citar algunos ejemplos. Además, las industrias extractivas están más interconectadas con los mercados financieros desde el crecimiento de la globalización en el Sur Global. Mientras que en el pasado el origen extranjero de una empresa extractiva era particular, se han vuelto más comunes las empresas mixtas con compañías nacionales o extranjeras. Las nuevas tecnologías también han permitido que las empresas recuperen pequeños depósitos de metales preciosos. Los minerales de baja calidad, que las empresas mineras posiblemente pasaron por alto por no ser rentables en el pasado, se convierten ahora en oportunidades atractivas de inversión debido a los altísimos precios de las materias primas. Las nuevas tecnologías también hicieron menos necesaria la mano de obra no calificada y las inversiones mineras a gran escala superaron a la minería artesanal tradicional en algunas zonas (Toledo Orozco, 2020). En todos estos ejemplos, el acceso a dichos recursos –física, económica y políticamente– ha sido clave para expandir la frontera extractiva.

Los conflictos por recursos pueden ocurrir en diferentes etapas de la cadena de suministros: a) la etapa de preproducción o acceso a los recursos (cuando los productores agrícolas y las industrias extractivas se enfrentan por el uso de la tierra y el agua antes de que se realice la extracción); b) la etapa de producción o extracción en sí (cuando se inician las actividades extractivas o se expanden las existentes a nuevas tierras o campos verdes); c) el procesamiento y el transporte de petróleo y minerales; y d) la etapa de gestión de residuos (cuando fallan las presas de residuos o los oleoductos) (Özkaynak, Rodríguez-Labajos, İskender Aydın, Yanez, & Garibay, 2015). Las principales materias primas involucradas en estos conflictos en todo el mundo son los metales preciosos, como el oro y la plata (39%); los metales básicos, como el cobre (36%); y los recursos energéticos, como

el carbón y el uranio (19%) (Özkaynak *et al.*, 2015). Los actores de la industria son conscientes de que es posible que se produzcan conflictos por la extracción, lo cual los lleva a ofrecer regalías a las comunidades anfitrionas para compensarlas por los efectos externos negativos (Steinberg, 2015). Sin embargo, esta estrategia no siempre es eficaz y puede generar corrupción a través de más sobornos (Knutson, Kotsadam, Hammersmark Olsen, & Wig, 2016). Para disipar los conflictos y mejorar la gobernanza de los recursos, los Gobiernos promueven instituciones participativas, como la consulta previa, y ordenan realizar audiencias públicas de las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) (Torres Wong, 2018; Jaskoski, 2020). Los actores gubernamentales también adoptan lo que Lapegna llama «gobernanza performativa» (2016, pp. 138-142): visitan las zonas de conflicto y firman acuerdos con las comunidades, pero después no adoptan medidas concretas para atender sus demandas; por lo tanto, parece que responden a las preocupaciones de las comunidades, pero no abordan las causas subyacentes de sus quejas; esta es una medida que termina por desmovilizar a los miembros de la comunidad por la percepción de que se está haciendo algo.

A pesar de enfrentarse a tendencias globales muy similares, no todos los países saludaron el auge de los precios de las materias primas de la misma forma. Spalding (2020), por ejemplo, ha mostrado una importante variación de políticas en el sector extractivo latinoamericano, ya que algunos países de la región tratan de regular estas actividades, mientras que otros pretenden prohibirlas. En el primer caso, los países buscan avanzar en la extracción de recursos, pero también exigen a los actores de la industria que presten servicios en nombre de las comunidades afectadas, como compensaciones locales más generosas, controles medioambientales o consultas locales. En el segundo caso, los países intentan restringir las actividades extractivas y adoptan prohibiciones temporales, geoespecíficas o nacionales. En Centroamérica, por ejemplo, El Salvador adoptó varias prohibiciones, mientras Nicaragua invitó a que hubiera mayor inversión en el sector extractivo. A través de las provincias de Argentina, al menos ocho gobernadores acogieron una legislación específica para impedir la minería, mientras que seis de ellos otorgaron exenciones fiscales para ampliarla (Mangini, 2015).

### **Más allá de los conflictos por recursos**

Hay una amplia literatura que estudia las causas de los conflictos por recursos en el Sur Global y se han hecho numerosos aportes en varias disciplinas. En una revisión de 224 estudios publicados en revistas académicas y la prensa durante las últimas dos décadas, Conde y Le Billon (2017) identifican cómo los diferentes

factores afectan la probabilidad de conflicto y cómo estos operan en diferentes niveles, como el proyecto minero, las comunidades anfitrionas, la industria extractiva y el Gobierno. En cuanto al proyecto minero, por ejemplo, uno de los principales motores de la oposición es el impacto negativo de la minería en los medios de vida y el medio ambiente (ver, por ejemplo, Arce, 2014; Akchurin, 2020; Bebbington & Bury, 2013; Bebbington *et al.*, 2008; Eisenstadt & West, 2019; Svampa, 2019). Algunos ejemplos son el riesgo de contaminación del agua, la pérdida de tierras y el desplazamiento de toda una comunidad para dar lugar a la mina. En cuanto a las comunidades anfitrionas, los escasos mecanismos de participación sobre las decisiones mineras (Zaremborg & Torres Wong, 2018) y la inadecuada distribución de las rentas generadas por los recursos pueden desencadenar conflictos (ver, por ejemplo, Arellano-Yanguas, 2011; Ponce & McClintock, 2014). En el ámbito de la industria extractiva, los conflictos pueden ser incentivados por la incapacidad de las empresas para asumir compromisos creíbles relacionados con la compensación o por la ausencia de transparencia de sus esfuerzos de RSE (Newell, 2005; Jenkins & Yakovleva, 2006; Owen & Kemp, 2012). Por último, con respecto a los Gobiernos, también generan conflictos la criminalización de los manifestantes (Bebbington & Bebbington, 2011), el sesgo a favor de la industria que se refleja en el llamado «imperativo extractivo» (Arsel *et al.*, 2016) y la mala gestión de los fondos, es decir, la corrupción (Kolstad & Søreide, 2009; Knutsen *et al.*, 2016). En todos los niveles en los que ocurren conflictos, diversas tradiciones disciplinarias destacan diferentes conjuntos de variables explicativas, como los precios de las materias primas (Blair, Christensen, & Rudkin, 2021), la variación interna de las rentas generadas por recursos (Arce, 2015; Orihuela, Pérez, & Huaroto, 2019), las amenazas ecológicas y la vulnerabilidad relacionada con el estrés ambiental (Adger, 2006), las coaliciones que permiten que tenga éxito la oposición a la extracción (Arce, 2014), la desmovilización de las comunidades afectadas (Lapegna, 2016), y los mecanismos institucionales orientados a mejorar la gobernanza de los recursos (Torres Wong, 2018; Jaskoski, 2020), así como los programas de RSE (Amengual, 2018; Haslam, 2021; Sícoli Pósleman & Sallan, 2019), por citar algunos ejemplos.

En este libro, en vez de concentrarnos en las características estructurales de los proyectos mineros o en la forma en la que diferentes factores incentivan los conflictos entre las comunidades anfitrionas, la industria o los actores gubernamentales, adoptamos un enfoque diferente, que se centra en los individuos que viven cerca de la frontera extractiva. Buscamos entender cómo ellos llegan a percibir las amenazas o las oportunidades asociadas con la minería y a actuar en

consecuencia; también pretendemos explicar qué hace diferentes a los individuos que se oponen a la minería de aquellos que la apoyan. Estas diferencias tienen importantes implicaciones para el inicio de los conflictos, la importancia de las estrategias de prevención y las relaciones empresa-comunidad, así como para los mecanismos de participación relacionados con las decisiones sobre la minería.

A diferencia de la literatura anterior, que se centra en los conflictos por recursos en sí y en las fuentes de resistencia a la minería, nosotros aprovechamos las encuestas de opinión pública para examinar las actitudes a nivel individual sobre la extracción de recursos<sup>8</sup>. Los estudios hechos hasta ahora tienden a destacar la uniformidad de la oposición a la minería en las comunidades afectadas. En consecuencia, los factores que motivan a los individuos a apoyar la extracción de recursos han sido poco explorados. Nuestras encuestas, en cambio, nos permiten examinar los cambios en las actitudes con respecto a la extracción y analizar los factores que las forman o las refuerzan. En la medida en que las áreas conocidas por conflictos prolongados muestren una variación tan amplia, nuestros hallazgos tienen grandes implicaciones para otros lugares en los que se está considerando la extracción.

Nuestro argumento principal es que la participación social ofrece una ventana a la micropolítica de la toma de decisiones relacionadas con la extracción de recursos. Por «participación social», entendemos la participación en organizaciones locales, como grupos religiosos, organizaciones medioambientales, asambleas comunitarias y asociaciones agrícolas. Con la participación social, los individuos tienen un mayor acceso a la información y a las herramientas de organización sobre las preocupaciones de la comunidad; adquieren un mayor grado de eficacia propia y colectiva, que los empodera a ellos y a sus comunidades; y, lo que es más importante, desarrollan una cosmovisión comunitaria más sólida, que hace que la minería sea incompatible con los medios de vida existentes o con el medio ambiente. Sostenemos que estos resultados interrelacionados asociados con la participación en organizaciones locales permiten formar o reforzar las actitudes con respecto a la minería, lo cual conlleva que los individuos rechacen los proyectos mineros.

## **Descripción general del libro**

En el capítulo 2, se revisan los aportes de la literatura existente y se desarrollan los argumentos teóricos relacionados con la participación social y con la forma en

---

<sup>8</sup> Esta investigación fue aprobada bajo los protocolos de la junta de revisión institucional de la Universidad de Missouri (IRB 2003205 e IRB 2007122).

que esta permite diferenciar a los individuos que se oponen a la minería de aquellos que la apoyan. La participación social es, por tanto, un componente crucial para entender cómo un individuo procesa la información a favor y en contra de la minería.

En el mismo capítulo, también se identifican las amenazas y las oportunidades de la extracción, y se destaca la naturaleza de las demandas sobre las actividades extractivas, que clasificamos a grandes rasgos como demandas de rechazo o de redistribución. Las de rechazo resaltan las amenazas asociadas con las actividades mineras, como el acceso al agua, los cambios en los medios de vida y la pérdida de derechos culturales. Las de redistribución, por el contrario, resaltan las ventajas o las oportunidades relacionadas con la extracción de recursos, como las transferencias de mayores rentas generadas por ellos y los proyectos de desarrollo comunitario. El capítulo concluye explicando la selección de los estudios de caso y la metodología de investigación que fundamenta nuestro análisis empírico. Esta metodología combina la investigación de campo realizada directamente en las comunidades ubicadas en la frontera extractiva y encuestas de opinión pública.

Con base en nuestro trabajo de campo, los capítulos 3, 4 y 5 se centran en tres propuestas de explotación minera en tres países distintos: Perú, Nicaragua y Sudáfrica, respectivamente. El capítulo 3 aborda la mina de cobre a tajo abierto de Southern en Tía María, Perú. El capítulo 4 presenta el estudio de caso de la mina de oro a tajo abierto de B2Gold en Rancho Grande, Nicaragua. Por último, el capítulo 5 se centra en Ibutho Coal, en Kwa-Zulu Natal, en Sudáfrica, y en su proyecto de mina a tajo abierto en la reserva de Fuleni<sup>9</sup>. En los tres casos, las estrategias de movilización y los conflictos prolongados han entorpecido los derechos de prospección de estas empresas, por lo que esos proyectos están suspendidos y no funcionan actualmente. Como nos interesa explicar la manera en que se forman o refuerzan las actitudes hacia la minería, lo ideal es elegir lugares ubicados en el punto de acceso a los recursos —antes de que se realice la producción minera—.

En el capítulo 6, presentamos nuestro análisis cuantitativo basado en las encuestas de opinión pública hechas en las comunidades de Tía María, Rancho Grande y Fuleni. Este capítulo parte de la información obtenida de nuestros estudios de caso para descubrir la naturaleza de las demandas relacionadas con la extracción de recursos. También utilizamos esta información para justificar la

---

<sup>9</sup> La literatura existente identifica los conflictos por recursos por el nombre de la empresa minera o la ubicación del proyecto. En este libro, los identificamos por la ubicación del proyecto.

operacionalización de nuestras principales variables de interés. Posteriormente, utilizamos el análisis de encuestas para modelar la micropolítica de la formación de actitudes, lo cual nos permite comprender mejor los focos de oposición y apoyo en comunidades que a primera vista pueden parecer opositoras a la extracción de forma homogénea. Terminamos este capítulo con la revisión de los comportamientos individuales y comunitarios que suelen asociarse a una mayor participación social.

En el capítulo 7, de conclusiones, resumimos los principales resultados y destacamos nuestro aporte a la literatura sobre conflictos por recursos. Allí explicamos la importancia de la participación social para la trayectoria de los proyectos mineros y cómo esta orienta futuras estrategias de movilización. En las conclusiones también se agrega una perspectiva de comparación al libro al examinar un cuarto caso, el de Santo Domingo, en Nicaragua. A diferencia de los anteriores (Tía María, Rancho Grande y Fuleni), Santo Domingo es una mina que actualmente está en funcionamiento. Este caso muestra una movilización preventiva limitada en la etapa de preproducción de los recursos, pero mayores niveles de movilización en la fase de extracción, cuando la mina empezó a operar. También revela las demandas de rechazo y redistribución que se confrontan entre sí. Esta comparación respalda nuestros resultados, porque, una vez que una mina se vuelve activa, el discurso de amenazas y oportunidades asociadas con la minería deja de ser un concepto lejano y abstracto; y los miembros de la comunidad observan resultados tangibles, tanto positivos como negativos. En otras palabras, este caso nos permite comparar las amenazas y las oportunidades reales y percibidas relacionadas con la minería. Por último, este capítulo final reexamina las consecuencias del «imperativo extractivo» (Arsel *et al.*, 2016) tras el fin del auge de los precios de las materias primas.



## 2. Fuentes de rechazo y apoyo a la extracción de recursos

Los países ricos en recursos del Sur Global han tenido importantes avances socioeconómicos en los últimos años. En América Latina, la pobreza se redujo de alrededor del 27% al 12%, y la desigualdad disminuyó casi un 11% durante el período 2000-2014 (López-Calva & Lustig, 2010; Balakrishnan & Toscani, 2018). Las economías del África Subsahariana también experimentaron una importante expansión económica: tuvieron tasas de crecimiento máximas del 6,4% entre 2002 y 2008 y una pequeña reducción de las cifras de pobreza (World Bank, 2015). Durante este período, comúnmente conocido como el auge de los precios de las materias primas, aumentaron constantemente los precios de los recursos —fue el caso del petróleo y los minerales—. Esto se dio gracias a la creciente demanda de países que también pertenecen al Sur Global, concretamente India y China. Aunque los observadores debaten sobre la sostenibilidad de este crecimiento, pocos refutarían que el mencionado auge de los precios de las materias primas fue un factor clave que contribuyó al bienestar de estas regiones.

Sin embargo, este auge también ha estado relacionado con una serie de repercusiones externas negativas, como daños ambientales, corrupción y conflictos sociales por la extracción de recursos naturales<sup>10</sup>. La literatura existente ha

---

<sup>10</sup> También daños ambientales «de lento movimiento», por ejemplo, la contaminación del agua y de la tierra, que se extienden a través del tiempo y el espacio y afectan desproporcionadamente a los pobres y marginados (Nixon, 2011; Herrera, 2020). Tales daños no siempre dan lugar a conflictos. En este libro, nos centramos en los desafíos abiertos y visibles relativos a las concesiones mineras.

demostrado que las comunidades anfitrionas intentan defender derechos básicos en respuesta a amenazas asociadas con la extracción (ver, por ejemplo, Arce, 2014; Bebbington *et al.*, 2008; Bebbington & Bury, 2013; Eisenstadt & West, 2019; Svampa, 2019). Así, las comunidades luchan por el acceso al agua y por su calidad, por la conservación de la tierra y los paisajes, y por la supervivencia cultural de los pueblos indígenas. Otras comunidades anfitrionas buscan una distribución más equitativa de los beneficios económicos que genera la extracción (ver, por ejemplo, Arellano-Yanguas, 2011; Ponce & McClintock, 2014). Estos estudios se han enfocado en entender las diversas motivaciones y objetivos que persiguen las comunidades que viven cerca de la frontera extractiva; no obstante, es más bien escasa la investigación sobre las actitudes individuales relacionadas con la extracción de recursos<sup>11</sup>. En concreto, ¿qué preocupaciones medioambientales llevan a los individuos a oponerse a las actividades extractivas? ¿En qué condiciones políticas o económicas es probable que los individuos apoyen estas actividades? Y lo que es más importante, ¿qué conjunto de características sociales separan a los individuos que se oponen a la extracción de aquellos que la apoyan?

Comenzamos este capítulo revisando los aportes de la literatura existente y discutimos cómo un enfoque en las actitudes individuales permite abordar importantes vacíos que existen en los estudios adelantados hasta ahora. Posteriormente, desarrollaremos los argumentos teóricos relacionados con la participación en organizaciones comunitarias locales –lo que llamamos «participación social»–; consideramos que estos argumentos nos ayudarán a diferenciar las actitudes individuales hacia la extracción. En este capítulo también se identifican las amenazas y oportunidades de la extracción, destacando la naturaleza de las demandas propias de las actividades extractivas, que clasificamos a grandes rasgos como demandas de rechazo o de redistribución. Concluimos el capítulo explicando la selección de los estudios de caso, el alcance de nuestro trabajo de campo en las regiones donde se encuentran y la metodología de investigación sobre la cual desarrollamos nuestro análisis empírico.

---

<sup>11</sup> Tanto Eisenstadt y West como Dougherty son excepciones importantes. A partir de datos de encuestas a nivel individual, Eisenstadt y West (2017b) encuentran que los individuos en Ecuador expresan su preocupación por el medio ambiente cuando son objetivamente vulnerables al daño ambiental y cuando viven en áreas en las que ha ocurrido o se debate la extracción. Dougherty (2019) examina el significado del desarrollo asociado con la minería en Guatemala.

## Las causas de los conflictos por recursos

Gran parte de la literatura existente ha tratado de explicar los factores que determinan los conflictos por la extracción de recursos. Diversos trabajos examinan la variación de estos conflictos a nivel transnacional (Arce, Miller, Patane, & Polizzi, 2018; Haslam & Ary Tanimoune, 2016; Berman, Couttenier, Rohner, & Thoenig, 2017; Christensen, 2019) y subnacional (Arellano-Yanguas, 2011; Akchurin, 2020; Mähler & Pierskalla, 2015; Ponce & McClintock, 2014; Orihuela *et al.*, 2019). Algunos estudios resaltan las características geográficas y empresariales de los proyectos mineros (por ejemplo, el relativo aislamiento de las zonas mineras, la calidad de los minerales, la propiedad de las empresas mineras, las técnicas utilizadas para extraer los minerales, etc.) y la probabilidad de ocurrencia de conflictos (por ejemplo, Haslam & Ary Tanimoune, 2016). Otros exploran por qué países —o provincias dentro de un mismo país— con abundancia de recursos aparentemente comparables experimentan diferentes niveles de conflicto (por ejemplo, Mähler & Pierskalla, 2015; Arce, 2015; Arce *et al.*, 2018)<sup>12</sup>. Estos trabajos obtienen información sobre los conflictos a partir de datos de eventos, es decir, conjuntos de datos de eventos sociales agregados y recopilados principalmente de medios de comunicación. Al tener en cuenta una serie de variables teóricas y de control, ellos han confirmado el nexo entre extracción y conflicto: las áreas extractivas georreferenciadas y la riqueza en recursos están relacionadas con los conflictos por recursos.

Además de estos trabajos que analizan la variación de los conflictos por recursos, otros se han enfocado en los diversos objetivos y motivaciones que persiguen los actores sociales que viven cerca de la frontera extractiva. En algunos casos, quienes se oponen no quieren la extracción en ninguna circunstancia y sus demandas en contra de la minería son intransigentes. Estos manifestantes suelen formular sus demandas en términos de amenazas, y su resistencia colectiva pretende impedir que se otorguen concesiones para permitir la extracción o detener la expansión de las actividades extractivas existentes (Arce, 2014; Bebbington & Bury, 2013; Svampa, 2019). Un líder comunitario que lucha contra la expansión de la mina de Yanacocha, en el norte de Perú, manifestó esta oposición de la siguiente manera: «Nosotros no nos oponemos a la minería, solo les decimos que lo hagan en otro lado, no en nuestras fuentes de agua» (citado en Salas Rodríguez, 2006, p. 101). En otros casos, los manifestantes no se oponen a la extracción,

<sup>12</sup> Centrándose en África, Berman y otros (2017) y Christensen (2019) investigan cómo los aumentos de los precios de los minerales impulsan los conflictos.

sino que buscan negociar (o renegociar) los términos de las actividades extractivas (Arellano-Yanguas, 2011; Ponce & McClintock, 2014). Exigen derechos de consulta previa, reclaman estudios de impacto ambiental y social transparentes y solicitan a las empresas o a los Gobiernos que haya una distribución equitativa de las rentas que generan los recursos para las comunidades locales (Conde, 2016; Conde & Le Billon, 2017). Es posible que las pocas oportunidades económicas en zonas remotas motiven a los actores sociales a aceptar la minería. Por ejemplo, refiriéndose al proyecto minero Fuleni de Ibutho Coal en el norte de Sudáfrica, un aldeano señaló: «necesitamos trabajos más que nada» y «no hay trabajo a nivel local» (Harper, 2014).

Otro conjunto de estudios, que se basan en la teoría del proceso político (Tarrow, 1998; Tilly & Tarrow, 2006), se enfocan en el acceso de los manifestantes locales a los recursos organizacionales, los marcos de movilización que adoptan estos manifestantes y las aperturas políticas que facilitan el éxito de los desafíos a la extracción de recursos (Arce, 2014; Bebbington *et al.*, 2008; Quintanilla & Rogelio, 2013; Svampa, 2019). Como es bien sabido, los agravios o intereses compartidos rara vez movilizan a los individuos; en cambio, la movilización es relativa a la capacidad organizacional que tienen las organizaciones de la sociedad civil (McCarthy & Zald, 1977; McAdam, 1983). De hecho, como nos recuerda la literatura de los movimientos sociales, movilizar a los opositores para que se tomen las calles es una tarea costosa y potencialmente peligrosa. Estas acciones requieren destinar muchos recursos y construir estrategias de movilización exitosas que permitan conformar coaliciones amplias. En particular, las organizaciones locales de base facilitan y aumentan la probabilidad de que los desafíos por la extracción de recursos tengan éxito (Arce, 2014; Akchurin, 2020).

Estas organizaciones suelen estar asociadas con la agricultura local, los esfuerzos de conservación, las escuelas y las Iglesias; y no surgen como respuesta a la extracción. En las zonas en las que las industrias extractivas compiten con la agricultura, por ejemplo, la economía agrícola promueve varias organizaciones locales, como las juntas de riego y las asociaciones de productores; y a través de estas pueden desarrollarse desafíos organizados y duraderos. Tales organizaciones agrícolas a menudo se unen en movimientos de oposición más amplios, conocidos como frentes de defensa o asambleas vecinales, que posteriormente surgen como las principales coaliciones contra la minería. Otras coaliciones a nivel local, que Bebbington (2007) describe como «organizaciones de los movimientos sociales», en las que participan ONG, Iglesias y organizaciones estudiantiles, también han desempeñado un papel decisivo a la hora de coordinar la oposición a la extrac-

ción. Además, en varias pugnas por la extracción de recursos, la participación de las ONG medioambientales globales, también conocidas como organizaciones de justicia ambiental (OJA), fue crucial para coordinar la acción colectiva entre las comunidades anfitrionas afectadas por la extracción de recursos. Las mencionadas organizaciones agrícolas (por ejemplo, juntas de riego y asociaciones de productores), las organizaciones de movimientos sociales (como ONG, Iglesias, grupos estudiantiles, asociaciones vecinales y centros de madres) y las OJA globales son ejemplos de los diversos tipos de alianzas y coaliciones comunitarias que están detrás de los desafíos organizados y duraderos contra la extracción<sup>13</sup>.

### **Un enfoque individual de las actitudes hacia la minería**

Si bien la literatura existente ha hecho importantes aportes que nos permiten comprender las causas de los conflictos por recursos, es limitada la investigación sobre las actitudes individuales relacionadas con la extracción (para excepciones, véase Eisenstadt & West, 2017b; Dougherty, 2019). Es posible llenar importantes vacíos que tiene la literatura con un análisis que utilice encuestas de opinión pública y se centre en las actitudes individuales. En primer lugar, la investigación tiende a enfocarse en campañas exitosas contra la extracción, las cuales suelen atraer mucha atención de los medios locales, nacionales e incluso internacionales. Los trabajos que se centran en campañas exitosas por lo general presuponen que existe una oposición uniforme a la minería dentro de las comunidades locales. Una imagen más completa de los conflictos por recursos involucra focos de resistencia y apoyo en los que los opositores suelen estar mejor organizados y son más contundentes que aquellos que apoyan la minería. Del mismo modo, los impulsores y las caras de la resistencia están bien documentados y son conocidos, pues se les ha prestado más atención a las campañas exitosas contra la extracción; sin embargo, siguen siendo poco estudiados aquellos que la apoyan. De hecho, los defensores de la minería suelen ser vistos como actores demasiado pobres, marginados o sin educación, y por estas razones se cree que se someten a la minería (Conde & Le Billon, 2017). Posiblemente ellos consideran que la extracción de recursos impulsaría el empleo local y el desarrollo de la comunidad, aunque no expresen su opinión en manifestaciones. Las organizaciones locales también pueden reproducir viejos patrones de coacción que impiden que estos defensores expresen sus opiniones (Llanes Salazar & Torres-Mazuera, 2017; Herrera, 2017; Torres-Wong & Jiménez-Sandoval, 2022). Al usar encuestas de opinión pública,

---

<sup>13</sup> La discusión sobre las OJA sigue lo presentado por Reeder, Arce y Siefkas (2022).

podemos explorar sistemáticamente la variación de las actitudes sobre la minería de mejor forma que si recurriéramos a enfoques contrapuestos.

En segundo lugar, la investigación que se ha adelantado hasta ahora no tiene en cuenta la complejidad de la toma de decisiones en torno a la extracción de recursos. Para ser claros, tanto la oposición como el apoyo a la minería son procesos políticamente estratificados. Los individuos muestran diferentes grados de oposición: algunas de sus demandas son más irresolubles que otras; lo mismo ocurre con los grados de apoyo a la minería. Al escribir sobre los efectos negativos externos relacionados con la extracción de petróleo en la región amazónica ecuatoriana, Eisenstadt y West describen esta complejidad de la siguiente manera: los grupos indígenas «criticaron fuertemente la falta de atención del Gobierno central ante la degradación del medio ambiente, pero se mostraron divididos sobre la pertinencia de seguir explorando y perforando en busca de petróleo» (2017b, p. 245). Jorge Pérez Rubio, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la mayor organización peruana que representa a los pueblos indígenas amazónicos, también hizo eco de estas preocupaciones y señaló que había «zonas donde no se puede extraer petróleo», como las reservas naturales, pero también reconoció una «sinergia económica» en otras zonas en las que operan las empresas petroleras (en Díaz Gonzales, 2021). Nuestro estudio, que utiliza encuestas de opinión pública, nos permite explorar metódicamente la complejidad del cálculo de la toma de decisiones sobre la minería.

En tercer lugar, un estudio centrado en las actitudes individuales puede ayudarnos a comprender la micropolítica —o las raíces— a partir de la que se forman o refuerzan estas actitudes. Las actitudes individuales sobre la extracción de recursos son, de hecho, variadas, especialmente en entornos en los que se cuenta con poca información. Por ejemplo, un individuo puede estar expuesto a información sobre las posibles consecuencias negativas de la extracción, y estos informes pueden influir en sus actitudes hacia la minería. Por el contrario, un individuo puede haber leído sobre los posibles beneficios de la extracción (como nuevas oportunidades de trabajo), y esto puede, a su vez, moldear sus puntos de vista sobre la minería. Un reto clave, entonces, es tratar de entender cómo los individuos asimilan estas demandas que se confrontan entre sí y qué hace que los que se oponen a la minería sean diferentes de aquellos que la apoyan. En este libro, sostenemos que lo que diferencia a estos individuos es la participación social.

## Participación social

Por participación social entendemos la participación en organizaciones locales, como grupos religiosos, organizaciones medioambientales, asambleas comunitarias y asociaciones agrícolas. Estas organizaciones fomentan los lazos formales (por ejemplo, actividades impulsadas por un propósito o relacionadas con el trabajo) e informales (como actividades casuales o sociales) entre los miembros de una comunidad, y brindan oportunidades regulares de interacción con múltiples interconexiones (Wilkinson, 1991). Al interactuar entre sí en las organizaciones comunitarias, los individuos amplían sus redes y las hacen más fuertes y sólidas, lo que les permite obtener información y recursos cruciales para defender intereses comunes (Boulding & Holzner, 2021). Las organizaciones también fomentan la confianza, aumentan los compromisos y promueven normas de reciprocidad (Putnam, 1993; Mattessich, 2009); además, brindan el espacio para que los individuos se acerquen a otros miembros de la comunidad en momentos de crisis (Woolcock, 2001), como cuando es inminente la extracción de recursos.

La participación social ofrece una ventana a la micropolítica de la formación de actitudes hacia la extracción de recursos. Siguiendo las contribuciones de Moseley (2015, 2018) sobre la participación en protestas, y en consonancia con los estudios de opinión pública que han demostrado que es más probable que los individuos socialmente comprometidos desafíen las actividades de extracción de recursos (Arce *et al.*, 2020), sostenemos que la participación en organizaciones locales también ayuda a formar o reforzar las actitudes hacia la minería. Este argumento se basa en tres conjuntos de resultados interrelacionados que están asociados con dicha participación. En primer lugar, los individuos socialmente comprometidos tienen mayor acceso a la información y los recursos organizacionales sobre las preocupaciones de la comunidad, incluidas las referentes a las amenazas que plantea la minería. En segundo lugar, ellos tienen mayor grado de eficacia y confianza, lo que los empodera —lo mismo que a sus comunidades— frente a los actores de la industria o del Gobierno interesados en promover las actividades extractivas. En tercer lugar, la participación en organizaciones locales siembra una concepción de comunidad que hace que la minería sea incompatible con los medios de vida existentes o con el medio ambiente. A continuación, explicamos en profundidad cada uno de estos elementos y su relación con la oposición a las actividades extractivas.

## **Información y recursos organizacionales**

Existen diferencias sustanciales en términos de lo que aprenden o ganan los individuos cuando participan en organizaciones. Estas diferencias proporcionan información clave sobre lo que los distingue en cuanto a actitudes en general y a opiniones sobre la minería en particular. En efecto, una amplia bibliografía sugiere que las organizaciones comunitarias son puntos centrales de recursos organizacionales e información, y como tales pueden moldear las percepciones de amenazas medioambientales y, en última instancia, motivar a los individuos a que persigan objetivos comunes, e incluso a que participen en protestas.

Tarrow (1998), por ejemplo, señala que las organizaciones (formales e informales) pueden ayudar a reclutar nuevos miembros y fortalecer la cohesión del grupo que ya existe, sobre todo cuando ofrecen recompensas o incentivos de solidaridad. Las organizaciones también brindan redes de comunicación que pueden significar la diferencia entre una movilización exitosa y una oportunidad perdida. Jenkins (1983), y McCarthy y Zald (1973, 1977) también muestran que la participación en las organizaciones proporciona herramientas y recursos clave. De acuerdo con la literatura sobre movilización de recursos, los individuos socialmente comprometidos tienen acceso a redes de participación que no están disponibles para quienes no se comprometen socialmente. Por ejemplo, los primeros tienen capacidad de identificar los recursos locales esenciales, reunir información relevante para la comunidad, desarrollar y formar a los líderes locales para que sirvan como representantes efectivos del grupo y apoyar las redes internas y externas interesadas en contribuir a los esfuerzos del grupo. Al escribir sobre la importancia de las relaciones sociales, Woolcock sugiere que los individuos informados tienen mayor capacidad para «organizar, evaluar datos contradictorios y expresar sus puntos de vista de forma constructiva» (2001, p. 6).

La información y los recursos que estas personas reciben de las organizaciones pueden fortalecer su percepción de los daños ambientales, sobre todo cuando viven cerca de zonas extractivas. Según Eisenstadt y West (2017b), estos individuos ya son más conscientes del medio ambiente porque se enfrentan a lo que caracterizan como «vulnerabilidades objetivas», por ejemplo, la escasez de agua y la contaminación. Al ser más conscientes, pueden estar más motivados para fomentar los medios de vida de la comunidad. Ante estas vulnerabilidades, en zonas donde la extracción de recursos está a la espera, es más probable que los individuos acepten la información que aprenden de las organizaciones en las que ya participan en vez de aquella que proviene de los actores de la industria o del Gobierno. Cuando

las organizaciones comunitarias hablan de las amenazas potenciales que plantea la minería, los individuos se unen en acción para evitarlas.

En cuanto a la acción colectiva, investigaciones anteriores enfocadas en América Latina relacionan la participación de un individuo en las protestas con su compromiso con las organizaciones locales (Boulding, 2014; Boulding & Holzner, 2021; Moseley, 2015). Como planteaba Moseley (2015), es más probable que los ciudadanos socialmente comprometidos decidan protestar por dos razones. En primer lugar, cuando los ciudadanos están socialmente comprometidos con sus comunidades, es posible que tengan más acceso a herramientas organizacionales fundamentales para comunicarse y movilizarse. En segundo lugar, al ser miembros de organizaciones y grupos políticos y no políticos, están más expuestos a los puntos fuertes y débiles propios de las estructuras institucionales formales; esta situación les ofrece la información requerida para que tomen decisiones acertadas sobre la necesidad o la eficacia de participar en protestas.

En cuanto a la extracción de recursos, Arce y otros (2020) señalan que hay más probabilidades de que los individuos socialmente comprometidos se movilicen en contra de la minería en América Latina. Es posible que estos ciudadanos desafíen las actividades extractivas porque su participación en organizaciones les permite ser más conscientes del entorno institucional al que se enfrentan y de cómo este puede, a su vez, facilitar u obstaculizar sus esfuerzos de acción colectiva. Como planteó Moseley (2015), la participación en las organizaciones ofrece a los individuos la información necesaria para que tomen decisiones sobre sus estrategias de movilización. Pero, a diferencia de Moseley (2015), Arce y otros (2020) creen que el éxito de las estrategias colectivas sobre la extracción de recursos está mediado políticamente, ya que los movimientos son más influyentes en algunos contextos institucionales que en otros. Dicho de otra manera, el entorno institucional no es una característica estática que desencadena mayores o menores niveles de movilización. Más bien, que un individuo esté dispuesto a protestar por la extracción de recursos depende de su capacidad para aprovechar las fortalezas del entorno institucional a su favor. Los individuos socialmente comprometidos tienen acceso a esa información institucional, lo que les permite moldear sus estrategias individuales y colectivas. Por el contrario, aquellos que no están comprometidos socialmente no tienen acceso a la información sobre las fortalezas y debilidades de su entorno institucional y son menos capaces de coordinar estrategias de acción colectiva cuando se acerca la extracción de recursos o para responder a quienes se oponen a esta.

En resumen, la participación en organizaciones locales, que caracterizamos como participación social, genera interconexiones entre los miembros de la co-

munidad. Esto les permite obtener información y recursos organizacionales para perseguir intereses comunes (Boulding & Holzner, 2021). En el contexto de la extracción de recursos, su participación social les posibilita un mejor acceso a la información sobre las amenazas de la minería y a la que deben manejar sobre su entorno institucional para actuar colectivamente, también a las herramientas organizacionales para movilizarse cuando es inminente la extracción de recursos. Por el contrario, cuando los individuos no participan de estas organizaciones, no tienen acceso a dicha información sobre la extracción de recursos y carecen de la estructura organizacional que se requiere para desarrollar la acción colectiva, por lo que es más probable que expresen opiniones a favor de la minería. En definitiva, los individuos que participan en las organizaciones comunitarias obtienen información clave y recursos organizacionales, lo que contribuye a formar o reforzar sus actitudes hacia la minería.

### **Las organizaciones como fuente de empoderamiento**

Así como son importantes la información y los recursos organizativos de las organizaciones locales, la participación social también empodera a los individuos para actuar; es decir, los motiva a que transformen la información y los recursos impartidos en acciones o comportamientos comunitarios concretos. En el contexto de la minería, este empoderamiento impulsa a los individuos a desafiar las fuentes externas y a defender a sus comunidades contra las amenazas percibidas. El empoderamiento puede verse a través de las lentes de la eficacia y la confianza, ambas estrechamente relacionadas.

La eficacia se da tanto a nivel individual como comunitario y es, en esencia, la creencia de que la acción efectuará el cambio. Basándose en Bandura (1997), Butel y Braun (2019, p. 1) definen la autoeficacia como la creencia en la propia capacidad de actuar para producir los resultados deseados, y la eficacia colectiva como la creencia compartida de que las acciones de un grupo influirán en el futuro que buscan. Los estudios que se han hecho hasta ahora han demostrado que la eficacia colectiva está asociada con una amplia gama de resultados positivos para la comunidad, como mejores condiciones de salud, mayores tasas de asistencia a la escuela y menos incidentes de delincuencia (Butel & Braun, 2019, p. 2). Estos resultados pueden extenderse a la preocupación y protección del medio ambiente y los medios de vida de la comunidad. Sin embargo, es necesario que se generen vínculos de confianza y un comportamiento cooperativo entre los miembros de la comunidad para que se produzcan estos efectos.

Siguiendo a Putnam (1993, 2000), la confianza es un subproducto de la participación en organizaciones locales. Particularmente las asociaciones voluntarias crean y promueven fuertes redes horizontales que permiten interacciones entre individuos semejantes. Estas redes generan confianza porque la información sobre la fiabilidad de otros individuos «se vuelve transitiva y se propaga: confío en ti, porque confío en ella y ella me asegura que confía en ti» (Putnam, 1993, p. 169). Estas redes actúan, entonces, como un recurso que les permite a los individuos o grupos alcanzar objetivos comunes y, por la confianza que generan, garantizan que los individuos no se desvíen de los objetivos compartidos<sup>14</sup>.

En su investigación sobre la minería en Guatemala, Dougherty y Olsen (2014b) demuestran cómo los individuos con mayores niveles de autoeficacia y eficacia colectiva tienen mayores niveles de confianza relacional dentro de la comunidad y entre sus miembros. Cuando existe confianza relacional, hay mayor posibilidad de que los individuos confíen en la información que reciben de su propia comunidad que en la que proviene de una fuente externa, como los actores de la industria o del Gobierno. Es más probable que los miembros de la comunidad sean resilientes porque creen que tienen una mayor capacidad para actuar, mitigar o adaptarse a las amenazas que los afectan. Por el contrario, hay menos probabilidades de que los individuos con niveles más bajos de autoeficacia y eficacia colectiva tengan confianza relacional, pero sí es posible que tengan confianza institucional (Dougherty & Olsen, 2014b). Los individuos con confianza institucional son propensos a aceptar la información que reciben de fuentes externas, es decir, de actores de la industria y del Gobierno, en vez de la que proviene de los compañeros de su misma comunidad. Es más probable que estas personas utilicen la confianza institucional para afrontar los cambios de las circunstancias (Sztompka, 1999)<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Varshney (2001) destaca que el compromiso cívico interétnico favorece la promoción de la paz entre los grupos étnicos, especialmente la participación en asociaciones formales, como las empresariales interétnicas, los equipos deportivos, los clubes de lectura o de cine y los sindicatos. Estas asociaciones formales son mecanismos más eficaces para promover la paz que los mecanismos informales, como comer juntos regularmente y permitir que los niños jueguen juntos. En este libro no resaltamos la dimensión étnica de la participación social, pero reconocemos que es importante a la hora de pensar en los aspectos no materiales de las amenazas de la minería.

<sup>15</sup> Rimal (2001) también muestra que la eficacia y la percepción del riesgo están asociadas positivamente. Cuando los individuos se sienten empoderados para hacer frente a las preocupaciones de la comunidad, no solo hay menos probabilidades de que acepten los riesgos que representen una amenaza para sus comunidades, sino que también estarán más dispuestos a participar en estrategias colectivas para enfrentar dichas amenazas. Por el contrario, es más probable que los individuos con baja eficacia acepten los riesgos que se perciben como amenazas para sus comunidades y, al mismo

Consideramos que hay mayor probabilidad de que los individuos socialmente comprometidos tengan más eficacia y confianza; esto les permitiría sentirse empoderados para desafiar a los actores de la industria o del Gobierno que estén decididos a expandir la extracción de recursos. Por ejemplo, descubrimos que cuando los actores de la industria lanzan eslóganes –como «minería verde», «minería responsable» o «el carbón es limpio»–, es más probable que los individuos socialmente comprometidos se muestren escépticos ante tales mensajes porque manifiestan más eficacia y confianza relacional. Hay mayores probabilidades de que acepten la información sobre la minería que reciben a través de sus interacciones entre pares en organizaciones locales, como grupos religiosos, organizaciones medioambientales, asambleas comunitarias y asociaciones agrícolas. En consecuencia, es menos probable que confíen en los discursos de los actores del Gobierno y de la industria y más probable que se unan a la acción para evitar las amenazas que plantea la minería. Cuando disponen de recursos, estos individuos también pueden producir sus propias fuentes de información, como informes alternativos de EIA que refuten los informes que presentan los actores de la industria o del Gobierno. Sin embargo, los individuos no comprometidos socialmente, que manifiestan bajos niveles de eficacia, pero mayor confianza institucional, son más receptivos a los discursos que defienden la minería. En resumen, la confianza relacional y la institucional sirven para filtrar las amenazas (u oportunidades) percibidas en torno a la extracción de recursos y motivan a los individuos a seguir (o no) determinados comportamientos.

## **Concepción de comunidad desde las organizaciones**

En varias narrativas de conflictos por extracción de recursos, aprendemos que las amenazas de la minería no son únicamente materiales (por ejemplo, la cantidad o la calidad del agua y el valor de la tierra), sino también inmateriales (por ejemplo, lo que suponen los medios de vida existentes para la comunidad y lo que estos medios de vida representan para los individuos, sus prácticas culturales o sus tradiciones). Cuando hablamos de concepción de comunidad, nos referimos a los valores compartidos que les permiten a sus miembros redefinir las amenazas materiales sobre la tierra o el agua con discursos relacionados con el territorio, la identidad o la cultura. Y, como consecuencia de estos valores compartidos, es más probable que los individuos socialmente comprometidos participen en acciones que promueven el

---

tiempo, es menos probable que participen en estrategias colectivas para enfrentar tales amenazas (Kuttschreuter, 2006; Trumbo & McComas, 2003).

bienestar de la comunidad por encima de intereses exclusivamente individuales. Si las organizaciones locales promueven acciones a favor del medio ambiente (contra la minería), los miembros de la comunidad adoptarán esas acciones.

Cuando los individuos participan en organizaciones locales, las conexiones formales e informales que tienen con otros miembros crean un conjunto común de valores que fundamentan su construcción social de la comunidad y su propia identidad enraizada en esta. Psicólogos ambientales, geógrafos humanos y sociólogos definen esta conexión subjetiva con el lugar de uno como apego al lugar (Lewicka, 2011). A pesar de que el concepto de apego al lugar es intrínsecamente idiosincrásico, los académicos suelen conceptualizar esta idea en dos dimensiones: la dependencia del lugar y la identidad del lugar (Boley *et al.*, 2021). La dependencia del lugar es el componente «utilitario» de este, que se basa en el cálculo del bienestar económico de un individuo en su comunidad actual y en «cómo se comparan otros lugares alternos a la hora de ofrecer las mismas experiencias o satisfacción» (Boley *et al.*, 2021, p. 2). La identidad del lugar es la conexión emocional o simbólica que tiene el individuo con un sitio, que a menudo forma la propia identidad de la persona (Proshansky, 1978). Cuando los lazos emocionales con la tierra se vuelven estables y duraderos, el éxito de la comunidad puede estar inextricablemente ligado a la sensación personal de logro del individuo (Williams & Vaske, 2003). Por ello, cuando los actores de la industria o del Gobierno presentan planes para construir el futuro de la región de una forma radicalmente diferente, o que desafían la visión socialmente construida de la comunidad, estas fuerzas externas serán percibidas como una amenaza.

En su estudio de las actitudes sobre el cambio climático en Ecuador, Eisenstadt y West (2017a) encuentran que la cosmovisión indígena, que es una cosmovisión tradicional basada en valores de protección del medio ambiente, se refuerza cuando un individuo vive en una frontera extractiva y es, por tanto, más vulnerable a los daños ambientales. Así, si los individuos están preocupados por las amenazas que representa la minería para los medios de vida de la comunidad, es más probable que se unan con otros miembros de ella que comparten su visión del mundo y que están dispuestos a promover comportamientos similares a favor del medio ambiente, como oponerse a los proyectos mineros.

El estudio de Simmons (2016) sobre la Guerra del Agua en Cochabamba (Bolivia) también destaca algunos de los componentes clave de cómo la identidad comunitaria puede crear una concepción que permita producir una amplia movilización. Su investigación muestra la forma en que el agua puede generar una concepción de comunidad. Los cochabambinos creían que el agua los conectaba con su identidad

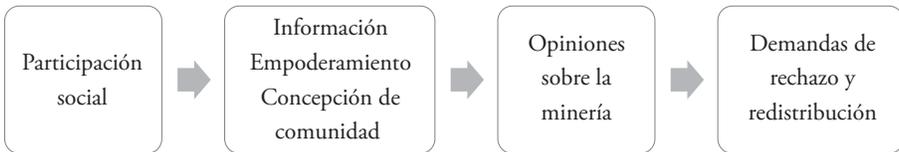
local y regional a través de las prácticas de riego de la comunidad, su pasado agrícola y sus continuas luchas relativas a la escasez de recursos. Muchos compartían su creencia de que el agua representaba algo más que sus «características biofísicas» (Simmons, 2016, p. 43). En Cochabamba, el agua simbolizaba la comunidad para todos los miembros, independientemente de su estatus social y económico; de esta forma se superaban las divisiones y se facilitaban las condiciones necesarias para que se produjera una movilización a gran escala. La propuesta de privatizar el agua no amenazaba solamente a los barrios y comunidades pequeños de Cochabamba, sino a toda la nación boliviana. En situaciones así, se crea una concepción de comunidad que contribuye a alcanzar objetivos colectivos cuando los individuos conocen y comprenden las amenazas a su bienestar material e inmaterial y tienen un fuerte sentido de pertenencia dentro de su comunidad.

Con base en estos aportes, sugerimos que la participación en organizaciones locales facilita un sentimiento de pertenencia y afiliación, un apego al lugar, que fomenta las normas y comportamientos de una comunidad, así como la responsabilidad mutua y la apropiación de tal lugar entre sus miembros (Mattessich, 2009; Gardner, 1993); y produce una concepción de comunidad que les permite agrupar amenazas materiales sobre la tierra o el agua con concepciones relacionadas con el territorio, la identidad o la cultura. En otras palabras, tal apego al lugar combina concepciones utilitarias de la dependencia del lugar con conexiones simbólicas de la identidad sobre él (Boley *et al.*, 2021). Al participar en organizaciones comunitarias, es más probable que los individuos tengan la misma concepción de comunidad, lo que favorece las normas de comportamiento compartidas y el consenso del grupo. Es más, cuando las amenazas se entrecruzan con las preocupaciones materiales y no materiales (Simmons, 2016), es posible que la oposición a la minería sea más fuerte entre los individuos socialmente comprometidos.

En resumen, tratamos de entender cómo llegan a formular sus opiniones sobre la minería los individuos que residen cerca de las zonas mineras propuestas. Consideramos que la participación en organizaciones locales –lo que identificamos como participación social– proporciona información importante sobre lo que distingue a los individuos entre sí. Esta participación ayuda a explicar cómo los individuos forman o refuerzan sus actitudes hacia la minería, lo que a su vez influye en la elaboración de sus demandas (véase la figura 3). Desarrollamos este argumento a través de tres consecuencias determinantes que están relacionadas con la participación en organizaciones locales: el acceso a la información y a recursos organizacionales; la eficacia y los atributos relacionados a ella; y la concepción de comunidad. Es más probable que los individuos socialmente comprometidos participen en los compor-

tamientos que promueven las organizaciones comunitarias locales cuando tienen acceso a información crucial y a herramientas organizacionales para desafiar las actividades extractivas, se sientan empoderados para lograr sus objetivos de resistencia a la minería y se vean en el mismo barco como consecuencia de su concepción de comunidad. Si estas organizaciones adoptan comportamientos a favor del medio ambiente, es posible que se produzcan desafíos duraderos contra la minería. Por el contrario, los individuos no comprometidos socialmente no tienen acceso a esta información ni a recursos organizacionales, poseen poca eficacia y atributos relacionados y no comparten una concepción de comunidad. Por estas razones, hay más probabilidades de que revelen rasgos individualistas y acepten el discurso de fuentes externas –como actores de la industria o del Gobierno–, por ejemplo, cuando afirman que la minería traerá oportunidades de empleo o desarrollo a la zona.

Figura 3  
Consecuencias de la participación social en la extracción de recursos



### **Demandas de rechazo y redistribución**

En un análisis del EJAtlas, Scheidel y otros (2020) documentan 2.743 casos de conflictos ambientales en todo el mundo, de los cuales 573 (21%) están relacionados con la minería<sup>16</sup>. De manera similar, el Observatory of Mining Conflicts in Latin America (Ocmal, 2020) reporta 277 conflictos mineros en América Latina, donde tres países representan la mitad de todos los conflictos en la región: México (20%), Chile (17%) y Perú (15%). Para comprender mejor su naturaleza, nos basamos en la literatura de los movimientos sociales y hacemos énfasis en los principales incentivos que estimulan la acción conjunta, es decir, las amenazas y las oportunidades (Tilly, 1978; Goldstone & Tilly, 2001). Estos incentivos reflejan la información ambivalente a la que se enfrentan los individuos que viven cerca de la frontera extractiva cuando se acerca la explotación minera<sup>17</sup>.

<sup>16</sup> Entre otros conflictos, aparte del de la minería, se encuentran el del sector de la energía fósil (17%), la biomasa y los usos del suelo (15%) y el de la gestión del agua (14%).

<sup>17</sup> El debate sobre amenazas y oportunidades en relación con las demandas de rechazo y redistribución se basa en gran medida en Arce (2014) y Arce y Moran (2020).

Por un lado, la acción colectiva inducida por la amenaza está motivada por factores negativos externos o «malas noticias» que los opositores podrían evitar si se unen a la acción (Almeida, 2010). Como ya se ha comentado, ampliar la frontera extractiva impone varias dificultades socioambientales que llevan a las comunidades anfitrionas a luchar; algunos ejemplos son la pérdida de acceso y de calidad del agua, así como la conservación de la tierra y los paisajes. También son importantes los aspectos sociales y culturales de estas pérdidas, sobre todo cuando los proyectos ponen en peligro la supervivencia cultural de los pueblos indígenas. Es más probable que las amenazas relacionadas con el agua o la tierra activen movimientos locales de base, pero las relacionadas con la supervivencia de los pueblos indígenas pueden desencadenar la participación de movimientos transnacionales fuera de la zona que sería impactada directamente por la extracción (Almeida & Pérez Martín, 2020).

Por otro lado, la acción colectiva generada por la oportunidad es estimulada por «buenas noticias» (Meyer, 2004) o por condiciones positivas que motivan a los miembros de la comunidad a unirse a la acción a medida que las oportunidades los acercan al cumplimiento de sus objetivos (Tilly, 1978; Goldstone & Tilly, 2001). La literatura hace énfasis en las oportunidades de movilización relacionadas con el entorno político. En el contexto de la extracción de recursos, la creación de instituciones participativas como la consulta previa, las políticas que ordenan realizar audiencias públicas de las EIA o la distribución de las rentas que generan los recursos para las zonas cercanas a la extracción pueden considerarse como un cambio en el entorno que les ofrece a las comunidades anfitrionas nuevas ventajas y las motiva a emprender una acción conjunta. En un sentido más estricto, las expectativas de obtener mayores salarios o proyectos de desarrollo comunitario que provengan de las actividades mineras pueden verse como una motivación positiva que generaría bienestar individual o colectivo, lo cual estimula también la acción conjunta<sup>18</sup>.

Arce (2014) presenta la acción colectiva inducida por amenazas como «demandas de derechos» y la acción colectiva generada por oportunidades como «demandas de servicios». La acción colectiva basada en derechos representa campañas de todo o nada contra la extracción y conlleva demandas más amplias que son intransigentes y menos propensas al compromiso. Estas demandas más amplias, a su vez, fomentan diferentes tipos de alianzas y coaliciones comunitarias y condu-

---

<sup>18</sup> La literatura sobre la guerra civil denomina «codicia» a este deseo de salir adelante, pero nosotros preferimos mantener el término «oportunidad» en un sentido amplio.

cen a desafíos sostenidos por la extracción de recursos. En cambio, la acción colectiva basada en servicios implica demandas específicas y negociables, y los grupos que se movilizan no suelen estar muy bien organizados. Estas movilizaciones, de hecho, producen un patrón de protesta ininterrumpida en el que las protestas de corta duración conducen a pequeñas concesiones, que luego fomentan otras, también de corta duración, y otras, y así sucesivamente.

Las demandas orientadas a derechos (o al rechazo) coinciden con las demandas de justicia procesal de Perreault, ya que exigen «una mayor participación y transparencia en las decisiones sobre la gestión de los recursos naturales» (2006, p. 154). Las demandas orientadas a servicios (o a la redistribución) comparten similitudes con las demandas de «justicia distributiva», pues consisten en exigir una «distribución más equitativa de los beneficios derivados de la explotación de los recursos naturales» (Perreault, 2006, p. 154). Asimismo, Spalding (2020) habla de conflictos de definición y de distribución. Los conflictos de definición se producen cuando se considera que la minería es incompatible con los medios de vida y las prácticas de la comunidad y, por lo tanto, los opositores piden su prohibición. Los conflictos de distribución ocurren cuando se acepta la explotación minera, pero se produce una competencia por obtener las ganancias inesperadas que esta genera. Por último, José de Echave y otros (2009) tienen en cuenta los «conflictos basados en el rechazo», en los que los opositores rechazan por completo la minería en sus distritos, y los conflictos de «coexistencia», en los que la disputa gira en torno a la redistribución de los beneficios que genera la minería a través de inversiones, contratos de trabajo o filantropía.

Mientras que Arce (2014), Perreault (2006), Spalding (2020), y De Echave y otros (2009) identifican dos grandes categorías de conflictos, los estudios han demostrado que, en algunos conflictos, los grupos y los individuos hacen demandas tanto de rechazo como de redistribución, incluso dentro del mismo caso y período del conflicto (Wilson Becerril, 2021; Paredes, 2022). En algunos, los manifestantes rechazan inicialmente un proyecto, pero luego adoptan posturas a favor de la redistribución una vez que la mina empieza a construirse y a producir, y más tarde vuelven a hacer demandas de rechazo cuando se pretende expandir la mina a nuevas tierras. Esta perspectiva coincide con nuestro enfoque, porque incluso los conflictos contra la minería más conocidos incluyen fuentes de apoyo y oposición (demandas de redistribución y de rechazo), y generalmente la literatura existente ha hecho énfasis en la uniformidad de estas demandas, en particular de las de rechazo. En efecto, el trabajo de Dougherty (2019) sobre la minería en Guatemala expone la variación de estas demandas, ya que algunos in-

dividuos apoyan las actividades mineras para el desarrollo económico y educativo, mientras que otros se oponen debido a sus efectos adversos en la salud pública y el medio ambiente local. Nuestro enfoque individual de las actitudes hacia la minería nos permite captar la diversidad de opiniones que hay sobre esta dentro de un proyecto y un lugar.

## **Selección de casos**

Este libro explora la micropolítica a través de la cual se forman o refuerzan las actitudes hacia la minería. Para ofrecer una perspectiva bien fundamentada, comparamos tres sitios en la etapa de preproducción. Los tres son de especial interés y reciben la mayor atención, puesto que buscamos explicar las raíces de las actitudes individuales hacia la minería. En estos lugares se está luchando por detener la extracción en nuevas tierras, y las demandas de rechazo son comunes en ellos. Estos proyectos suelen estar clasificados como en etapa de exploración o concesión, pero la extracción en sí no ha comenzado. En tales lugares, la resistencia colectiva contra la minería que se da a través de diversas organizaciones locales que coexisten en medio de un claro respaldo gubernamental a los proyectos, además de la presencia de poderosos actores de la industria que están igualmente interesados en expandir la frontera extractiva. Estas campañas contra la extracción, sea mediante la movilización, la judicialización, o ambas, se extienden durante varios años.

Haciendo eco de Klare (2012), en la carrera por obtener los recursos que quedan en el mundo, queríamos saber qué hace que sean atípicas las zonas de conflictos prolongados en comparación con la muestra más amplia de conflictos por recursos. Así pues, nuestra selección de casos se basa en las zonas en las que es inminente la extracción. En estas, las comunidades anfitrionas y los actores de la industria compiten entre sí por definir las amenazas y oportunidades que plantea la minería (Haslam, 2021); por otra parte, los miembros de la comunidad reciben información contradictoria sobre los pros y los contras de la minería propuesta, y no han experimentado, directa ni indirectamente, las «vulnerabilidades objetivas» (Eisenstadt & West, 2017b) o las ventajas relacionadas con la extracción.

Nuestra selección de casos se aproxima a un diseño exploratorio y «muy diferente» o «de concordancia» (Gerring, 2007; Gerring & Cojocar, 2016)<sup>19</sup>. Estos

---

<sup>19</sup> En palabras de Seawright y Gerring (2008), en este modelo «el investigador trata de identificar los casos en los que solo una variable independiente y la variable dependiente covarían, y todas las demás variables independientes plausibles muestran valores diferentes. Estos se consideran casos muy diferentes, aunque son similares en dos aspectos esenciales: la variable causal de interés (X1) y el resultado (Y)».

casos varían mucho en cuanto a los factores o características de fondo que pueden afectar el apoyo a proyectos extractivos. Si bien se maximiza la variación de estas características, tal estrategia requiere minimizar las diferencias relacionadas con el resultado que se quiere explicar –es decir, el apoyo a proyectos extractivos– con el objetivo de identificar un factor común entre estos casos como causa probable de dicho resultado. Presentamos una amplia variación de diversas características que pueden influir en el apoyo a los proyectos mineros. Por ejemplo, estos sitios difieren con respecto a ubicación geográfica (urbana y rural), región geográfica (América Central, América del Sur y África Subsahariana), etapa de la cadena de suministros en la que se encuentran las materias primas (preproducción y producción), tipos de organizaciones activas en la comunidad (grupos religiosos, organizaciones medioambientales, asambleas comunitarias, asociaciones agrícolas, etc.), tipos de materia prima (cobre, oro, carbón, etc.), país de origen de los principales inversionistas (Canadá, México y Sudáfrica), tipo de amenazas principales (agricultura, fauna y flora silvestres, etc.) y poblaciones atendidas por antecedentes de minería, entre otros factores (véase la tabla 1). Además, en vez de hablar sobre participación social, nuestra principal variable independiente de interés, introducimos una medida cuantitativa basada en encuestas de opinión pública utilizando un esquema categórico (por ejemplo, alto frente a bajo). También sigue este enfoque cuantitativo nuestra variable dependiente, apoyo a los proyectos extractivos.

Los lugares correspondientes al momento de acceso o preproducción de los recursos son Tía María en Perú, Rancho Grande en Nicaragua y Fuleni en Sudáfrica. La minería es vista como una amenaza para la agricultura en Tía María y en Rancho Grande, y para la fauna y la flora en Fuleni; también están en peligro los medios de vida de las comunidades cercanas a estos lugares. Al mismo tiempo, los defensores de estos proyectos afirman que las actividades extractivas pueden aumentar el empleo y generar rentas por recursos que contribuyan al desarrollo de la comunidad.

Tía María, de Southern Copper Corporation, es un proyecto de mina a tajo abierto del cual se planea extraer cobre en Perú. La concesión minera se encuentra en la provincia de Islay, en la región sur de Arequipa, y está muy cerca de la zona agrícola del valle de Tambo. Es un proyecto nuevo, pero Southern es una antigua empresa minera en la zona. Antes conocida como Southern Peru Copper Corporation (SPCC), fue fundada en 1952, y sus operaciones se iniciaron en la región de Tacna (situada a unos 372 kilómetros al sur de Arequipa)<sup>20</sup>. En 2005,

<sup>20</sup> Entre las operaciones de SPCC se encuentran las minas Toquepala en Tacna y Cuajone en Moquegua.

SPCC compró Minera México y pasó a llamarse Southern Copper Corporation. Actualmente, Grupo México es el accionista mayoritario de esta empresa (75%).

Tabla 1  
Factores del contexto a través de los casos

Características del proyecto	Caso			
	Tía María	Rancho Grande	Fuleni	Santo Domingo
Ubicación	Islay (Perú)	Matagalpa (Nicaragua)	iMfolozi (Sudáfrica)	Chontales (Nicaragua)
Cadena de suministros	Etapas de preproducción	Etapas de preproducción	Etapas de preproducción	Etapas de producción
Año de concesión	2009	2012	2014	2010
Minería en curso	No	No	No	Sí
Método de explotación	Tajo abierto	Tajo abierto	Tajo abierto	Tajo abierto
Antecedentes de minería	Sí	No	No	Sí
Ubicación geográfica	Urbana y rural	Rural	Rural	Urbana y rural
Amenaza principal	Agricultura	Agricultura	Vida silvestre, cultura	Agricultura

Notas: por antecedentes de minería nos referimos a la presencia de minas cercanas y poblaciones atendidas por las operaciones de esas minas (Tía María y Santo Domingo son casos marcados con Sí a causa de Cerro Verde y minería artesanal, respectivamente); las amenazas a la agricultura incluyen las que se dirigen al agua o a las tierras.

Rancho Grande, otorgado a la empresa canadiense B2Gold Corporation, es un contrato de arrendamiento minero para una mina de oro a tajo abierto. El proyecto se encuentra en la comunidad del mismo nombre en el departamento norteño de Matagalpa, Nicaragua. En 2012, B2Gold adquirió la totalidad de las acciones de este contrato de la canadiense Radius Gold, que se interesó por primera vez en la zona tras el descubrimiento de depósitos de oro en 2003. El proyecto Rancho Grande –también conocido como El Pavón– se limita a la extracción del mineral, ya que el proceso para convertirlo en oro se llevaría a cabo en la mina El Limón, ubicada a unos 240 kilómetros al oeste de Rancho Grande, en el departamento de León (EJAtlas, 2014). La comunidad de Rancho Grande siempre ha subsistido económica y socialmente gracias a la producción y comercialización de la agricultura, principalmente de café y ca-

cao, así como de otras frutas y verduras autóctonas de Nicaragua. En Rancho Grande también se encuentra la Reserva Natural Cerro Kuskayas, que forma parte de una reserva aun más grande: la Reserva de la Biosfera Bosawás (Centro Humboldt, 2015b).

En Sudáfrica, Fuleni de Ibutho Coal (Pty<sup>21</sup>) Ltd. es un proyecto para extraer carbón antracita bajo en azufre, principalmente a tajo abierto, durante los 30 años previstos de vida útil que tendría la mina. Ibutho Coal es una empresa relativamente nueva: se creó en 2006 con el objetivo de desarrollar y explotar comercialmente los recursos minerales de carbón en Sudáfrica. El proyecto minero de Fuleni está ubicado en una parte de la reserva de Fuleni, en el norte de Kwa-ZuluNatal. Esta nueva zona limita con el río Mfolozi al norte, la vía férrea de Richards Bay al sur y el parque Hluhluwe-iMfolozi al noroeste. El parque Hluhluwe-iMfolozi es la reserva natural más antigua de África y alberga varias especies en peligro de extinción, como el rinoceronte blanco del sur. Esta reserva no solo es un importante destino turístico, es también patrimonio cultural de la nación zulú, pues el rey Shaka vivió y cazó allí de joven. El proyecto minero propuesto amenaza a las comunidades que habitan cerca de Fuleni, así como a la fauna y la flora de esta reserva natural.

Además de estos sitios previos a la producción, exploramos uno en etapa de extracción: Santo Domingo en Nicaragua. La explotación de la mina de Santo Domingo ha provocado diversas demandas de rechazo y de redistribución, y las movilizaciones suelen ser intermitentes. Al igual que en Rancho Grande, el conflicto está asociado con la canadiense B2Gold Corporation. En 2009, esta empresa adquirió La Libertad, una mina de oro a tajo abierto ubicada en el departamento de Chontales. Un año después, B2Gold descubrió la veta Jabalí, a unos siete kilómetros al sur de la localidad de Santo Domingo, un pueblo que tradicionalmente ha desarrollado la minería artesanal desde hace tiempo, por lo cual las actividades de la empresa han afectado los ingresos de los mineros locales, y también han impactado las fuentes de agua de la zona, lo cual amenaza la agricultura y la ganadería de la comunidad. Desde 2011, un amplio conjunto de actores y organizaciones locales conformado por mineros artesanales, agricultores, ganaderos y miembros de la comunidad preocupados ha liderado diversas movilizaciones en rechazo a la expansión de B2Gold en Santo Domingo y La Libertad. El Gobierno de Nicaragua ha respondido a esta resistencia con

---

<sup>21</sup> Abreviatura en inglés para *proprietary*, «propietario»; se refiere a una empresa privada de responsabilidad limitada.

violencia, y los manifestantes han sido encarcelados injustamente por varios períodos (EJAtlas, 2016).

Si observamos los tres países donde se encuentran estos proyectos, encontramos que la minería está muy presente en la historia de Perú y de Sudáfrica: se remonta a la época colonial (Kruijt & Vellinga, 1979; Davenport, 2013). También ha estado presente en Nicaragua desde la época colonial, pero su intensidad y escala aumentaron sustancialmente después del regreso de la democracia al país en 1990. Nicaragua es, por tanto, un país relativamente nuevo en la globalización de los flujos de inversión en minerales y ofrece un buen contraste con las experiencias de Perú y Sudáfrica, donde la minería está muy consolidada. Los Gobiernos de estos tres casos avalan arrendamientos mineros de nuevas tierras –en este caso, las de Tía María, Rancho Grande y Fuleni– como un medio para generar rentas por recursos y así promover el desarrollo local y nacional. En Nicaragua, cuando el Gobierno reabrió la mina La Libertad en 2010, el presidente Daniel Ortega declaró que su gran objetivo era vencer la pobreza (Spalding, 2020, p. 1).

A pesar de las similitudes, la fuerza de las organizaciones sociales que desafían a la minería varía en función de la calidad de las tierras agrícolas frente a otras oportunidades económicas. Como han demostrado investigaciones anteriores (Arce, 2014), es probable que en los lugares donde es fuerte la economía agrícola las organizaciones sociales que se oponen a la minería estén mejor establecidas y sean más fuertes en comparación con aquellas que se encuentran en zonas donde es común la agricultura de subsistencia. En estas últimas, los agricultores pueden estar más dispuestos a vender sus tierras a cambio de una compensación justa debido a la escasez de oportunidades económicas. Además, en los lugares en los que la economía agrícola impulsa una compleja red de organizaciones locales, los opositores tienen la oportunidad de forjar alianzas con otros grupos, a menudo más allá de la zona que sería directamente impactada por la extracción (Özkaynak *et al.*, 2015). De este modo, los conflictos por recursos experimentan un «cambio de escala» (McAdam, Tarrow & Tilly, 2001, p. 331) que permite conectar a más actores y aumentar la intensidad de la acción contenciosa. Por el contrario, es probable que los conflictos permanezcan localizados y fragmentados allí donde están ausentes o son débiles las organizaciones locales debido a la escasez de oportunidades económicas (Reeder *et al.*, 2022).

El proyecto Tía María, que se remonta a 2009, es el conflicto más antiguo y también el más violento, por la muerte de al menos ocho manifestantes en enfrentamientos con la policía (Dunlap, 2019). La minería también tiene una trayectoria más larga cerca de la zona del proyecto Tía María a causa de la mina de

cobre a tajo abierto Cerro Verde, a solo 20 kilómetros al suroeste de la ciudad de Arequipa. En cambio, la minería es muy reciente en los otros dos casos. Por ejemplo, la mina de carbón Tendele es la más cercana a Fuleni, comenzó a funcionar en 2007 y está a unos 20 kilómetros de Fuleni<sup>22</sup>. En el caso de Rancho Grande, no hay minas cerca.

La historia de la minería, y lo que las poblaciones obtienen de estas actividades, varía en estos tres casos. A modo de ejemplo, como muestran varias encuestas de opinión, los ciudadanos de la provincia de Arequipa tienen una actitud generalmente positiva hacia el proyecto Tía María, pues han experimentado de primera mano los beneficios de la minería<sup>23</sup>. Los trabajadores de la mina Cerro Verde viven en Arequipa, y se desplazan regularmente a su lugar de trabajo. La experiencia de la mina de carbón de Tendele es algo mixta: aunque ha generado cierta cantidad de empleo local, aumentó la contaminación del agua y ha provocado el desplazamiento de los aldeanos para dar paso a la mina.

## Metodología

Cuando se visita una zona en la que se acerca la explotación minera, es fácil entablar una conversación casual con alguien que se opone al proyecto, y también con alguien que lo apoya. A pesar de esto, ambas personas viven en zonas cercanas, frecuentan los mismos negocios locales y probablemente participan en las mismas fiestas. Nuestro objetivo principal es explicar qué diferencia a estos individuos entre sí. Aunque exploramos varios factores viables, creemos que los individuos están conectados a sus comunidades de diferentes maneras, y esas conexiones pueden rastrearse hasta su participación en organizaciones locales.

Nuestra metodología combina la investigación de campo y las encuestas de opinión pública realizadas en cada una de estas zonas mineras. Hicimos múltiples visitas de investigación de campo a Tía María (2015 y 2017), Rancho Grande y Santo Domingo (2017 y 2018) y Fuleni (2016 y 2017). Con estas visitas de campo pretendíamos determinar qué tipos de organizaciones locales estaban activas en cada lugar, qué «obtienen» los individuos de la participación en estas organizaciones y cómo dicha participación forma opiniones sobre la minería. Las visitas de campo también nos permitieron diseñar y probar previamente los instrumentos de encuesta en cada uno de estos tres lugares. Durante las visitas, entrevistamos

---

<sup>22</sup> La mina de carbón de Tendele también se conoce como Somkhele por su proximidad a la comunidad de este nombre.

<sup>23</sup> Por ejemplo, en abril de 2015, según una encuesta de opinión pública realizada por Ipsos (2015), el 60% de los encuestados apoyaba el proyecto, mientras el 29% se oponía.

a miembros de la comunidad, a dueños de negocios locales y a dirigentes de organizaciones comunitarias relacionadas con los conflictos mencionados. También recopilamos fuentes primarias y documentos. Como explicamos anteriormente, la mayor parte de la bibliografía existente se centra en los conflictos –y en los impulsores de la resistencia– y existen numerosos relatos sobre ellos en cada una de las zonas. Nos basamos en esta información para contextualizar nuestros hallazgos, pero se escapa del alcance de este libro abordar detalladamente los conflictos.

En nuestra visita de campo a Rancho Grande, conversamos con representantes del Centro Humboldt y de la Asociación para la Diversificación y Desarrollo Agrícola Comunal (Addac), con dirigentes y miembros de Guardianes de Yaoska y con dueños de negocios. En Santo Domingo, hablamos con miembros de Salvemos Santo Domingo; en Fuleni, con representantes de Global Environment Trust (Fondo Mundial para el Medio Ambiente, GET) y groundWork, y con líderes y miembros de Mfolozi Community Environmental Justice Organisation (Organización de Justicia Ambiental de la Comunidad de Mfolozi, MCEJO) y de Mpukunyoni Community Property Association (Asociación de Bienes Comunitarios de Mpukunyoni, MCPA), asimismo con integrantes de Umbumbano Youth Organisation (Organización de Jóvenes Umbumbano), de Mining Affected Communities United in Action (Comunidades Afectadas por la Minería Unidas en Acción, Macua) y con dueños de negocios. En Tía María, conversamos con varios miembros de la comunidad y dueños de negocios de la provincia de Islay, la zona que sería impactada directamente por el proyecto. Visitamos Tía María justo después de la escalada de violencia en 2015, pero no fue posible contactar a los actores principales: al menos 16 dirigentes y representantes de organizaciones locales –incluidas autoridades políticas–, enfrentaron cargos penales por incitar al desorden civil, entre ellos Pepe Julio Gutiérrez (exdirigente del Frente de Defensa de los Intereses de Cocachacra), Jesús Cornejo (expresidente de la Junta de Riego del Valle de Tambo), Jaime de la Cruz (exalcalde de Deán Valdivia) y Julio Cornejo (exalcalde de Cocachacra). Afortunadamente, el caso de Tía María está muy bien documentado por la Defensoría del Pueblo del Perú y por otras fuentes primarias escritas. Dada la creciente criminalización de los manifestantes y los defensores del medio ambiente en algunas de estas zonas de conflicto, anonimizamos estos datos siempre que fue posible a lo largo del manuscrito.

Las encuestas pretenden revelar la micropolítica de las actitudes individuales hacia la minería; y son uno de los mejores medios para comprobar las teorías causales (Brady, 2000). A diferencia de las entrevistas o los diseños de grupos focales, tienen mayor rango de aplicabilidad, ya que comprenden un gran nú-

mero de participantes. Cuando las encuestas se realizan con técnicas de muestreo aleatorio adecuadas, podemos hacer inferencias causales más claras sobre una población subyacente. Por el contrario, las entrevistas a profundidad, en las que mayormente se toman muestras de las élites y de otros actores influyentes de las comunidades, no nos dan una imagen clara de las actitudes del individuo «promedio» de cada uno de los lugares donde se realizan. No obstante, las encuestas requieren instrumentos que reflejen la riqueza conceptual de la teoría. Realizar una mala operacionalización de los conceptos disminuye la validez del diseño de la investigación. Hemos minimizado este problema lo mejor que pudimos al hacer que nuestro trabajo de campo influyera en el diseño de las encuestas. Siguiendo nuestra teoría, este libro hace énfasis en la importancia de la participación social, la cual, como consideramos, ayuda a diferenciar las actitudes individuales hacia la minería. Los instrumentos de la encuesta también nos permiten descartar explicaciones contradictorias, por ejemplo: cómo afectan las amenazas y las oportunidades asociadas con la minería las opiniones relacionadas con las actividades extractivas, la proximidad a las zonas extractivas y la importancia relativa de la minería frente a otras actividades económicas, entre otras.

Las encuestas se realizaron en un lapso de cuatro años (2015-2018) y se recogieron a través de entrevistas personales de manera proporcional y aleatoria<sup>24</sup>. En Tía María, los encuestados pertenecían a las poblaciones locales de 6 distritos de la provincia de Islay (la zona que sería impactada directamente) y de 12 distritos de la provincia de Arequipa (la zona que sería impactada indirectamente). Los distritos de la provincia de Islay fueron Cocachacra, Deán Valdivia, Islay, Mejía, Mollendo y Punta de Bombón; los de la provincia de Arequipa fueron Alto Selva Alegre, Arequipa, Cayma, Cerro Colorado, Jacobo Hunter, José Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata, Sachaca, Socabaya y Yanahuara. La encuesta fue realizada por el Departamento de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) y el número total de personas encuestadas fue de 985. En Rancho Grande, los encuestados pertenecían a la población local de 7 barrios y 22 distritos del municipio del mismo nombre; mientras que las personas encuestadas sobre Santo Domingo provenían de la población local de 14 barrios y 17 distritos del municipio de este nombre. El Centro de Análisis Sociocultural de la Universidad Centroamericana de Nicaragua, que coordina el Proyecto de

---

<sup>24</sup> El capítulo 6 de este libro presenta el análisis detallado de los resultados estadísticos de las encuestas y toda la información necesaria para interpretar nuestros hallazgos empíricos. La versión original en inglés de este libro incluye material suplementario sobre las encuestas, como, por ejemplo, estadísticas descriptivas, codificación de variables y preguntas del cuestionario.

Opinión Pública de América Latina, realizó la encuesta a unas 400 personas en cada localidad. En la encuesta sobre Fuleni, los encuestados pertenecían a la población local de 5 municipios de los distritos de uThungulu y uMkhanyakude: uMfolozi, uMhthathuze, Ntambanana, Hlabisa y Mtubatuba. Plus94, que lidera el Afrobarómetro, realizó la encuesta a 400 personas en total.

Antes de continuar, conviene hacer una aclaración importante sobre las encuestas de opinión pública. Ellas se basan en muestras subnacionales que fueron tomadas en lugares cercanos a las zonas de arrendamiento minero en estudio, mas no en muestras basadas en todo el país. Hay dos razones por las cuales trabajamos con muestras subnacionales. En primer lugar, investigaciones anteriores han demostrado que es más probable que los individuos socialmente comprometidos y los que viven cerca de las actividades mineras en América Latina decidan protestar por la extracción de recursos (Arce *et al.*, 2020). Los individuos socialmente comprometidos disponen de los recursos organizacionales que se requieren para emprender la acción colectiva, así como de las oportunidades de unirse a ciudadanos con ideas afines a través de su participación en estas organizaciones. Asimismo, es probable que quienes viven cerca de las actividades mineras sean más vulnerables a los efectos adversos de ellas (Eisenstadt & West, 2017b). En cambio, los individuos que están lejos de la frontera extractiva pueden no percibir las amenazas (o las oportunidades) relacionadas con la minería de la misma manera que aquellos que están muy cerca de los sitios mineros propuestos. Basados en estos aportes, realizamos las encuestas cerca de las zonas donde los ciudadanos se verían directamente afectados por la extracción. En segundo lugar, y siguiendo la información que obtuvimos a lo largo de nuestras visitas de campo, estas muestras subnacionales nos permiten introducir una amplia gama de preguntas de encuesta que son relevantes para las comunidades anfitrionas que habitan cerca de la frontera extractiva, preguntas que nos ayudan a comprender mejor las interconexiones entre los individuos que viven en la misma comunidad. Como señala Mattessich, los individuos que residen en un mismo lugar geográfico suelen «compartir un gran número de lazos sociales y sentir un compromiso con el lugar donde viven» (2009, p. 51).

## Conclusiones

Si bien la literatura hace importantes aportes sobre los factores que determinan los conflictos extractivos, tiene algunos puntos débiles. Es común que las zonas de conflicto se presenten como focos de oposición y que a menudo se ignoren las fuentes de apoyo. En este capítulo, hemos descrito cómo un enfoque basado en

las actitudes individuales puede ayudar a explicar mejor la complejidad de las decisiones sobre proyectos extractivos. De hecho, sostenemos que una imagen más completa de los conflictos por recursos debe tener en cuenta los focos de resistencia y de apoyo, en los que los opositores son más contundentes y están mejor organizados que aquellos que apoyan la minería. Gracias al muestreo aleatorio, el método de encuesta puede dar «una imagen verdaderamente representativa e imparcial» de las zonas de conflicto (Brady, 2000, p. 47).

Como apuntamos a un diseño explicativo y «de concordancia» (Gerring & Cojocar, 2016), nuestra investigación se basa en zonas caracterizadas por conflictos prolongados con la minería. En muchos sentidos, estos proyectos están, por así decirlo, a la espera. Los Gobiernos han mostrado un interés continuo en ampliar sus contratos, pero las comunidades anfitrionas han resistido y siguen desafiando tales proyectos. Nuestro argumento principal es que la participación en organizaciones locales, o la participación social, es lo que une a los individuos como comunidad para rechazar la minería. Estas organizaciones proporcionan recursos organizacionales e información clave, los cuales empoderan a los individuos y a sus comunidades; ellas, también, dan a los individuos una concepción compartida de comunidad, que luego se traduce en acciones que promueven el bienestar de esta por encima de los intereses individuales.

No puede subestimarse la importancia de las organizaciones locales en el contexto de la extracción de recursos. Es costoso movilizar a los opositores a la minería, ya que eso requiere importantes recursos materiales y humanos. También es un esfuerzo arriesgado, dado que varios Gobiernos han intentado criminalizar las acciones de protesta. En línea con el «imperativo extractivo» (Arsel *et al.*, 2016), la literatura existente también nos recuerda que existen grandes asimetrías de poder entre los actores de la industria y las comunidades anfitrionas. Es común que los primeros participen en estrategias de «divide y vencerás», tratando de separar a las comunidades para así obtener una licencia social para operar. Para ello, pueden ofrecerles recompensas materiales selectivas a los líderes de las organizaciones de protesta (por ejemplo, oportunidades de empleo) o gastar dinero en proyectos de alto perfil en colaboración con las autoridades locales, principalmente los alcaldes municipales (por ejemplo, la reconstrucción de la escuela del pueblo) (Arce, 2014). De esta forma, buscan ganar el apoyo de la población y de las autoridades locales mediante una serie de pequeñas concesiones. El campo de juego está, pues, sesgado a favor de los actores de la industria. En los capítulos siguientes, examinamos cómo se enfrentan las comunidades anfitrionas a estos proyectos extractivos.



### 3. Oportunidades, no amenazas

El 15 de mayo de 2015 se produjeron violentos enfrentamientos entre policía y manifestantes a raíz del proyecto Tía María de Southern Copper Corporation. El episodio tuvo lugar en la zona del valle de Tambo, ubicada en la provincia de Islay, tras semanas de manifestaciones y paros en diferentes ciudades de la región Arequipa<sup>25</sup>. Las jornadas de protesta, que contaban con la participación de decenas de habitantes, eran convocadas en su mayoría por el Frente de Defensa de los Intereses de Cocachacra. A pesar de la abrumadora presencia militar y policial, los manifestantes se mantuvieron firmes en su rechazo a la minería. Asimismo, las manifestaciones contaron con el respaldo de una coalición de sindicatos y estudiantes universitarios. Los manifestantes atacaban a la policía con hondas y piedras y utilizaban materiales que tuvieran a la mano para construir barricadas. Entretanto, la policía disparaba balas de goma y lanzaba gases lacrimógenos desde helicópteros para dispersar a la multitud y levantar los bloqueos de las carreteras. Luego del enfrentamiento, que se prolongó durante 4 horas, los medios de comunicación informaron de 36 heridos (14 manifestantes y 22 policías) (Post, 2020)<sup>26</sup>. El 22 de mayo, Pedro Cateriano, primer ministro del Gobierno de Humala, declaró el estado de emergencia durante 60 días. Más de mil soldados y cuatro mil policías acudieron a la zona para restablecer el orden, lo que agravó aun más las tensiones.

---

<sup>25</sup> Las regiones –o departamentos– en Perú son similares a lo que otros países se llaman estados o provincias.

<sup>26</sup> Según algunos relatos, la policía incluso disparaba gases lacrimógenos contra los cortejos fúnebres de los fallecidos durante el conflicto (Dunlap, 2019, p. 17).

El enfrentamiento del 15 de mayo de 2015 fue tan solo una expresión de la violencia en el marco de uno de los conflictos por recursos más prolongado de América Latina. Desde 2009, la disputa por el proyecto Tía María se ha saldado con un total de ocho muertos (siete manifestantes y un policía) y decenas de heridos. La severidad de la violencia sugiere una fuerte oposición al proyecto minero. Sin embargo, esta oposición, organizada y contundente, coexiste con un claro apoyo del Gobierno a Tía María. Dicho apoyo se ha evidenciado a lo largo de diferentes Gobiernos nacionales y mediante el uso de tácticas agresivas por parte del Estado que buscan intimidar a los manifestantes y reprimir a la oposición. Por su parte, Southern también sigue empeñada en sacar adelante el proyecto, por lo que continuamente reconfigura su estrategia con el fin de conseguir una licencia social para operar. Todo parece indicar que Tía María ha llegado a un punto muerto a la espera de que los manifestantes cedan o, incluso, de que un empujón externo incline la balanza a favor de Southern.

En los conflictos que ocurren en la etapa previa a la extracción de recursos, como el de Tía María, los actores de la industria y las comunidades anfitrionas se encuentran enfrentados en una carrera por delimitar las amenazas y las oportunidades que plantea la minería. De hecho, Southern ha destinado una cantidad importante de recursos y ha empleado a decenas de representantes para promover un discurso sobre las oportunidades que la mina de cobre traería para la región de Arequipa, tales como empleos bien remunerados y aumento de los ingresos fiscales a través de las rentas generadas por los recursos. Las empresas mineras pagan impuestos sobre las utilidades y, en la actualidad, el Gobierno de Perú transfiere una parte importante de estos ingresos a las zonas en las que se realiza la minería. A su vez, los Gobiernos locales pueden destinar dichos fondos a diversos programas de desarrollo e infraestructura. A cambio de estas oportunidades, los defensores del proyecto buscan establecer un mejor diálogo entre la comunidad, el Gobierno y los actores de la industria, sin dejar de lado EIA más exhaustivas de los proyectos y un proceso transparente para otorgar licencias de exploración y construcción<sup>27</sup>.

No obstante, la economía agrícola de la zona del valle de Tambo obstaculiza la viabilidad de la explotación minera en la región. De hecho, las zonas con una agricultura fortalecida se caracterizan por contar con un conjunto rico y denso de organizaciones locales, que incluye asociaciones de productores y juntas de

---

<sup>27</sup> Entrevistas de los autores con empresarios en Cocachacra (Islay, noviembre de 2015 y julio de 2017).

riego. En respuesta a la preocupación por los daños medioambientales, la escasez de agua y las amenazas a las condiciones de vida de las comunidades, estas organizaciones agrícolas se agrupan rápidamente en movimientos de oposición más amplios, conocidos como frentes de defensa; las principales coaliciones de opositores a la minería encuentran pues su origen en estos espacios. En el caso de Tía María, el Frente de Defensa emprendió estrategias de movilización preventiva que comprendían huelgas, bloqueos de carreteras, manifestaciones y un referéndum. Asimismo, pidió el rechazo total del proyecto y exigió que el Gobierno le revocara a Southern la licencia de construcción. El Frente de Defensa aprovechó sus ventajas organizacionales para divulgar información sobre las amenazas que supone la minería. También empoderó a los individuos para que se movilizaran y, lo que es más, intentó fomentar una concepción de comunidad que tomara en consideración tanto las amenazas materiales sobre la tierra y el agua como las no materiales relacionadas con la identidad agrícola de la comunidad del valle de Tambo. Cuando visitamos el distrito de Cocachacra en 2015, las calles y las ventanas de varios hogares estaban llenas de pancartas de color verde neón que decían «¡Agro sí, mina no!»<sup>28</sup> Parecía que las estrategias del Frente de Defensa habían sido efectivas a la hora de moldear las actitudes hacia el proyecto Tía María.

En este capítulo, aprovechamos nuestro trabajo de campo cerca del lugar del proyecto para esbozar el papel que desempeña la participación social en la configuración o el refuerzo de las actitudes individuales hacia la extracción de recursos. Dicho de otra manera, los individuos que participan regularmente en organizaciones locales tienen más probabilidades de recibir información sobre las amenazas de la minería por parte de estas asociaciones de confianza. De igual modo, se sienten empoderados para actuar en contra de dichas amenazas y poseen una concepción de comunidad según la cual la minería resulta incompatible con las condiciones de vida existentes. Por el contrario, los individuos que muestran bajos índices de participación en organizaciones son más susceptibles al discurso de los actores de la industria y del Gobierno, quienes promueven las ventajas del proyecto.

Este capítulo está organizado de la siguiente manera: en primer lugar, resumimos el auge de la explotación minera en Perú desde la época de las reformas orientadas al mercado en la década de 1990. En segundo lugar, examinamos la mina de cobre a tajo abierto propuesta por Southern y los diversos esfuerzos de

---

<sup>28</sup> Comentarios personales de los autores a partir de las visitas de campo (Islay, noviembre de 2015 y julio de 2017).

relaciones comunitarias con los que la compañía pretendía conseguir el apoyo local, incluida su insistencia en las oportunidades que el proyecto traería para la región. En tercer lugar, caracterizamos a las comunidades que rodean la zona del valle de Tambo y destacamos las principales preocupaciones planteadas por las organizaciones agrícolas locales. En cuarto lugar, nos apoyamos en nuestro trabajo de campo en la región para ilustrar cómo influye la participación en estas organizaciones en las actitudes de oposición a la minería. Por último, analizamos cómo se manifestaron estas posiciones contrarias a la minería en estrategias preventivas específicas que han entorpecido el desarrollo del proyecto de manera continua durante más de una década.

### **Auge de la explotación minera en Perú**

La larga historia de extracción de recursos naturales en Perú se remonta a la Colonia. La minería a gran escala comenzó a inicios del siglo XX con las operaciones de Cerro de Pasco Corporation (CPC) (Kruijt & Vellinga, 1979). Sin embargo, la industria minera decayó considerablemente en la década de 1970, cuando el entonces régimen militar de Velasco Alvarado expropió y nacionalizó varias empresas mineras privadas. Sin embargo, las políticas de liberalización económica del presidente Alberto Fujimori cambiaron dicho rumbo luego de que estas empresas fueran regresadas al sector privado durante la década de 1990 (Arce, 2005). El cambio en las políticas contribuyó significativamente a la expansión minera más reciente en el país. La ávida demanda de materias primas por parte de China también desempeñó un papel crucial y sin precedentes en el auge minero (Sanborn & Torres, 2009). Perú se ha convertido en el segundo productor mundial de cobre, plata y zinc, y es uno de los mayores productores de oro (sexto), estaño (quinto) y plomo (cuarto) (Acosta, Boza, Oliveros, Rosado, & Zambrano, 2019). En consecuencia, la economía del país se ha convertido en una de las de América Latina que ha experimentado un crecimiento más rápido y estable. Por ejemplo, la economía creció un 9,8% tan solo en 2008 y sumó 93 meses de expansión continua desde julio de 2001 hasta marzo de 2009. La Gran Recesión de 2008-2009 frenó brevemente esta tendencia; sin embargo, habría de reanudarse a finales de 2009 (Banco Central de Reserva del Perú, BCRP, 2012). En 2013, el Banco Mundial caracterizó el crecimiento de la economía peruana como «asiático», pues reflejaba las altas tasas de crecimiento de los países de Asia Oriental.

Esta expansión económica también fue única en el sentido de que produjo una mejoría en el nivel de vida de todos los sectores de la población. El PBI per cápita

de Perú aumentó en más del doble entre 1990 (inicio del régimen de Fujimori) y 2019, al pasar de US\$ 2.650 a US\$ 6.490 (en dólares constantes de 2010)<sup>29</sup>. El porcentaje de la población en situación de pobreza se redujo del 48,5% en 2004 al 27,7% en 2017; además, los índices de pobreza extrema cayeron del 17,4% en 2004 al 3,8% en 2017 (Acosta *et al.*, 2019). Esta expansión económica sin precedentes trajo consigo un cambio en la mentalidad de la creciente clase media del país, ahora orientada al consumo. Con consecuencias económicas tan positivas, el atractivo sector minero del país captó la mayoría de dólares de inversión. El informe anual de 2017 del BCRP (2017) estimó que las actividades extractivas representaban casi el 10% del PBI del país. En 2020, las exportaciones mineras representaban alrededor del 60% del total de las exportaciones del país y cerca del 15% del total de los impuestos recaudados; asimismo, correspondían al 20% de todos los impuestos a la renta de las empresas y a más del 21% de toda la inversión privada (García & Pantigoso, 2020; Acosta *et al.* 2019). CooperAcción (2019) –destacada OJA con sede en Lima– informa que en el 14% del territorio nacional de Perú (aproximadamente 17,99 millones de hectáreas) se adelantan actividades de producción minera. Si se amplía esta cifra para incluir todas las concesiones mineras (por ejemplo, los terrenos que pueden estar en la etapa de exploración), esta cifra se dispara al 21% del país (aproximadamente 26,98 millones de hectáreas).

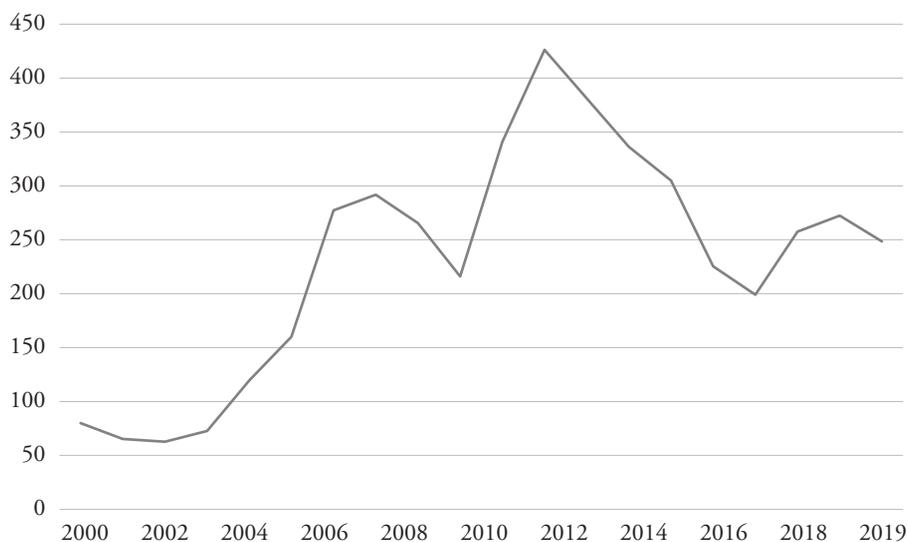
Si bien la gran diversidad de minerales ha contribuido al importante desarrollo económico del país, el cobre se ha convertido en un factor especialmente vital de dicha expansión. La figura 4 muestra el precio del cobre durante el período de auge de los precios de las materias primas. Aunque su precio ha fluctuado a lo largo de los últimos 20 años, con un valor máximo de US\$ 426 por libra en 2011, este se ha mantenido por encima de los US\$ 200 sin excepción desde 2005. Tía María forma parte de los continuos esfuerzos de Perú por expandir la minería y aumentar los ingresos fiscales generados por los altos precios del cobre.

Como es de esperarse, el auge de los precios de las materias primas ha generado cuantiosas ganancias a las compañías extractivas, y los impuestos recaudados mediante las rentas de los recursos (conocidos como canon minero) han pasado a representar la transferencia intergubernamental más importante a las regiones. A su vez, dichas rentas se distribuyen a las áreas más cercanas a las zonas de extracción (Garvan, 2020). La figura 5 muestra la distribución de estas rentas en

<sup>29</sup> Datos de libre acceso del Banco Mundial.

las 25 regiones de Perú<sup>30</sup>. Moquegua recibió la mayor cantidad de transferencias: alrededor de S/ 15.906<sup>31</sup> per cápita para el período 2004-2020. En el caso de Arequipa, la región donde se ubicaría el proyecto Tía María de acuerdo con la propuesta, el monto para el mismo período es de unos S/ 2.878 per cápita (la sexta transferencia más alta). Teniendo en cuenta la regularidad y la magnitud de las transferencias, el Gobierno nacional considera que la industria es crucial para el desarrollo económico sostenible, por lo tanto, continúa decidido a apoyar la minería y toma distancia de las prohibiciones mineras nacionales y regionales que se han adoptado en otros países (Spalding, 2015; Mangini, 2015). Como afirmó Carlos Herrera, exministro de Energía y Minas, «el éxito de Perú se asienta en la minería» (Balbi, 2011).

Figura 4  
Precio del cobre, 2000-2019 (en dólares norteamericanos por libra)



Fuente: BCRP (2020).

<sup>30</sup> Presentamos el total de las rentas de recursos distribuidas a cada región en soles peruanos per cápita. Las cifras de población regional para hacer este cálculo fueron tomadas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

<sup>31</sup> El sol (S/) es la moneda nacional de Perú.

Figura 5  
Rentas generadas por los recursos y transferidas a las regiones en el Perú, 2004-2020  
(en soles per cápita)



Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. Estadísticas (2021).

## Southern y su licencia social para operar

Establecida inicialmente en 1952, la empresa SPCC fue una de las pocas mineras a gran escala no nacionalizada por el régimen militar de Velasco Alvarado. La compañía opera en las minas de Toquepala y Cuajone, situadas en las regiones de Tacna y Moquegua, respectivamente. En 2005, SPCC compró Minera México y pasó a llamarse Southern Copper Corporation. Actualmente, el Grupo México es el mayor accionista de Southern (75%)<sup>32</sup> y, luego de esa compra, las inversiones

<sup>32</sup> SPCC, junto con CPC y Marcona Mining Corporation, representaba lo que entonces se conocía como gran minería (Kruijt & Vellinga, 1979). Estas compañías estadounidenses dirigieron la in-

aumentaron drásticamente. En 2018, por ejemplo, la compañía reportó inversiones de US\$ 1.760 millones en el país (Southern Copper Grupo México, 2018).

Southern propuso levantar una mina a tajo abierto cerca de la zona del valle de Tambo, que atraviesa los distritos de Cocachacra, Punta del Bombón, Deán Valdivia y Mejía, todos dentro de la provincia de Islay de la región de Arequipa. La compañía proyectó extraer 1,68 millones de toneladas de cobre en una década (con una producción media de 120 mil toneladas anuales) (Millan Lombraña & Quigley, 2019). Con una inversión cercana a US\$ 1.400 millones de dólares, Tía María requeriría la construcción de tres sitios a lo largo de la zona del valle de Tambo para extraer y procesar los minerales (Dunlap, 2019). La primera ubicación, denominada La Tapada, en Pampa Yamayo –un sitio de extracción–, sería la más cercana a Cocachacra y al río Tambo. La segunda, llamada Tía María, se construiría en la zona de Cachuyo, a unos 7 kilómetros del valle. Por último, se estableció que el tercer sitio, para procesamiento y lixiviación, se levantaría a solo unos 11 kilómetros del valle, en Pampa Cachendo. Los opositores al proyecto han afirmado que los sitios que propone la compañía difieren de los reales, ya que están muy cerca de zonas habitadas y de fuentes de agua locales, como el río Tambo<sup>33</sup>.

El interés de Southern en instalar una mina en la zona del valle de Tambo se remonta a principios de la década de 2000, cuando inició estudios geológicos y geoquímicos en la región. En 2005, la compañía adelantó negociaciones con el Gobierno y las comunidades cercanas, lo que dio lugar a tres consultas (noviembre de 2007, julio de 2009 y agosto de 2009). El Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobó la solicitud de Southern para realizar una EIA en 2006; este fue un primer paso esencial antes de obtener una licencia de construcción (Castillo Fernández, Gallardo Marticorena, Chávez Quijada, Del Carpio Lazo, & Gómez Urquiza, 2011). Como se detalla más adelante, la implementación del proyecto encontró varios obstáculos en su camino, lo que hasta la fecha no ha permitido que la compañía establezca una buena relación con las comunidades de la zona del valle de Tambo<sup>34</sup>. La extensa campaña contra el proyecto tuvo tres picos de intensidad (2011, 2015 y 2019), cada uno de ellos en respuesta al interés renova-

---

dustria minera de Perú durante la mayor parte del siglo XX y desplazaron gradualmente al capital peruano en las actividades extractivas (Thorp & Bertram, 1978).

<sup>33</sup> Entrevistas de los autores con personas de la comunidad en Cocachacra (Islay, noviembre de 2015 y julio de 2017).

<sup>34</sup> Comentarios personales de los autores a partir de las visitas de campo (Islay, noviembre de 2015 y julio de 2017).

do de los actores de la industria y del Gobierno en Tía María. En consecuencia, Southern se ha visto obligada a reajustar su estrategia en varias ocasiones<sup>35</sup>.

Por ejemplo, la compañía creó un nuevo puesto de director de asuntos institucionales, que se encargaría de dirigir la campaña de relaciones públicas de Southern con el fin de obtener una licencia social para operar. Este funcionario trabajaría directamente al interior de la comunidad y difundiría las «buenas noticias» del proyecto, como la generación de nueve mil empleos tan solo en los dos primeros años de construcción (Southern Copper Grupo México, 2018). La compañía también se centró en el discurso de que el proyecto generaría importantes rentas de recursos para la zona del valle de Tambo, las que podrían financiar proyectos locales de servicios sociales e infraestructura, incluido un programa de agua potable de gran necesidad para las comunidades. Para conectar con estas, Southern empleó a docenas de científicos sociales, en su mayoría sociólogos y antropólogos, que «orientarían las intervenciones de desarrollo y medirían su impacto a la hora de convencer a la población de que aceptara el proyecto Tía María» (Dunlap, 2019, p. 21). También utilizó sus 13 emisoras de radio en toda la provincia de Islay y la zona del valle de Tambo para difundir este mensaje (Lapa Romero, 2017). En abril de 2015, según una encuesta de opinión pública realizada por Ipsos (2015), el 60% de los encuestados apoyaba el proyecto Tía María.

A pesar de este apoyo, Southern tuvo que replantear su estrategia de relaciones públicas a mitad de camino debido a la violencia que dejó el conflicto en mayo de 2015, en el que participó una oposición más contundente. Ya a la defensiva, en 2016, la compañía cambió sus esfuerzos para reconstruir su imagen a través de la campaña Valleunido, que pretendía que la comunidad viera en el proyecto una oportunidad y no una amenaza (Dunlap, 2019, p. 20). Southern envió a 27 personas para supervisar el funcionamiento de varios «centros de información» ubicados en las principales calles de Punta de Bombón, Deán Valdivia y Cocachacra (los tres distritos de la provincia de Islay más cercanos al proyecto) y allí también contrató a trabajadores de la población local para que distribuyeran folletos informativos puerta a puerta (Dunlap, 2019, p. 20). Con el fin de atraer a las personas, los empleados operaban estos centros como cibercafés; sin embargo, recibieron instrucciones explícitas de discutir los beneficios del proyecto e incluso organizaron concentraciones para impulsar el entusiasmo por la mina.

---

<sup>35</sup> La información sobre la estrategia de relaciones públicas de Southern para ganar apoyo local se ajusta a los aportes de Dunlap (2019).

Por otra parte, Southern invirtió en planes sociales más elaborados mediante el programa «Construyamos confianza: Proyecto Tía María». El plan abordaba a la comunidad a través de cinco frentes socioecológicos: «Tambo agrícola» distribuyó fertilizantes, pesticidas y semillas a los agricultores, impartió clases sobre cómo mejorar la producción de arroz y reparó los canales de riego, todo de manera gratuita; «Tambo ganadero» impartió talleres educativos sobre ganadería y cría de ganado, contrató personal veterinario y proporcionó heno y tanques de nitrógeno gratuitos para la óptima inseminación del ganado; «Mejora tu vivienda» construyó tanques de agua portátiles y suelos de hormigón para viviendas; «Apoyo a la educación» distribuyó material escolar, computadoras y uniformes y creó programas extraescolares, asimismo, reparó escuelas locales y pintó algunas viviendas –sobre todo para cubrir los grafitis en contra de Southern– (Lapa Romero, 2017); por último, «Apoyo a la salud» construyó consultorios médicos y facilitó el acceso a profesionales médicos y dentistas las 24 horas del día.

A pesar de los esfuerzos de Southern, las organizaciones locales respondieron a estos programas con varias campañas de información que evidenciaban la preocupación generalizada por el impacto del proyecto en la economía agrícola de la zona del valle de Tambo y en las condiciones de vida de la comunidad. Estas organizaciones cuentan con bases de apoyo firmes y confianza entre los miembros de la comunidad debido al papel crucial que desempeñan en la prosperidad económica de la región. En consecuencia, la campaña contra la minería basada en las amenazas a la sostenibilidad de la economía local encontró buena acogida en la comunidad; asimismo, sentó las bases de las actitudes de los individuos hacia la minería. En la siguiente sección, hablaremos de la comunidad del valle de Tambo, sus fuentes de bienestar económico y el papel de las organizaciones locales frente al fomento del proyecto.

## **Las comunidades del valle de Tambo**

La zona del valle de Tambo concentra una economía agrícola vibrante que es fuente de empleo para 15 mil familias y genera beneficios de unos S/ 320 millones al año (alrededor de US\$ 100 millones)<sup>36</sup>. Gracias a su suelo fértil y su clima templado, los agricultores producen una gran variedad de cultivos, como arroz, cebolla, ajo, maíz, tomate, quinua, trigo y sandía. El valle de Tambo es conocido como la «despensa» del sur de Perú, ya que el 97% de sus productos agrícolas y el 88% de su pesca abastecen a los distritos más meridionales del país.

---

<sup>36</sup> Cifras tomadas de Dunlap (2019).

La figura 6 muestra la parte de la provincia de Islay más afectada por el proyecto y la ubicación de los dos sitios de extracción: La Tapada y Tía María. Superpusimos en el mapa las zonas agrícolas de la región, así como el río Tambo, que corre a lo largo del valle que lleva el mismo nombre. Con base en la información del Censo Nacional de 2017, Lapa Romero (2017) muestra la estrecha conexión entre el valle de Tambo y la agricultura. De acuerdo con este censo, el 25% de la población de la provincia de Islay desarrolla una actividad productiva basada en la agricultura; y el 36% de la población de Cocachacra —el distrito más cercano a la zona que sería impactada directamente por el proyecto— trabaja en la agricultura o la pesca, porcentaje que corresponde a alrededor de 2 mil propiedades medianas y 7 mil pequeñas. Los comerciantes de la zona también se benefician del aumento de la producción, pues venden productos en todo el sur de Perú. Las ganancias suelen destinarse al sostenimiento de los centros urbanos y al pago de servicios sociales, sobre todo cuando son buenas las cosechas.

En vez de estar dominada por unos pocos latifundios (grandes propiedades), donde la tenencia de la tierra es posiblemente más segura, la mayor parte de la producción en la zona del valle de Tambo se da en minifundios (pequeñas y medianas propiedades) (Dunlap, 2019). En Cocachacra, por ejemplo, el 75% de las granjas corresponde a propiedades pequeñas y el 9% a medianas. En el caso del distrito de Deán Valdivia, la proporción es del 69% y el 25%, respectivamente. Por su parte, el 68% de la producción del distrito de Punta de Bombón corresponde a propiedades pequeñas, y el 30% a medianas (Lapa Romero, 2017). Adicionalmente, según el Censo Nacional de Perú de 2017, el distrito de Cocachacra está conformado en su mayoría por trabajadores independientes y jornaleros: alrededor del 37% de esta población trabaja como jornalero y el 32% como independiente. En particular, la Junta de Usuarios del Valle de Tambo está conformada por más de dos mil productores a mediana y pequeña escala que operan a través de un modelo de gobernanza compartida (Lapa Romero, 2017).

Dada la estructura de su economía local, las comunidades de la zona del valle de Tambo dependen de organizaciones locales, como las asociaciones de productores y las juntas de riego, para lograr su éxito económico. Las primeras vinculan a los propietarios dispersos con los mercados, mejoran las oportunidades de cooperación entre los productores mediante un foro común y diseñan planes colectivos para hacer frente a las crisis climáticas o los desastres naturales. También ayudan a los productores a desenvolverse en un entorno institucional complejo que comprende los niveles de Gobierno municipal, provincial, regional y nacional. Por

ejemplo, dado que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego dirige las políticas nacionales destinadas a mejorar la productividad agrícola y proporciona subsidios y conocimientos técnicos para aumentar la producción y optimizar el uso de los escasos recursos, las asociaciones de productores ayudan a coordinar estos esfuerzos divulgando dicha información y desembolsando recursos para los productores individuales. En general, tales organizaciones prestan un servicio esencial que terratenientes más expansivos no necesitarían<sup>37</sup>.

Figura 6  
Ubicación del proyecto minero Tía María



<sup>37</sup> Entrevistas de los autores con personas de la comunidad en Cocachacra (Islay, noviembre de 2015 y julio de 2017).

De manera similar, las juntas de riego también desempeñan un papel crucial en las comunidades, ya que destinan los suministros de agua tanto a la agricultura como al consumo individual<sup>38</sup>. Desde la aprobación de la Ley General de Aguas en 1969 y del posterior decreto presidencial de 1989 (N° 037-89-AG), las juntas, que hasta entonces eran informales, se convirtieron en los actores formales de un sistema de gestión descentralizado (Lapa Romero, 2017). Además de facilitar el uso cotidiano del agua, ellas también colaboran con organismos en varios niveles del Gobierno para modernizar las infraestructuras hídricas en mal estado (World Bank, 2005). Por ejemplo, en 2006 el Gobierno creó un fondo nacional conocido como Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Usuarios de Agua (Fondeagua) «para que las mismas organizaciones de usuarios del agua [pudieran] fortalecer sus propias capacidades de formación de líderes, personal y usuarios» (Huamanchumo, Peña, Silva, & Hendriks, 2008, p. 34). A raíz de la promoción de alianzas público-privadas en las zonas agrícolas por parte del Gobierno, estas inversiones se han vuelto más complejas, por lo que las juntas de riego han intervenido para impulsar tales esfuerzos. Esto quiere decir que muchos miembros de la comunidad dependen de las mencionadas organizaciones agrícolas para su bienestar económico, lo que a su vez eleva su posición frente a otras asociaciones locales.

En resumen, dada la estructura de la economía local en la zona del valle de Tambo, las asociaciones de productores y las juntas de riego ayudan a los medianos y pequeños productores a desenvolverse en el entorno institucional, superar los obstáculos a la rentabilidad y respaldar la cadena de suministros desde la cosecha hasta el mercado. Estas organizaciones son probablemente menos relevantes en las zonas agrícolas latifundistas, en las que es más estable la tenencia de la tierra y los propietarios pueden sobrellevar los impactos externos. Como se explica a continuación, cuando Southern estuvo más cerca de la ejecución del proyecto Tía María, estas organizaciones se convirtieron en la única fuente de información relacionada con la minería y sus consecuencias.

### **El impacto de las organizaciones agrícolas en las actitudes hacia la minería**

Dado su prestigio en la región, fruto de su labor de apoyo a la agricultura de la zona a lo largo de los años, estas organizaciones se convirtieron en una fuente de información fiable sobre el proyecto Tía María y las posibles amenazas que sus

<sup>38</sup> Las juntas de riego también se conocen como Juntas de Usuarios de Aguas (JUA).

actividades suponían para el agua, el medio ambiente y las condiciones de vida de la comunidad. Los miembros de esta fueron más receptivos a la información procedente de tales organizaciones –que identificamos como una forma de confianza relacional en el capítulo 2– que a la que surgía de los agentes de la industria o del Gobierno. En cierto modo, la participación en estas organizaciones produjo una forma de capital social (Putnam, 1993) que mostraba la disposición de los pequeños y medianos productores a apoyarse mutuamente debido a las conexiones de confianza y los valores compartidos<sup>39</sup>. Los lazos de cooperación que se transmiten entre los miembros de la comunidad son similares a los de otras organizaciones agrícolas que operan en Perú. Muñoz Portugal explica estos lazos de la siguiente manera:

Lo que hemos observado, según entrevistas a productores regantes en sus propias parcelas, es que la mayoría de los agricultores de cada comisión de regantes se conocen de muchos años atrás. Se han buscado unos a otros muchas veces por diversos motivos, en varios casos por negocios y en otros por asuntos familiares o comunales. Se encuentran en las fiestas del pueblo o tienen que organizarlas juntos; se reúnen para conversar en restaurantes, bares o bodegas; y también participan de las reuniones de las escuelas de sus hijos. Los regantes se conocen mucho porque se encuentran repetidas veces en el ámbito local por diversos motivos (Muñoz Portugal, 2009, p. 96).

Hay varios ejemplos que muestran cómo las asociaciones de productores y las juntas de riego fueron más allá de sus funciones tradicionales de apoyo a las actividades de la economía local de la zona y se articularon en defensa de las condiciones de vida de la comunidad. En retrospectiva, Southern facilitó en cierta medida que estas organizaciones se pronunciaran en nombre de las comunidades de la zona del valle de Tambo porque el propio despliegue del proyecto minero tuvo problemas y estuvo mal gestionado.

Un ejemplo concreto se refiere al acceso de la comunidad al agua y al retroceso de Southern en su promesa de no interrumpir el suministro de agua en el valle. El río Tambo abastece de agua a Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón, y Castillo Fernández y otros (2011, p. 15) estiman que el 85% de la población depende de él para su consumo individual y el 100% para la producción agrícola. Como la provincia de Islay es principalmente desértica, el agua en el valle es, de hecho, un recurso limitado. Aquí, fue fundamental la voz de las juntas de riego.

---

<sup>39</sup> Entrevistas de los autores con personas de la comunidad en Cocachacra (Islay, noviembre de 2015 y julio de 2017).

Al gestionar la distribución del agua día a día, sus preocupaciones por su posible escasez a causa de la futura competencia con la minería fueron apoyadas por los miembros de la comunidad.

Al principio, Southern había prometido que usaría agua de mar procesada mediante su propia planta de desalinización, lo que evitaría recurrir a agua subterránea y del río. Sin embargo, en una de las primeras consultas, celebrada en 2009 entre miembros de la comunidad y representantes de Southern, la compañía negó esa promesa y afirmó que la mina dependería en mayor medida de las fuentes de agua existentes. Berly Gonzáles, funcionario del Gobierno Regional de Arequipa, llamó al incumplimiento de esta promesa como un «nuevo altercado al déficit hídrico que tiene el valle de Tambo» (citado en Ugarte Cornejo, 2018, p. 24). El cambio injustificado de la fuente de agua para el proyecto minero provocó una ola de protestas y paros regionales. Así, Southern habría de echar atrás su decisión y planear la construcción de la planta desalinizadora. Este ir y venir sobre la fuente de agua para el proyecto sembró la desconfianza en Southern al interior de la comunidad<sup>40</sup>.

La EIA inicial de Southern es otro ejemplo de la mala implementación del proyecto por parte de la compañía. Este paso en falso también les permitió a las organizaciones locales exponer las deficiencias del proyecto, que acabaron por maximizar las amenazas que representaba la minería. En 2011, el Minem contactó a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) para solicitarle que actuara como evaluador imparcial de la EIA de la compañía (Castillo Fernández *et al.*, 2011; Jaskoski, 2014). El informe de la Unops formuló 138 observaciones, entre las que destacan la preocupación por la falta de un estudio hidrológico y la ausencia de claridad sobre la ubicación de los minerales y la profundidad del pozo (Castillo Fernández *et al.*, 2011; Sullivan, 2015). Las observaciones evidenciaban deficiencias en el proceso de evaluación o la omisión de componentes que debían abordarse en posteriores EIA (el 78% de estas observaciones fueron consideradas de gravedad) (Sullivan, 2015). Además, el informe de la Unops señaló cuestiones relacionadas al deficiente proceso de comunicación entre los funcionarios del Gobierno, los representantes de Southern y la comunidad del valle de Tambo. También planteó la falta de un mecanismo oficial de consulta previa a las comunidades afectadas. Esto se tradujo en una mayor percepción negativa por parte de la comunidad, que volvió a manifestarse a través de

---

<sup>40</sup> Entrevistas de los autores con personas de la comunidad en Cocachacra (Islay, noviembre de 2015 y julio de 2017).

protestas y bloqueos de carreteras. Cuando la compañía realizó una EIA posterior entre 2013 y 2014, muchos se mostraron escépticos frente a la validez de estos nuevos esfuerzos, dada la generalizada desconfianza hacia las intenciones de la empresa (Dunlap, 2019).

El informe de la Unops no fue el único documento crítico con el proyecto. El Frente de Defensa también creó una comisión técnica paralela que reunía a ingenieros, abogados, economistas y otros investigadores locales. Esta comisión se encargó de supervisar las acciones de Southern y llevó a cabo un escrutinio de las EIA elaboradas por la compañía (Defensoría del Pueblo, 2009). Contar con el apoyo de expertos que cuestionaran los argumentos de carácter técnico de la compañía les permitió a las organizaciones locales mantener el control discursivo respecto a las desventajas del proyecto. Esta comisión paralela representó una oposición a la información que provenía de los actores de la industria y del Gobierno y su creación fue posible solo gracias al acceso a recursos por parte de las organizaciones.

Las opiniones de Southern sobre los manifestantes fueron la gota que rebasó la copa. Mientras los periódicos hablaban de una nueva estrategia de relaciones públicas, los propios representantes de la compañía menospreciaban a los manifestantes o, peor aun, los tildaban de terroristas. Por ejemplo, tras una ola de protestas y conflictos con la policía que tuvo lugar el 23 de marzo de 2015, Julio Morriberón, jefe de relaciones comunitarias de Southern, afirmó: «lo sucedido es lamentable, que descansen en paz sus muertitos, que murieron en estas protestas» (citado en Dunlap, 2019, p. 16). Días después, el 27 de marzo de 2015, el departamento de relaciones comunitarias de Southern declaró en televisión nacional que el proyecto había sido retirado debido a «la arremetida de un nuevo tipo de terrorismo, el terrorismo antiminerero... [y] la parálisis del Estado en su rol de promover las inversiones y dar las garantías necesarias para que se pongan en marcha» (citado en Dunlap, 2019, p. 16; ver *El Comercio*, 2015). Por supuesto, las opiniones de la compañía sobre los manifestantes enfurecieron a varias personas en la comunidad y avivaron aun más la oposición al proyecto. Asimismo, muchos en la región de Arequipa consideraron que el uso de ese lenguaje de terrorismo era especialmente preocupante, dada la historia de violencia política del país. La periodista Gabriela Wiener llamó a esta estrategia política terruquear, definiéndola como una «estrategia política que usa el miedo al terrorismo para su provecho» (citada en Dunlap, 2019, p. 16; ver Trelles, 2018). Al usar este lenguaje, también era más probable que los miembros de la comunidad vieran una amenaza a su seguridad individual en la presencia de la compañía y del Gobierno nacional, independientemente de los efectos de la minería.

A menudo se dice que las comunidades cercanas a las zonas mineras enfrentan una batalla cuesta arriba para oponerse a la extracción... y es así. El campo de juego está, de hecho, inclinado a favor de los actores de la industria y del Gobierno. Podría decirse que los argumentos más convincentes en contra del proyecto Tía María provinieron de la propia Southern, no del Frente de Defensa. El incumplimiento original de la promesa de no usar las fuentes de agua locales, las inconsistencias en el informe de EIA señaladas por la Unops y las controvertidas declaraciones de sus representantes desvirtuaron el discurso de la compañía sobre oportunidades económicas y de empleo. Para mayo de 2015, el apoyo al proyecto estaba dividido casi por igual: el 46% de los encuestados aprobaba el proyecto, mientras que el 43% se oponía a él (Ipsos, 2015). Algunos atribuyeron estos errores a la nueva titularidad de la compañía y a la arrogancia de sus nuevos representantes<sup>41</sup>. Esto no quiere decir que las organizaciones locales que componían el Frente de Defensa tuvieran una campaña «fácil» contra la minería en comparación con otros conflictos por recursos. Ellos aún debían explicar las amenazas que la minería representaba para el agua y el medio ambiente, así como articular una defensa de las condiciones de vida comunitarias. Dados los pasos en falso de la compañía, tal vez el Frente de Defensa solo debía demostrar que la «despensa» del sur de Perú ya era de por sí autosuficiente; no era necesario mostrar a la agricultura como algo superior a la minería como en otros conflictos por recursos.

El lema del Frente de Defensa «¡Agro sí, mina no!», esgrimido a lo largo de la extensa campaña contra la minería, sugiere una concepción de comunidad que tenían las organizaciones locales del área del valle de Tambo. Dada la importancia de la agricultura, el proyecto no era solo una amenaza para el agua o la tierra, sino también para la identidad agrícola de la comunidad. Si bien este discurso hizo eco entre sus miembros de formas ligeramente diferentes, la conexión de la comunidad con la tierra, que trascendía los propósitos puramente utilitarios, actuó como hilo conductor<sup>42</sup>. Así, las amenazas materiales y no materiales se convirtieron en dos caras de la misma moneda. Domingo Condori, un agricultor local de arroz, dijo: «Aquí, la vida es pacífica. El que trabaja, aunque no tenga estudio, sale adelante. ¿Para qué íbamos a querer una mina?» (Associated Press, 2015). Un dirigente del Frente de Defensa explicó además que «la mina afecta a todos los sectores, no solo al agrícola, sino a todos» (citado en Quintanilla &

<sup>41</sup> Comentarios personales de los autores a partir de las visitas de campo (Islay, noviembre de 2015 y julio de 2017).

<sup>42</sup> Entrevistas de los autores con personas de la comunidad en Cocachacra (Islay, noviembre de 2015 y julio de 2017).

Rogelio, 2013, p. 65). Además de destacar la preferencia por la agricultura, las declaraciones también revelaron una profunda preocupación por el bienestar de la comunidad más que por las oportunidades individualizadas que ofrece la mina.

### **La campaña de la resistencia**

Los opositores a la explotación minera en la zona del valle de Tambo se mantuvieron firmes en sus demandas de rechazo y en sus esfuerzos colectivos, y hasta el momento han impedido exitosamente el avance del proyecto. El Frente de Defensa aprovechó su ventaja organizacional de asociaciones agrícolas para emprender una movilización preventiva y convocar paros, bloqueos de carreteras y manifestaciones a gran escala en los principales centros urbanos. Las autoridades locales, como alcaldes y gobernadores regionales, también intervinieron y se pusieron del lado del Frente de Defensa; sin embargo, estos políticos también intentaron avanzar en una solución que fuera favorable para los actores de la industria y del Gobierno<sup>43</sup>. La larga campaña contra la explotación minera se ha extendido a lo largo de tres Gobiernos nacionales diferentes: los de García, Humala y Vizcarra. A menudo, estos hicieron un llamado al diálogo, pero adoptaron tácticas represivas y de mano dura frente a los manifestantes, principalmente el Gobierno de Humala. Aunque la contención tuvo altibajos durante más de una década, se pueden destacar cuatro episodios distintivos a lo largo de la campaña contra Tía María: el referéndum de 2009 y tres picos de intensidad de la movilización: 2011, 2015 y 2019<sup>44</sup>.

Al principio, las comunidades de la zona del valle de Tambo no rechazaban la construcción de la mina. De hecho, muchos miembros de ellas estaban interesados en los diálogos que suponían las consultas de 2007-2009. Sin embargo, la desconfianza hacia Southern y la oposición al proyecto avivaron la indignación de las organizaciones locales debido a dos acontecimientos significativos: la decisión de la empresa de usar fuentes de agua locales subterráneas y fluviales en vez de agua de mar y las deficiencias de su primera EIA. En la carrera por delimitar las amenazas y oportunidades de la minería, los pasos en falso de Southern fueron perjudiciales para sus objetivos.

---

<sup>43</sup> Observaciones personales de los autores durante las visitas de campo (Islay, noviembre de 2015 y julio de 2017).

<sup>44</sup> Como se mencionó en el capítulo 2, un tratamiento detallado de los conflictos mineros excede el alcance de este libro. Para contribuciones recientes sobre Perú, véanse: Arellano-Yanguas (2011); Arce (2014); Defensoría del Pueblo (2015); Álvarez Huwiler, Godfrid, & Duárez Mendoza (2015); Paredes (2016); Manrique & Sanborn (2021).

Tomando como ejemplo otros conflictos por recursos, como los de Tambogrande y río Blanco (ambos situados en la región de Piura), las organizaciones locales trabajaron conjuntamente con el Gobierno municipal de Cocachacra para crear un mecanismo de consulta popular para Tía María (Reeder *et al.*, 2022). La consulta pretendía determinar si la comunidad respaldaba el proyecto y si se permitiría el acceso a las fuentes subterráneas de agua. En septiembre de 2009, el 93,1% de los votantes de Cocachacra, Punta de Bombón y Deán Valdivia rechazaron el proyecto Tía María. Respecto al uso de las fuentes de agua locales, el 96,3% votó en contra (Márquez, 2009)<sup>45</sup>. Los resultados de la consulta popular legitimaron las preocupaciones de la comunidad acerca de la minería. La respuesta del Gobierno nacional fue negar la legalidad del mecanismo; Southern también ignoró los resultados. Frente a estos hechos, una coalición de organizaciones agrícolas, sindicatos, estudiantes universitarios y grupos políticos locales organizaron paros y manifestaciones regionales en 2010, que se intensificaron en 2011 (Taj, 2015). Además, todos estos acontecimientos ocurrieron durante la presidencia de Alan García, quien no tuvo reparos en aceptar el llamado «imperativo extractivo» (Arsel *et al.*, 2016, p. 880).

En marzo de ese año, tras conocerse el informe de la Unops sobre la EIA de Southern y sus 138 observaciones, los líderes del Frente de Defensa y los sindicatos locales convocaron un paro indefinido. Los manifestantes exigían que el Gobierno reevaluara la EIA de la compañía en lugar de continuar ignorando sus deficiencias. La respuesta del Gobierno al paro consistió en desplegar a la Policía Nacional del Perú (PNP). Un grupo de manifestantes contraatacó con proyectiles y hondas y creó escudos improvisados para bloquear los gases lacrimógenos y las balas de goma. Luego de varios enfrentamientos, en los que cuatro manifestantes perdieron la vida, el 8 de abril de 2011 el Minem rechazó la EIA y suspendió el proyecto hasta que se aprobara uno nuevo.

En noviembre de 2013, en un esfuerzo por reparar su ya deteriorada imagen, Southern publicó su segundo informe de EIA. El nuevo documento subsanaba las observaciones planteadas por la Unops y retomaba el plan original de construir una planta de desalinización. El Gobierno de Ollanta Humala aprobó esta nueva EIA en agosto de 2014<sup>46</sup>. Asimismo, llamó a una reanuda-

---

<sup>45</sup> De acuerdo con *La República*, la participación en el referéndum fue de 3.131 personas. Para la primera pregunta, sobre si la mina debía implementarse o no: 2.906 votaron «no» y 139 votaron «sí». En la segunda pregunta, sobre el uso de las fuentes de agua locales: 2.929 votaron «no» y 112 votaron «sí».

<sup>46</sup> Sin embargo, se encontraron inconsistencias similares a las de la primera EIA en la segunda. El Ocmal citó varias deficiencias, entre las que se encontraban: información insuficiente sobre el vehículo de remoción de escombros y la planta de triturado; nula atención de la compañía respecto a la

ción de las conversaciones a través de mesas de diálogo en donde se discutirían dichas revisiones. No obstante, muchos de los habitantes de las zonas de impacto directo del proyecto siguieron oponiéndose abiertamente a cualquier avance. Además, dudaban de la legitimidad de estas mesas, pues consideraban que las discusiones se habían convertido en meras exhibiciones de poder entre partidarios y detractores del proyecto. Una persona de la localidad manifestó que las mesas incluían a personas traídas desde fuera de la comunidad (Ugarte Cornejo, 2018, p. 65). Otros alegaron que Southern confundía de manera deliberada la participación en estas reuniones con apoyo al proyecto. Edwin Guzmán Espezuía, de la Asociación Civil Labor, planteó esta perspectiva de la siguiente manera:

En la comunidad se ha generado el mito de que los pobladores que asisten a los talleres están avalando el proyecto [minero] con su presencia. [Este mito se ha producido porque los organizadores] los apabullan con fotos, y los apabullan con que tienen que firmar las actas. [...] Entonces, como se ha generado ese mito, y en un escenario de conflicto, la gente ya no participa. Entonces los talleres se han convertido en una competencia de quién lleva más gente, y eso yo lo he visto (citado en Ugarte Cornejo, 2018, p. 65).

En diciembre de 2014, los alcaldes de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón encabezaron una nueva manifestación en contra de Tía María. Las protestas disminuyeron durante la temporada de cosecha, pero en abril de 2015 los alcaldes, junto con otras organizaciones, convocaron un paro regional. Los manifestantes también bloquearon las carreteras en áreas más pobladas. Entre abril y mayo, el conflicto escaló hasta violentos enfrentamientos con la policía. En estos dos meses, tres manifestantes más y un policía fueron asesinados, lo que provocó que el Gobierno nacional declarara el estado de emergencia y enviara dos mil policías adicionales para restablecer el orden en la región (Dunlap, 2019; Lapa Romero, 2017). Como consecuencia, el Gobierno de Humala volvió a suspender temporalmente el desarrollo del proyecto Tía María.

Estos conflictos se convirtieron en noticia nacional, hecho que visibilizó el proyecto e influyó en la opinión pública más allá de la región de Arequipa. Entre abril y mayo de 2015, el principal período de conflicto, el apoyo a la mina cayó en 14 puntos porcentuales, del 60% al 46% (Ipsos, 2015). También cabe destacar el número de personas que se informaron sobre el proyecto gracias a una mayor

---

liberación de partículas en el aire durante la construcción; y una preocupación más específica sobre la lluvia ácida resultante de la evaporación del ácido sulfúrico.

cobertura de la violencia por parte de los medios nacionales. En abril, solo el 29% de los encuestados a nivel nacional indicó estar informado sobre la implementación de Tía María; para mayo, esta cifra creció al 51% (Ipsos, 2015). En general, los encuestados culpaban de la violencia principalmente al Gobierno nacional y a los líderes de las protestas y no tanto a la policía y a los manifestantes.

Las tres razones principales de los opositores del proyecto eran los posibles daños medioambientales, el impacto negativo en la agricultura local y la desconfianza en que fuera el Estado quien supervisara las acciones de Southern (Ipsos, 2015)<sup>47</sup>. Cuando se pidió identificar las principales formas en que Southern podría ganar apoyo para el proyecto, el 43% de los encuestados indicó que la compañía tendría que convencerlos de que Tía María brindaría oportunidades de empleo en la región, el 41% consideraba que la compañía debía presentar un informe de EIA aprobado por el Estado y el 40% manifestó que Southern debía respetar los acuerdos establecidos con la población local (Ipsos, 2015)<sup>48</sup>.

Nuestra encuesta, realizada en 2015 en el área de afectación directa del proyecto Tía María, arroja conclusiones similares a las de Ipsos<sup>49</sup>. En una pregunta de respuesta múltiple en la que se pedía a quienes se identificaban como opositores que indicaran las principales razones de su rechazo al proyecto, las tres respuestas más comunes fueron: la minería perjudica el medio ambiente (44%), la minería perjudica la agricultura (29%) y no confianza en que el Estado supervise las acciones de la empresa minera (11%). En cuanto a los que se consideraban partidarios, las tres razones principales fueron: aumento de las oportunidades laborales (47%), oportunidades económicas locales (34%) y aumento de transferencias de rentas generadas por los recursos (9%). Ambas encuestas muestran una tendencia similar: división al interior de las comunidades de la zona del valle de Tambo en-

<sup>47</sup> En una pregunta de respuesta múltiple, se pidió a los participantes que señalaran sus principales razones para oponerse al proyecto. Entre los opositores, el 59% dijo que «la mina contamina el medio ambiente», el 56% dijo que la mina «dañará la agricultura de la zona» y el 30% dijo que se oponía «porque no tienen confianza en que el Estado esté supervisando el trabajo de la empresa minera».

<sup>48</sup> El tamaño de la muestra fue de aproximadamente 300 encuestados.

<sup>49</sup> La Facultad de Economía de la UNSA realizó nuestra encuesta sobre Tía María en 2015. Los 985 encuestados pertenecían a las poblaciones locales de 6 distritos de la provincia de Islay (la zona de impacto directo) y 12 distritos de la provincia de Arequipa (la zona de impacto indirecto). Los distritos de la provincia de Islay fueron Cocachacra, Deán Valdivia, Islay, Mejía, Mollendo y Punta de Bombón. Los de la provincia de Arequipa, Alto Selva Alegre, Arequipa, Cayma, Cerro Colorado, Jacobo Hunter, José Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata, Sachaca, Socabaya y Yanahuara. Las encuestas se recopilaron mediante entrevistas individuales de forma proporcional y aleatoria.

tre el rechazo rotundo y las demandas redistributivas. Sin embargo, como mostró la intensidad de la campaña de oposición, quienes rechazaban el proyecto claramente estaban mejor organizados.

El Ocmal caracterizó el conflicto de Tía María como de baja intensidad en 2018. No obstante, la campaña contra Southern resurgió de nuevo en el Gobierno de Martín Vizcarra. En un principio, Vizcarra trató de tranquilizar a ambas partes, cuidando no perjudicar la inversión minera y tratando de evitar que la violencia del conflicto escalara aun más que la vivida durante la presidencia de Humala. El 9 de julio de 2019, haciendo caso omiso a los llamados de los funcionarios, que pedían que no se autorizara el proyecto, Vizcarra cambió el rumbo y le otorgó a Southern una licencia de construcción (*El Comercio*, 2019b), lo que ocurrió justo antes del vencimiento del informe de la Unops, el 1 de agosto. Esta decisión fue ampliamente criticada, y muchos interpretaron esta coincidencia como un reflejo del interés de los actores de la industria y del Gobierno por eludir requisitos ambientales y sociales que pudieran retrasar todavía más el proyecto. A pesar de que Southern garantizaba que cumplía las recomendaciones de la Unops, varios detalles del proyecto se mantenían poco claros, como la ubicación exacta de ciertos minerales, la profundidad del pozo, los medios de transporte e incluso los recursos hídricos que se utilizarían<sup>50</sup>.

La respuesta a la decisión de Vizcarra no se hizo esperar. Julio Cornejo, alcalde de Cocachacra, la calificó como «un golpe de traición», pues el presidente había prometido enviar representantes para discutir el proyecto con la comunidad antes de otorgar la licencia (Turner, 2019). Varios alcaldes de la zona también firmaron una carta en la que le pedían al Gobierno nacional reconsiderar la concesión de la licencia de construcción. Y los frentes de defensa regionales convocaron paros y manifestaciones hasta que se revocara la licencia. Llama la atención el hecho de que incluso los más reacios a rechazar Tía María de forma rotunda buscaban una mayor transparencia en el proceso de concesión de licencias (Turner, 2019).

A finales de julio de 2019, se presentó un conflicto entre manifestantes y agentes de la PNP que dejó 34 policías heridos y 8 manifestantes detenidos (Turner, 2019). Probablemente en un intento por evitar más violencia, el Consejo Nacional de Minería –un comité de revisión independiente adscrito al Minem– anunció el 9 de agosto de 2019 que el permiso se suspendería durante 120 días a la espera de una nueva revisión (Cervantes, 2019a). Luego de este período, el

---

<sup>50</sup> Entrevistas de los autores con personas de la comunidad en Cocachacra (Islay, noviembre de 2015 y julio de 2017).

Consejo de Minería determinó que le otorgaría a Southern la licencia de construcción, pero que las operaciones formales no podrían comenzar hasta que se cumplieran condiciones más favorables para la comunidad. Southern sostuvo que deseaba tener un diálogo abierto y declaró públicamente que el proyecto solo se desarrollaría «en el marco de un clima social más favorable» (Cervantes, 2019b). No obstante, los miembros de la comunidad permanecieron escépticos dadas las anteriores declaraciones de la compañía (*El Comercio*, 2019a).

Los frentes de defensa respondieron a la decisión del Consejo de Minería con más bloqueos de carreteras. Las movilizaciones se reanudaron en diciembre luego de una breve pausa que permitió a los agricultores terminar las cosechas de temporada (*La República*, 2019). En enero de 2020, Vizcarra respondió a las nuevas manifestaciones y afirmó que el proyecto no se completaría durante su mandato, posición que respaldó Elmer Cáceres, gobernador regional de Arequipa (*La República*, 2020). Asimismo, Vizcarra afirmó: «si no se generan consensos no vamos a forzarlo [el proyecto]» (*El Comercio*, 2020a). El ministro de Energía y Minas Juan Carlos Liu señaló que el retraso permitía abordar las preocupaciones pendientes, que incluían un estudio hídrico y «cerrar brechas» de infraestructura en la zona del valle de Tambo (*El Diario*, 2020).

La situación de Tía María sigue siendo incierta (*El Comercio*, 2021). La recesión económica causada por la pandemia del Covid-19 ha vuelto a traer al centro del debate la importancia del proyecto para la región de Arequipa y el país. Southern ve una oportunidad en esta crisis, por lo que se mantiene optimista sobre el futuro del proyecto<sup>51</sup>. Óscar Gonzales Rocha, presidente ejecutivo de Southern, culpó al Gobierno Regional de Arequipa de frenar la construcción de la mina, y lo calificó como un obstáculo para el progreso del Valle. En sus palabras,

[...] el Gobierno Regional de Arequipa no se deja ayudar y es uno de los que está más en contra (de Tía María) [...] Ojalá esto se resuelva y pueda beneficiar a Arequipa y al Gobierno, pues, ahora que la situación económica está difícil no solo por el problema del pago de impuestos y trabajo para la gente que no tiene empleo (*El Comercio*, 2020b).

Gonzales Rocha también cree que la mayoría de la población apoya el proyecto y que todos están de acuerdo en que debe realizarse (*El Comercio*, 2020b).

---

<sup>51</sup> En otro estudio de opinión, de junio de 2019, el 59% de los encuestados aún seguía a favor del proyecto (Ipsos, 2019).

## Conclusiones

En este capítulo, hemos mostrado el papel de la participación social al interior de las organizaciones agrícolas para formar o reforzar las actitudes hacia a la extracción de recursos. A pesar de que Tía María es uno de los conflictos mineros más prolongados y violentos de América Latina, nuestra descripción demuestra que, incluso con una oposición aparentemente unida, todavía existen focos de apoyo. Se han generado discursos sobre las amenazas y oportunidades del proyecto con el fin de influir en la comunidad para que apoye o se oponga al proyecto. No obstante, quienes participan regularmente en organizaciones locales, en particular aquellos vinculados a la economía agrícola que es vital para la región, filtran la información y juzgan las amenazas con mayor perspicacia que las oportunidades.

A lo largo de este conflicto, los opositores se mantuvieron firmes en su objetivo de detener el proyecto. El despliegue de este por parte de Southern fue problemático en varios aspectos y pudo haber perjudicado de manera involuntaria los esfuerzos de la propia compañía por presentar un discurso de oportunidades claro. Dichos pasos en falso dieron credibilidad a las preocupaciones comunitarias por la minería y alentaron aun más las acciones de las organizaciones locales que representaba el Frente de Defensa. A pesar de varias salidas en falso, Southern se ha mantenido igualmente firme en su objetivo de sacar el proyecto adelante. Cada uno de los Gobiernos nacionales –desde García hasta Humala, y luego Vizcarra– ha creado espacios de diálogo para llegar a un acuerdo; sin embargo, sus tácticas represivas y de mano dura hacia los manifestantes representan una respuesta diferente.

Al momento de la redacción de este capítulo, continúa el debate sobre la implementación del proyecto, lo cual puede evidenciarse en las consecuencias negativas de la pandemia del Covid-19 en la economía peruana. El confinamiento nacional ha ralentizado la producción de las actividades mineras en todo el país. Asimismo, ha caído la demanda de materias primas como fruto del menor consumo por parte de las economías emergentes; esto ha agravado la recesión económica del país. A pesar de las declaraciones de los actores del Gobierno, que aseguran a las comunidades que no se otorgará ninguna licencia sin que haya un mayor consenso, la reciente recesión económica provocada por la pandemia ha reavivado la discusión sobre el inicio anticipado de las operaciones. Los actores de la industria y del Gobierno buscan expandir las operaciones para compensar la pérdida económica, y Tía María es una opción obvia. El impacto de la pandemia en la economía puede ser el empujón externo que incline la balanza a favor de Southern.

## 4. La peregrinación por la vida

A principios de octubre de 2015, el movimiento de resistencia contra la minería en Rancho Grande, en el departamento<sup>52</sup> de Matagalpa (Nicaragua), llegó a su punto máximo con una manifestación masiva que se denominó estratégicamente «Peregrinación por la vida». Tras meses de planificación por parte del obispo católico José Rolando Álvarez Lagos, titular de la diócesis de Matagalpa, 10 mil personas de la comunidad de Rancho Grande marcharon en contra de la minería y reclamaron su derecho a vivir en un entorno seguro y saludable (Marcus, 2015; Serjeant, 2015; Witte-Lebhar, 2015; Sánchez González, 2016, 2017). La magnitud de esta manifestación atrajo por primera vez la atención de los medios de comunicación. La comunidad ya había invitado a los medios nacionales a otros eventos contra la minería, pero hasta entonces los periodistas solo habían destacado por su ausencia (López & Dávila, 2014). Esta cobertura mediática y el enorme número de manifestantes también llamaron la atención de los medios de comunicación internacionales y de las OJA. Ante esta demostración, el 12 de octubre de 2015 el Gobierno nicaragüense decidió detener el proyecto de minería de oro a tajo abierto en Rancho Grande –también conocido como El Pavón–, que estaba a cargo de la empresa canadiense B2Gold. Además, la primera dama Rosario Murillo declaró públicamente que la «conclusión de todos los expertos ambientales es que el proyecto no es viable por las afectaciones que tendría en el entorno, en la naturaleza, en el ambiente, en el modo de vida de las personas, [y]

---

<sup>52</sup> Los departamentos en Nicaragua son similares a lo que otros países llaman estados o provincias.

en las fuentes de agua en general» (citado en Cuffe, 2015, párr. 5)<sup>53</sup>. Este fue un cambio trascendental por parte del Gobierno del presidente Daniel Ortega, que había tomado importantes medidas para atraer la inversión extranjera en el sector minero del país (Witte-Lebhar, 2015).

Al igual que en el caso anterior de Tía María, en Perú (véase el capítulo 3), las organizaciones locales desempeñaron un papel fundamental en la formación de actitudes y posteriores demandas respecto a la minería entre los individuos que participaban regularmente en ellas. Sin embargo, en el caso de Rancho Grande destacados líderes de la Iglesia católica se volvieron aliados para defender el medio ambiente y los medios de vida de la comunidad y desempeñaron un importante papel en la campaña contra la empresa B2Gold. Hasta cierto punto, su activismo recordaba el del período revolucionario sandinista (1979-1990), cuando los líderes religiosos progresistas adoptaron una postura a favor de los pobres, siguiendo las enseñanzas de la teología de la liberación. Dadas las afinidades históricas entre el entonces movimiento sandinista de Ortega y los sectores progresistas del clero, la intervención de los líderes de la Iglesia que defendían los medios de vida de la comunidad de Rancho Grande puso en aprietos a los actores gubernamentales que buscaban avanzar con el proyecto. Los líderes de las Iglesias recurrieron a sus redes para que los miembros de la comunidad se pusieran en contacto con otras organizaciones y les proporcionaron información y recursos esenciales para resolver sus problemas. Asimismo, animaron a las personas a oponerse al proyecto propuesto firmando peticiones y organizando manifestaciones contra la minería. Y, lo que es más importante, propusieron un discurso a favor del medio ambiente que unía las amenazas materiales sobre la tierra y el agua con las no materiales relacionadas con la identidad religiosa de la comunidad. De hecho, años antes de que la minería amenazara la zona, los líderes de la Iglesia de Rancho Grande daban enseñanzas religiosas sobre la protección del medio ambiente. Gracias a estas, los feligreses se convencieron de que eran los guardianes del mayor regalo de Dios: la Madre Tierra. De este modo, los individuos que participaban en grupos religiosos se sintieron animados a proteger el entorno natural de la comunidad mediante estrategias de movilización que generalmente no eran violentas.

Era importante que el presidente Ortega hablara directamente con el obispo Álvarez antes de hacer pública la noticia, dada la influencia de la Iglesia católica en esta campaña multifacética –en la que participó organizando, por ejemplo,

---

<sup>53</sup> En ese momento, Murillo era la portavoz del Gobierno nacional; ella es la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua desde 2021.

boicots, marchas, bloqueos, manifestaciones y peticiones, entre otras actividades—, campaña que se remonta a 2010, cuando B2Gold se interesó en la zona. Así, el 11 de octubre de 2015 el obispo Álvarez comenzaba su típico domingo de misa cuando recibió una llamada telefónica del presidente Ortega y de la primera dama Murillo. Debido a la importancia de su mensaje, Ortega y Murillo esperaron en el teléfono a que terminara la misa. Luego, le comunicaron en privado al obispo Álvarez que el Gobierno nacional anunciaría que planeaba detener la concesión de B2Gold en Rancho Grande al día siguiente. Compartieron esta noticia con el obispo Álvarez antes que con otros por su liderazgo en la organización y planeación de estrategias contra la minería en Rancho Grande. También querían darle la oportunidad de comunicarse con otras partes interesadas en la campaña contra la minería, para que pudieran compartir la noticia con sus redes antes de que se hiciera pública (Marcus, 2015).

La mayoría de los miembros de la comunidad se regocijaron con la decisión del Gobierno nacional. Sin embargo, siempre hay quienes apoyan la minería en las comunidades donde esta es inminente, lo hacen porque consideran que es beneficiosa para la economía local, pero, a diferencia de los opositores más notorios y mejor organizados, generalmente su apoyo permanece oculto. Los miembros de la comunidad que no solían participar en las organizaciones de Rancho Grande tendían a apoyar la mina propuesta porque no tenían acceso a la misma información y recursos que los individuos socialmente comprometidos. A su vez, confiaron en los discursos de B2Gold y de los actores gubernamentales sobre las oportunidades económicas que traería el proyecto propuesto a la zona, como puestos de trabajo, programas sociales y desarrollo local. En resumen, las opiniones individuales sobre la minería variaban dentro de la comunidad (EJAtlas, 2020). En este capítulo, explicamos cómo los miembros de esta procesaron información ambivalente sobre las amenazas y las oportunidades que presenta la minería.

Primero, exploramos el resurgimiento de la minería de oro en Nicaragua. Posteriormente, analizamos la entrada de B2Gold en Rancho Grande y los esfuerzos de la empresa por conseguir apoyo local para su proyecto. Luego, describimos la comunidad de Rancho Grande y el papel que tuvieron las organizaciones locales, incluida la Iglesia católica, en la formación de actitudes individuales contra la minería. Por último, antes de concluir, ofrecemos una descripción general del conflicto que ilustra la posición única de la Iglesia católica en la organización de los esfuerzos de movilización en la comunidad<sup>54</sup>.

---

<sup>54</sup> La información sobre B2Gold en Nicaragua y el papel de los líderes de la Iglesia católica en el

## El resurgimiento de la minería en Nicaragua

La importancia económica de la minería en Nicaragua se remonta a la época colonial (Bulmer-Thomas, 1987). Sin embargo, el Gobierno revolucionario sandinista (1985-1990) nacionalizó las minas en la década de 1980, lo que contribuyó al colapso de la industria (Martínez Cuenca, 1992)<sup>55</sup>. En 1990, terminó la guerra civil en Nicaragua y el país comenzó su transición a la gobernabilidad democrática. Violeta Chamorro (1990-1996), del partido Unión Nacional Opositora (UNO), ganó las elecciones democráticas y comenzó a implementar reformas de mercado para revitalizar el incipiente sector minero. No obstante, los inversores extranjeros se mostraron inicialmente reticentes a invertir por temor a una futura inestabilidad y a las expropiaciones. Desde Chamorro, todos los Gobiernos nacionales han abogado por políticas e incentivos para atraer la inversión extranjera con el fin de remediar esta renuencia. Incluso cuando Ortega —el líder del Gobierno revolucionario sandinista— volvió a la presidencia en 2007, aceptó la industria minera a través de una ideología conocida como «capitalismo populista»: una mezcla de discurso antiimperialista, gasto social moderado y economía orientada al mercado (Veltmeyer & Petras, 2014). Con ello, Ortega atenuó los temores de los inversores por las acciones que había emprendido el Gobierno sandinista —como expropiación de tierras, nacionalización de minas y adopción de fuertes controles reglamentarios—.

En consonancia con las tendencias mundiales y en un intento por impulsar la inversión en el sector extractivo, el país ha adoptado acuerdos de libre comercio y tratados bilaterales de inversión, ha definido claramente procesos de autorización y garantías para los inversores y ha aprobado una legislación que desregula las actividades mineras y exime a las empresas de impuestos. Tales acciones del país aumentaron la inversión extranjera directa y ayudaron a que la industria minera de oro del país floreciera como el principal productor de oro de América Central (Spalding, 2016).

Desde 1995 hasta principios de la década de 2000, el Gobierno nicaragüense privatizó las minas existentes y promulgó leyes para aumentar las inversiones. Estos cambios provocaron la aparición de organizaciones empresariales en el sector. Por ejemplo, el Gobierno de Chamorro apoyó a la Cámara Minera de Nicaragua (Caminic), la cámara empresarial minera del país, la cual facilitó la colaboración

---

conflicto se basa en los aportes de Spalding (2016, 2020) y Sánchez González (2016, 2017).

<sup>55</sup> Durante este período, los niveles de producción de oro cayeron a 25 mil onzas troy (Sebastián Chamorro, 2014).

entre inversores y Gobierno en temas polémicos, como los derechos sobre la tierra de los mineros artesanales y la oposición de las comunidades a las concesiones mineras. Durante el mandato de Alemán (1997-2002), el Gobierno aprobó la Ley de Promoción de Inversiones Extranjeras en 2000 y la Ley Especial sobre Exploración y Extracción Minera en 2001. Estas leyes pretendían aumentar las inversiones mediante la aprobación de concesiones mineras hasta un máximo de 50 mil hectáreas por 25 años, prorrogables por otros 25 años. La ley también autorizaba las regalías mineras al 3% (del valor del material extraído), un gasto deducible del impuesto sobre la renta, con una tasa más favorable que la de Guatemala (1%) y El Salvador (2%) (Spalding, 2016).

Desde principios hasta mediados de la década de 2000, el Gobierno nicaragüense siguió viendo la importancia económica de esta industria. En particular, identificó la minería como un objetivo crucial para el desarrollo debido al constante aumento del precio del oro<sup>56</sup>. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Bolaños (2002-2007) afirmaba que Nicaragua «posee un envidiable potencial minero, lo que lo coloca en una posición privilegiada con respecto al resto de Países de Centroamérica» (Fundación Enrique Bolaños, 2003, p. 138). Asimismo, el Gobierno apoyó a otras organizaciones empresariales que estaban a favor de la minería y aprobó varias leyes para atraer la inversión extranjera. Por ejemplo, supervisó la creación de ProNicaragua, una agencia público-privada cuyo objetivo era fomentar la inversión extranjera en el sector minero gracias a los bajos costos laborales del país y de garantías para los inversores extranjeros (Ley 344) y acceso a tribunales internacionales en casos de conflictos de inversión (ProNicaragua, 2013, 2014). ProNicaragua atrajo a los inversores al destacar los buenos resultados de Nicaragua en el índice Doing Business del Banco Mundial (Whyte, Ortega, & Griffin, 2011)<sup>57</sup>; y, durante la siguiente década, priorizó la minería en sus publicaciones y presentaciones promocionales y pronto se alió con los funcionarios de Caminic, que asistieron y fueron coanfitriones de ferias y congresos internacionales. A principios y mediados de la década de 2000, los actores del Gobierno y de la industria elogiaron con entusiasmo los logros y las expectativas del sector (Spalding, 2016, 2020).

Con el regreso de Ortega al poder, algunos inversores temían que estos logros estuvieran en peligro. Sin embargo, al igual que otros líderes latinoamericanos,

<sup>56</sup> El precio de cierre del oro fue, en promedio, de US\$ 279 en el año 2000 y de US\$ 1.266 en el año 2014, lo que representa un aumento del 353% (Macrotrends, 2020).

<sup>57</sup> Entre 2002 y 2009, Nicaragua pasó del puesto 112 al 12 entre 233 países en términos de IED per cápita (Whyte *et al.*, 2011).

Ortega se mostró entusiasmado con la promoción del crecimiento económico a través del desarrollo de la inversión extranjera en el sector extractivo y con que ella asegurara la financiación de programas sociales dirigidos a la pobreza. Uno de los primeros compromisos de Ortega como presidente fue la creación del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Con el tiempo, los inversores empezaron a verlo como un líder confiable, que promovería los intereses de los actores del sector. Spalding destaca este cambio de percepción y subraya cómo «el director general de B2Gold, Clive Johnson, informó de que su primer acto en la búsqueda de oportunidades de inversión en Nicaragua tras su llegada en 2007 fue reunirse directamente con Ortega, una cita de veinte minutos que se convirtió en una conversación de dos horas» (2020, p. 15).

Las inversiones mineras, las concesiones y la producción crecieron exponencialmente durante el auge de los precios de las materias primas, pues había un ambiente atractivo para la inversión<sup>58</sup>. Como resultado, la industria minera no solo se recuperó, sino que prosperó. En cuanto a la producción de oro, la figura 7 muestra un incremento del 232% desde 2009 hasta 2018 (Banco Central de Nicaragua, 2020). En 2012, Nicaragua se convirtió en el primer productor de oro de Centroamérica, con un aporte del 35,4% de la producción regional (Centro Humboldt & Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEEPP, 2017). Como sugirió Carlos Zarruk, director general de minería del país, Nicaragua estaba «abierta a los negocios» (Lazenby, 2014).

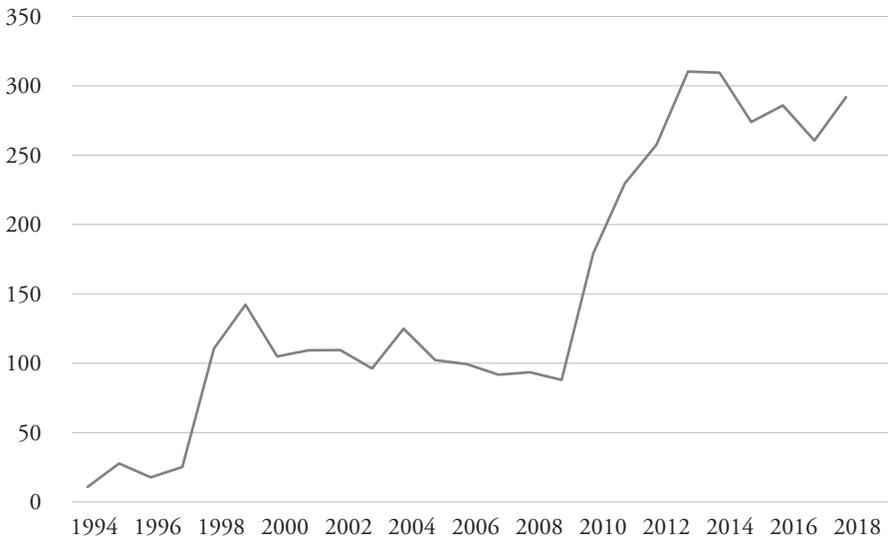
B2Gold Corporation –con sede en Vancouver, Canadá, y fundada en 2007– es una de las empresas que más se ha beneficiado de la revitalización de la industria minera de Nicaragua. B2Gold se ha convertido en el principal actor de la industria nicaragüense debido en parte a la adquisición de concesiones mineras en todo el país; de hecho, desde 2007 ha invertido más de 100 millones de dólares en actividades mineras en toda Nicaragua (EJAtlas, 2020). En la actualidad, la empresa tiene proyectos de producción, explotación y exploración en dos municipios del departamento de Chontales (La Libertad y Santo Domingo) y en uno del departamento de León (El Limón); y concesiones en etapa de exploración en Rancho Grande en el departamento de Matagalpa, sitio en el que la empresa ha hecho importantes inversiones (figura 8). En 2007, B2Gold creó una empresa

---

<sup>58</sup> La inversión en minería pasó de US\$ 25 millones en 2010 (alrededor del 5% de la inversión extranjera total) a US\$ 274 millones en 2013 (alrededor del 20% de la inversión extranjera total) (ProNicaragua, 2014). Las concesiones mineras aumentaron 310% (de 83 a 258) de 2006 a 2017 (Spalding, 2020).

conjunta con Radius Gold para explorar el cerro El Pavón en Rancho Grande<sup>59</sup>. Las empresas recibieron conjuntamente una concesión exploratoria de 1.301 hectáreas; posteriormente descubrieron una concentración de 6,7 a 10,3 gramos de oro por tonelada de tierra. En 2010, los representantes de B2Gold expresaron públicamente su interés en invertir en una mina a tajo abierto. En 2012, la empresa compró las acciones de Radius Gold y se convirtió en la única beneficiaria de la concesión de El Pavón (MEM, 2014; EJAAtlas, 2020).

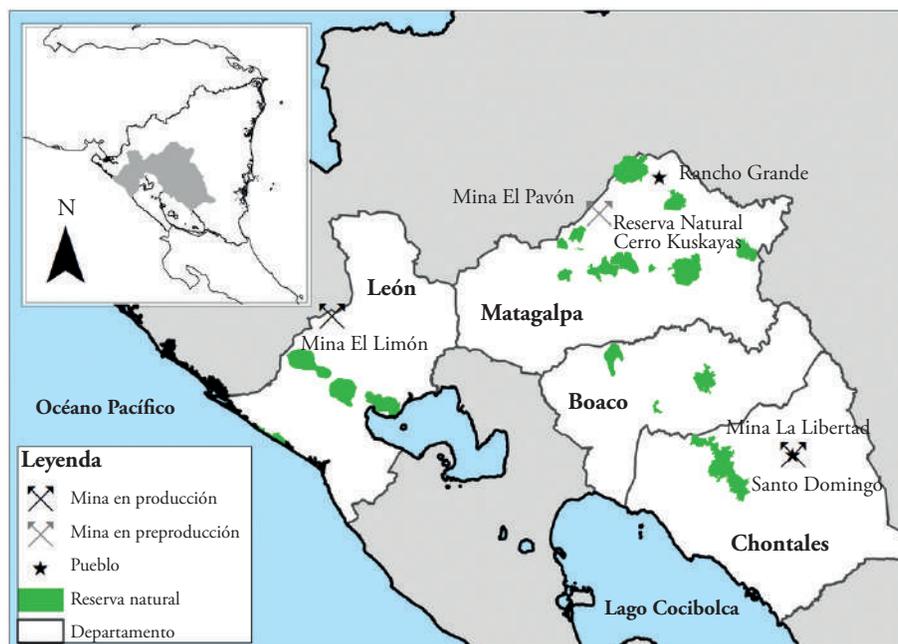
Figura 7  
Producción de oro en Nicaragua, 1994-2018 (en miles de onzas troy)



Fuente: Banco Central de Nicaragua (2020).

<sup>59</sup> El cerro El Pavón está en la comunidad de Yaoska en Rancho Grande.

Figura 8  
Ubicación del proyecto minero Rancho Grande



### Licencia social de B2Gold

En las zonas en las que se estudia la posibilidad de desarrollar la minería, las comunidades anfitrionas y los actores de la industria compiten entre sí por definir las amenazas y oportunidades que presenta dicha actividad. Con ese ánimo, B2Gold siguió una estrategia triple con el fin de obtener licencia social para operar. En primer lugar, en forma similar a la campaña de Southern Copper Corporation en Tía María (véase el capítulo 3), la empresa llevó a cabo varios programas de RSE. Por ejemplo, ofreció ayuda financiera para apoyar la infraestructura social y los programas de microfinanzas (López & Dávila, 2014); y proporcionó equipos nuevos a los agentes de policía, medicamentos y equipos a las clínicas de salud y semillas a los agricultores. Además, dado su interés de largo plazo en que la comunidad se desarrollara, los representantes de la empresa llevaron a cabo reuniones públicas para discutir sobre otros programas sociales que se ofrecería a la comunidad después de que la mina entrara en funcionamiento; algunos de estos comprendían oportunidades de empleo y una generosa compensación económica

por los terrenos cuando fuera necesario ampliar el proyecto. La compañía también prometió a los empresarios locales que les otorgaría recursos para mejorar sus instalaciones ante la expectativa de que aumentara la demanda de servicios locales (López & Dávila, 2014).

En segundo lugar, B2Gold promocionó su imagen mediante regalos de marca que distribuyó en la comunidad e inundó las emisoras de radio locales con mensajes positivos sobre el proyecto. Por ejemplo, se sabía que los representantes de la empresa repartían gorras de béisbol y camisetas con el logotipo de B2Gold e incluso les daban regalos a los niños en Navidad. Los mensajes de radio pretendían maximizar las oportunidades que ofrecía el proyecto, al tiempo que minimizaban las amenazas para el medio ambiente y los medios de vida de la comunidad. Por ejemplo, la empresa difundió mensajes sobre los beneficios de la «minería verde», se refirió a sus esfuerzos para financiar un vivero forestal en la comunidad y destacó cómo contribuiría la explotación de la mina al empleo y al desarrollo económico (Sánchez González, 2016, 2017).

En tercer lugar, y en consonancia con el «imperativo extractivo» (Arsel *et al.*, 2016), los actores gubernamentales colaboraron estrechamente con sus homólogos de la industria para hacer avanzar el proyecto (Serjeant, 2015). Uno de los ejemplos más notables fue el de permitir que B2Gold se llevara el crédito por proyectos patrocinados por el Gobierno. Por ejemplo, si el Gobierno donaba materiales o llevaba médicos a la comunidad, la empresa recibía un reconocimiento. Los organismos estatales nicaragüenses también le dieron a la empresa la oportunidad de difundir mensajes positivos sobre el proyecto en centros de salud y escuelas públicas locales. En una de esas ocasiones, el Ministerio de Educación (Mined) permitió que representantes de la empresa ingresaran a escuelas locales para distribuir útiles escolares mientras hacían presentaciones a favor de la minería. Durante estas «asambleas de aula», los representantes de la empresa pretendían aliviar las posibles preocupaciones sobre el proyecto al decir a los estudiantes que no se produciría ningún daño a los medios de vida de la comunidad (Sánchez González, 2016, 2017).

La propuesta de nuevas oportunidades económicas ligadas al proyecto Rancho Grande representaba un panorama atractivo para algunas personas de la comunidad (López & Dávila, 2014). Los datos de nuestra encuesta muestran que las tres razones principales por las que ellas apoyaron el proyecto fueron las oportunidades de empleo (54%), las oportunidades económicas locales (16%) y los beneficios para la comunidad, como los programas sociales (11%) (véase el capítulo 6). Sin embargo, antes de la llegada de B2Gold, la mayoría de los miembros de

la comunidad habían colaborado con organizaciones locales, incluida la Iglesia católica, para promover prácticas agrícolas sostenibles y, de esa manera, comportamientos para preservar el medio ambiente. Al final, esto impidió que la empresa obtuviera el respaldo que necesitaba de la comunidad. En la siguiente sección, analizamos la comunidad de Rancho Grande, las principales fuentes económicas (agricultura, ganadería y ecoturismo) que sostienen sus medios de vida y la influencia que tuvieron las organizaciones locales y los líderes de la Iglesia católica en la formación de actitudes individuales sobre el proyecto.

## **La comunidad de Rancho Grande**

Rancho Grande es una comunidad de cerca de 50 mil habitantes, de los cuales el 90% vive en zonas principalmente rurales (Centro Humboldt, 2015b; Instituto Nacional de Información de Desarrollo, Inide, 2005; López & Dávila, 2014). El municipio, que lleva el mismo nombre, es el decimoquinto más empobrecido de Nicaragua, con casi el 69% de hogares en situación de pobreza extrema (Serjeant, 2015). Muchas casas constan de lonas de plástico y pisos sin terminar o de tierra, no cuentan con agua corriente ni electricidad y su acceso a agua limpia es limitado<sup>60</sup>. No hay bancos ni cajeros automáticos, hay pocos comercios y las escuelas locales están deterioradas y carecen de suministros. Solo una carretera mal pavimentada atraviesa el pueblo<sup>61</sup>.

La comunidad de Rancho Grande siempre ha subsistido económica y socialmente gracias a la producción agrícola a pequeña escala, principalmente de café y cacao, así como de otras frutas y verduras autóctonas de Nicaragua. Los miembros de la comunidad dependen de una relación sostenible con los ríos de la zona (por ejemplo, los ríos Yaoska, Manceras, Kiwaska y Babaska), que son vitales para su sustento. Las condiciones de clima y de suelo que se encuentran en Rancho Grande han generado condiciones favorables para los agricultores de la comunidad, por lo cual la producción de cultivos alimenta en gran medida a sus miembros y los productos adicionales se venden en los mercados cercanos. Además, el entorno sano y los ríos limpios de Rancho Grande abastecen al ganado de la comunidad, que produce para los ganaderos hasta 6 mil litros de leche al día (Centro Humboldt, 2015b).

---

<sup>60</sup> Más del 60% de los hogares no tienen electricidad ni acceso a agua potable (Serjeant, 2015).

<sup>61</sup> Comentarios personales de los autores a partir de la visita de campo (Rancho Grande, enero de 2017).

El entorno natural de Rancho Grande también contribuye al ecoturismo de la región. El municipio alberga la Reserva Natural Cerro Kuskayas (véase la figura 8), que forma parte de una reserva más grande: la Reserva de la Biosfera Bosawás. En 1997, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró a Bosawás reserva de la biosfera, la cual es conocida internacionalmente como el Corazón del Corredor Biológico. Es el santuario forestal más grande de Centroamérica (Centro Humboldt, 2015b) y protege algunas de las especies de flora y fauna más preciadas de Nicaragua.

La comunidad de Rancho Grande cuenta con diversas organizaciones locales relacionadas con la agricultura y la protección del medio ambiente. La Addac es un ejemplo de ello. Durante las últimas décadas, la Addac ha ayudado a los miembros de la comunidad a aumentar la producción total al fomentar la expansión de habilidades en las cooperativas locales, especialmente en café y cacao<sup>62</sup>. Ríos de Agua Viva es una de estas muchas cooperativas creadas y apoyadas por la Addac, y actualmente comprende 39 comunidades con más de 1.300 participantes. Además de promover prácticas sostenibles, como sistemas agroforestales, la Addac apoya la comercialización agrícola y los programas de crédito alternativo (Centro Humboldt, 2015b); también fomenta comportamientos de protección del medio ambiente al inculcar estrategias de vida que han enseñado a los agricultores a utilizar, conservar y recuperar sus recursos para seguir alimentando a la comunidad. Un miembro de la comunidad resume el impacto de la Addac de la siguiente manera:

Llevo muchos años cuidando el bosque de mi propiedad. He recibido capacitación y orientación de una organización llamada Addac, que nos enseñó hace mucho tiempo a cuidar el medio ambiente, el agua, los bosques y la tierra, a no quemarlos. Empecé a cuidar los bosques gracias a un intercambio de experiencias... Con gusto daría mi vida por el medio ambiente. Por eso me atrajo la enseñanza sobre el cuidado y la conservación de este bosque. No talarán este bosque mientras yo viva (Sánchez González, 2017, párr. 21).

Más allá de las organizaciones basadas en la agricultura, que son propias de comunidades agrícolas como Rancho Grande, el hecho de que haya otras organizaciones locales es muestra de un alto grado de participación social. Según los datos de nuestra encuesta, en Rancho Grande más de tres cuartas partes de los

---

<sup>62</sup> La Addac es una organización nicaragüense sin ánimo de lucro que fue creada en 1991 y cuya sede está en la ciudad de Matagalpa. Inicialmente surgió para mejorar las condiciones sanitarias e impulsar el desarrollo de las comunidades. Se ha consolidado como una de las principales promotoras de la producción y comercialización agrícola de Rancho Grande y sus municipios vecinos.

encuestados (77,49%) participan en al menos una organización local. De hecho, casi la mitad de ellos (alrededor del 45%) participan regularmente en dos o más asociaciones. Estas cifras son las más altas de nuestros casos de estudio, lo que sugiere un sólido nivel de participación en las organizaciones locales.

### **La amenaza inminente de la minería y el papel de la Iglesia católica**

Dos grandes factores ayudan a explicar la posición única de la Iglesia católica en el conflicto y por qué se convirtió en el rostro de la campaña contra la minería. En primer lugar, sus líderes tienen un historial distintivo de defensa de los pobres, que se remonta a los días de apogeo de la teología de la liberación. Para entonces, su activismo fue en parte una respuesta al carácter represivo de los militares durante la guerra civil del país. Aunque son muy diferentes las circunstancias políticas del período actual, no lo son las amenazas que representa la minería para los agricultores y los medios de vida de sus comunidades. En segundo lugar, la infortunada historia de violencia durante la guerra civil del país tuvo un efecto moderador en las estrategias de movilización que emprendieron las organizaciones locales<sup>63</sup>. Los líderes comunitarios y sus organizaciones no aceptaron el proyecto, pero al mismo tiempo temían intensificar la campaña de resistencia hasta el punto de provocar una respuesta policial (o militar) del Gobierno de Ortega. La intervención de respetados líderes de la Iglesia no solo sirvió para legitimar su lucha, también generó una sensación de protección frente a la posible criminalización o represión estatal de los manifestantes. La resistencia pacífica general a la minería, enfocada en la defensa del medio ambiente, fue establecida por los líderes de la Iglesia y, en última instancia, empoderó a los miembros de la comunidad para que se movilizaran.

La influencia de los líderes de la Iglesia para formar puntos de vista individuales sobre la minería es tanto indirecta –como cuando los feligreses participan en reuniones religiosas o asisten a grupos de la Iglesia– como directa –cuando los líderes de la Iglesia actúan como actores externos (o intermediarios) para las dos partes involucradas en un conflicto (comunidades anfitrionas versus actores de la industria y del Gobierno) para ayudar a mediar en una solución–. En el caso de Rancho Grande, tomaron una postura de apoyo al medio ambiente y a los medios de vida de la comunidad. Así agregaron una fuente de autoridad moral a la

---

<sup>63</sup> Entrevista telefónica hecha por los autores a Mario Sánchez González, director del Centro de Análisis Sociocultural de la Universidad Centroamericana en Managua, Nicaragua (noviembre de 2021).

campana contra la minería. Aunque son importantes ambos tipos de influencia, es más fácil observar su papel directo.

Al igual que las organizaciones locales que se dedican a prácticas agrícolas sostenibles, la Iglesia católica promovió comportamientos de protección del medio ambiente haciendo hincapié en sus enseñanzas religiosas sobre temas relacionados<sup>64</sup>. Con ello, la Iglesia católica inculcó una conexión espiritual con la tierra al margen de consideraciones puramente materiales. Varias declaraciones que hizo la Iglesia católica sobre el medio ambiente dieron forma a las enseñanzas de los líderes religiosos de Rancho Grande. A modo de ejemplo, el obispo Álvarez, quien surgió como un actor clave en la campaña contra la minería, declaró: «Las consideraciones bíblicas nos han motivado y animado a ser conscientes de que somos los guardianes de la creación» (citado en Sánchez González, 2017, párr. 15). Asimismo, monseñor Edgar Sacasa Sierra, de Matagalpa, quien seguía el legado de la teología de la liberación del país vecino El Salvador, sugirió que la Iglesia está a favor del medio ambiente y que ha surgido la opción ambiental como una nueva opción pastoral, la cual comenzó muy suavemente con actividades como la reforestación, la construcción de viveros de plantas y la fundación de clubes ambientales (citado en Sánchez González, 2017, párr. 17).

El catolicismo está muy extendido en Rancho Grande. Al participar en reuniones religiosas o asistir a grupos de la Iglesia, los feligreses aprendieron que tenían la responsabilidad personal de ser guardianes del medio ambiente y que debían salvaguardar el bienestar ambiental de la comunidad de la que depende su existencia. Por ejemplo, un miembro de la comunidad declaró: «Estoy en contra de destruir el medio ambiente. Lo que me motiva es que tengo que amar a la Madre Tierra porque es el tesoro que Dios nos dejó» (citado en Sánchez González, 2017, párr. 28). Y otra persona dijo: «Estudiando la Biblia, veo cómo debemos valorar, cuidar y defender a la Madre Tierra porque allí dice que es como el vientre de una madre» (citado en Sánchez González, 2017, párr. 27). Estas enseñanzas sobre la protección del medio ambiente –aunque indirectas y difíciles de rastrear– se pusieron en práctica cuando B2Gold se interesó en el proyecto Rancho Grande.

El padre Pablo Espinoza, párroco de Rancho Grande, y el padre Teodoro Custer, expárroco, fueron dos de los principales defensores del discurso contra la mi-

---

<sup>64</sup> Algunos ejemplos son la ecoteología, del teólogo brasileño Leonardo Boff, el documento de Aparecida de la Conferencia Episcopal Latinoamericana de 2007 y la encíclica *Laudato 'sí* del papa Francisco (Sánchez González, 2017). El documento de Aparecida habla de los daños ambientales que causan las actividades extractivas (Spalding, 2011).

nería en la comunidad. Tan pronto como el padre Custer se enteró del proyecto minero Rancho Grande, compartió sus conocimientos sobre la minería con los miembros de la comunidad. Tiempo atrás, había aprendido sobre los efectos adversos de la minería con las Hermanas Maryknoll en Guatemala (Sánchez González, 2016, 2017), y tanto él como el padre Espinoza visitaron personalmente a los miembros de la comunidad para discutir las experiencias de otras comunidades mineras en Nicaragua (por ejemplo, El Limón, Santo Domingo, La Libertad, Bonanza y Santa Pancha) y en países vecinos (como El Salvador, Honduras y Guatemala)<sup>65</sup>. Además, compartieron el contenido de informes elaborados por reconocidos OJA, como el Centro Humboldt, y organizaciones nacionales de derechos humanos, como el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh)<sup>66</sup>. Por ejemplo, el Centro Humboldt ha redactado varios informes sobre daños ambientales (entre ellos, acerca de la contaminación del agua por la liberación de metales tóxicos) en otras comunidades nicaragüenses desde su creación en 1990 (Centro Humboldt, 2008, 2014). Como si se tratara de una forma de confianza relacional, muchas personas se sintieron atraídas por el movimiento porque creían en la fuente de la que provenía la información.

En el transcurso de la campaña contra la minería, surgieron dos importantes organizaciones. La primera fue los Guardianes de Yaoska, que se formó para proteger el río Yaoska y posteriormente se unió a la Iglesia católica y a la Addac, junto con otras asociaciones locales (por ejemplo, la Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario, ADIC; la Radio Comunal Católica; el Movimiento de Mujeres de Matagalpa; el Movimiento Comunal Nicaragüense, MCN, y la Cooperativa Ríos de Agua Viva) para formar el Grupo Estratégico contra la Minería (Spalding, 2016). A pesar de que varios grupos actuaron como actores clave del movimiento social, los líderes de la Iglesia se convirtieron en los más visibles: aprovechaban su posición para otorgar legitimidad (y protección) a la oposición contra la minería y marcaban la dirección de las acciones que siguieron.

La Iglesia católica, la Addac y los Guardianes de Yaoska utilizaron programas diarios de radio para comunicar su discurso a favor del medio ambiente. Así como cuando visitaban a la comunidad puerta a puerta, los líderes de la Iglesia católica y los Guardianes utilizaron historias personales de las comunidades vecinas para humanizar los mensajes más técnicos de las organizaciones nacionales de medio

---

<sup>65</sup> Entrevistas hechas por los autores a un representante de la Addac (Matagalpa, enero de 2017) y a tres líderes de los Guardianes de Yaoska (Rancho Grande, enero de 2017).

<sup>66</sup> Entrevistas hechas por los autores a cuatro representantes del Centro Humboldt (Managua, enero de 2017) y a tres líderes de los Guardianes de Yaoska (Rancho Grande, enero de 2017).

ambiente y de derechos humanos (es decir, los informes del Centro Humboldt y el Cenidh)<sup>67</sup>. Para complementar lo anterior, los presentadores de radio también usaban mensajes amenazantes, pero memorables, como «Pan hoy, hambre mañana» (Spalding, 2016, p. 18). Este meme pretendía resaltar el carácter limitado de las oportunidades mineras. Usar los medios de comunicación, como estos programas de radio, tiene un amplio impacto y alcance en entornos en los que hay acceso limitado a la información, como es el caso de Rancho Grande. La voz de respetados líderes religiosos para plantear estas preocupaciones tuvo un efecto multiplicador, pues fue posible atraer a más personas y organizaciones a la campaña contra la minería<sup>68</sup>.

Algunas evidencias sugieren que el discurso contra la minería fue efectivo al formar opiniones sobre el proyecto Rancho Grande. Cuanta más información recibían los miembros de la comunidad sobre él, más se alarmaban por el impacto de la minería en sus medios de vida. Haciéndose eco de estos temores, un residente sugirió: «Hemos visto en otros lugares, en otros países, que puede darse la desertificación [por la minería] tan solo talando los árboles de las montañas. Eso es lo que estamos tratando de evitar» (citado en Witte-Lebhar, 2014, p. 3). Además, el propietario de un negocio local nos dijo: «Tan solo puedo imaginarme si se concretara la concesión minera para B2Gold. El medio ambiente de Rancho Grande se vería afectado negativamente como el de Santo Domingo»<sup>69</sup>. La propia campaña, como se analiza en la siguiente sección, incorporó temas con fuertes connotaciones religiosas, como «Protege a la Madre Tierra» (en agosto de 2014) y «Peregrinación por la vida» (en octubre de 2015).

Cuando visitamos Rancho Grande, vimos esta frase pintada en casi todas las casas y edificios del pueblo: «No a la minería»<sup>70</sup>. Al igual que en el caso de Tía María (véase el capítulo 3), este discurso recoge una concepción de comunidad que considera que la minería es incompatible con los medios de vida existentes y también hace que los individuos prioricen el bienestar de la comunidad por encima de las oportunidades individuales. La minería era una amenaza no solo para la tierra y las prácticas agrícolas sostenibles de la zona, también lo era para lo que representaban para la identidad religiosa de la comunidad. Como sostiene el

---

<sup>67</sup> *Ibíd.*

<sup>68</sup> Entrevistas hechas por los autores a tres líderes de los Guardianes de Yaoska (Rancho Grande, enero de 2017).

<sup>69</sup> Entrevista hecha por los autores al propietario de un negocio de Rancho Grande (enero de 2017).

<sup>70</sup> Comentarios personales de los autores a partir de la visita de campo (Rancho Grande, enero de 2017).

obispo Álvarez, las identidades religiosas de los miembros de la comunidad con su tierra y su entorno se relacionan directamente con su dignidad, y necesitan protegerse de amenazas externas como la minería (Sánchez González, 2016, 2017).

Una de las consecuencias de tener esta concepción es que los miembros de la comunidad se sienten como si viajaran en el mismo barco y, por tanto, están dispuestos a dejar de lado sus diferencias religiosas y políticas para vivir en una comunidad libre de la minería. Como sugirió un líder de los Guardianes, la fuerza de la comunidad surgía de «unir, dejando de lado los partidos, todos juntos, liberales y sandinistas, evangélicos y católicos, alrededor de una sola causa» (citado en Sánchez González, 2017, párr. 56)<sup>71</sup>. Por dar un ejemplo, los líderes del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Rancho Grande mostraron actitudes mixtas hacia el proyecto en las primeras etapas del proyecto. Durante las elecciones municipales de 2012, los candidatos del FSLN hicieron campaña con la promesa de oponerse a la minería. Sin embargo, luego de que estos ganaran las elecciones, invitaron con los brazos abiertos a los representantes de B2Gold a que fueran a la comunidad, siguiendo las órdenes del presidente Ortega. En cambio, los líderes del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Rancho Grande, el otro partido político popular, nunca dejaron clara su posición sobre el proyecto. El cambio abrupto del FSLN en su postura hacia la minería y la falta de una del PLC fueron los catalizadores cruciales que motivaron al padre Teodoro Custer a pronunciarse en contra del proyecto. A medida que aumentaba la oposición local a él, los simpatizantes del FSLN comenzaron a distanciarse de los líderes locales de su partido. Un miembro del FSLN sugirió que no estaba renunciando a su ideología política, sino que esta recuperaba su significado al trabajar con otros con el fin de proteger a la comunidad y a sus miembros de la minería. Asimismo, el exsecretario político del FSLN de Rancho Grande señaló que para un sandinista es fundamental mantener su dignidad y trabajar por las visiones de la comunidad y de sus miembros, es decir, las de una comunidad sin minería (Sánchez González, 2016, 2017).

Los datos de nuestra encuesta de Rancho Grande muestran que el 90% de los encuestados se oponen al proyecto minero. Las dos razones principales por las que lo rechazan están relacionadas con los daños medioambientales de la mina propuesta, como la destrucción del medio ambiente (59%) y la contaminación

---

<sup>71</sup> Según los datos de la encuesta que hicimos en Rancho Grande, aproximadamente el 42% y el 48% de los encuestados se identifican respectivamente con las religiones católica y evangélica. Estos datos también muestran que el porcentaje de encuestados que se identifican con el FSLN y con el PLC es de aproximadamente el 33% y el 11%, respectivamente.

del agua (21%) (véase el capítulo 6). En la carrera por definir las amenazas y las oportunidades que presenta la minería, parece que el discurso a favor del medio ambiente que promovieron las organizaciones locales, incluidos los líderes de la Iglesia, fue mucho más efectivo que aquel que promovieron los actores de la industria y del Gobierno. Hubo factores contextuales especiales que convirtieron a los líderes de la Iglesia en el rostro de la campaña contra la minería, pero su intervención en el conflicto no desvirtuó las opiniones y demandas sobre el proyecto que tenían los campesinos de la comunidad.

### **La resistencia de Rancho Grande**

Más allá del discurso contra la minería que promovieron las organizaciones locales, la Iglesia católica, junto con la Addac y los Guardianes, moldearon las estrategias de movilización que utilizaron los miembros de la comunidad entre 2010 y 2015 (Pérez González, 2015; Gutiérrez Elizondo, 2015). Sin embargo, los líderes católicos implementaron las estrategias de resistencia más completas entre 2013 y 2015, entre las que se encuentran más de 15 marchas pacíficas (tanto a nivel municipal como departamental), talleres de sensibilización, una petición al Gobierno nacional con más de 6 mil firmas, recursos ante los tribunales de Matagalpa y la Corte Suprema de Justicia de Managua y otras acciones, como bloqueos de carreteras y boicots (Cuffe, 2015; Marcus, 2015; Centro Humboldt, 2015b, 2015c). En marzo de 2013, por ejemplo, el padre Pablo Espinoza, párroco de Rancho Grande, encabezó una marcha contra el proyecto con aproximadamente 6 mil participantes (Silva & Martínez, 2013).

En 2014, el movimiento de resistencia de Rancho Grande trascendió a sus líderes religiosos locales y ganó la atención de toda la diócesis de Matagalpa. 43 sacerdotes de la diócesis, encabezados por el obispo Álvarez, firmaron una carta que concluía: «No hay punto de equilibrio en este proyecto entre los beneficios de unos pocos y el daño de la mayoría» (Spalding, 2016, p. 19). Le enviaron esta declaración al presidente Ortega en mayo de 2014, la cual finalmente obtuvo el apoyo de los líderes de la Iglesia católica a nivel nacional. Ese mismo año, en la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica de Nicaragua, los obispos de todo el país mostraron su solidaridad con los miembros de la comunidad y los líderes locales al respaldar la carta que la diócesis de Matagalpa le envió a Ortega (Spalding, 2016).

A medida que los respetados líderes de la Iglesia establecían la dirección de la campaña contra la minería, otros miembros de la comunidad seguían su ejemplo: coordinaban movimientos de resistencia no violentos, los cuales a menudo transmitían mensajes similares a los que promovían sus líderes. Por ejemplo, en

julio de 2014, los padres y los funcionarios escolares convocaron a un «paro escolar» en contra de las «asambleas de aula» de B2Gold. El boicot atrajo la atención de altos funcionarios del Gobierno de los niveles nacional, departamental y municipal que defendían la minería, como la alcaldesa de Rancho Grande, María Isabel González; la viceministra de Energía y Minas, Lorena Lanzas; la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juanita Argeñal; la ministra de Educación, Miriam Ráudez; y el alcalde de Matagalpa, Zadrach Zeledón. Estos funcionarios se apresuraron a ir a Rancho Grande para persuadir a las personas de que detuvieran el boicot. Sin embargo, sus esfuerzos no tuvieron eco en la comunidad porque muchos de ellos nunca antes habían visitado Rancho Grande. A los miembros de la comunidad también les disgustó la incapacidad de estos funcionarios para atender sus demandas, como trabajar de conformidad con la ley para realizar EIA y hacer cumplir los derechos de consulta previa (Centro Humboldt, 2015b)<sup>72</sup>. El paro se mantuvo hasta que las autoridades municipales y el Gobierno nacional cedieron y retiraron a los representantes de B2Gold de las aulas (Pérez González, 2015).

Los esfuerzos de movilización de Rancho Grande no terminaron con el «paro escolar». Un mes después, en agosto de 2014, más de 500 personas comenzaron a marchar pacíficamente en un movimiento que llamaron «¡Por la defensa del bien común, protege a la Madre Tierra!» (López & Dávila, 2014). Sin embargo, la policía antidisturbios detuvo a algunos participantes y confiscó sus tarjetas de identificación y licencias de conducir. Actores del Gobierno también prohibieron que los autobuses transportaran a cualquier persona relacionada con el movimiento de resistencia (Miranda Aburto & Chavarría, 2014). Dos días más tarde, representantes de los ministerios del Gobierno nacional y de las agencias del Gobierno local convocaron a un «diálogo abierto» sobre la minería. Durante el encuentro programado, 3 mil personas llenaron el polideportivo de la comunidad y rechazaron abiertamente el proyecto minero. En el encuentro, un grupo de simpatizantes de la minería, que llevaban camisetas con el logotipo de B2Gold, causaron varios heridos tras incitar a la violencia contra la multitud de personas concentradas en el polideportivo. Otros miembros de la comunidad también denunciaron haber sido acosados y amenazados en otras ocasiones<sup>73</sup>.

---

<sup>72</sup> Algunos ejemplos de estas leyes son: la Ley 217 de 1996 (Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales), el Decreto 76-2006 (Sistema de Evaluación Ambiental) y la Ley 475 de 2003 (Participación Ciudadana de Nicaragua).

<sup>73</sup> Entrevistas hechas por los autores a tres líderes de los Guardianes de Yaoska (Rancho Grande, enero de 2017).

Estos actos represivos no disuadieron a quienes se oponían a la minería ni cambiaron el curso de la campaña contra esta. Por el contrario, los miembros de la comunidad contaban con el apoyo de sus organizaciones locales para superar las dificultades, incluso cuando los actores del Gobierno intentaron aumentar el costo de la acción colectiva. Ese apoyo fortaleció su motivación para seguir luchando contra la minería<sup>74</sup>. Un líder de los Guardianes nos dijo: «cuando una persona enfrentaba un momento difícil, otros miembros de la comunidad ofrecían ayuda, tanto económica como en términos de servicios. Si necesitaban que los llevaran, los llevaban. Si necesitaban comer, comían»<sup>75</sup>. Además, cuando los miembros de la comunidad hicieron una petición contra la mina, algunos agentes del Gobierno intentaron detenerla exigiendo una cuota para firmar. A pesar del obstáculo, los miembros de la comunidad recurrieron a las redes basadas en la confianza que tenían para brindar el apoyo que necesitaban<sup>76</sup>. Como sugirieron los líderes de los Guardianes, «la gente de Rancho Grande se sintió empoderada para proteger a su comunidad de las inminentes amenazas relacionadas con la minería», impulsando su oposición hacia ella<sup>77</sup>.

Como comentamos en la introducción de este capítulo, el conflicto alcanzó su cenit con la «Peregrinación por la vida». Aunque esta manifestación masiva fue el evento que llevó al presidente Ortega a detener el proyecto Rancho Grande, ella se basó en años de actividades de resistencia anteriores que organizaron la Iglesia católica, la Addac y los Guardianes. Incluso el nombre de la manifestación sugiere que se había infundido en el movimiento el discurso no violento y a favor del medio ambiente, a pesar de que en ese momento la campaña sumaba varias organizaciones diferentes en sus filas. Monseñor Sacasa resume la campaña contra la minería de Rancho Grande así: «Rancho Grande se ha convertido en un faro para mucha gente... Rancho Grande y lo que hicimos ahora está iluminando a muchas otras comunidades... Ahora forma parte de la conciencia popular de que uno no puede ir en contra de la Tierra, contra la Naturaleza, contra la Creación de Dios. Y esa conciencia tiene mucho peso» (citado en Sánchez González, 2017, párr. 66).

<sup>74</sup> Entrevistas hechas por los autores a un representante de la Addac (Matagalpa, enero de 2017) y a tres líderes de los Guardianes de Yaoska (Rancho Grande, enero de 2017).

<sup>75</sup> Entrevistas hechas por los autores a tres líderes de los Guardianes de Yaoska (Rancho Grande, enero de 2017).

<sup>76</sup> La supuesta tarifa era de C\$ 200 (aproximadamente US\$ 10; el córdoba, C\$, es la moneda nacional de Nicaragua). Entrevistas hechas por los autores a tres líderes de los Guardianes de Yaoska (Rancho Grande, enero de 2017).

<sup>77</sup> Entrevistas hechas por los autores a tres líderes de los Guardianes de Yaoska (Rancho Grande, enero de 2017).

## Conclusiones

Este capítulo ha ilustrado cómo resurgió la minería en Nicaragua y cómo esta nación se ha convertido en una de las más atractivas de Centroamérica para las inversiones en este sector. Desde 2007, B2Gold ha realizado importantes inversiones en el país. En 2010, buscó establecer una mina de oro a tajo abierto en la comunidad de Rancho Grande y, poco tiempo después, siguió una amplia estrategia para obtener apoyo local para su proyecto. En retrospectiva, Rancho Grande era un caso en el que probablemente la extracción pudo haber pasado a la siguiente etapa en la cadena de suministros dada la estrecha alianza entre los actores de la industria y del Gobierno. Sin embargo, la oportuna intervención de las organizaciones locales, unidas bajo un discurso a favor del medio ambiente que promovieron los líderes de la Iglesia católica, desbarató estos planes. Aunque se trata de períodos muy diferentes, el activismo político de líderes de la Iglesia se asemejó al del período revolucionario sandinista (1979-1990), cuando estaba en pleno apogeo la teología de la liberación. Y lo que es más importante, la intervención de un aliado tan poderoso en nombre de la campaña contra la minería sacó a la luz las contradicciones del capitalismo populista de Ortega, un capitalismo que pretende expandir la frontera extractiva al tiempo que pone en peligro el medio ambiente y los medios de vida de las comunidades que dependen directamente de él.

Al enfocarnos en la participación de los líderes de la Iglesia de Rancho Grande, hacemos un aporte a la limitada literatura en la que se estudia el papel de la religión en los conflictos por recursos (por ejemplo, Spalding, 2011; Arellano-Yanguas, 2014). Las ideas que se tratan en este capítulo representan un cuadro alternativo de la participación de la Iglesia en los movimientos contra la minería que destaca Arellano-Yanguas (2014). Su estudio se centra en el modo en que los actores sociales de base configuran e influyen en la respuesta y la participación de la Iglesia en las campañas contra la minería. Su análisis también parte de la base de que las actitudes de oposición a la minería que se dan entre los individuos se formaron antes de que la Iglesia participara en los conflictos. Por el contrario, este capítulo demuestra que la Iglesia católica fue la organización clave que formó y reforzó las actitudes individuales sobre el medio ambiente mucho antes de que la minería fuera inminente. Los líderes de la Iglesia trabajaron junto a una amplia red de organizaciones comunitarias para difundir la responsabilidad individual de proteger el medio ambiente y, con ello, los medios de vida de la comunidad. Durante la campaña contra la minería, estos líderes presentaron un discurso centrado

en las amenazas para contrarrestar el discurso de oportunidades que provenía de los actores de la industria y del Gobierno. Asimismo, compartieron información esencial sobre los riesgos de la minería, y su participación activa en estrategias preventivas pacíficas sirvió para empoderar a los miembros de la comunidad socialmente comprometidos en otras organizaciones locales para que también se opusieran a las actividades extractivas. Más allá de las amenazas materiales que representaba la minería para la economía agrícola a pequeña escala de la comunidad, el proyecto también suponía amenazas no materiales, porque desafiaba el núcleo de la identidad religiosa de la comunidad y la responsabilidad que tenían sus miembros de proteger el medio ambiente. Los líderes de la Iglesia contribuyeron así a redefinir la naturaleza de estas amenazas y la trayectoria de la campaña.

Al momento de escribir este capítulo, la calidad de la democracia se ha erosionado significativamente en Nicaragua, pues el país ha vuelto al autoritarismo. Aunque la comunidad de Rancho Grande no está directamente amenazada por la minería, sigue siendo incierto el futuro debido a los recientes desarrollos en el país. En unas elecciones fraudulentas en las que la mayoría de los opositores políticos fueron encarcelados, el régimen de Ortega y Murillo se aseguró otro mandato a finales de 2021 (McDonald, 2021). Es el quinto de Ortega como presidente y el segundo de Murillo como vicepresidenta. Desde su regreso al poder en 2007, el presidente Ortega ha aplastado la esperanza de democracia del país. En cambio, para asegurar su reinado en el poder, ha suspendido de facto las garantías constitucionales y deteriorado las ya débiles instituciones estatales del país. También ha atacado violentamente a sus propios ciudadanos. El Gobierno del presidente Ortega ha respondido con formas severas de violencia y represión a las movilizaciones masivas contra su régimen y sus políticas desde abril de 2018. Debido a la intensidad de estas acciones, se ha producido un alto costo humano con al menos 325 muertos, miles de heridos, más de 5 mil detenciones y secuestros y 600 opositores políticos encarcelados en condiciones inhumanas (Sánchez González & Mercado, 2020). Como es comúnmente reconocido, Ortega se ha convertido en el dictador al que se opuso –Anastasio Somoza– y combatió hace tiempo. Es probable que estos acontecimientos políticos representen un obstáculo importante para la participación social en Rancho Grande y en el resto del país.



## 5. No nos moveremos

En abril de 2016, unos mil habitantes de Fuleni bloquearon la carretera principal de Ocilwane para expresar su rechazo a la mina a tajo abierto que propuso la empresa minera Ibutho Coal. Estaban muy preocupados por los efectos adversos que tendría la mina para los habitantes de las zonas aledañas, así como por la proximidad del proyecto al parque Hluhluwe-iMfolozi, la reserva natural más antigua de África. El plan de Ibutho afectaría sobre todo a los habitantes de Ocilwane, quienes tendrían que ser reubicados para dar paso a la mina propuesta. La decisión fue polémica principalmente porque en la década de 1960, durante el régimen del *apartheid* de Sudáfrica, los habitantes de los pueblos cercanos fueron reubicados en Ocilwane para permitir la construcción del Owen Sitole Agricultural College. Por ello, los nuevos planes para reubicar a los aldeanos volvieron a suscitar fuertes emociones y enfurecieron a muchos miembros de la comunidad. Los habitantes sostenían una gran pancarta que decía: «No nos moveremos» mientras bloqueaban la carretera.

Hay numerosos conflictos por recursos que implican enfrentamientos entre la minería y la agricultura y la movilización es una estrategia preventiva común para frustrar las propuestas de explotación minera. Los casos de Tía María y Rancho Grande son dos ejemplos de ello (véanse los capítulos 3 y 4). Por el contrario, al ser las comunidades que rodean a Fuleni zonas de agricultura de subsistencia donde las familias cosechan y viven de la tierra, en ellas, más que un enfrentamiento entre la minería y una economía agrícola robusta y organizada (como se vio en el capítulo 3), el caso de Fuleni se relaciona más bien con la preservación de la vida silvestre, ya que el parque Hluhluwe-iMfolozi alberga la mayor población de rinocerontes

blancos del sur en peligro de extinción del mundo. Esta zona turística también tiene importancia cultural e histórica, pues el rey Shaka de la nación zulú vivió y cazó allí cuando era joven. Además, en Fuleni no fueron habituales las movilizaciones generalizadas y las confrontaciones con la policía, a pesar de que los manifestantes experimentaron intimidaciones y amenazas. En cambio, las redes transnacionales de defensa de la vida silvestre que no pertenecen a Fuleni han enfrentado a Ibutho Coal a través del sistema judicial. En comparación con los otros dos casos, en el de Fuleni ha sido más importante la judicialización del conflicto.

Asimismo, la presencia de líderes y consejos tradicionales hace que el caso de Fuleni sea diferente de los ejemplos descritos en los capítulos anteriores: ellos fueron el medio de Gobierno indirecto durante el período colonial de Sudáfrica. Más tarde se convirtieron en los agentes administrativos del régimen del *apartheid*: apoyaban sus políticas y acciones y su rendición de cuentas ante las circunscripciones rurales era limitada (Morare, 2016). En la actualidad, estos líderes tradicionales –también conocidos como jefes locales– operan como «guardianes de la tierra» y, según muestran algunas evidencias, son actores que no siempre consultan a las comunidades locales sobre las decisiones que afectan sus territorios, incluida la extracción de recursos (Leonard, 2019). Fuleni no fue la excepción.

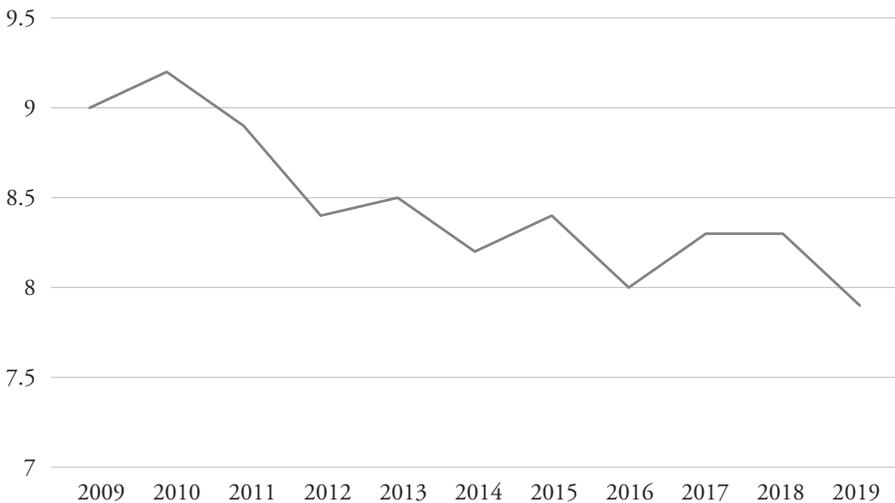
Estas diferencias relacionadas con la importancia de la vida silvestre, la judicialización del conflicto y la presencia de líderes tradicionales hacen que Fuleni sea un caso interesante para examinar el impacto de la participación social en las actitudes hacia la minería. En las zonas de agricultura de subsistencia de Fuleni no había organizaciones locales agrícolas como las que hay en Tía María y Rancho Grande, es decir, asociaciones de productores y juntas de riego. Por el contrario, en Fuleni las redes transnacionales de defensa de la vida silvestre cuyas sedes están ubicadas fuera de la zona de impacto de la extracción han desempeñado un papel importante para configurar la dirección de la campaña contra Ibutho Coal. Por tanto, los efectos de la participación social en las actitudes relacionadas con la minería pueden no ser tan directos como ocurre en los otros dos casos.

Empezamos este capítulo destacando la importancia de la minería para la economía sudafricana y la llegada de Ibutho Coal a Fuleni. Luego describimos la comunidad de Fuleni y las organizaciones que se enfrentan al impacto de la mina propuesta en la zona circundante. En las últimas secciones de este capítulo, analizamos el impacto que tuvieron estas organizaciones en las actitudes individuales hacia la minería y las estrategias de movilización que se desarrollaron durante la campaña contra Ibutho Coal.

## La minería en Sudáfrica

Al igual que Perú y Nicaragua, Sudáfrica cuenta con abundantes recursos minerales. El país es el mayor productor mundial de oro y platino y uno de los principales de carbón y diamantes. La minería juega un papel integral en el desarrollo económico y social del país y es una importante fuente de rentas por recursos. En 2008, por ejemplo, justo antes de la gran recesión de ese año, las rentas por recursos aumentaron hasta el 11,9% del PBI, una cifra que no se había visto desde principios de la década de 1980 (World Bank Open Data; 2021). Tan solo las regalías por carbón pasaron de R. 702 millones<sup>78</sup> (alrededor de US\$ 47,8 millones) entre 2015 y 2016 a R. 2.059 millones (alrededor de US\$ 140,3 millones) entre 2018 y 2019, un aumento de casi el 200%. En términos reales, entre 2009 y 2019 la industria minera ha aportado, en promedio, un 8% del PBI total anual del país (véase la figura 9) (Minerals Council South Africa, 2020). En consecuencia, los Gobiernos sudafricanos han apoyado mucho a las corporaciones mineras privadas debido a su contribución a los ingresos fiscales; es por ello que los actores de la industria ocupan una posición privilegiada en el Gobierno en comparación con otros sectores (Adler, Claassen, Godfrey, & Turton, 2007).

Figura 9  
Aportes de la industria minera al PBI de Sudáfrica, 2009-2019 (en porcentajes)



Fuente: Minerals Council South Africa (2020).

<sup>78</sup> El rand (R.) es la moneda nacional de Sudáfrica.

Para describir los estrechos vínculos entre el Gobierno y la industria minera, los académicos sudafricanos hablan del «complejo minero-energético» (Fine & Rustonjee, 1996; Sharife & Bond, 2011), parecido al complejo militar-industrial estadounidense. Mediante este acuerdo, las empresas mineras privadas suministran carbón barato a la compañía estatal de servicios públicos Eskom y, a su vez, Eskom les suministra energía barata a las minas y fundiciones de metales. Eskom produce más del 90% de la electricidad del país, la cual proviene de la quema de carbón, que es barato y abundante. Así, pues, el carbón es particularmente un recurso importante para la economía sudafricana. Sharife y Bond (2011), entre otros, también sostienen que estos nexos entre el Gobierno y las empresas no han favorecido a la sociedad ni al medio ambiente en Sudáfrica. Por ejemplo, el régimen del *apartheid* permitió «contratar mano de obra barata para extraer carbón y alimentar los hornos» (Peek & Taylor, 2015, p. 11). Además, la compañía Eskom es también la mayor contaminadora del país e incumple las normas de calidad del aire establecidas por el propio Gobierno de Sudáfrica (Sguazzin, 2020). El control del carbón en la economía del país no va a cambiar pronto, y la llegada de Ibutho Coal confirma esta dependencia de dicho mineral.

## **Ibutho Coal**

Ibutho Coal (Pty) Ltd. se creó en 2006 con el fin de desarrollar y explotar comercialmente los recursos minerales de carbón de Sudáfrica. Su objetivo era poner en marcha una mina a tajo abierto en la parte norte de Fuleni y seguir la veta de carbón por aproximadamente 40 kilómetros, hacia eShowe (Mokgalaka, 2015). La empresa esperaba producir antracita de bajo contenido de azufre durante los 30 años de vida de la mina a razón de 500 mil toneladas por año. El carbón extraído de la mina sería transportado a través de Richards Bay, que se encuentra a unos 45 kilómetros al sureste de la zona del proyecto.

Para obtener el apoyo local, Ibutho Coal propuso generar empleos y desarrollo sostenible para la comunidad. Según Jacana Consultancy, que ayudó a Ibutho Coal a preparar su informe de evaluación medioambiental, se esperaba que el proyecto creara 200 puestos de trabajo permanentes, que podrían aumentar en alrededor de 400 más al cabo de 5 años. Aproximadamente la mitad de estos puestos se destinarían a los miembros de la comunidad. Además, como parte de su plan de trabajo social, la empresa propuso ofrecer a los miembros de la comunidad educación y formación básica para adultos, formación empresarial básica, formación artesanal, becas y pasantías por valor de R. 6,6 millones (alrededor de US\$ 400 mil). El paquete incluía becas en mecánica e ingeniería eléctrica,

recursos humanos y geología, así como 31 oportunidades de aprendizaje para operadores de máquinas, conductores de camiones, personal de salud, seguridad y recursos humanos, mecánicos, electricistas, montadores y torneros. Además, la empresa del carbón tenía previsto apoyar proyectos educativos y de pequeñas empresas por valor de R. 2 millones (alrededor de US\$ 120 mil) (Carnie, 2015).

Ibutho Coal describió su proyecto de minería de carbón en Fuleni como una iniciativa de Black Economic Empowerment (Empoderamiento Económico Negro, BEE), que tendría una participación del 44,9%. BEE fue lanzado por el Congreso Nacional Africano cuando terminó el régimen del *apartheid* en 1994 y fomenta «transferir participaciones en empresas que son propiedad de blancos a una nueva clase de inversores negros» (*The Economist*, 2013). Ibutho también ofreció el 5% del capital de la empresa a través de un fideicomiso de participación comunitaria. Por último, la empresa expuso que su proyecto se ajustaba a la Visión 2030 de la Comisión de Planificación de KwaZulu-Natal. Según este documento de planificación, para 2030 la provincia de KwaZulu-Natal se habrá convertido en la «capital de las competencias» de Sudáfrica (EThekweni Municipality, 2014).

La llegada de Ibutho Coal constituyó cierta sorpresa en Fuleni. La empresa solicitó y recibió dos licencias de exploración consecutivas en o alrededor de 2009 y 2012, respectivamente (Youens, 2016). Una licencia de este tipo se define como «un permiso que le permite a una empresa o a un individuo inspeccionar o investigar un área de terreno con el fin de identificar un yacimiento mineral real o probable» (Youens, 2016). Entre otros requisitos, se otorga si las operaciones mineras no van a provocar contaminación inaceptable, degradación ecológica o daño al medio ambiente, y cuando el solicitante tiene la capacidad de cumplir la normatividad vigente en materia de salud y seguridad. Si el Departamento de Recursos Minerales acepta una solicitud, debe informar a las partes interesadas y afectadas en un plazo de 14 días desde que se ha aprobado tal solicitud. A partir de este tiempo, las partes interesadas y afectadas tienen 30 días para presentar sus observaciones sobre esa solicitud. Una de las muchas controversias que rodean a Ibutho Coal fue su «flagrante desprecio por la ley», ya que los habitantes de Fuleni no se enteraron de estas licencias de exploración hasta principios de 2014, cuando el proyecto se acercaba más bien a su fase de ejecución (Youens, 2016).

## **La comunidad de Fuleni**

Ubicada en el norte de KwaZulu-Natal, en el municipio del distrito de uMkhanyakude, Fuleni puede describirse como una comunidad rural conformada por

cuatro aldeas: Ocilwane, Nthuthunga, Nthuthunga Two y Novunula; las cuatro están en la zona de impacto directo de la concesión minera. Su población es principalmente rural y tiene un limitado acceso a servicios sociales. Según el último censo de 2011, el 14,6% de la población mayor de 20 años no tiene educación formal, solo el 5,5% cuenta con un inodoro conectado al alcantarillado y el 10,5% tiene agua corriente dentro de su hogar (Statistics South Africa, 2011). Además, las tasas de desempleo del distrito son notables y constantes: alrededor del 42%, siendo el desempleo juvenil particularmente alto: 50,4%. La continua falta de oportunidades económicas en la región implica que «más del 90% de la población [dependa] de la agricultura de subsistencia para alimentar a sus familias» (uMfolozi Municipality, 2017, p. 15).

Debido a la agricultura de subsistencia, la zona de Fuleni no tenía la densidad organizacional rica y diversa que es característica de un valle agrícola fuerte, como el de Tambo, en la zona de Tía María. Los habitantes de la comunidad tampoco estaban conectados a un mercado más amplio. Dicho esto, cuando visitamos la zona, hablamos con varios miembros de dos organizaciones activas: Umbumbano Youth Organisation y MCEJO. La Umbumbano Youth es una asociación local cuyo propósito es buscar oportunidades para los jóvenes después de graduarse de la escuela secundaria<sup>79</sup>. Aparte del parque Hluhluwe-iMfolozi, la economía local de Fuleni no ofrece muchas oportunidades de empleo para estos jóvenes y sus sueños profesionales no se cumplen en gran medida<sup>80</sup>. Por ejemplo, después de terminar la escuela secundaria, una habitante de Fuleni empezó a estudiar derecho en Pretoria, pero no pudo terminar su carrera porque la situación financiera de su familia cambió inesperadamente; en el momento de nuestra entrevista, ella todavía se encontraba desempleada<sup>81</sup>. Leonard sugiere que los jóvenes no estaban necesariamente en contra de la minería. Un miembro de Umbumbano Youth señaló: «Creo que nosotros los jóvenes apoyamos la mina, como yo lo hago, pero no estoy seguro de que vayan a considerarme [para una oportunidad de trabajo]» (2020, p. 14).

MCEJO, otra asociación local, al momento de nuestra visita representaba a unos 530 miembros de las aldeas cercanas a Fuleni<sup>82</sup>. Fue creada en 2014, poco después de que se conocieran los planes de Ibutho Coal, por defensores de los

---

<sup>79</sup> Entrevista de los autores a miembros de Umbumbano Youth (Fuleni, julio de 2017).

<sup>80</sup> Umbumbano Youth busca unir a los jóvenes de Fuleni y promover el desarrollo económico sostenible de la comunidad.

<sup>81</sup> Entrevista de los autores a los habitantes de Fuleni (Fuleni, julio de 2017).

<sup>82</sup> Entrevista de los autores a miembros de MCEJO (Fuleni, julio de 2017).

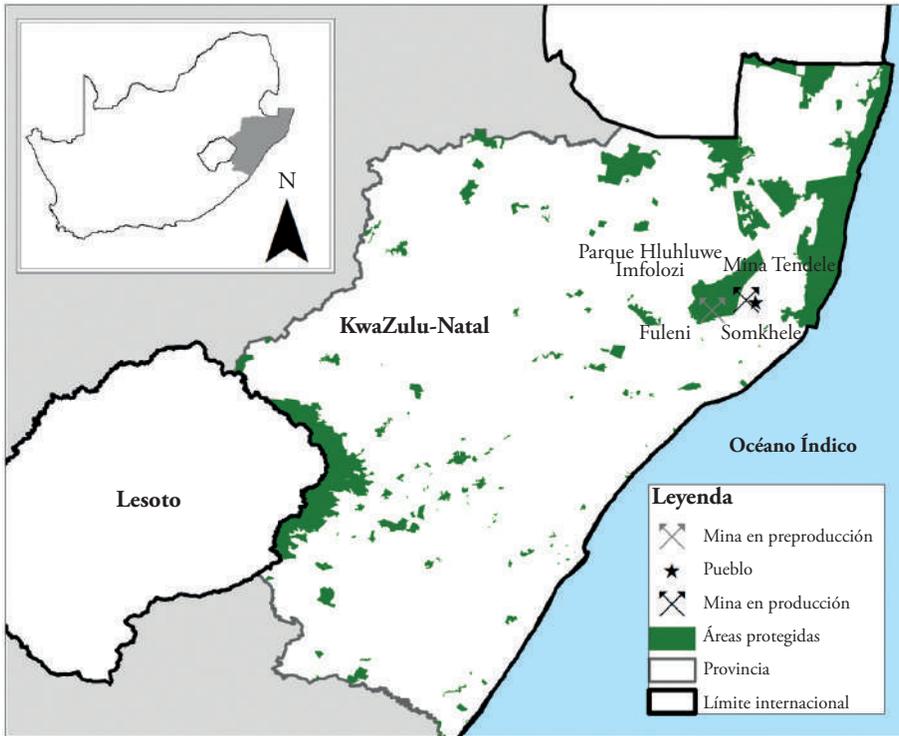
medios de vida, así como del aire y del agua limpios. Por su naturaleza, la organización rechaza la posible reubicación de los habitantes de la zona para dar lugar a la mina (Mahapa, 2020). Los objetivos de Umbumbano Youth y MCEJO se oponen entre sí y sugieren una posible división respecto al impacto de la minería del carbón.

### **Una reacción a dos niveles frente a Ibutho Coal**

La mina que propone Ibutho afectaría no solo los medios de vida de la comunidad de Fuleni, sino también el parque Hluhluwe-iMfolozi (véase la figura 10). Además de ser considerado parte del patrimonio cultural de la nación zulú, este parque es un destino turístico y alberga la mayor población de rinocerontes del mundo en peligro de extinción, como hemos dicho. Estos impactos proyectados desencadenaron una reacción a dos niveles: uno, enfocado en la comunidad local, que se aproxima a lo que Guha y Martínez-Alier (1997, p. 260) caracterizan como «ecologismo de los pobres»; el otro, de carácter transnacional y más relacionado con el conservacionismo de la naturaleza o de las zonas silvestres. Como se explica más adelante, el impacto negativo de las operaciones de una mina de carbón relativamente nueva cerca de Fuleni (Tendele) y la exitosa campaña contra la minería que adelantó la comunidad de Xolobeni en la provincia de Cabo Oriental contribuyeron a vincular estas reacciones y movilizaron importantes recursos humanos y materiales.

Cuando Guha y Martínez-Alier hablan del «ecologismo de los pobres», abogan por «la defensa del medio ambiente para asegurar el sustento de quienes son directamente afectados por los conflictos vinculados a la extracción de recursos y la eliminación de residuos» (1997, p. 260). En el caso de Fuleni, este entorno está relacionado con la agricultura de subsistencia, ya que la gente cosecha y vive de la tierra. Geográficamente, las aldeas Ocilwane, Nthuthunga, Nthuthunga Two y Novunula están dispersas y las carreteras que las conectan no están pavimentadas. Además de la reubicación de algunos de sus habitantes para dar lugar a la mina —lo que, según algunas estimaciones, afecta a unos 1.600 hogares y a unas 16 mil personas—, también preocupa bastante la disponibilidad de agua (Youens, 2016). De por sí ya es habitual su escasez en la zona, y destinar la que se necesita a extraer carbón solo empeorará las cosas tanto para la agricultura de subsistencia como para los medios de vida. El polvo de carbón también amenaza la salud de las familias y la productividad agrícola. MCEJO es un buen ejemplo de una organización que aboga por el «ecologismo de los pobres» y sus dirigentes desempeñaron un papel clave para formular demandas de rechazo a la minería.

Figura 10  
Ubicación del proyecto minero de Fuleni



La comunidad de Fuleni limita con el famoso parque Hluhluwe-iMfolozi, por lo cual la mina propuesta atrajo inmediatamente la atención de las redes transnacionales de defensa de la vida silvestre interesadas en el conservacionismo de los espacios naturales. Por ejemplo, el Global Environment Trust (GET), cuya sede está ubicada en Hillcrest, cerca de la ciudad de Durban, era una organización que busca promover el uso sostenible del entorno natural y la biodiversidad<sup>83</sup>. GET cuestiona las actividades humanas que dañan las zonas de conservación o contribuyen al empobrecimiento de las comunidades afectadas. A finales de la década de 1980, algunos de sus miembros participaron en la campaña para detener la minería a tajo abierto en el Gran Parque del Humedal de Santa Lucía, ubicado en la costa oriental de KwaZulu-Natal. Gracias a sus exitosos esfuerzos de conservación, el parque Santa Lucía fue posteriormente declarado Patrimonio

<sup>83</sup> Entrevista de los autores a Sheila Berry, miembro fundadora de GET (Hillcrest, julio de 2017).

de la Humanidad por la Unesco (Mail & Guardian, 1997). GET se ha convertido en uno de los opositores más notorios de Ibutho Coal. En mayo de 2014, Sheila Berry lanzó Salvemos los Espacios Naturales de iMfolozi (Save Our iMfolozi Wilderness, SOiW), una campaña en contra de la mina, la cual ha sido influyente para defender la conservación de los espacios naturales y establecer alianzas con otras ONG y comunidades afectadas por la minería. También participó en esta campaña groundWork, otra OJA sin ánimo de lucro<sup>84</sup>, que se encuentra en Pietermaritzburg y busca generar conciencia sobre los efectos negativos del carbón en la salud de la gente, el medio ambiente y el cambio climático.

En agosto de 2015, se formó la Alianza Comunitaria y Silvestre de iMfolozi (ICWA), entre cuyos miembros se encuentran GET, MCEJO, la MCPA, groundWork, el Grupo de Acción por los Espacios Naturales, la Escuela de Liderazgo en Espacios Naturales, el Fondo de Conservación de Áreas Silvestres, el Fondo Africano para la Conservación, la Sociedad para la Vida Silvestre y el Medio Ambiente de Sudáfrica (Wessa), la Fundación Memorial Magqubu Ntombela y Macua. El propio nombre de la alianza sugiere la doble reacción que habría ante Ibutho Coal: una, local y enfocada en los medios de vida de la comunidad; la otra, transnacional y centrada en el conservacionismo de los espacios naturales. Sin embargo, MCEJO y MCPA eran las únicas organizaciones que tenían presencia física en la zona de Fuleni.

Los grupos transnacionales de defensa de la vida silvestre también aportaron recursos a la campaña contra la minería del carbón. Algunas de las organizaciones internacionales que se destacaron en esto fueron la Fundación Gaia (Londres, Reino Unido), la Fundación Wild (Colorado, Estados Unidos) y el Grupo de Expertos en Espacios Naturales de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza (Suiza). A través de la campaña The Crowd vs. Ibutho Coal, también celebridades como Gillian Anderson, Kristin Bauer van Straten y Stephen Fry han hablado en favor de la comunidad de Fuleni y de los rinocerontes blancos amenazados (ver The Crowd Versus, 2016). Algunas de sus declaraciones de apoyo fueron: «Me opongo firmemente a la solicitud de Ibutho Coal para desarrollar una mina de carbón» (Anderson); «La contaminación de la mina de carbón será devastadora para los rinocerontes que están en peligro de extinción» (Bauer); y «Los rinocerontes vs. la mina de carbón. Estoy con los rinocerontes» (Fry).

---

<sup>84</sup> Entrevista de los autores a Bobby Peek, director de groundWork (Pietermaritzburg, julio de 2017).

La minería del carbón también amenazaba la industria turística relacionada con el parque Hluhluwe-iMfolozi. Con un desempleo tan persistente, muchos aseguran que esta actividad genera un número importante de oportunidades de trabajo para la región, las cuales estarían en riesgo por las actividades mineras. Se estima que el turismo y los viajes representaron unos 726.500 empleos directos en el país en 2017 (Tshivhengwa, 2019). En comparación, 82.372 puestos de trabajo estuvieron relacionados con la minería y la producción de carbón en ese mismo año (Minerals Council of South Africa, 2018). Algunos defensores del turismo también consideran que el empleo que este genera es más estable que el que crea la minería, porque la vida útil de la mina es finita, mientras que la reserva natural puede atraer turistas de forma continua. Al respecto, y reflejando el mensaje «Pan para hoy, hambre para mañana» (Spalding, 2016, p. 180) de Rancho Grande (ver el capítulo 4), un miembro de ICWA dijo:

Los trabajos tienden a tener una vida más larga. Mientras que se prevé que la mina tendrá una vida de treinta y dos años... la mentalidad sobre las minas [es que] solo funcionan cuando generan ganancias, así que es horroroso haber puesto en marcha la mina para luego desaparecer y dejar este gran agujero (citado en Leonard, 2020, p. 329).

Algunos miembros de Umbumbano Youth también destacaron la importancia del turismo para el desarrollo económico sostenible de la región, y por ello participaron en la campaña contra Ibutho Coal (Leonard, 2020, p. 330).

En resumen, cuando Ibutho Coal llegó a la zona, se desencadenó una acción conjunta a nivel local y transnacional. Las organizaciones locales que nacieron en la zona, como MCEJO y MCPA, fueron reactivas en la medida en que se crearon en respuesta a la minería. Estas no surgieron a partir de organizaciones locales agrícolas, como la junta de riego del valle de Tambo (véase el capítulo 3) y la cooperativa Ríos de Agua Viva (véase el capítulo 4), sino que trataban de proteger los medios de vida de la comunidad. Mientras tanto, las redes transnacionales de defensa de la vida silvestre que estaban fuera de Fuleni abogaron por el conservacionismo de los espacios naturales. Desde el punto de vista étnico y de ingresos, estos dos grupos son más diversos de lo que se podría imaginar. Además, las operaciones de Tendele, la mina vecina, que está cerca de la comunidad de Somkhlele, pusieron en evidencia los efectos externos negativos asociados con la minería del carbón y permitieron mostrar sus consecuencias adversas en los medios de vida y el medio ambiente. Tendele sirvió para disminuir las diferencias entre los que luchaban por el «ecologismo de los pobres» y los que apoyaban el conservacionismo de los espacios naturales.

## Somkhele

La mina de carbón Tendele empezó a funcionar en la zona de Somkhele en 2007. También se le conoce como la mina de carbón de Somkhele y pertenece al grupo sudafricano Petmin. Esta mina es la mayor productora del país de antracita metalúrgica de alta calidad, un tipo de carbón rico en energía, y tiene capacidad de producir más de 1,2 toneladas métricas anuales, lo que abastece a mercados nacionales e internacionales. Según Petmin Group, la mina genera empleo para casi mil personas y apoya el desarrollo social y económico de la comunidad de Somkhele (Petmin, s. f.). En 2015, se transfirió el 20% de la propiedad de la mina a la comunidad de Mpukunyoni para respaldar proyectos de desarrollo local y apoyar a los jóvenes locales.

Al igual que Fuleni, la comunidad de Somkhele es una zona de agricultura de subsistencia. En cuanto a la cadena de suministros, hay poca evidencia de que hubiese resistencia por parte de la comunidad anfitriona en la etapa de acceso a los recursos. Kirsten Youens, la abogada especializada en justicia ambiental que ha representado a varios clientes en Fuleni y Somkhele, sugiere que cuando llegó el proyecto «muchas personas fueron engañadas, pues se les hizo creer que la mina era lo mejor para ellas» (2018). Sin embargo, cuando Tendele avanzó a lo largo de la cadena de suministros hasta la etapa de extracción, produjo una serie de efectos externos negativos que vale la pena discutir.

Para empezar, por varios años la mina funcionó sin una licencia válida de uso del agua; y como utiliza agua subterránea para lavar el carbón, los miembros de la comunidad de Somkhele han sufrido escasez de agua (GET, 2019). Ellos dependen de los camiones cisterna para obtener agua y, si pueden pagarlos, de grandes tanques de plástico para almacenarla. Asimismo, se han quejado del exceso de polvo de carbón, que afecta su salud y sus medios de vida; por otra parte, las explosiones en la mina han dañado las paredes y las estructuras de varias viviendas (Jolly, 2016). Además, unos 72 hogares fueron reubicados en la zona de KwaQubuka para dar lugar a la mina. En ese momento, Tendele pagó a los miembros de la comunidad el valor de las viviendas, pero no el de sus tierras. Según afirmó la empresa, los habitantes de las zonas tradicionales del consejo de liderazgo no tenían derecho a cobrar por sus tierras porque las tierras tribales son «propiedad del rey y son administradas por la Junta Fiduciaria de Ingonyama» (ITB) (Tendele Coal Mining, 2016). Este problema sigue sin resolverse. Desplazar hogares también implicó exhumar y reubicar cientos de tumbas, pero la empresa no tuvo en cuenta las importantes tradiciones asociadas con las sepulturas en la cultura

zulú. Youens resume las quejas de los miembros de la comunidad de la siguiente manera:

Es difícil imaginar cómo se siente uno cuando le piden que desocupe su casa, que entregue sus tierras, que busque otro lugar para vivir, que mueva sus pertenencias y su ganado, que exhume y traslade las tumbas ancestrales y que construya una nueva casa para empezar la vida desde cero, todo ello por unos escasos doscientos cincuenta mil rands. El sufrimiento es tanto físico como emocional. Y también es espiritual (Youens, 2016).

A pesar de estas adversidades, la explotación de la mina fomentó la formación y presencia de varias organizaciones: algunas de ellas buscaban detener la mina y otras querían que la empresa mejorara las condiciones locales. Por ejemplo, en 2013 los miembros de la comunidad de los alrededores de Somkhele formaron la MCPA. Esta organización denunció varios daños medioambientales que causó Tendele, pero también pidió oportunidades de empleo y la adquisición de bienes y servicios que ofrecían los proveedores locales (Makhanya, 2016). A falta de organizaciones en el lugar, fue difícil crear esta asociación desde cero. Como dijo un dirigente de MCPA, «hemos tropezado aquí y allá, pero nuestra resiliencia valió la pena» (Makhanya, 2016).

Cuando visitamos la comunidad de Somkhele, también hablamos con miembros de WoMin, una alianza por los derechos de las mujeres que busca crear conciencia sobre los efectos de las actividades extractivas en las mujeres de bajos ingresos y de la clase trabajadora<sup>85</sup>. Las mujeres suelen ser las primeras en experimentar los efectos adversos de la minería y, por tanto, tienden a desempeñar un papel destacado en las campañas contra esta. Desafortunadamente, como consecuencia de su notoria oposición, también pueden ser víctimas de acoso y ataques. WoMin se lanzó en 2013 con una oficina central en Johannesburgo, y tiene presencia regional en las zonas de Fuleni y Somkhele. Dada la proximidad de estas dos comunidades, algunas de las organizaciones activas en Somkhele trabajaron conjuntamente con las de Fuleni. Los miembros de MCEJO también participaron en la campaña contra Tendele.

En general, Tendele se convirtió en un punto de referencia para quienes defendían los medios de vida y para quienes abogaban por el conservacionismo de los espacios naturales. Y mostró en qué podría convertirse la comunidad de Fuleni si seguían adelante los planes de Ibutho Coal. La escasez de agua, el polvo de carbón y la voladura de minas afectarían los medios de vida de la comunidad

---

<sup>85</sup> Entrevista de los autores a miembros de WoMin (Somkhele, julio de 2017).

y la reserva natural. De hecho, en múltiples entrevistas se hizo referencia a los daños medioambientales causados por la mina de Tendele<sup>86</sup>. Sin embargo, con la excepción de MCPA en Somkhele y MCEJO en Fuleni, la mayoría de las organizaciones que participaban en las campañas contra la minería no nacieron en la zona de impacto directo de la extracción. Organizaciones como GET, groundWork y Macua, aunque comparten objetivos similares a MCEJO y MCPA, estaban geográficamente muy alejadas de las comunidades afectadas. Dadas estas circunstancias, siguen sin ser claros los efectos de estas organizaciones locales en las actitudes hacia la minería.

### **El impacto de las organizaciones ambientales en las actitudes hacia la minería**

Para reformular nuestro argumento central, la participación social nos permite explorar las raíces de las opiniones individuales sobre la minería, opiniones que posteriormente influyen en el momento de hacer demandas. Al participar en organizaciones locales, los individuos obtienen información fundamental sobre las amenazas de la minería para su comunidad y se sienten empoderados para enfrentarlas. También desarrollan una concepción de comunidad más fuerte, que se concentra en las amenazas materiales y no materiales del proyecto; por ello, consideran que la minería es incompatible con los medios de vida existentes o con el medio ambiente. Nuestro trabajo de campo permitió explorar cómo la participación social moldeó o reforzó las actitudes hacia la extracción de recursos en este caso.

Con ayuda de las redes transnacionales de defensa de la vida silvestre, organizaciones locales como MCEJO y MCPA desempeñaron un papel destacado al difundir información sobre los efectos adversos de la minería del carbón. La estrategia de estos grupos tuvo dos partes. Una consistió en llevar a habitantes de otras zonas afectadas por la minería a la de Fuleni. En septiembre de 2016, por ejemplo, miembros de las comunidades de Highveld, Waterberg, Newcastle y Xolobeni visitaron Fuleni. Al hacerlo, compartieron sus experiencias sobre los impactos negativos de la minería en los medios de vida y cuestionaron los supuestos beneficios de la extracción, sobre todo cuando no se cumplen las promesas de generación de empleos (groundWork, 2016). La otra parte consistió en llevar a grupos de habitantes de Fuleni en «excursiones tóxicas» a la zona de Somkhele. Allí, los miembros de la comunidad de Fuleni fueron testigos de primera mano, al igual que nosotros, de la

<sup>86</sup> Entrevista de los autores a habitantes de Somkhele (julio de 2017).

lluvia de polvo de carbón y del agrietamiento de las casas por la explosión de minas y, por último, pero no menos importante, de la escasez de agua (groundWork, 2016). Las visitas a la zona de Fuleni que hicieron otras comunidades afectadas por la minería y las que realizaron a la zona de Somkhele los habitantes de Fuleni se convirtieron en una especie de escuela ambiental viva. Así, las amenazas abstractas de la minería del carbón pasaron a ser representaciones concretas.

Además de que los aldeanos pudieron compartir sus experiencias sobre el impacto de la minería y sobre la relación de las empresas mineras con las comunidades, las reuniones pretendían fomentar la solidaridad entre estas comunidades, ya que todas enfrentaban una lucha común. En uno de estos intercambios, cerca de Melmoth, los líderes de MCEJO y MCPA se refirieron a la lucha de la comunidad de Xolobeni, ubicada en la provincia de Cabo Oriental, contra la minería<sup>87</sup>. Posiblemente, este caso es una de las campañas más largas contra la extracción en la Sudáfrica contemporánea. Desde 1996, la Autoridad Tribal de Amadiba autorizó a Mineral Resource Commodities Ltd., una empresa minera australiana, a que extrajera ilmenita —una fuente de titanio— y otros minerales de las dunas de Wild Coast. Para conseguir el apoyo local, uno de los jefes locales fue nombrado director de la empresa minera y otros recibieron diversos beneficios. Sin embargo, los aldeanos se opusieron fuertemente a esta concesión en sus tierras. El prolongado conflicto provocó el asesinato de Sikhosiphi *Bazooka* Rhadebe, líder del Comité de Crisis de Amadiba. Recién en 2018, el Tribunal Superior de North Gauteng dictaminó que el Gobierno sudafricano no podía otorgar una licencia para la mina de titanio propuesta sin el consentimiento de la comunidad. El caso de Xolobeni influyó en las opiniones de los líderes de MCEJO y MCPA, quienes también comprendieron que se enfrentaban a una gran tarea al oponerse a la minería, además de los posibles riesgos individuales.

A finales de 2015, un líder de MCEJO asistió a un taller de seis días en Durban para aprender a grabar, editar y compartir videos. La Escuela de Liderazgo en Espacios Naturales apoyó esta capacitación. Aunque este líder trabajó incansablemente para crear conciencia sobre los problemas de la minería que afectan a las comunidades de Fuleni y Somkhele, también notó que a veces sus mensajes se pasaban por alto<sup>88</sup>. Con evidencias visuales, este líder argumentó que sería difícil poner en duda la autenticidad de los acontecimientos que afectan los medios de vida de la comunidad. Sheila Berry, de GET, consideró que esta capacitación era

---

<sup>87</sup> Comentarios personales de los autores a partir de la visita de campo (Melmoth, julio de 2017).

<sup>88</sup> Entrevista de los autores a miembros de MCEJO (Fuleni, julio de 2017).

una forma de empoderar las luchas sociales de las comunidades afectadas por la minería y, recordando a este líder, señaló que «es fácil desestimar las palabras de alguien, pero no es tan fácil desestimar las evidencias visuales» (Njabulo Ndlovu, 2015).

La participación en organizaciones locales demostró autoeficacia y confianza. El apoyo que recibieron los líderes locales por parte de sus organizaciones también sirvió para alentar sus acciones. Por ejemplo, un representante de MCEJO señaló que la organización surgió como respuesta a la falta de rendición de cuentas de las autoridades tribales y los concejales locales ante los miembros de la comunidad. Oponiéndose a la mina de carbón propuesta, este representante declaró: «Somos como sus embajadores. Siempre estamos preparados para luchar contra la mina propuesta» (Olalde, 2016). También un líder de MCPA escribió un memorando de quejas dirigido a Tendele y al Departamento de Recursos Minerales. En este manifestó que las acciones de MCPA estaban «inspiradas en los mensajes de apoyo que recibieron de los miembros de la comunidad». Para mostrar la resistencia de la comunidad, citó al intelectual ruso Mikhail Bakunin. El pasaje decía: «Al esforzarse por hacer lo imposible, el hombre siempre ha logrado lo que es posible. Y aquellos que sabiamente se han limitado a lo que creían posible, jamás han dado un solo paso adelante» (Makhanya, 2016).

En zonas de agricultura de subsistencia como Fuleni, las personas se apoyan mutuamente y estas interacciones entre iguales generan confianza entre los miembros de la comunidad. El representante de MCEJO habló de cómo se han mantenido los miembros de la comunidad por décadas a través de prácticas agrícolas ambientalmente sostenibles (5050 Community, 2018). Por ejemplo, él dijo que sacrificaría una vaca en el primer trimestre del año y la dividiría en cuatro partes; luego se quedaría con una de ellas y compartiría las otras con tres aldeanos; en el segundo trimestre, uno de estos tres aldeanos tendría que hacer lo mismo y así sucesivamente. El representante también explicó que la minería del carbón ponía en peligro estas prácticas agrícolas debido a la limitada disponibilidad de agua. Tales interacciones en la agricultura pueden considerarse una forma de confianza relacional, ya que era más probable que los miembros de la comunidad aceptaran la información sobre la minería que recibían de otros miembros de ella, y se mostraban escépticos ante la que daban los actores de la industria y del Gobierno.

Sin embargo, sigue sin ser claro qué tan efectivas fueron las organizaciones locales en promover una concepción de comunidad libre de minería. Aunque los líderes de MCEJO y MCPA intentaron relacionar las amenazas que representaba la minería del carbón para el agua y la tierra con las concepciones del territorio

y la identidad zulú, fueron variados los objetivos que manifestaron las diferentes organizaciones. Por ejemplo, miembros de WoMin se centraron en las demandas de rechazo y en el impacto negativo de las actividades extractivas para las mujeres de bajos ingresos y de la clase trabajadora; por su parte, algunos miembros de Umbumbano Youth vieron posibles oportunidades de trabajo en la minería, pero otros consideraron que estas eran «a muy corto plazo», porque la vida útil de la mina es finita (Leonard, 2020, pp. 330-331); MCPA de Somkhele hizo demandas tanto de rechazo como de redistribución: denunciaba los daños medioambientales, pero también pedía oportunidades de empleo para la zona. Además, aunque los aldeanos aprendieron sobre las amenazas asociadas con la minería, también conocieron los riesgos de oponerse a las empresas mineras. El asesinato de Sikhosiphi *Bazooka* Rhadebe, de Xolobeni, es un ejemplo de ello. La intimidación de los manifestantes tanto en Fuleni como en Somkhele no solo aumentó los costos de la acción conjunta, sino que también provocó que fuera más difícil agrupar las amenazas materiales y las no materiales.

En resumen, la participación en organizaciones locales permite examinar cómo los individuos llegan a formar sus actitudes hacia la minería, dado que adelantan información que se centra en las amenazas asociadas con esta actividad, y también empoderan a los individuos para que actúen, a la vez que intentan fomentar una concepción de comunidad que promueva el bienestar colectivo en vez de oportunidades individualizadas. Si bien MCEJO y MCPA operaban en localidades diferentes, es claro que estas organizaciones compartían quejas o demandas estrechamente relacionadas con la extracción. A modo de «atribución de similitud» (Tilly & Tarrow, 2006, p. 95), también empezaron a adoptar un conjunto de tácticas, marcos o imágenes comunes en su oposición a la minería<sup>89</sup>. En la siguiente sección se explican sus demandas.

## **La campaña contra Ibutho Coal**

La encuesta de opinión pública que hicimos en la zona mostró que cerca de un tercio de la población local apoyaba el proyecto de la mina de carbón (véase el capítulo 6). También reveló una variedad de demandas tanto de redistribución como de rechazo a través de un conjunto de preguntas de respuesta múltiple. Por ejemplo, entre los encuestados que están a favor del proyecto, y repiten los argumentos de Ibutho, el 88% manifestó creer que la mina generaría empleo para la población local, el 55% dijo que el proyecto ayudaría a mejorar la economía local

---

<sup>89</sup> Sobre la difusión de los movimientos sociales, véase Givan, Roberts, & Soule (2010).

del pueblo, el 53% señaló que la minería beneficiaría a las comunidades cercanas y el 42% afirmó que apoyaba el proyecto por las oportunidades económicas que trajo la mina de Tendele, que se encuentra a unos 20 kilómetros de Fuleni, en la misma provincia de KwaZulu-Natal. Sin embargo, la mayoría de los encuestados rechazó el proyecto. Los que se oponían a Ibutho Coal respondieron que la minería perjudica el medio ambiente (76% de los encuestados) y amenaza el parque Hluhluwe-iMfolozi (43%), y que la empresa minera no respeta a la población local (42%). Los encuestados también se oponían al proyecto por el daño que podía causar a la agricultura y la ganadería locales (40%) y porque no generaría suficientes impuestos (40%). Estas respuestas variadas sugieren que, incluso en zonas en las que las comunidades parecen oponerse uniformemente a la extracción, coexisten las demandas de redistribución y de rechazo.

En Fuleni no era común la movilización preventiva en la escala y forma de Tía María (véase el capítulo 3) o de Rancho Grande (véase el capítulo 4). Como se explicó anteriormente, no había muchas organizaciones locales debido a la agricultura de subsistencia. Además, las comunidades de Fuleni –y Somkhele– enfrentaron varios obstáculos para hacer demandas, desde la ubicación geográfica y la influencia de los consejos de líderes tradicionales hasta la intimidación de los manifestantes y las restricciones a nivel local a la actividad de la protesta. Estas condiciones hacían que las movilizaciones fueran costosas y potencialmente ineficaces. Sin embargo, con el apoyo de las redes transnacionales de defensa de la vida silvestre, la acción legal se convirtió en un canal más accesible a través del cual impugnar la mina que proponía Ibutho.

La geografía representó un gran obstáculo para la resistencia organizada. Las comunidades de Fuleni y Somkhele no solo están dispersas y su transporte local es limitado, sino que también están alejadas de los grandes centros urbanos. Y era poco probable que los medios de comunicación nacionales o regionales capturaran la resistencia local de dichas comunidades. Por esta razón, las redes transnacionales de defensa de la vida silvestre, como GET y groundWork, facilitaron el transporte para que los opositores se desplazaran a las ciudades donde están los tribunales y lo hicieran en las fechas en que estos órganos judiciales deliberaban sobre sus demandas. Allí se les unieron otros manifestantes de estas zonas<sup>90</sup>.

La influencia de los líderes tradicionales fue otro obstáculo para la protesta. Durante el régimen del *apartheid*, los actores gubernamentales y de la industria recurrieron a los jefes locales para legitimar las decisiones sobre la propiedad de

<sup>90</sup> Comentarios personales de los autores a partir de la visita de campo (Fuleni, julio de 2017).

la tierra y los recursos. Estos acuerdos continuaron después del *apartheid*, ya que los mismos actores infiltraron las estructuras tradicionales de liderazgo para que respaldaran sus intereses extractivos (Leonard, 2019). La pregunta clave sobre la propiedad de la tierra es quién puede reclamarla: los jefes o el pueblo. En un informe de la Conferencia de Obispos Católicos de África Meridional, se resumió esta disputa de la siguiente manera:

Parece que, mientras que el pueblo y los tribunales parecen compartir el sentimiento de que el poder tradicional reside en el pueblo y que los líderes tradicionales deben, deberían y pueden obtener su poder solo por parte de la comunidad, parece que los propios líderes, con la aquiescencia del Gobierno, adoptaran la posición de que tienen algún tipo de poder inherente que les da no solo la autoridad, sino también la propiedad absoluta de las tierras y los recursos tradicionales (Morare, 2016).

Las demandas de los jefes sobre las tierras y los recursos tuvieron fuertes repercusiones en la capacidad de los opositores para luchar contra la extracción. Por ejemplo, un representante de MCEJO explicó que, cuando Ibutho Coal intentó acercarse a la comunidad Fuleni, era demasiado tarde porque la empresa «ya había hecho algunos acuerdos con las autoridades tribales» y, por tanto, ignoró a la comunidad. Además, Ibutho Coal se negaba a darles información a miembros individuales de la comunidad de Fuleni a menos que fuera a través de sus líderes tradicionales, ya coaccionados, quienes seguían apoyando el proyecto (Leonard, 2020). Asimismo, para disipar las preocupaciones de los miembros de la comunidad de Somkhele sobre las operaciones de la mina de Tendele, la empresa destacó el «apoyo incondicional» que recibieron de los Inkosi de la zona de Mpukunyoni —líderes tradicionales que representan a las ocho casas reales relacionadas con el rey zulú—, así como de el Indunankulu, el jefe induna de la misma zona. Estas estructuras tradicionales de liderazgo eran llamadas a hablar en nombre de la comunidad y, lo que es peor, no estaban obligadas a manifestar las preocupaciones de su gente. La brecha entre los jefes y el pueblo se profundizó en el contexto de la extracción de recursos y reprimió el activismo con eficacia.

La intimidación de los manifestantes —incluidas amenazas de muerte— aumentó los costos de la acción colectiva. Por ejemplo: prendieron fuego al vehículo de un dirigente de MCPA después de que este hablara en contra de la supuesta relación entre los líderes tradicionales y Tendele (groundWork, 2019); un representante de MCEJO fue amenazado con arma de fuego por oponerse a la reubicación e impedir la ampliación de Tendele (Pikoli, 2020); Fikile Ntshangase, otra representante de MCEJO se negó a firmar un acuerdo para permitir la ampliación

de la mina, luego, a finales de 2020, cuatro hombres armados la asesinaron en su casa (International Federation for Human Rights, 2020). En las zonas de Fuleni y Somkhele también se produjeron actos de violencia de género contra las activistas. Varias mujeres han documentado sus experiencias sobre amenazas de muerte que recibieron por parte de otros miembros de la comunidad, incluidos algunos que pertenecían a la estructura de liderazgo tradicional (groundWork, 2019). Las amenazas contra las mujeres afectan a sus familias e hijos porque ellas suelen ser las principales cuidadoras (Gumboh, 2018; Centre for Applied Legal Studies, 2018).

Por último, los municipios locales pusieron obstáculos para que protestar fuera restrictivo y confuso. Los funcionarios municipales plantearon que era necesario aprobar las protestas, a pesar de que este requisito no tiene ningún fundamento legal. Ellos suelen exigir a los opositores que notifiquen a la empresa en cuestión antes de que empiecen las manifestaciones, pero, de nuevo, este requisito no está respaldado por la ley (groundWork, 2019). Además, cuando una empresa minera acepta formalmente resolver las demandas de los manifestantes, los municipios pueden optar por desaprobar las protestas. Sin embargo, de acuerdo con la Ley de Regulación de Concentraciones de Sudáfrica expedida en 1993, el derecho a protestar en el país es independiente del contenido de la protesta (groundWork, 2019). En entornos cuyo acceso a la información es limitado, parece que los funcionarios municipales tuvieron la sartén por el mango a la hora de regular y censurar las actividades de protesta.

## **La judicialización del conflicto**

No todo estaba perdido en la lucha contra Ibutho Coal, ya que las redes transnacionales de defensa de la vida silvestre presentaron un recurso legal para oponerse al proyecto<sup>91</sup>. Dirigida por Kirsten Youens, la estrategia legal que se adelantó en representación de los habitantes de Fuleni y, por tanto, también del parque Hluhluwe-iMfolozi, se basó en tres argumentos principales: que el proceso de Ibutho Coal no había sido transparente, que no se le consultó a la comunidad y que los derechos ambientales están intrínsecamente relacionados con los derechos humanos (Youens, 2016).

En cuanto a la transparencia, Ibutho Coal no presentó un plan de sostenibilidad medioambiental y social para las tierras protegidas de la comunidad. El equipo jurídico destacó el trato ilegal que recibieron algunos miembros de la comunidad luego de que ilegalmente se les negara su derecho a acceder a la do-

<sup>91</sup> Esta sección está basada principalmente en Arce & Moran (2020).

cumentación de Ibutho Coal o del Departamento de Recursos Minerales. Los manifestantes de Fuleni no disponían de canales adecuados para realizar preguntas a Ibutho Coal ni para hacer valer sus demandas con respecto al proyecto. El equipo jurídico citó la sentencia del caso entre Bengwenyama Minerals (Pty) Ltd. vs. Genorah Resources (Pty) Ltd., el Ministerio de Recursos Minerales y otros, en la que se ordenó que el solicitante de una licencia debe hacer las consultas respectivas con todas las partes involucradas antes de que se le conceda la licencia. A falta de estas garantías, los activistas de la zona y de la vida silvestre elaboraron sus propios informes en los que detallaron sus planes para el futuro económico de la zona, los que no incluían la extracción de minerales. Este futuro priorizaba los medios de vida sostenibles para los aldeanos a través de oportunidades de trabajo más diversas en actividades agrícolas, educativas y culturales para la comunidad.

En una reunión que se realizó en agosto de 2014 y que convocó Ibutho Coal para presentar información sobre el proyecto, un dirigente de MCEJO señaló que el evento estuvo mal organizado, el lugar no tenía espacio suficiente para acomodar a todos los asistentes y no todos podían escuchar lo que se discutía. Señaló que los organizadores llevaron fuerza policial a la reunión, supuestamente para organizar mejor el evento, pero «no había baños para la gente». Los asistentes también se negaron a firmar la lista que entregó la empresa porque temían que esa información pudiera utilizarse posteriormente como prueba de que se había adelantado una consulta. La reunión terminó abruptamente y los miembros de la comunidad se fueron sin saber cuál había sido su propósito (Berry, 2015).

Otro representante de MCEJO también expresó su frustración con esta reunión y le pidió al director de Ibutho Coal, Thembi Myeni, que no convocara otra. Después de expresar enérgicamente su oposición a la mina propuesta, el representante agregó: «Usted sabe que hablamos zulú, pero viene a la comunidad con una presentación en inglés. No es bienvenido para venir otra vez» (Mokgalaka, 2015).

En cuanto a la consulta, el equipo jurídico se basó en casos anteriores para demostrar que Ibutho Coal no había cumplido con las obligaciones que tenía con la comunidad. Citaron la decisión del caso entre Alexkor Ltd. y la comunidad de Richtersveld, en la que se declaró que uno de los derechos que tiene una comunidad sobre sus tierras es autorizar el ingreso de personas externas y el uso de recursos por parte de estas. De conformidad con la Ley de Protección Provisional de los Derechos Informales sobre la Tierra, se requería el consentimiento de todos los propietarios de las tierras —en este caso, toda la comunidad de Fuleni— antes de otorgar una licencia de explotación minera a Ibutho Coal. Esta empresa no

solo no consultó a los propietarios tradicionales de las tierras sobre la eficacia, la ubicación o la estructura de la mina, tampoco facilitó ninguna información cuando se le solicitó. La comunidad de Fuleni también acusó a Ibutho Coal de evitar cualquier discusión sobre los impactos sociales asociados con la actividad minera.

Por último, con base en los argumentos relacionados con el «ecologismo de los pobres» (Guha & Martínez-Alier, 1997, p. 260), el equipo jurídico se refirió a la gravedad del impacto de la mina al plantear una correlación entre los derechos medioambientales y los derechos humanos. Se basó en decisiones jurídicas anteriores para demostrar que los daños medioambientales constituyen una violación a los derechos humanos. En concreto, el carbón contribuye al cambio climático, disminuye los recursos hídricos y, en el caso de Ibutho Coal en Fuleni, pondría en peligro el río Mfolozi. Este río es la única fuente de agua para varios pueblos y ya se considera un recurso amenazado. Por lo tanto, Ibutho Coal incumplió el artículo 10(1) de la Ley de Desarrollo de Recursos Minerales y Petrolíferos, así como el artículo 24 de la Constitución sudafricana, que garantiza un grado de justicia medioambiental que se vería obstruido por la mina propuesta. Este artículo establece: «Toda persona tiene derecho a un medio ambiente que no sea dañino para su salud o bienestar, y a tener el medio ambiente protegido, para el beneficio de las generaciones presentes y futuras»<sup>92</sup>. Por ende, la justicia ambiental comprende derechos como el acceso a alimentos y agua, información y propiedad, así como la protección de la vida silvestre en el parque Hluhluwe-iMfolozi. Recurrir a los tribunales resultó productivo para alejar la amenaza de la minería del carbón no solo porque obligó a Ibutho Coal a rendir cuentas de conformidad con la legislación nacional, sino también porque reveló las dificultades que genera la extracción de minerales en Sudáfrica para varias generaciones.

Dichas acciones legales consolidaron la campaña contra la minería que iniciaron los miembros de la comunidad de Fuleni a principios de 2016 al bloquear carreteras. Esto puso en alerta a los habitantes del pueblo, que intentaron frustrar los avances de la empresa. Solo fue en abril de 2018 que el Departamento de Recursos Minerales emitió una notificación de rechazo a Ibutho Coal, en la que indicó que su Plan de Gestión Ambiental «no describía la gestión ambiental para controlar y remediar el impacto que se producirá» (5050 Community, 2018). Actualmente, la empresa impugna esta notificación con el argumento de que «no pueden mitigar adecuadamente los impactos que tendría su mina en los espacios naturales de iMfolozi» (GET, 2019).

<sup>92</sup> Constitución de Sudáfrica de 1996, con sus enmiendas hasta 2012.

Es difícil la movilización preventiva cuando las organizaciones locales son débiles o están fragmentadas; también cuando son elevados los costos de la acción conjunta. En estos escenarios, las movilizaciones podrían considerarse ineficaces o insuficientes para revocar una concesión minera, sobre todo cuando las estructuras tradicionales de liderazgo son persuadidas de apoyar estas actividades. Sin embargo, tales estrategias de movilización unieron a los miembros de las comunidades de Fuleni y Somkhele, pues se enfrentaban a decisiones desfavorables similares. Las redes transnacionales de defensa de la vida silvestre pueden ser fundamentales para retomar la lucha donde la dejaron las organizaciones locales. Aunque estas redes estén más interesadas en el conservacionismo de la vida silvestre, también pueden hablar de la justicia ambiental en relación con aquellos individuos cuyos medios de vida dependen de la agricultura de subsistencia.

## Conclusiones

Luchar contra la extracción de recursos es un enorme reto en los países del Sur Global. Están bien documentadas las asimetrías de poder entre los actores de la industria y las comunidades anfitrionas. En Sudáfrica, los actores del Gobierno trabajan con los líderes y consejos tradicionales para promover la minería y pasan por alto la voluntad de las comunidades. Al momento de escribir este capítulo, justo después de que el Departamento de Recursos Minerales emitiera una notificación de rechazo a Ibutho Coal, una nueva empresa llamada Imvukuzane Resources presentó una solicitud de licencia de explotación minera en la misma zona. El proyecto plantea las mismas preocupaciones medioambientales y comunitarias que generaba el proyecto de Ibutho Coal. Imvukuzane Resources es una filial de Canyon Coal y opera varias minas en Mpumalanga y KwaZulu-Natal. Cuando le preguntaron a Vuslat Bayoglu, director general de Canyon Coal, por qué tiene que extraer minerales tan cerca del parque Hluhluwe-iMfolozi, él respondió: «Porque Dios creó el carbón allí» (5050 Community, 2018).

En este capítulo se han analizado los impactos de la mina de carbón propuesta en Fuleni y la reserva natural cercana. Aunque la movilización preventiva no fue generalizada, las organizaciones que se oponían a la minería en la zona llevaron a cabo otras estrategias de movilización, como intercambios entre las comunidades y evidencias visuales para difundir información sobre las amenazas que representan las actividades extractivas. Tales intercambios también sirvieron para poner en duda los supuestos beneficios de la minería<sup>93</sup>. Estas organizaciones intentaron

---

<sup>93</sup> En palabras de Robby Mokgalaka, quien coordinó estos intercambios entre las comunidades en

promover una concepción de comunidad libre de minería, que asocia las amenazas materiales sobre la tierra y el agua con las amenazas no materiales relacionadas con la identidad y la cultura zulúes. Las redes transnacionales de defensa de la vida silvestre que están fuera de Fuleni fueron determinantes para llevar esta lucha al siguiente nivel: recurrir al sistema judicial. Si bien la solicitud de Ibutho Coal finalmente fue rechazada, la llegada de Imvukuzane Resources sugiere que este proyecto sigue «en espera».

Según algunos estudios, las empresas mineras optan por ubicar sus proyectos en zonas rurales relativamente aisladas porque prevén una menor resistencia (Muradian, Martínez-Alier & Correa, 2003). En efecto, las comunidades de Fuleni están muy aisladas, pero lograron organizar una campaña exitosa contra Ibutho Coal. El caso de Fuleni nos lleva a examinar con más detalle la naturaleza de estas amenazas y cómo pueden activar la acción colectiva en dos niveles diferentes. Uno de ellos es el local y se centra en los medios de vida de la comunidad y la agricultura de subsistencia y, al igual que en los de los otros dos capítulos, en este nivel se buscó proteger el agua y la tierra de la minería. También en este nivel se realizó la oposición a la reubicación de toda una comunidad para hacer sitio para la mina. El otro es el nivel transnacional, que aboga por la defensa de la vida silvestre y del patrimonio cultural del pueblo zulú. En general, lo más probable es que las amenazas que representa la minería activen a las organizaciones locales de base, como MCEJO y MCPA; sin embargo, también, en determinadas condiciones, pueden desencadenar la participación de organizaciones transnacionales que están fuera del área de impacto directo de la extracción. Al recurrir a los tribunales, ICWA amplió el abanico de estrategias para movilizarse en contra de la minería y logró frustrar los planes de Ibutho Coal, al menos temporalmente.

---

representación de groundWork: «Desarrollo de carbón no es desarrollo para la gente, sino desarrollo para que las élites se llenen los bolsillos» (groundWork, 2016).



## 6. Resultados de las encuestas

Basándonos en las observaciones del trabajo de campo que hicimos cerca de los sitios mineros propuestos, hemos argumentado que es más probable que los individuos socialmente comprometidos se opongan a la minería en comparación con los menos comprometidos. Con la participación social, los individuos tienen un mayor acceso a la información y a las herramientas de organización relativas a las preocupaciones de la comunidad; adquieren un mayor grado de eficacia propia y colectiva, que los empodera a ellos y a sus comunidades; y también desarrollan una concepción de comunidad más fuerte, es decir, valores compartidos que permiten a los miembros de la comunidad reformular las amenazas materiales sobre la tierra o el agua con discursos relacionados con el territorio, la identidad o la cultura.

Los proyectos de Tía María y Rancho Grande parecen aportar pruebas de esta relación teórica. En Tía María y Rancho Grande, las organizaciones locales de base, como las asociaciones agrícolas y los grupos religiosos, eran activas en la comunidad desde mucho antes de la concesión minera. Como ellas ya tenían un fuerte arraigo con la comunidad, los individuos socialmente comprometidos mantenían fuertes conexiones con esta, como la confianza de sus vecinos y las normas de reciprocidad. Cuando ya era inminente la explotación minera, estas organizaciones emprendieron rápidamente estrategias preventivas para detenerla. Además, los medios de vida en ambas regiones dependían de la economía agrícola. Los riesgos de contaminación de las aguas subterráneas y la creciente competencia por los limitados suministros de agua suponían una gran amenaza para la supervivencia de las comunidades, independientemente de las posibles oportuni-

dades locales de empleo o desarrollo que traerían los proyectos. Principalmente las organizaciones asociadas con el Frente de Defensa del Valle de Tambo en Tía María y los Guardianes de Yaoska en Rancho Grande —con el apoyo de los líderes de la Iglesia católica— presentaron un discurso que maximizaba las amenazas de la minería y minimizaba sus oportunidades.

En cuanto a Fuleni, son variadas nuestras observaciones relacionadas con los efectos que tuvo la participación social en las actitudes hacia la minería. Es diferente el contexto que rodea a Fuleni en comparación con los otros dos casos. En primer lugar, las comunidades que afectaba el proyecto están geográficamente dispersas y aisladas. Por tal razón, era relativamente más difícil y costoso participar activamente en las organizaciones locales. En segundo lugar, no había muchas organizaciones locales populares, como en los otros dos casos, debido a la agricultura de subsistencia. De hecho, los tipos de organizaciones que lideraron la acusación contra el proyecto de Fuleni provenían en su mayoría de redes transnacionales de defensa de la vida silvestre que estaban fuera de la zona de impacto, motivadas principalmente por la amenaza que representaba la minería para la vida silvestre de la reserva natural cercana, así como para la supervivencia cultural del pueblo zulú. Su estrategia preventiva privilegió la judicialización del conflicto. En tercer lugar, la presencia de los consejos de líderes tradicionales atenuó las preocupaciones de los aldeanos que se verían más afectados por el proyecto y debilitó los esfuerzos comunitarios. Como resultado de estos tres temas interrelacionados, y a pesar de que los encuestados reconocieran que extraer carbón representaba un peligro real para la vida silvestre y los medios de vida de la comunidad, fueron tangibles y sobresalientes las demandas de redistribución relacionadas con las oportunidades de empleo o de desarrollo local.

Los individuos que viven cerca de los sitios mineros propuestos reciben información contrastada sobre las amenazas y las oportunidades de los proyectos. Quienes se oponen a la minería dan información a la comunidad sobre las amenazas con el argumento de que la extracción en cualquier forma es desastrosa para el medio ambiente y los medios de vida. Ellos también llaman la atención sobre los aspectos no materiales de estas amenazas —es decir, qué representan los medios de vida de la comunidad para la identidad o para las prácticas culturales de un individuo—. En Tía María, por ejemplo, el Frente de Defensa del Valle de Tambo aseguraba que la comunidad solo tenía un camino para poder avanzar: la agricultura o la minería. El eslogan de la campaña ejemplificaba esta dicotomía: «Agro sí, mina no». Para contrastar este mensaje, los defensores de la minería, especialmente los actores de la industria, llevaron a cabo grandes campañas publicitarias con el fin

de destacar las oportunidades que traería la minería para el progreso de la región. Por ejemplo, en el marco del proyecto de relaciones comunitarias Valleunido, que adelantó Southern Copper Corporation en el valle de Tambo, se construyeron varios «centros de información» en toda la zona y se contrató personas locales para que difundieran mensajes positivos que invisibilizaran a los detractores de la minería. A pesar de que un número importante de individuos reconocieron tanto las amenazas como las oportunidades, no analizaron esta información contradictoria de la misma forma. Los individuos socialmente comprometidos habían establecido relaciones sólidas dentro de las organizaciones en las que participaban y, por lo tanto, era más probable que examinaran las preocupaciones que planteaban estas asociaciones y descartaran las oportunidades potenciales.

En este capítulo, aprovechamos tres encuestas originales para comprobar la relación entre la participación social y el apoyo a la minería. Los datos de las encuestas a nivel individual nos dan una idea de la micropolítica de la formación de actitudes hacia la extracción de recursos. Esto nos permite explicar qué distingue a los individuos que se oponen a la minería de los que la apoyan. Las encuestas también hacen posible que contextualicemos las amenazas y las oportunidades de manera diferente para cada lugar —por ejemplo, los intereses agrícolas en Rancho Grande y las preocupaciones por la vida silvestre en Fuleni—, pero sin sacrificar la comparabilidad que buscamos. Los instrumentos de la encuesta tienen en cuenta la preocupación por los daños ambientales y la defensa de los medios de vida —es decir, demandas de rechazo—, así como las consideraciones sobre las ventajas que se derivan de la minería —es decir, demandas de redistribución—.

Organizamos las secciones restantes de este capítulo de la siguiente manera. En primer lugar, ofrecemos una descripción general de los motivos de apoyo y oposición a estos proyectos, destacando las similitudes y las diferencias propias de cada lugar. En segundo lugar, resumimos nuestras hipótesis, que se basan en nuestro marco teórico. En tercer lugar, justificamos la operacionalización de nuestras variables con base en estas encuestas y prestando especial atención a las diferencias de contexto entre los tres lugares. Por último, exponemos los resultados de nuestros modelos estadísticos y discutimos cómo hablan estos de forma sustantiva sobre nuestra teoría.

## **Demandas de rechazo y de redistribución**

Encuestamos a individuos que vivían dentro de la frontera extractiva en tres sitios mineros con un historial de conflictos prolongados. A diferencia de las encuestas nacionales, nuestro modelo nos permite explorar de forma matizada la micropo-

lítica de las actitudes hacia la minería. Para el primer caso, utilizamos los datos de la encuesta que hicimos en la zona agrícola del valle de Tambo, en la región sur de Arequipa (Perú), donde se desarrolla el proyecto Tía María<sup>94</sup>. Realizamos la segunda encuesta en las comunidades que rodean el proyecto Rancho Grande en el departamento de Matagalpa al norte de Nicaragua<sup>95</sup>. Por último, para nuestro tercer caso, usamos una encuesta regional que hicimos en Kwa-ZuluNatal (Sudáfrica), donde se desarrollaría el proyecto de Fuleni, que está cerca de la reserva natural Hluhluwe-iMfolozi<sup>96</sup>.

Los instrumentos de la encuesta incluyen variables en las que se les pide a los encuestados que expongan las razones por las que se oponen o apoyan el proyecto. Las respuestas sobre la oposición comprenden amenazas a los medios de vida de la comunidad, como el daño a la economía agrícola, los daños ambientales y la preocupación por la vida silvestre. En cuanto al apoyo, las respuestas abarcan las oportunidades o ventajas percibidas relacionadas con la extracción de minerales, como el empleo, el aumento de las rentas por los recursos y la inversión en la economía local.

En las tablas 2 y 3 se presentan estos datos para mostrar la variación entre opositores y simpatizantes, respectivamente. La gran mayoría de los individuos que tienen demandas de rechazo indicaron que su oposición se basaba en la preocupación por los daños ambientales (véase la tabla 2). La segunda respuesta más común varió entre casos según determinadas características. Por ejemplo, en Tía María esta respuesta estuvo relacionada con la preocupación por que las actividades mineras perjudicaran la economía agrícola local. En el caso de Rancho Grande, la segunda respuesta más común fue el riesgo potencial de contaminación del

---

<sup>94</sup> La Facultad de Economía de la UNSA realizó la encuesta de Tía María en 2015. Como informamos en el capítulo 3, los 985 encuestados pertenecían a las poblaciones locales de 6 distritos de la provincia de Islay (la zona de impacto directo) y a 12 distritos de la provincia de Arequipa (la zona de impacto indirecto). Los encuestados fueron elegidos de forma proporcional y aleatoria.

<sup>95</sup> La encuesta de Rancho Grande se realizó en 2018 en colaboración con el Centro de Análisis Sociocultural de la Universidad Centroamericana en Managua (Nicaragua) y fue facilitada y supervisada por miembros del Centro de Análisis Sociocultural. El municipio de Rancho Grande tiene una población estimada de 49.730 habitantes distribuida en 7 barrios y 22 distritos, el 90% de los cuales vive en zonas rurales (Inide, 2005). Se distribuyeron aproximadamente 400 encuestas de forma proporcional y aleatoria.

<sup>96</sup> En la encuesta de Fuleni, los encuestados pertenecían a la población local de cinco municipios de los distritos de uThungulu y uMkhanyakude: uMfolozi, uMhthuze, Ntambanana, Hlabisa y Mtubatuba. La encuesta fue realizada en 2017 por Plus 94, una empresa sudafricana de investigación de mercados. El número total de encuestados fue de 400, que fueron elegidos de forma proporcional y aleatoria.

agua. Por último, la segunda respuesta de rechazo más común en el caso de Fuleni fue que el proyecto suponía una amenaza para el Parque Hluhluwe-iMfolozi.

Tabla 2

Demandas de rechazo entre quienes se autodeterminan como opositores (en porcentajes)

Demandas	Tía María <sup>(1)</sup>	Rancho Grande	Fuleni <sup>(2)</sup>
Daños ambientales	43	59	76
Perjudica a la agricultura	29	4	40
No confía en la supervisión del Estado / Falta de consulta / No hay supervisión del Estado	11	2	36
Las comunidades cercanas no se benefician / Destruye hogares	3	2	-
No genera empleo	2	3	39
No crea proyectos de desarrollo / No mejora la economía local / No hay beneficios para la comunidad	3	<1	35
La empresa minera no paga suficientes impuestos / No hay programas sociales	3	3	40
La empresa es abusiva / La empresa minera no respeta a la población local	6	2	42
La minería amenaza la reserva natural del Parque Hluhluwe-iMfolozi	-	-	43
Devastación de la mina Somkhele	-	-	31
Contaminación del agua		21	
Expropiación de tierras		4	
Total	100	100	-

Notas

<sup>(1)</sup> Se aplicó redondeo al recuento de Tía María.

<sup>(2)</sup> La encuesta de Fuleni permitió a los encuestados dar múltiples razones.

Estas encuestas también incluyen preguntas relacionadas con las demandas de redistribución. En los tres casos, la respuesta más común entre los simpatizantes tenía que ver con las oportunidades de empleo potenciales (véase la tabla 3). En cuanto a la segunda respuesta más común entre los simpatizantes, en los tres casos, se indicó que los proyectos podrían beneficiar la economía local. En Fuleni, esta respuesta fue seguida de cerca por la percepción de que el proyecto impulsaría los programas sociales locales.

Tabla 3  
Demandas de redistribución entre quienes se autodeterminan como simpatizantes  
(en porcentajes)

Demandas	Tía María	Rancho Grande <sup>(1)</sup>	Fuleni <sup>(2)</sup>
Oportunidades de empleo	47	54	88
Beneficios para la economía local	34	16	55
Aumento de las rentas fiscales o canon	9	-	33
Beneficios para las comunidades locales / Programas sociales	4	11	53
Nueva minería tiene un impacto limitado en el medio ambiente	3	8	35
Nueva minería tiene un impacto limitado en la agricultura	1	-	42
Supervisión estatal de las empresas mineras	1	5	-
Empresa minera respeta a la población	1	5	27
Las comunidades locales se benefician de las operaciones mineras	-	-	-
Minería tiene un impacto limitado en la reserva natural Hluhluwe-iMfolozi	-	-	35
Minería crea oportunidades como la mina Somkhele	-	-	42
Total	100	100	-

Nota:

<sup>(1)</sup> Se aplicó redondeo al recuento de Rancho Grande.

<sup>(2)</sup> La encuesta de Fuleni permitió a los encuestados dar múltiples razones.

En la siguiente sección, describimos nuestros modelos empíricos, en los que se usan instrumentos de datos tomados de las tres encuestas. Construimos tres modelos distintos, uno para cada caso. Si bien utilizamos preguntas de encuesta similares en la operacionalización de nuestras variables con el fin de garantizar la validez y la generalización en todos los modelos, sin embargo, dado el contexto único de cada lugar (por ejemplo, diferentes demandas de rechazo y redistribución), construimos algunas variables a partir de preguntas específicas para cada caso. Por ejemplo, el elevado desempleo juvenil en Fuleni hizo que los encuestados dieran más importancia a las oportunidades asociadas con el proyecto que a sus amenazas. Además, la composición de la economía local y el grado de participación social también varían según el contexto. Es decir, a pesar de que los tres casos estaban en la fase de preproducción y tenían estrategias preventivas frente a

los poderosos actores de la industria, sigue habiendo una gran variación en nuestras principales variables de interés.

## **Diseño de la investigación**

### ***Variable dependiente: apoyo al proyecto minero local***

En los tres modelos, la variable dependiente es una medida dicotómica en la que se le pregunta a un individuo si apoya el proyecto minero local en la comunidad (Tía María, Rancho Grande y Fuleni). A cada medida se le asigna 1 si el individuo responde que está a favor del proyecto y 0 en caso contrario. Con esta operacionalización, se busca comprender los contextos de oposición y apoyo a nivel individual entre los individuos afectados directa o indirectamente por el sitio minero propuesto. Según la distribución de las respuestas, cada una de las tres encuestas muestra un grado ligeramente diferente de apoyo y oposición. Tía María obtuvo el mayor porcentaje a favor del proyecto, con un 43,22%<sup>97</sup>; Fuleni tuvo una tasa de apoyo algo menor: 34,20%; y Rancho Grande obtuvo el nivel más bajo de apoyo, con solo el 9,44% de los encuestados a favor del proyecto. En los tres casos, la mayoría de los encuestados de la muestra estaban en contra de los proyectos respectivos.

### ***Variables independientes: participación social, demandas de rechazo y demandas de redistribución***

Nuestras principales variables independientes miden tres factores: el primero, la participación social con relación a la participación en organizaciones locales; posteriormente, creamos dos variables por caso que reflejan las amenazas percibidas –o demandas de rechazo–; por último, creamos dos variables para cada caso que miden las oportunidades percibidas –o demandas de redistribución–. Como el contexto de cada uno de nuestros tres casos varía ligeramente, hemos operacionalizado estas variables basándonos en preguntas que reflejan consideraciones locales. Explicamos cada una de estas variables por separado.

#### **A. Participación social**

La **participación social** es nuestra principal variable teórica de interés. Para operacionalizarla, medimos el grado de participación activa de un individuo en cuatro organizaciones comunitarias locales clave (grupos religiosos, organizaciones

<sup>97</sup> Los porcentajes se basan en datos recodificados tras eliminar los valores que faltan.

medioambientales, asambleas comunitarias y asociaciones agrícolas)<sup>98</sup>. Para cada una, el encuestado recibía una puntuación de 0 si nunca participaba en la asociación y de 1 si participaba en la organización una vez a la semana, dos veces al mes o una vez al mes. A partir de estos valores individuales, formamos un índice aditivo que mide el grado de **participación social** de un individuo en función de su participación en cada una de las cuatro organizaciones. Por ejemplo, si un encuestado participa al menos una vez al mes en las cuatro organizaciones, recibe un valor de 4; si participa en tres de las cuatro organizaciones, recibe un 3; y así sucesivamente. Por lo tanto, la **participación social** va de 0 (sin participación en ninguna de las cuatro organizaciones) a 4 (participación activa en las cuatro organizaciones). Predecimos que los individuos con mayores niveles de participación social se oponen a la minería, ya que representa una amenaza para los medios de vida existentes y el medio ambiente.

Nuestra explicación para esta operacionalización se basa en tres aspectos. En primer lugar, mide directamente el grado de participación social de un individuo en varias dimensiones: desde el desarrollo de la comunidad y los grupos religiosos hasta las asociaciones más específicas relacionadas con determinadas ocupaciones. Esta participación nos permite comprender cómo los individuos se sienten atraídos por sus propias comunidades y qué aprenden o ganan cuando se involucran en organizaciones locales. En consecuencia, deberían funcionar los resultados que asociamos con la participación social (por ejemplo, la información esencial sobre las amenazas que representa la minería, el empoderamiento de los individuos para actuar y una concepción de comunidad libre de minería) para formar o reforzar las actitudes hacia la minería. En segundo lugar, como señala Arce (2014), varias de estas organizaciones locales «se activan» para oponerse a los proyectos mineros, ya que representan el espacio asociativo que tiene la comunidad (Akchurin, 2020). Estas organizaciones populares, como las asociaciones agrícolas de Tía María o los grupos religiosos de Rancho Grande, crean diferentes tipos de alianzas y coaliciones comunitarias que hacen posible oponerse a la minería de forma continua. En tercer y último lugar, esta operacionalización supera los posibles problemas de endogeneidad. Para explicar esto, utilizamos las percepciones sobre los efectos

---

<sup>98</sup> Nuestra medida de participación social se basa en Moseley (2015). Denominado «participación comunitaria» en vez de «participación social», el indicador de Moseley midió la frecuencia con la que los ciudadanos participaban en organizaciones locales entre 2008 y 2012. Como nuestras encuestas no tienen una dimensión temporal como en Moseley (2015), nuestra medida de participación social se acerca más a la intensidad de la participación con base en el número de organizaciones locales de cada entorno.

de la minería (por ejemplo, las amenazas y las oportunidades) para predecir el apoyo al proyecto minero local. Sin embargo, es probable que la oposición de un individuo al proyecto influya en sus opiniones sobre las consecuencias que tendría dicho proyecto para la comunidad local, sus medios de vida o el medio ambiente. Por ello, es necesario incluir un factor exógeno que pueda observarse y cuantificarse, como la participación en organizaciones comunitarias locales.

Al observar los datos de nuestra encuesta, notamos una gran variación en los niveles de **participación social** en las tres comunidades. La tabla 4 presenta las frecuencias en cada caso: poco más de la mitad de los encuestados (51,44%) de la muestra de Tía María participaba en algún tipo de organización local; el 77,48% de los encuestados de Rancho Grande estaban, en algún grado, socialmente comprometidos con su comunidad local; por último, el 71,22% de los encuestados de la muestra de Fuleni participaban en al menos una de estas organizaciones.

Tabla 4  
Niveles de participación social autodeterminados (en porcentajes)

Niveles de participación social	Tía María	Rancho Grande	Fuleni
Sin organizaciones	48,56	22,52	28,78
Una organización	32,19	32,45	19,85
Dos organizaciones	13,83	19,37	31,51
Tres organizaciones	4,31	13,56	9,43
Cuatro organizaciones	1,11	12,11	10,42
Total	100	100	100

## B. Demandas de rechazo

El segundo conjunto de variables explicativas da cuenta de las amenazas que se perciben sobre el proyecto minero. En todos los casos, los opositores a la minería argumentan que estos proyectos representan una gran amenaza para el medio ambiente y los medios de vida de la comunidad. Como es diferente el contexto de cada caso, operacionalizamos estas variables para hablar de sus condiciones específicas. Para los casos de Tía María y Rancho Grande, basamos estos indicadores en las respuestas de los encuestados a preguntas sobre si el proyecto minero daña el medio ambiente (**impacto ambiental**) y si el proyecto minero afecta la economía agrícola (**impacto agrícola**). Para el caso de Fuleni, los indicadores se basaron en la percepción de los encuestados sobre la amenaza que representaría el

proyecto minero para la vida silvestre local (**impacto en la vida silvestre**) y para la agricultura (**impacto agrícola**). Para todas las variables de amenaza, la medida es dicotómica (1: «sí» o «de acuerdo»; 0: «no» o «en desacuerdo»).

La tabla 5 presenta la distribución de los encuestados para cada una de estas amenazas. Las respuestas sobre el **impacto agrícola** en los tres casos revelaron la percepción de que la minería tendría un efecto adverso (73,32% en Tía María; 77,24% en Rancho Grande; y 89,24% en Fuleni). Además, en Tía María y en Rancho Grande fue consistente la percepción de que la minería amenazaba el medio ambiente (**impacto ambiental**); en estos dos lugares, los encuestados manifestaron que la minería tiene un impacto negativo (79,83% y 78,93%, respectivamente). Por último, en lo que respecta a Fuleni, el 89,55% de los encuestados afirmaron que la minería tiene un efecto negativo en la vida silvestre. Estas cifras muestran que las principales preocupaciones en los tres casos se centran en las posibles amenazas que representa la minería para el medio ambiente y la economía agrícola.

### C. Demandas de redistribución

Nuestro último conjunto de variables explicativas considera las oportunidades que se perciben sobre la minería. Los defensores de los proyectos mineros, como los actores de la industria y del Gobierno, argumentan que ellos dan a la comunidad nuevas perspectivas de desarrollo local y mejoramiento social. Las oportunidades percibidas que se produjeron por los proyectos mineros también variaron en cada caso. La tabla 5 muestra la distribución de los encuestados para estas oportunidades. En primer lugar, en el caso de Tía María los beneficios potenciales se centran en las rentas por los recursos (conocidas como canon minero en Perú). Para medir estas oportunidades, les preguntamos a los encuestados de Tía María sobre sus actitudes con respecto a la distribución de las rentas por los recursos (**distribución del canon**) y sus percepciones sobre el gasto de estas rentas (**ejecución del canon**). En cuanto a la **distribución del canon**, las respuestas variaron en una escala ordinal que iba de 1 («muy injusto») a 4 («muy justo»); mientras que la **ejecución del canon** iba de 1 («muy mala») a 5 («muy buena»). Como se muestra en la tabla 5, una minoría de los encuestados (29,48%) dijo que la distribución de las rentas por los recursos era «muy justa» o «justa». Hay una tendencia similar para el gasto de las rentas por los recursos: algo más de la mitad de los encuestados (51,76%) señaló que el gasto de las rentas por los recursos era «medio» y solo el 10,54% indicó que la ejecución de estas rentas era «buena» o «muy buena».

Tabla 5  
Distribución de las demandas de rechazo y de redistribución (en porcentajes)

	Tía María		Rancho Grande		Fuleni			
<b>Demandas de rechazo</b>								
La minería daña el medio ambiente	En desacuerdo	20,17	La minería daña el medio ambiente	En desacuerdo	21,07	La minería tiene un impacto negativo en la vida silvestre	En desacuerdo	10,45
	De acuerdo	79,83		De acuerdo	78,93		De acuerdo	89,55
La minería daña la agricultura	En desacuerdo	26,68	La minería daña la agricultura	En desacuerdo	22,76	La minería tiene un impacto negativo en la agricultura	En desacuerdo	10,76
	De acuerdo	73,32		De acuerdo	77,24		De acuerdo	89,24
<b>Demandas de redistribución</b>								
Opiniones sobre la distribución del canon minero	Muy injusto	11,79	La minería crea oportunidades de empleo	Negativo	65,62	La minería tiene un impacto positivo en el empleo	En desacuerdo	76,95
	Injusto	58,73		Positivo	34,38		De acuerdo	23,05
	Justo	27,17						
	Muy justo	2,31						
Opiniones sobre la ejecución del canon minero	Muy mala	5,45	La minería ofrece oportunidades educativas	No	92,25	La minería tiene un impacto positivo en el desarrollo	En desacuerdo	77,58
	Mala	32,24		Sí	7,75		De acuerdo	22,42
	Promedio	51,76						
	Buena	8,36						
	Muy buena	2,18						

En cuanto a Rancho Grande, las demandas de redistribución resaltaron las ventajas que puede tener el proyecto para el desarrollo local. Una parte de los encuestados afirmaron que el proyecto minero generaría empleo (**oportunidades de empleo**) y sería una fuente de recursos para financiar la educación local aumentando los suministros y servicios escolares (**oportunidades educativas**). Los actores de la industria y del Gobierno suelen presentar la minería como una bendición para el empleo local. Desde la fase de construcción hasta la de extracción, los defensores de la minería prometen docenas, si no cientos, de oportunidades de empleo a lo largo de la vida útil de la mina. Estas oportunidades suelen caracterizarse como mucho mejor remuneradas en comparación con los trabajos que ya hay. La segunda demanda, de **oportunidades educativas**, es exclusiva de Rancho Grande y refleja las acciones que emprendió B2Gold para invertir en la comunidad local. Es común que los actores de la industria financien servicios sociales, como atención médica, parques o recursos educativos; estos servicios son parte de los esfuerzos que hace una empresa para obtener una licencia social. Los encuestados identificados con 1 manifestaron que las actividades mineras son «positivas» o «muy positivas», mientras que los valores de 0 se refieren a los encuestados que creen que las actividades mineras son «negativas» o «muy negativas». El 34,38% de las personas dijo que las actividades mineras mejoraban las oportunidades de empleo, mientras que solo el 7,75% indicó que tenían un efecto positivo en las oportunidades educativas.

Por último, les pedimos a los encuestados de Fuleni que calificaran el impacto de la minería en el empleo local (**oportunidades de empleo**) y en el desarrollo de la comunidad local (**oportunidades de desarrollo**). Al igual que en el caso de Rancho Grande, el proyecto minero prometía nuevos empleos con salarios más altos. En cuanto al desarrollo local, Ibutho Coal prometió programas de educación básica para adultos, formación empresarial, becas y pasantías. Para ambas variables de redistribución, dicotomizamos las respuestas: 1 se refiere a «sí» o «de acuerdo» y 0 significa «no» o «en desacuerdo». El 23,05% de los encuestados de Fuleni dijo que las actividades mineras mejoran las oportunidades de empleo y el 22,42% que la extracción tiene un impacto positivo en el desarrollo local.

### ***Controles***

Además de nuestras variables teóricas de interés, incluimos cuatro conjuntos de variables relacionadas con la minería, la política, la economía y los controles socio-demográficos, las cuales también podrían impactar en el apoyo a los proyectos mineros. En primer lugar, nuestras variables relacionadas con la minería comprenden las siguientes medidas: **la importancia de la minería para el desarrollo nacional**,

**el conocimiento del proyecto y la proximidad a la extracción. La importancia de la minería para el desarrollo nacional** se refiere a la opinión que tiene un individuo sobre la minería o un proyecto específico como algo importante para el desarrollo económico de su país; este indicador va de 1 («nada importante») a 4 («muy importante»). Luego, tuvimos en cuenta **el conocimiento del proyecto**; pero, en vez de basar esta pregunta en un indicador amplio sobre si los encuestados habían oído antes de determinado proyecto, nos propusimos sondear el conocimiento específico sobre las principales partes involucradas<sup>99</sup>. La lógica es que es más probable que un individuo que conoce bien los detalles del proyecto tenga una opinión firme sobre el impacto de la minería en la comunidad. Estas preguntas forman un índice de conocimiento aditivo que refleja detalles sobre los líderes, las organizaciones y las empresas que están involucradas en los proyectos. Por lo tanto, la variable va de 0 (el encuestado no pudo identificar a ningún actor clave) a 4 (el encuestado pudo identificar a los cuatro actores clave). Por último, **la proximidad a la extracción** recoge la cercanía del encuestado al sitio minero propuesto. Es más probable que las actividades mineras afecten a quienes viven más cerca de la mina. En nuestras encuestas, diferenciamos a quienes vivían en estas zonas de impacto directo y a quienes vivían inmediatamente fuera de esa zona. Asignamos 1 a los encuestados que vivían en las inmediaciones del sitio y 0 en caso contrario<sup>100</sup>.

En segundo lugar, incluimos varias variables políticas. Se modificó **la aprobación del funcionario local** para cada caso con el fin de reflejar las condiciones locales; esto se mide de forma dicotómica (1: «aprobado»; 0: «desaprobado»). En el caso de Tía María, esto significa apoyo al gobernador regional; este individuo es el actor gubernamental más visible en Perú, a quien la mayoría de las personas dirigen sus demandas. En Rancho Grande, el alcalde representa a este actor del

<sup>99</sup> En la encuesta de Tía María, elegimos cuatro organizaciones que reflejaban los principales actores implicados en el proyecto minero o en la campaña contra la minería. Para estas preguntas se dieron simplemente respuestas dicotómicas que muestran el conocimiento sobre el grupo que tiene el encuestado y comprenden estas cuatro organizaciones: la Coordinadora Provincial Contra la Agresión Minera, la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, el Frente de Defensa de los Intereses de Cocachaca y la Southern Copper Corporation. En Rancho Grande, el conocimiento consistió en que el individuo indicara correctamente el país de la oficina central de B2Gold y respondiera si conocía a los Guardianes de Yaoska. En la encuesta de Fuleni, la variable se construyó a partir del conocimiento de los encuestados sobre Ibutho Coal y la mina Somkhele. Para los tres modelos, los valores más altos indicaban un mayor conocimiento.

<sup>100</sup> En la encuesta de Tía María, los encuestados que vivían en los distritos de Cocachaca, Mejía y Deán Valdivia se consideraron en la zona de impacto directo; en el caso de Rancho Grande, eran personas que vivían en el distrito de Yaoska; por último, en Fuleni, eran personas que habitaban en el municipio local de uMfolozi, dentro del municipio del distrito de uThungulu.

Gobierno local. En el caso de Fuleni, el alcalde local era menos relevante: como se explica en el quinto capítulo, los consejos de líderes tradicionales desempeñan un papel fundamental en las decisiones sobre la propiedad de la tierra y, desde el final del *apartheid*, han sido persuadidos para que apoyen las actividades extractivas; es por ello que la variable se basó en el apoyo a los líderes tradicionales locales (también conocidos como jefes locales).

La segunda variable midió el nivel de interés en los asuntos políticos que describió el encuestado (**interés político**). Si a un individuo le interesa la política, es más probable que esté bien informado sobre los asuntos políticos locales y nacionales; esto puede implicar que busque activamente más información para dar a conocer su opinión sobre la minería. Esta variable se mide en una escala ordinal de cuatro puntos de 1 («no me interesa») a 4 («muy interesado»).

En tercer lugar, consideramos una serie de variables económicas, que comprende una medida para **la situación económica personal** y una para **la situación económica nacional**. Esperamos que los individuos que se preocupan por su propia situación económica sean más abiertos a las oportunidades de empleo y a los proyectos de desarrollo local que pueda traer la minería. Además, es probable que quienes están preocupados por el rumbo de la situación económica nacional puedan percibir las actividades extractivas como una fuente de ingresos públicos que deben reinvertirse en proyectos de desarrollo, independientemente de las posibles amenazas asociadas con dichas actividades. Para ambas variables, los valores fueron 1 («peor»), 2 («igual») o 3 («mejor»).

Finalmente, incluimos varios controles sociodemográficos. Estos comprenden medidas para **nivel de ingresos** del encuestado, **educación**, **género femenino** y **edad**.

## Hallazgos empíricos

Como nuestra variable dependiente (**apoyo**) es dicotómica, pues el encuestado apoya o se opone al proyecto, utilizamos una regresión logística con errores estándar robustos. En todos los modelos, la unidad de análisis es el individuo. La tabla 6 presenta los resultados para los tres casos. Como los coeficientes de una regresión logística solo pueden utilizarse para determinar la dirección y la significación estadística, mas no para interpretar los efectos sustantivos de nuestras variables de interés, también hemos calculado los efectos marginales promedio de cada una de las variables independientes (con intervalos de confianza del 95%). Los resultados de estas pruebas se muestran más adelante en las figuras 11, 12 y 13. Discutimos estos resultados por separado para cada caso.

Tabla 6  
Resultados de la regresión logística (1 = apoyo)

Variables	Tía María (Modelo 1)	Rancho Grande (Modelo 2)	Fuleni (Modelo 3)
Participación social			
Participación social	- 0,2918** (0,137)	- 0,8790** (0,409)	0,0785 (0,181)
Demandas de rechazo			
Impacto ambiental	- 1,5271*** (0,316)	- 1,4305* (0,850)	-
Impacto agrícola	- 0,6745** (0,290)	- 2,6196*** (0,833)	1,0039 (1,359)
Impacto en la vida silvestre	-	-	0,1874 (1,358)
Demandas de redistribución			
Distribución del canon	0,4358** (0,204)	-	-
Ejecución del canon	0,6556*** (0,183)	-	-
Oportunidades de empleo	-	2,4995*** (0,861)	1,9999** (0,899)
Oportunidades de desarrollo	-	-	2,0557** (1,000)
Oportunidades de educación	-	2,0656 (1,422)	-
Variables de minería			
Importancia de la minería	0,7057*** (0,179)	2,5607*** (0,648)	1,1721*** (0,271)
Conocimiento del proyecto	0,1714 (0,125)	- 0,1755 (0,712)	0,6362 (0,509)
Proximidad a la extracción	- 0,4736 (0,306)	1,2409 (0,913)	0,6935 (0,561)
Variables políticas			
Aprobación del funcionario del Gobierno local	0,5949* (0,342)	0,2166 (0,647)	0,7832 (0,499)
Interés político	0,2053 (0,133)	- 0,2539 (0,429)	- 0,2579 (0,264)
Variables económicas			
Situación económica personal	0,0481 (0,210)	0,0695 (0,699)	0,2779 (0,479)
Situación económica nacional	0,2729 (0,177)	- 0,7997 (0,645)	1,3088* (0,759)

Variables sociodemográficas			
Ingresos	0,2508*** (0,089)	0,0729 (0,084)	0,2647** (0,126)
Educación	0,1986 (0,140)	0,2314 (0,293)	- 0,0756 (0,236)
Género femenino	0,3180 (0,260)	0,0236 (0,772)	1,1397** (0,482)
Edad	0,4496** (0,186)	- 1,4685*** (0,569)	- 0,0411 (0,239)
Constante	- 8,1197*** (1,556)	- 1,2349 (2,371)	- 8,0877*** (2,084)
Observaciones	452	254	180

Nota: los errores estándar robustos se ponen entre paréntesis.

\*\*\*  $p < 0,01$ , \*\*  $p < 0,05$ , \*  $p < 0,1$

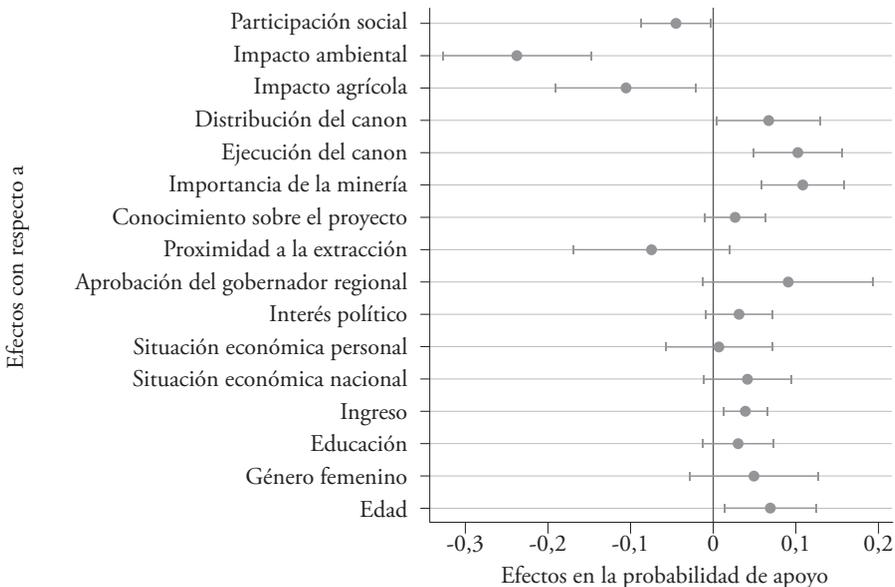
### *Hallazgos empíricos en el caso de Tía María*

El modelo 1 en la tabla 6 muestra los resultados de nuestra primera encuesta, que predice el apoyo al proyecto de Tía María. La **participación social** es un predictor negativo y estadísticamente significativo del **apoyo** con un nivel de confianza del 95%. Como habíamos predicho, los resultados muestran que las demandas de rechazo (**impacto ambiental** e **impacto agrícola**) disminuyen la probabilidad de que un individuo apoye el proyecto, también con un nivel de confianza del 95%. Por el contrario, las dos demandas de redistribución (**distribución del canon** y **ejecución del canon**) influyen positiva y significativamente en la probabilidad de que un individuo apoye el proyecto.

En cuanto a las medidas de control, **la importancia de la minería, los ingresos** y **la edad** son predictores positivos y estadísticamente significativos del **apoyo**. Los resultados de **la importancia de la minería** sugieren que incluso los individuos de comunidades como Tía María, donde la mayoría se opone a la minería, todavía entienden la importancia económica de esta para el país. Dada la presencia de minas cercanas, como la de Cerro Verde en Arequipa, es posible que los individuos con mayores ingresos también resalten la importancia económica de esta actividad y por ello también apoyen el proyecto de Tía María. Los efectos de **la edad** como predictor significativo del **apoyo** son menos claros y pueden deberse a que el tamaño de la muestra de esta encuesta en particular es más grande y más urbano. Además, **la aprobación del funcionario local** –la gobernadora regional Yamila Osorio– aumenta la probabilidad de que un individuo apoye el proyecto de Tía María, pero con un nivel de confianza del 90%.

Como los coeficientes de una regresión logística solo nos indican la significación estadística y no la magnitud de los efectos, también hicimos estimaciones del impacto sustantivo de nuestras principales variables de interés. La figura 11 muestra los efectos marginales promedio para el **apoyo** con base en un cambio en los valores de las variables independientes. Usar efectos marginales promedio en vez de cambios en los valores discretos significa que estimamos los cambios en las probabilidades promedio predichas teniendo en cuenta los valores observados de nuestras variables de control. Nuestro enfoque para estimar los efectos marginales en las probabilidades promedio predichas no mantiene constantes las variables de control en sus promedios u otros valores, sino que considera toda la variación de los datos. Usamos el comando *margins* de Stata con la especificación predeterminada<sup>101</sup>.

Figura 11  
Apoyo a Tía María. Efectos marginales promedio (intervalos de confianza de 95%)



Con base en este enfoque, el efecto marginal promedio de la **participación social** en Tía María es de alrededor del 4,5%. Es decir, en igualdad de condiciones, esperaríamos que el apoyo al proyecto de Tía María disminuyera en un 4,5% a

<sup>101</sup>Para más información sobre el comando *margins*, véase Mitchell (2012).

medida que el nivel de participación social del individuo promedio aumentara en una unidad. En cuanto a las demandas de rechazo, el efecto marginal promedio del **impacto ambiental** representa una disminución del 24% aproximadamente en comparación con quienes no consideran que la minería es perjudicial para el medio ambiente. Quienes perciben que la minería tiene un impacto negativo en la agricultura son, en promedio, un 10% menos en la variable de **apoyo** en comparación con quienes no comparten esta opinión. En cambio, es más probable que, en promedio, quienes se centran en las demandas de redistribución apoyen el proyecto. El efecto marginal promedio de **la distribución del canon** representa un aumento del 7% en el apoyo, mientras que el efecto marginal promedio de **la ejecución del canon** representa un aumento del 10% en el apoyo.

Para ilustrar incluso más los efectos, también generamos probabilidades predichas con base en escenarios únicos de individuos que muestran una intersección específica de atributos. En el caso de un individuo que tiene altos niveles de **participación social** (por ejemplo, que participa en las cuatro organizaciones), que considera que la extracción de minerales es perjudicial tanto para el medio ambiente como para la agricultura y que tiene un nivel promedio de las variables restantes, la probabilidad predicha de apoyo es solo del 11%. Por el contrario, tiene un 87% de probabilidades de apoyar el proyecto de Tía María un individuo que no está comprometido socialmente (por ejemplo, que no participa en ninguna de las cuatro organizaciones) y que considera que la distribución del canon minero es «muy justa» y que la ejecución del canon minero es «muy positiva». Una diferencia tan grande en estas predicciones de probabilidades en el **apoyo** muestra un fuerte efecto negativo de la participación social y de las demandas de rechazo, mientras que es mucho más probable que apoyen dichos proyectos quienes se preocupan por las oportunidades asociadas con la minería y que realmente creen que tales actividades son una bendición para la economía local.

### *Hallazgos empíricos en el caso de Rancho Grande*

A continuación, analizamos los resultados de la encuesta de Rancho Grande. El modelo 2 de la tabla 6 presenta la regresión logística para las variables de la **participación social**, las dos demandas de rechazo (**impacto ambiental e impacto agrícola**) y las dos demandas de redistribución (**oportunidades de empleo y oportunidades educativas**). Al igual que se hizo en los demás modelos, se incluyó como control el mismo conjunto de variables relacionadas con la minería, la política, la economía y las características sociodemográficas.

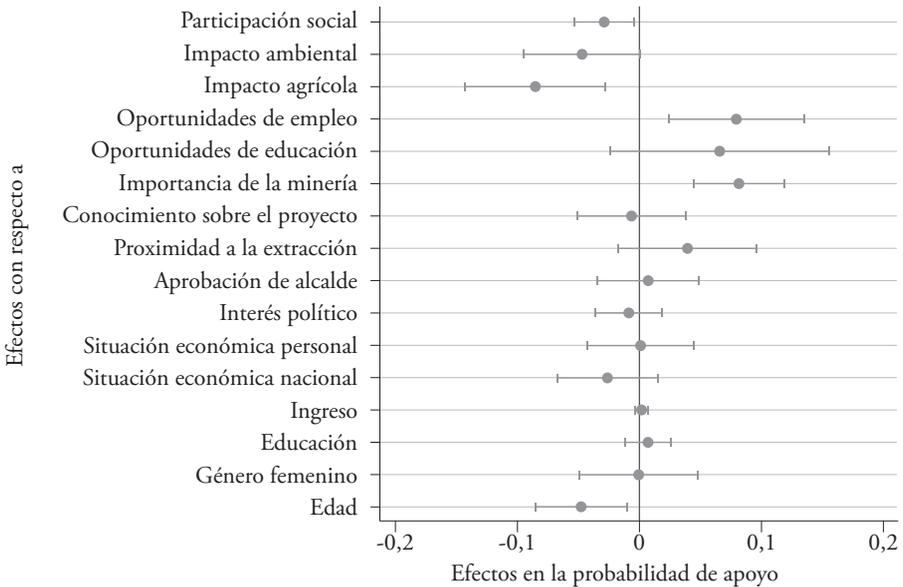
De acuerdo con estos resultados, la **participación social** es negativa y estadísticamente significativa, con un nivel de confianza del 95%; esto confirma nuestra relación hipotética. Por lo tanto, es menos probable que apoyen el proyecto los individuos que están más comprometidos socialmente. Además, encontramos que las demandas de rechazo reducen significativamente la probabilidad de apoyarlo. Estamos seguros de que **el impacto agrícola** y **el impacto ambiental** disminuyen la probabilidad de apoyar el proyecto propuesto (99% y 90% de confianza, respectivamente). Por el contrario, en cuanto a las demandas de redistribución, solo la variable de **oportunidades de empleo** tiene un valor positivo y estadísticamente significativo a un nivel convencional (99% de confianza), ya que no logramos encontrar significación estadística para la variable de **oportunidades educativas**. Por último, en cuanto a nuestras variables de control, solo **la edad** y **la importancia de la minería** son estadísticamente significativas con un nivel de confianza convencional (99% de confianza). **La edad** afecta negativamente **el apoyo**, mientras que **la importancia de la minería** es un predictor positivo y estadísticamente significativo.

De manera más sustantiva, calculamos los efectos marginales promedio en nuestro modelo (véase la figura 12). El efecto marginal promedio de la **participación social** representa una disminución del 3%. Esto significa que, en promedio, un cambio de una unidad en la **participación social** está asociado con una menor probabilidad de apoyo. Encontramos una disminución similar en la probabilidad de apoyo en el caso de las demandas de rechazo. Las probabilidades de que los individuos que indicaron que la minería era perjudicial para el medio ambiente o para la agricultura son, respectivamente, de un 5% y un 8% menos en comparación con quienes no opinan así. Sin embargo, la variable de **oportunidades de empleo** aumenta la probabilidad de apoyar el proyecto. La probabilidad de un encuestado aumenta en promedio un 8% cuando este piensa que la minería tiene un impacto positivo en las oportunidades de empleo locales en comparación con quienes no comparten esta opinión.

Para profundizar en el impacto de estos factores, consideramos la probabilidad de apoyo de varios atributos transversales de los encuestados. Para una persona muy comprometida con su comunidad local (por ejemplo, que participa en las cuatro organizaciones), que considera que la minería es una amenaza tanto para la agricultura como para el medio ambiente y que tiene un nivel promedio en todas las demás variables, la probabilidad predicha de apoyo al proyecto de Rancho Grande es menos del 1%. Por el contrario, en el caso de un individuo que no está comprometido socialmente pero que tiene ambas demandas de redistribución, la probabilidad de apoyo es, en promedio, del 46%.

Figura 12

Apoyo a Rancho Grande. Efectos marginales promedio (intervalos de confianza de 95%)



### *Hallazgos empíricos en el caso de Fuleni*

En cuanto al proyecto de Fuleni en Sudáfrica, se presentan los resultados de esta regresión logística en el modelo 3 de la tabla 6. En forma contraria a nuestras predicciones, la **participación social** no es estadísticamente significativa. Esto indica que el nivel de participación social de un individuo no está asociado con su apoyo al proyecto de Fuleni. Las demandas de rechazo tampoco muestran una significación estadística a nivel convencional. Sin embargo, y como habíamos previsto, los resultados muestran que las demandas de redistribución influyeron positiva y significativamente en la probabilidad de apoyo a este proyecto. Básicamente, era más probable que apoyaran el proyecto minero los individuos que consideraban que la extracción de minerales mejoraría las oportunidades de empleo y contribuiría al desarrollo de la comunidad en comparación con los que no creían que la extracción de minerales tendría un impacto positivo en estas demandas de redistribución.

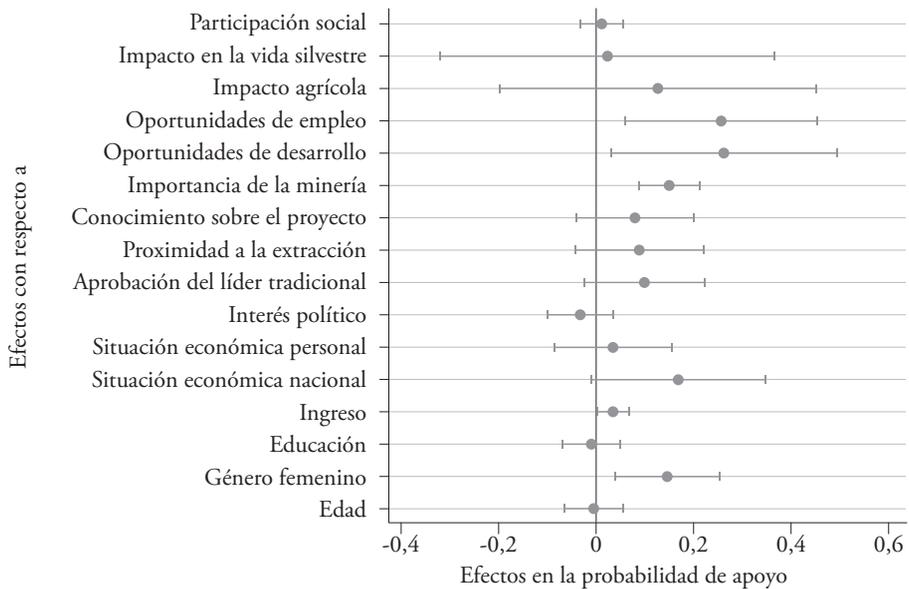
En cuanto a las medidas de control, o sea la creencia de un encuestado de que la minería es importante para el desarrollo económico de Sudáfrica, **la importancia de la minería** (nivel de confianza del 99%), **los ingresos** y **el género**

**femenino** (ambos con nivel de confianza del 95%) son predictores positivos y estadísticamente significativos del **apoyo**. También es positiva y significativa la **situación económica nacional**, pero su nivel de confianza es solo del 90%. Como la minería está profundamente arraigada en la historia de Sudáfrica, es posible que las variables relacionadas con la importancia de la minería, la situación económica nacional y los ingresos sean indicadores de la percepción de esta actividad tanto para el bienestar individual como para el futuro económico del país. Además, a pesar de la presencia de WoMin en la zona –una organización que busca crear conciencia sobre las adversidades que enfrentan las mujeres de bajos ingresos y de la clase obrera debido a las actividades mineras (véase el capítulo 5)– los resultados para la variable de **género femenino** muestran que era más probable que las mujeres apoyaran el proyecto minero. Estos resultados sugieren que la campaña que hace WoMin era clave si se pretendía paralizar la minería en la zona.

Como ocurre en los casos anteriores, los coeficientes de una regresión logística no nos proporcionan los efectos sustantivos de nuestras variables de interés, sino solo la significación estadística. La figura 13 muestra los efectos marginales promedio de un cambio en los valores de las variables independientes sobre la variable dependiente. Además, calculamos las probabilidades previstas para varios atributos transversales de nuestra muestra. Como las demandas de redistribución son las únicas variables explicativas de interés que resultan ser estadísticamente significativas, solo determinamos los efectos de **las oportunidades de empleo** y de **las oportunidades de desarrollo**, mientras que mantenemos la participación social en 0 y todas las demás medidas en sus promedios. Para esta configuración de factores, la probabilidad de apoyo al proyecto Fuleni si un individuo tenía ambas demandas de redistribución es del 90%, aproximadamente. Por el contrario, la probabilidad de apoyo al proyecto de alguien que sí tenía alguna de las dos demandas de redistribución y estaba comprometido socialmente es solo del 17%.

Figura 13

Apoyo a Fuleni. Efectos marginales promedio (intervalos de confianza de 95%)



### Comprobación de la fiabilidad de la participación social

Cuando pensamos en la participación social, la buscamos en determinados tipos de organizaciones locales, concretamente en las que existían desde antes de que llegaran las empresas mineras. En el caso de Tía María, por ejemplo, observamos que las juntas de riego y las asociaciones de productores desempeñaron un papel crucial para formar redes de participación entre los pequeños y medianos agricultores de toda la zona del valle de Tambo; estas asociaciones también estaban muy integradas en la economía agrícola de la región. En el caso de Rancho Grande, observamos la relevancia de las organizaciones vinculadas a las Iglesias católicas y evangélicas. En todas las pruebas de nuestro análisis, la **participación social** es un índice aditivo que se basa en la participación en cuatro organizaciones locales (por ejemplo, grupos religiosos, organizaciones ambientales, asambleas comunitarias y asociaciones agrícolas). Para comprobar la fiabilidad de lo anterior, consideramos un conjunto más amplio de organizaciones, como los sindicatos, las asociaciones de padres y profesores y los partidos políticos. Usando esta medida ampliada de

participación, encontramos resultados que concuerdan con nuestros principales hallazgos<sup>102</sup>.

Durante nuestro trabajo de campo, también aprendimos cómo determinadas organizaciones locales moldearon o reforzaron las opiniones individuales difundiendo información, empoderando a los miembros y fomentando una concepción de comunidad. Nuestros instrumentos de encuesta permiten examinar cómo se correlaciona la participación social con cada uno de estos resultados atribuidos a la participación en organizaciones locales. Más concretamente, construimos una variable proxy para cada uno de los tres resultados. En primer lugar, **la información**, como medida de la capacidad que tiene la organización local para informar a sus miembros sobre proyectos mineros. Las preguntas de la encuesta consistieron en identificar las principales instituciones, organizaciones y actores involucrados en el proyecto propuesto y en la campaña contra la minería. En segundo lugar, **el empoderamiento**, que mide las relaciones intercomunitarias. Por último, en la variable **concepción de comunidad** se preguntó a los encuestados si percibían su localidad como unida o dividida<sup>103</sup>. En la tabla 7 se resumen estos hallazgos. Las marcas de verificación indican una correlación significativa entre el factor respectivo y la participación social con un nivel de confianza del 90% o superior; la letra x indica que la relación no fue estadísticamente significativa.

---

<sup>102</sup>En Tía María y Rancho Grande, en la gama más amplia de organizaciones había sindicatos, asociaciones agrícolas, asambleas comunitarias, organizaciones ambientales, asociaciones profesionales, grupos religiosos o eclesiósticos y patrullas vecinales. Se eligieron estas organizaciones para las pruebas de fiabilidad porque son las formas más visibles de participación que se centran en aspectos clave de la propia comunidad (por ejemplo, la economía local, el progreso de la comunidad y las iglesias locales, entre otras). Tras usar esta medida ampliada de participación, encontramos que los resultados no cambiaron. Era menos probable que apoyaran el proyecto los individuos que estaban comprometidos socialmente. En cuanto a las demandas, también era menos probable que apoyaran el proyecto quienes tenían demandas de rechazo, mientras que era más probable que lo apoyaran los encuestados que tenían demandas de redistribución. En Fuleni, a diferencia de nuestros otros casos, las organizaciones locales eran menos visibles y estaban más dispersas geográficamente (véase el capítulo 5). Incluso cuando utilizamos una lista ampliada de organizaciones que incluía sindicatos, asociaciones agrícolas, asambleas comunitarias, organizaciones ambientales, asociaciones profesionales, grupos religiosos, asociaciones de padres y profesores y partidos políticos, seguimos sin encontrar una relación estadísticamente significativa entre la participación social y el apoyo al proyecto. Sin embargo, en un patrón similar, mientras que las demandas de rechazo siguen sin ser estadísticamente significativas, ambas demandas de redistribución son predictores positivos y significativos del apoyo.

<sup>103</sup>Como no disponemos de medidas precisas de cada una de estas tres variables (información, empoderamiento y concepción de comunidad), las variables elegidas son, en el mejor de los casos, aproximaciones imperfectas. Las investigaciones futuras deberían estudiar más a fondo la relación entre la participación social y estos resultados.

Tabla 7  
Consecuencias de la participación social: resultados de la tabulación cruzada

Resultados	Tía María	Rancho Grande	Fuleni
Información	✓	✓	✓
Empoderamiento	✓	✓	x
Concepción de comunidad	x	✓	✓

En Tía María, **la información y el empoderamiento** están significativamente correlacionados con la **participación social**. Aunque creíamos que las organizaciones fomentarían el conocimiento de los miembros acerca de los proyectos, es más notable **el empoderamiento** en este caso. El Frente de Defensa del Valle de Tambo coordinó huelgas en toda la ciudad, bloqueó carreteras y dirigió varias manifestaciones. En 2011, 2015 y 2019, estas acciones consiguieron detener el inicio del proyecto<sup>104</sup>. Su éxito resaltó la capacidad de la comunidad para influir en el cambio, lo que también aumentó el nivel de autoeficacia de cada miembro. Además, las organizaciones basadas en la agricultura tenían fuertes lazos con toda la comunidad, pues la economía regional depende de esta actividad. Como resultado, los miembros activos consideraban que dichos grupos eran fuentes confiables de información, y este efecto solo se reforzaba a medida que los individuos se involucraban continuamente en estas organizaciones.

En Rancho Grande, todos los resultados –**la información, el empoderamiento y la concepción de comunidad**– están correlacionados con la **participación social**. Según nuestro trabajo de campo, este hallazgo no es sorprendente. Los Guardianes de Yaoska –con el apoyo de los líderes de la Iglesia católica– solían comprar tiempo en la radio para transmitir información sobre las amenazas que representaba la minería para el medio ambiente. Mensajes como «Pan hoy, hambre mañana» pretendían destacar los beneficios a corto plazo de la minería (Spalding, 2016, p. 18). Como sugirió monseñor Sacasa de Matagalpa, en lo que respectaba a la minería, Rancho Grande cambió su enfoque del ambientalismo positivo al «ambientalismo en rebeldía, en protesta; ambientalismo que conmueve, denuncia, confronta a los poderosos» (citado en Sánchez González, 2017, párr. 18). Un discurso persistente que relaciona las actividades mineras con las amenazas, tanto materiales como inmateriales, hizo que los individuos socialmen-

<sup>104</sup>El conflicto social por el proyecto de Tía María comenzó en 2009; las tres principales olas de conflicto se produjeron en los años mencionados.

te comprometidos descartaran los discursos opuestos sobre las oportunidades que traería el proyecto propuesto.

Por último, en el caso de Fuleni, **la información y la concepción de comunidad** están correlacionadas con la **participación social**. De nuevo, es más fácil observar la correlación con la **información**. **La concepción de comunidad**, en cambio, es más novedosa. Mientras que las redes transnacionales de defensa de la vida silvestre que estaban fuera de Fuleni desempeñaron un destacado papel en la campaña contra la minería, las organizaciones locales como MCEJO y MCPA trabajaron incansablemente para conectar las amenazas que representaba la minería del carbón para el agua y la tierra con las concepciones del territorio y la identidad zulúes. Sin embargo, las noticias relacionadas con las oportunidades que traería la minería, sobre todo de empleo, parecen ser más influyentes que las amenazas; esto ocurre a pesar de que los individuos socialmente comprometidos reconocen las que ella representa. «Necesitamos trabajo más que nada», señaló un habitante del pueblo (Harper, 2014). Hasta cierto punto, esta percepción revela la opinión sobre la minería que tenían muchos en la comunidad.

En general, aunque estas variables proxy tienen limitaciones, las tabulaciones cruzadas presentadas nos muestran, con cierta confianza, que participar en las organizaciones locales se relaciona con información esencial sobre las amenazas que representa la minería, con el empoderamiento de los individuos para influir en el cambio y con una concepción de comunidad que se corresponde con un medio de vida libre de minería. Para aclarar, nuestro análisis se basa en la participación social como la principal variable explicativa, en vez de utilizar un índice de estos tres resultados, ya que esta variable mide una acción tangible y observable (es decir, la participación de un individuo en organizaciones locales). Usar un índice de estos tres resultados tiene desventajas, puesto que varios de ellos captan las percepciones de un individuo. Estas percepciones reflejan sus actitudes, que están influidas por su entorno. Muchos de estos resultados sirven como resultados heurísticos, o atajos, en el proceso de toma de decisiones y en la forma en que el individuo filtra la información para estimar intuitivamente las probabilidades de los comportamientos de riesgo (Sjöberg, 1998). Así, los psicólogos suelen concebir la percepción del riesgo, un componente importante del intercambio de información, como una función de la dinámica cognitiva (Kahneman & Tversky, 1981). Puede formarse un bucle de retroalimentación, en el que no es claro cómo distinguir si las actitudes de una persona hacia la minería influyeron en sus percepciones del riesgo o en su sentido de empoderamiento, o si tales percepciones del riesgo realmente determinaron su opinión sobre el proyecto. Por lo tanto, debe utilizarse una variable

exógena que mida un fenómeno observacional concreto, como la participación en organizaciones locales, para aliviar estos problemas de endogeneidad.

## **Discusión**

En los casos de Tía María y Rancho Grande, era mucho menos probable que los individuos socialmente comprometidos apoyaran proyectos mineros en comparación con sus vecinos menos comprometidos. En cambio, no era más probable que apoyaran o se opusieran al proyecto minero los encuestados de Fuleni que estaban más socialmente comprometidos. Además, las demandas de rechazo, basadas en las amenazas a los medios de vida de la comunidad o al medio ambiente, se asociaron con una menor probabilidad de apoyo en Tía María y Rancho Grande, pero no en Fuleni. Por último, las demandas de redistribución, basadas en las oportunidades que traería la minería, se asociaron sistemáticamente con una mayor probabilidad de apoyo. Este hallazgo fue fiable en un conjunto diverso de demandas en tres encuestas distintas. Incluso en conflictos prolongados, en los que la oposición parece ser más visible y notoria, coexisten tanto las demandas de rechazo como las de redistribución.

El efecto observado en Tía María se debe en gran medida a que la economía local está muy interconectada y depende de la producción agrícola. Allí, las juntas de riego y las asociaciones de productores cumplen un propósito formal (por ejemplo, cómo hacer prosperar la economía agrícola local), pero también crean un espacio asociativo que genera confianza y normas de reciprocidad entre los miembros de la comunidad como consecuencia de las repetidas interacciones. Por consiguiente, cuando los líderes de estas organizaciones les presentan a los miembros de la comunidad información sobre las amenazas que representa la minería, es poco probable que influyan en las opiniones los discursos que vienen de los actores de la industria o del Gobierno relacionados con oportunidades.

Del mismo modo, Rancho Grande presenta muchas de las mismas características de Tía María, a pesar de que es un tipo de organización diferente que se destaca socialmente. Las organizaciones agrícolas estaban presentes, pero los líderes de la Iglesia católica y sus redes de organizaciones canalizaron la información clave y los recursos organizativos. Sus esfuerzos garantizaron que los problemas de las comunidades, especialmente los daños medioambientales, estuvieran en el primer plano de la campaña contra la minería. Esto también significó que a cualquier individuo que estuviera asociado con estos grupos se le presentara continuamente un discurso sobre las amenazas que representaba la minería; por ello,

no son sorprendentes los fuertes resultados sustantivos y la gran proporción de encuestados preocupados por estas amenazas.

En Fuleni, a pesar de la preocupación por los daños medioambientales, como los que ocurrieron en la mina Tendele en Somkhele o los posibles daños a la reserva natural cercana, estos efectos quedaron en gran medida anulados por asuntos más notorios relacionados con las oportunidades de empleo y el desarrollo de la comunidad que puede traer el proyecto minero. Los efectos de las demandas de redistribución en la predicción del apoyo a la minería en la zona fueron comparativamente fuertes, mientras que la participación social y las demandas de rechazo no fueron estadísticamente significativas. En cierto modo, Fuleni es un ejemplo perfecto de que un proyecto estancado puede pasar fácilmente a la fase de extracción. Se encuentra en una zona relativamente aislada y no eran muchas ni diversas las organizaciones locales debido a la agricultura de subsistencia. Sin embargo, hasta ahora, el proyecto minero no ha empezado. Esta observación sugiere que debemos revisar la naturaleza de las amenazas, especialmente cuando activan la participación de redes transnacionales de defensa de la vida silvestre que están fuera de la zona. También muestra la importancia de las estrategias preventivas además de las protestas, como la judicialización.

## **Conclusiones**

Hay una amplia literatura en la que se explora cómo la extracción de recursos naturales produce conflictos, pero rara vez se analizan las actitudes de los individuos que se encuentran cerca de los sitios de explotación minera propuestos. Nuestro análisis a nivel individual, que se basa en encuestas originales, nos permite explorar la micropolítica a través de la cual se forman o se refuerzan actitudes hacia la minería. La etapa en la que se forman las actitudes es una pieza del rompecabezas crucial, pero a menudo ignorada, pues nos ayuda a entender lo que diferencia a los individuos entre sí en lo que respecta a sus opiniones y posteriores demandas relacionadas con la minería. A partir de tres estudios de caso, análisis de correlación y rigurosas pruebas de regresión logística, encontramos sustento empírico al efecto hipotético de la participación social sobre el apoyo a la minería. Argumentamos que influyen en las actitudes de apoyo a la minería las consecuencias interrelacionadas de la participación social (por ejemplo, la información esencial sobre las amenazas que esta representa, el empoderamiento de los individuos para actuar y una concepción de comunidad libre de minería).

Nuestras encuestas nos permiten contextualizar una amplia gama de amenazas y oportunidades y cómo se manifiestan en cada uno de nuestros casos. A nivel na-

cional, la mayoría de las veces las encuestas no logran captar las preocupaciones de los individuos que se encuentran cerca de la frontera extractiva. Nuestros hallazgos también revelan la variación de las demandas de rechazo y de redistribución, incluso en entornos que parecen universalmente opuestos a la minería. Era menos probable que apoyaran la minería los individuos que planteaban demandas de rechazo, las cuales resaltan las amenazas que esta representa. Por el contrario, era más probable que la apoyaran aquellos individuos que priorizaban las demandas de redistribución, las cuales se basan en las oportunidades que traerían estos proyectos.

Por último, en cuanto a los métodos de investigación, una de las limitaciones al realizar trabajo de campo en zonas de conflictos prolongados, donde están divididas las comunidades por los puntos de vista sobre la minería, es que se podría llegar a un punto de saturación. Las conversaciones con los miembros de las comunidades, los propietarios de las empresas locales y los líderes de las organizaciones locales proporcionan información valiosa, pero después de un tiempo se empieza a escuchar más o menos la misma información. Otra posibilidad es conocer a un actor bien informado de la comunidad, del Gobierno o de la industria que nos ayude a conectar todos los puntos y a ver un panorama más amplio de la zona de conflicto. Nuestras encuestas, en cambio, ofrecen una imagen más representativa de las opiniones de la comunidad sobre la minería, opiniones que están políticamente estratificadas en función de factores contextuales. Algunas de estas opiniones siguen siendo desconocidas porque los defensores de la minería son menos notorios que los opositores. Además, nuestros instrumentos de encuesta permiten probar nuestro argumento central mientras descartamos explicaciones que se confrontan. También podemos medir las variables de diferentes maneras y, de ese modo, delimitar las condiciones de alcance de nuestros principales hallazgos<sup>105</sup>.

Hasta ahora, hemos analizado casos en los que los proyectos mineros están en suspenso. Para poder generalizar más nuestros resultados, el siguiente capítulo revisa los efectos de la participación social en un entorno en el que se desarrolla la minería: Santo Domingo (Nicaragua).

---

<sup>105</sup>Es importante proceder con la debida cautela cuando se realiza una encuesta de opinión pública en zonas de conflicto. Como era de esperar, algunos miembros de las comunidades pensaron que estábamos realizando la encuesta en nombre de las empresas mineras, otros pensaron que era para el Gobierno y algunos supusieron que era para una ONG que se opone a la minería. En cada caso, discutimos el propósito académico de las encuestas con varios representantes de las organizaciones y, en colaboración con nuestros aliados locales que manejan los instrumentos de encuesta, explicamos los protocolos de revisión institucional que usamos.

## 7. Conclusiones

### Resumen del libro

Cada vez más hay literatura en la que se analizan las causas de los conflictos por recursos. Esta bibliografía estudia los actores, sus estrategias y los recursos desplegados en las campañas contra la minería. En otra literatura se han examinado las respuestas de los actores de la industria y del Gobierno cuando intentan reducir la frecuencia e intensidad de los conflictos. Algunos estudios abordan la creación y la eficacia de mecanismos institucionales como la consulta previa, mientras que otros se centran en las licencias sociales y en los informes de impacto ambiental que se requieren para operar. El énfasis en el conflicto es un denominador común en todas estas contribuciones<sup>106</sup>.

En este libro, hemos examinado tres casos que se caracterizan por haber implicado conflictos prolongados en torno a la minería en Perú, Nicaragua y Sudáfrica. Sin embargo, en vez de centrar nuestro análisis en la política de resistencia a la extracción de recursos por parte de las empresas mineras, hemos adoptado un enfoque diferente. Nuestro objetivo era revelar las actitudes de los individuos en la etapa de preproducción, es decir, antes de la extracción de los minerales. Hemos argumentado y demostrado que, incluso en zonas conocidas por sus largas campañas en contra de la minería, hay focos tanto de apoyo como de oposición

---

<sup>106</sup>Aunque la mayor parte de la literatura analiza las causas de los conflictos por recursos, las investigaciones recientes también han empezado a explorar sus consecuencias en las políticas (por ejemplo, Arce, 2016; Silva, Akchurin, & Bebbington, 2018).

a la extracción. Aunque los opositores suelen estar mejor organizados y son más notorios que los defensores de la minería, la oposición y el apoyo a la extracción de recursos siguen siendo procesos políticamente estratificados. Es probable que los miembros de la comunidad se opongan a la extracción en ciertas condiciones mas no en otras; lo mismo ocurre cuando se trata de apoyar la extracción de recursos. Al usar encuestas de opinión pública, pudimos explorar sistemáticamente la variación de las actitudes hacia la minería de mejor forma que si hubiéramos recurrido a enfoques contrapuestos. Ello también nos permitió evaluar nuestro argumento principal relacionado con la participación social en comparación con otras explicaciones alternas.

Cuando se acerca la minería, ¿qué distingue a los individuos que se oponen a ella de aquellos que la apoyan? ¿Por qué algunos individuos rechazan la minería basándose en las amenazas que representan estas actividades, mientras que otros se apresuran a aceptar sus oportunidades o ventajas? Hemos argumentado y demostrado que la participación en organizaciones locales, que caracterizamos como participación social, está en el centro de estas diferencias. Las organizaciones locales les proporcionan a los individuos información y recursos organizacionales que sirven para moldear o reforzar sus opiniones sobre la minería. Al participar en organizaciones locales, ellos obtienen información crucial sobre las amenazas asociadas con la minería, así como recursos organizacionales para abordar las preocupaciones que tiene la comunidad. Como la participación social está relacionada con mayores niveles de eficacia propia y colectiva, participar en organizaciones locales también anima a los individuos a actuar. Y lo que es más importante, las organizaciones locales imparten una concepción de comunidad (es decir, valores compartidos) que permite a sus miembros redefinir las amenazas materiales a la tierra o al agua con discursos sobre el territorio, la identidad y la cultura. Al verse en el mismo barco, las organizaciones locales ayudan a los individuos a que piensen y prioricen el bienestar de la comunidad por encima de los intereses individuales y a que vean que sus actividades económicas actuales (por ejemplo, la agricultura, la agricultura de subsistencia y la conservación de la naturaleza) son superiores a una minería a corto plazo. En resumen, la participación social produce información clave sobre las amenazas que representa la minería, empodera a los individuos para que actúen y, finalmente, imparte una concepción de comunidad libre de minería<sup>107</sup>.

---

<sup>107</sup>No pretendemos sugerir que estos sean los únicos resultados de la participación social en los individuos, solo que estos fueron los que surgieron con frecuencia en nuestras visitas de campo.

Sin embargo, no todas las organizaciones locales son iguales. En zonas de producción agrícola, como Tía María y Rancho Grande, estas organizaciones interactúan constantemente y tienen un profundo arraigo en la comunidad. Los medianos y pequeños productores dependen de ellas para prosperar económicamente. En cambio, en zonas de agricultura de subsistencia, como Fuleni, tales organizaciones suelen ser más débiles y estar más fragmentadas. También es importante la forma en que ellas colaboran con otras que están fuera de la zona de impacto directo de la extracción. A modo de ejemplo, en uno de los casos más emblemáticos de resistencia exitosa contra la minería en Perú –Tambogrande–, había al menos 9 OJA activas durante el conflicto, las cuales establecieron conexiones con otras 12 localidades mineras a través de redes de OJA (Reeder *et al.*, 2022). Tambogrande fue también el primer conflicto por recursos en América Latina en el que se invocó un referéndum popular en oposición a la minería. Tía María fue una de las otras 12 localidades mineras y allí también se reprodujo la estrategia del referéndum en 2009 (véase el capítulo 3).

También es importante pensar en cómo surgieron estas organizaciones locales en el contexto de la minería. En los casos de Tía María y Rancho Grande, las asociaciones basadas en la agricultura y los grupos religiosos ya existían desde antes de que se otorgaran las concesiones mineras. Sin embargo, en el caso de Fuleni las organizaciones ambientalistas, como MCEJO y MCPA, fueron reactivas, ya que surgieron después de que se hicieran públicas las decisiones sobre la minería. Es correcto decir que en el caso de Fuleni había otras organizaciones que existían desde antes de que se le concediera una licencia a Ibutho Coal (por ejemplo, GET y su campaña «Salvemos los espacios naturales de iMfolozi»), pero estas se centraban en la conservación de los espacios naturales y estaban geográficamente alejadas de las comunidades de Fuleni y Somkhele. A finales de la década de 1980, los miembros de GET participaron en la campaña para detener la minería en el Gran Parque del Humedal de Santa Lucía, también ubicado en KwaZulu-Natal (véase el capítulo 5). GET era un aliado lejano, pero con una experiencia importante, que resurgió en un momento crucial para proteger el parque Hluhluwe-iMfolozi<sup>108</sup>.

Las diferencias entre las organizaciones –su densidad, sus conexiones con otras organizaciones y su distancia geográfica desde el punto de extracción– nos permiten explicar cómo se correlaciona positivamente la participación social con la oposición a la minería en Tía María y Rancho Grande, mas no en Fuleni. Del

<sup>108</sup> Entrevista de los autores a Sheila Berry, miembro fundadora de GET (Hillcrest, julio de 2017).

mismo modo, estas distinciones explican que haya demandas de rechazo en Tía María y Rancho Grande, y solo demandas de redistribución en Fuleni (véase la tabla 8 al final de este capítulo). En el capítulo 6, las probabilidades predichas para los individuos que tienen altos niveles de participación social (es decir, que participan en las cuatro organizaciones de su localidad) y que consideran que la extracción de minerales es perjudicial tanto para el medio ambiente como para la agricultura muestran que estos individuos tienen niveles muy bajos de apoyo a la minería (por ejemplo, 11% en Tía María y 1% en Rancho Grande)<sup>109</sup>. Así, los individuos que participan socialmente y que tienen ambas demandas de rechazo se oponen abrumadoramente a la minería (por ejemplo, 89% en Tía María y 99% en Rancho Grande).

La variación en la participación social de estas organizaciones tiene importantes implicaciones para la trayectoria de las concesiones mineras correspondientes. Con organizaciones más densas y fuertes en Tía María y Rancho Grande, la movilización preventiva fue más factible y, en última instancia, más eficaz. Tanto el Frente de Defensa del Valle de Tambo como los Guardianes de Yaoska –con el apoyo de los líderes de la Iglesia católica– fueron fundamentales para hacer retroceder las impopulares concesiones mineras, a pesar de la creciente presión de los actores de la industria y del Gobierno. A lo largo de los cerca de 12 años que duró el conflicto, las movilizaciones en Tía María se volvieron más violentas y dejaron 8 muertos y cientos de heridos. Además de los violentos enfrentamientos con la policía, los manifestantes también se enfrentaron a la creciente criminalización de sus acciones. Sin embargo, con organizaciones más débiles y fragmentadas en Fuleni, la movilización preventiva era una tarea difícil. Las comunidades de Fuleni también se encontraron con consejos de líderes tradicionales que se pusieron del lado de los actores de la industria, lo que dificultó que los opositores plantearan sus preocupaciones sobre la minería. En consecuencia, los defensores del medio ambiente de Fuleni colaboraron con organizaciones externas y, con ese apoyo, siguieron estrategias alternas a la movilización colectiva.

La variación de las estrategias en estos casos nos lleva a reexaminar la naturaleza de las amenazas que afectan a estas comunidades. En general, es más probable que las amenazas relacionadas con la minería permanezcan localizadas y desencadenen una acción comunitaria conjunta para proteger el agua, la tierra o los medios de vida de la minería. Asimismo, es probable que estas amenazas movilicen a las organizaciones locales, como las juntas de riego, las asociaciones

---

<sup>109</sup>Para calcular estas probabilidades predichas, fijamos las variables de control en sus promedios.

de productores, las asambleas comunitarias y los grupos religiosos. Sin embargo, las amenazas asociadas con la minería también pueden activar la participación de los actores transnacionales, especialmente cuando dichas amenazas ponen en peligro la supervivencia cultural de los pueblos indígenas o la preservación de la vida silvestre. En el caso de Fuleni, el proyecto de Ibutho Coal motivó la participación de actores transnacionales que buscaban proteger el parque Hluhluwe-iMfolozi. Ellos favorecieron la judicialización del conflicto y paralizaron el proyecto de Ibutho Coal con eficacia, tras invocar el vigesimocuarto artículo de la Constitución sudafricana, que insta al Gobierno a proteger el medio ambiente mediante una legislación razonable y otras medidas<sup>110</sup>.

Todavía no es claro si alguno de estos tres proyectos está cancelado definitivamente. Los Estados débiles son conocidos por su incapacidad para asumir compromisos creíbles. Todavía hay un gran interés en Tía María, por lo que los actores de la industria y del Gobierno siguen buscando una solución que acepten las comunidades de los alrededores de Cocachacra. Como se mencionó al inicio de este libro, la estrategia de Southern Copper Corporation consiste en que los miembros de la comunidad consideren que Tía María es una oportunidad y no una amenaza (Dunlap, 2019) y la empresa sigue enfocada en este objetivo. Los funcionarios del Gobierno de Perú, desde García hasta Humala y Vizcarra, también consideraron que el proyecto sería una oportunidad para aumentar el bienestar en la zona y fuera de ella al distribuir las rentas por los recursos. Del mismo modo, en el caso de Fuleni, una nueva empresa minera –Imvukuzane Resources– ha mostrado interés en extraer carbón de la zona, pero las comunidades de Fuleni están preocupadas por el medio ambiente y los medios de vida. No podemos afirmar si la movilización preventiva o la judicialización podrían paralizar definitivamente estos proyectos en los escenarios en que se encuentran o en otros. No obstante, las comunidades con altos niveles de participación social, dados los efectos asociados con dicha participación (por ejemplo, información esencial sobre las amenazas que representa la minería, empoderamiento de los individuos para que actúen y una concepción de comunidad libre de la minería), impiden que avancen las concesiones mineras.

---

<sup>110</sup>La participación de los actores transnacionales no puede darse por sentada. El ecoturismo también fue importante en Rancho Grande (capítulo 4), ya que es parte de la gran Reserva de Biósfera Bosawás; sin embargo, existen escasas pruebas de la atención prestada por las redes transnacionales de defensa de la vida silvestre.

## Casos comparativos

El diseño de nuestra investigación buscaba comprender qué hace que sean atípicas las zonas de conflictos paralizados en comparación con una muestra más amplia de conflictos por recursos. Nuestra selección de casos se asemejó a un diseño exploratorio y «muy diferente» para identificar un factor común que distinga estos sitios mineros propuestos (Gerring, 2007; Gerring & Cojocar, 2016). Al igual que en los casos que hemos analizado en este libro, hay un tejido social especial vinculado a las organizaciones locales que entrelaza a los individuos en otras áreas de proyectos paralizados. Ya sean «rondas campesinas» en el conflicto de Conga en Cajamarca (Li, 2015) o el conflicto de Río Blanco en Piura (Gustafsson, 2016), ambos en el norte de Perú; «asambleas de barrio» en el conflicto de Famatina en La Rioja, Argentina (Walter & Wagner, 2021), o «asambleas comunitarias» en el conflicto de Capulálpam de Méndez en Oaxaca, México (Torres-Wong & Jiménez-Sandoval, 2021), estos son ejemplos comparables de espacios participativos a nivel local que caracterizamos como participación social en este libro<sup>111</sup>.

Vale la pena mencionar brevemente aquí el caso de Capulálpam de Méndez, en el que los indígenas recurrieron a un sistema de tradiciones y costumbres para detener un proyecto de mina de oro a tajo abierto. Para describir las relaciones complejas y superpuestas entre los actores y las instituciones involucrados en un conflicto, Torres-Wong y Jiménez-Sandoval (2021) adoptan una metodología más novedosa que aquella que suele usarse en esta área de investigación: el análisis de redes sociales (ARS). Sus resultados empíricos muestran que los individuos que se oponían a la minería tenían una mayor densidad en las redes sociales en comparación con los que apoyaban el proyecto minero propuesto: aproximadamente la mitad de todas las relaciones posibles. Que hubiera una mayor densidad de la red de actores que se oponían a la minería les permitió colaborar con varios actores externos y forjar alianzas con organizaciones comunitarias vecinas e incluso con actores del Gobierno, en especial los que representan a los orga-

---

<sup>111</sup>Del mismo modo, en un estudio transversal sobre la oposición a la minería en Chile, Akchurin (2020) mide la capacidad organizativa (o asociativa) de movilización mediante el recuento del número de organizaciones comunitarias por cada mil personas. Entre estas organizaciones, se encuentran las juntas de vecinos, los centros de madres, las uniones comunales y otras organizaciones comunitarias funcionales. Su variable dependiente es un desafío documentado a un proyecto minero, como manifestaciones, marchas o demandas. Sus resultados empíricos muestran que una mayor capacidad organizativa afecta la probabilidad de movilizarse contra la minería. Aunque los datos de Akchurin no se miden a nivel individual, como en nuestro caso, su muestra de organizaciones comunitarias equivale a los tipos de organizaciones que consideramos en nuestra medición de la participación social. Sus hallazgos también coinciden con nuestras expectativas.

nismos estatales locales. Los actores que apoyaban la minería, en cambio, tenían menos relaciones de cooperación con otros actores externos y permanecían en gran medida aislados. De acuerdo con nuestros resultados, interpretaremos que una mayor densidad de la red de los grupos que se oponen a la minería evidencia su mayor nivel de participación social. Por el contrario, puede considerarse que una menor densidad de la red de los grupos que apoyaba la minería evidencia sus intereses individualistas y su disposición a seguir los discursos contrarios que dan los actores de la industria y del Gobierno. Aunque varios autores identifican de diferentes maneras los conjuntos de organizaciones locales que participan en conflictos, los resultados de estas en cuanto a formar o reforzar las opiniones sobre la minería son más o menos los mismos. En general, confiamos en que nuestros resultados no se deben a los casos que hemos elegido ni a la metodología de encuesta que hemos utilizado.

Hasta ahora, hemos estudiado los conflictos prolongados en la etapa de pre-producción por las empresas mineras. Estos conflictos ofrecen una rara y clara separación entre las demandas de rechazo y las de redistribución, ya que los proyectos siguen siendo muy impopulares. En dichos conflictos prolongados, las organizaciones locales y los actores de la industria compiten entre sí para definir —o redefinir— las amenazas y oportunidades que representa la minería. Las organizaciones locales tratan de maximizar las amenazas que representa esta actividad y de minimizar sus oportunidades, mientras los actores de la industria y sus aliados políticos intentan darle la vuelta a este discurso. Es una carrera contra la incertidumbre (Haslam, 2021). Para consolidar nuestras conclusiones, en la siguiente sección examinamos las actitudes individuales en un nuevo caso en etapa de extracción: Santo Domingo, en Nicaragua. La comparación nos permite analizar los efectos de la participación social en un entorno en el que hay minería en curso. También respalda nuestros resultados, porque, una vez que una mina entra en operación, la narrativa sobre las amenazas y oportunidades asociadas con la minería deja de ser un concepto abstracto. Los miembros de la comunidad más bien observan y experimentan resultados tangibles, tanto positivos como negativos. Aquí llegó y se fue la carrera contra la incertidumbre. En otras palabras, el caso de Santo Domingo permite comparar las amenazas y las oportunidades reales y percibidas sobre la minería.

### **Santo Domingo**

En 2009, B2Gold adquirió La Libertad, una mina de oro a tajo abierto que está ubicada en el departamento de Chontales. Un año más tarde, descubrió la veta

Jabalí, a unos siete kilómetros al sur de la localidad de Santo Domingo. Desde hace tiempo, el pueblo de Santo Domingo ha sido una zona de minería artesanal tradicional<sup>112</sup>. La agricultura y la ganadería también son sectores económicos esenciales para Santo Domingo, pero, a diferencia de Rancho Grande (véase el capítulo 4), en la zona predominan los latifundios. En lo que respecta a la cadena de suministros, en el caso de Santo Domingo se aprecia una limitada formulación de demandas en la etapa de preproducción, cuando el Gobierno extendió por primera vez la concesión, pero se observan mayores niveles de movilización en la etapa de producción, cuando la mina entró en funcionamiento. Estas movilizaciones, sin embargo, presentan tanto demandas de rechazo como de redistribución, a menudo en el mismo período del conflicto.

Cuando B2Gold se instaló cerca de Santo Domingo, afectó los medios de vida de los mineros artesanales y sus pequeñas cooperativas, a través de las cuales realizaban sus operaciones, ya que la empresa restringió el acceso a las tierras en las que habían trabajado por generaciones. Spalding (2020) identifica Santo Domingo como un conflicto de escala, en el que B2Gold y los mineros artesanales compiten por los derechos de propiedad de la tierra. Durante nuestro trabajo de campo en Santo Domingo, supimos que algunos mineros artesanales no se oponían a que B2Gold explotara siempre y cuando a ellos también se les permitiera realizar operaciones de minería a pequeña escala<sup>113</sup>. En otras palabras, a ellos les preocupaban sobre todo las demandas de redistribución, en especial su participación en los beneficios de la minería que ya había.

Sin embargo, tras extraer oro en la zona por casi una década, las operaciones de la empresa han tenido efectos tangibles en el medio ambiente y los medios de vida de la comunidad. La minería ha afectado negativamente las fuentes de agua de la zona y amenaza la agricultura y la ganadería locales. También ha afectado las condiciones de las viviendas, pues algunos miembros de la comunidad fueron reubicados para dar espacio a la mina, y las explosiones de sus operaciones han dañado varias casas. Estos efectos adversos han provocado varias demandas de rechazo. Los agricultores y ganaderos pretenden detener las operaciones porque la minería ha puesto en peligro sus medios de vida. Los miembros de la comunidad que son desplazados de sus hogares también desean que la mina se detenga por completo.

Con esta información de base, resumimos a continuación los resultados de nuestra encuesta para Santo Domingo. El análisis se basa en las variables que

---

<sup>112</sup>Santo Domingo fue fundado en 1913 por mineros artesanales de Nueva Segovia, un departamento del norte de Nicaragua (Centro Humboldt, 2015c).

<sup>113</sup>Entrevistas personales de los autores a mineros artesanales (Santo Domingo, enero de 2017).

utilizamos en Rancho Grande (véase el capítulo 4). La discusión de nuestros resultados se centra en la participación social y busca contrastar la participación en las organizaciones locales antes y después de la explotación minera y sus implicaciones para la formulación de demandas y para las operaciones de B2Gold.

### ***Resultados de la encuesta***

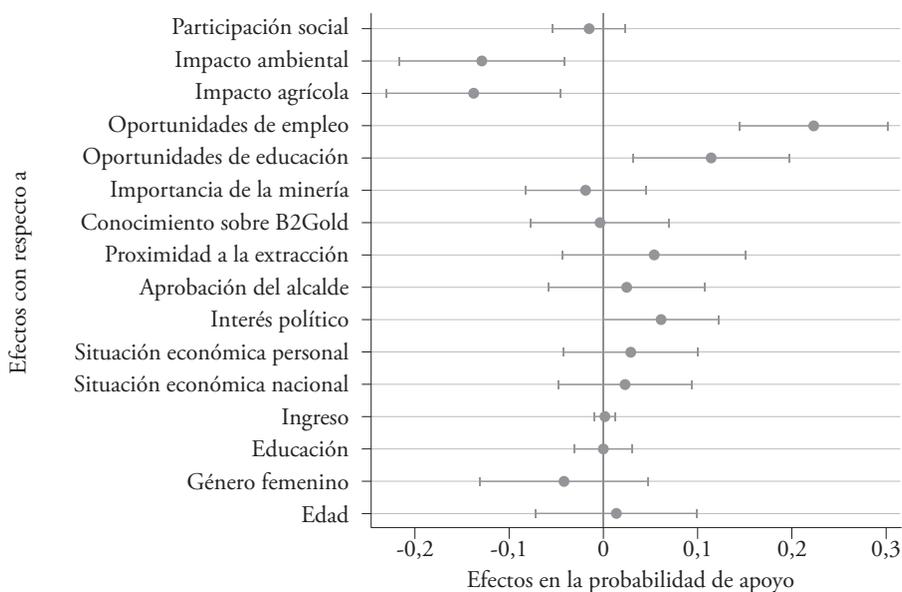
Realizamos la encuesta en Santo Domingo en abril de 2018 en colaboración con el Centro de Análisis Sociocultural de la Universidad Centroamericana en Managua (Nicaragua). El municipio de Santo Domingo tiene una población estimada de 18 mil habitantes que viven en 14 barrios y 17 distritos, el 86,3% de los cuales se encuentran en zonas rurales (Inide, 2005; Centro Humboldt, 2015a). Los encuestadores eligieron de forma proporcional y aleatoria a aproximadamente el 15% de las personas que vivían en los 14 barrios y 17 distritos y repartieron cerca de 400 encuestas.

La figura 14 muestra los efectos marginales promedio de cada una de nuestras variables independientes (con intervalos de confianza del 95%)<sup>114</sup>. Según estos resultados, la **participación social** no es estadísticamente significativa en ningún nivel convencional. Con respecto a las demandas de rechazo, encontramos que tanto **el impacto ambiental** como **el impacto agrícola** son negativos y estadísticamente significativos con un nivel de confianza del 99%. El efecto marginal promedio del **impacto ambiental** corresponde a una disminución en **el apoyo** del 13% aproximadamente en comparación con quienes no consideran que la minería es perjudicial para el medio ambiente. Quienes creen que la minería tiene un impacto negativo en la agricultura (**impacto agrícola**) son, en promedio, un 14% menos en la variable de **apoyo** en comparación con quienes no comparten esta opinión. En cuanto a las demandas de redistribución, la variable de **oportunidades de empleo** es significativa con un nivel de confianza del 99%, mientras que la variable de **oportunidades educativas** es significativa con un nivel de confianza del 95%. El efecto marginal promedio de **las oportunidades de empleo** corresponde a un aumento del 22% aproximadamente en **el apoyo**, mientras

<sup>114</sup>La figura 14 muestra los efectos marginales promedio para **el apoyo** con base en un cambio en los valores de las variables independientes. Usar efectos marginales promedio en vez de cambios en los valores discretos significa que estimamos los cambios en las probabilidades promedio predichas teniendo en cuenta los valores observados de nuestras variables de control. Nuestro enfoque para estimar los efectos marginales en las probabilidades promedio predichas no mantiene constantes las variables de control en sus promedios u otros valores, sino que considera toda la variación de los datos. Usamos el comando *margins* de Stata con la especificación predeterminada.

que el efecto marginal promedio de **las oportunidades educativas** corresponde a un aumento del 14% aproximadamente en **el apoyo**. En general, los resultados muestran que las demandas de rechazo conviven con las de redistribución, pero en un contexto en el que falta la participación social. Las demandas de rechazo se basan en daños ambientales tangibles, mientras que las de redistribución vienen de las oportunidades económicas que ha traído B2Gold a la zona<sup>115</sup>.

Figura 14  
 Apoyo a Santo Domingo. Efectos marginales promedio  
 (en intervalos de confianza de 95%)



### Discusión

Los resultados de la encuesta no muestran que haya participación social en Santo Domingo, donde está en curso la minería. Aunque no podemos determinar cómo era la participación en las organizaciones locales en 2010 o años cercanos, cuando B2Gold llegó a la zona, aunque sí sabemos que no había una oposición genera-

<sup>115</sup>En cuanto a las variables de control, solo **el interés político** es estadísticamente significativo con un nivel de confianza del 90% y también indica apoyo a la minería. Esta variable recoge el nivel de interés que describe el propio encuestado en los asuntos políticos, lo que puede traducirse en que la persona busque activamente más información para dar a conocer su opinión sobre la minería.

lizada y preventiva al proyecto. Esta observación sugiere una participación social limitada en la etapa de preproducción. Los resultados que atribuimos a la participación en organizaciones locales (por ejemplo, la información esencial sobre las amenazas que representa la minería, el empoderamiento de los individuos para que actúen y una concepción de comunidad libre de minería) eran muy limitados o no existían cuando la empresa entró en la zona<sup>116</sup>. Esta limitada participación social que había antes de que empezara el proyecto tuvo consecuencias de gran alcance en la formulación de demandas que surgió luego de que la mina entrara en funcionamiento. Las organizaciones locales que surgieron fueron reactivas en la medida en que se crearon para hacer frente a la minería y plantearon demandas contrapuestas contra B2Gold. Demandas limitadas al comienzo de la mina, pero contrapuestas en la etapa de extracción, sugieren que no se ha producido una transición clara de las actitudes hacia las demandas (ya sea de rechazo o de redistribución).

Dos razones pueden ayudar a explicar la limitada participación social al inicio del proyecto. En primer lugar, al ser un pueblo tradicionalmente minero, los mineros artesanales y B2Gold coincidieron en la necesidad o la importancia de la minería. Esta coincidencia de incentivos disipó las preocupaciones que tenían los mineros artesanales sobre B2Gold en el pasado y posiblemente en el futuro. En segundo lugar, las zonas agrícolas con grandes extensiones de tierra como Santo Domingo generalmente no son propicias para la variedad de organizaciones que se encuentran en otras zonas de mediana y pequeña producción, como Tía María y Rancho Grande, y el apego al lugar puede funcionar de manera diferente en estos dos grupos (Lewicka, 2011; Boley *et al.*, 2021). A modo de ejemplo, Dougherty y Olsen (2014a) comparan dos comunidades guatemaltecas afectadas por la misma empresa minera: una con grandes terrenos por propietario (9,65 manzanas) y otra con pequeños terrenos por propietario (2 manzanas). La comunidad de grandes productores se oponía menos a la minería porque percibía que era más segura la tenencia de la tierra. Los miembros de la comunidad de estas zonas entienden que la tierra tiene un valor de cambio, lo que hace que estén menos conectados con ella como un sentido de lugar y fuente de sustento. Por el contrario, las comunidades con pequeños y medianos productores se oponían más a la minería porque se sentían más vulnerables y posiblemente tenían una conexión más profunda con su tierra.

---

<sup>116</sup>Lo más parecido a organizaciones comunitarias anteriores a las actividades de B2Gold que descubrimos eran las cooperativas mineras a pequeña escala (Tolvanen, 2001) y las Iglesias católica y evangélica (EcuRed, 2020).

Salvemos Santo Domingo es una organización local que surgió en la zona en respuesta a la minería; la componen principalmente agricultores y ganaderos, miembros de la comunidad que se enfrentan a la reubicación o a viviendas dañadas, y mineros artesanales. Esta organización ha planteado demandas contrapuestas contra la empresa. En cuanto a las de rechazo, relacionadas con el agua, los agricultores y ganaderos utilizaban antes al menos 40 fuentes de agua diferentes. Desde que comenzó la explotación minera, 10 de estas fuentes de agua desaparecieron por completo y las otras están contaminadas, lo cual ha dificultado la producción agrícola y ganadera considerablemente (Centro Humboldt, 2015a). Es común que mueran los cultivos y el ganado de la zona. Los miembros de la comunidad se preocupan por consumir productos alimenticios y agua locales, mientras las comunidades vecinas rechazan los cultivos de la zona porque están igualmente preocupados por la contaminación<sup>117</sup>. También es cada vez más frecuente que usen agua purificada o filtros para el consumo doméstico quienes pueden permitírselo. En opinión de Pérez Soza (2013, párr. 12), estos miembros de la comunidad rechazan la minería porque entienden que B2Gold dejará a Santo Domingo completamente contaminado, «sin trabajo, sin paisaje, sin nada».

La mina también ha repercutido negativamente en las condiciones de las viviendas, lo que ha provocado más demandas de rechazo. Algunos miembros de la comunidad fueron reubicados de forma permanente para dar lugar a la mina, y recibieron viviendas de baja calidad sin títulos de propiedad. Temen que B2Gold pueda reclamar estas propiedades en cualquier momento<sup>118</sup>. Los explosivos también han dañado varias viviendas. Los miembros de la comunidad afectados han enviado cartas y firmado peticiones a la oficina del alcalde, al consejo municipal, a otros organismos gubernamentales y directamente a B2Gold. Todavía no han recibido una respuesta de los actores del Gobierno o de la industria.

En cuanto a las demandas de redistribución, principalmente las expropiaciones de tierras y la explotación extensiva del oro han afectado a los mineros artesanales. Por ejemplo, la empresa pagó US\$ 7,7 millones en compensación económica para adquirir tierras de los miembros de la comunidad, pero luego las dividió como propiedad privada y colocó guardias armados para protegerlas<sup>119</sup>.

---

<sup>117</sup>Entrevistas de los autores a representantes de Salvemos Santo Domingo (Santo Domingo, enero de 2017).

<sup>118</sup>Ibíd.

<sup>119</sup>La Ley 387 de concesiones de explotación minera de Nicaragua, aprobada en 2001, no otorga derechos de propiedad de la tierra a las empresas mineras ni les prohíbe a los mineros artesanales trabajar las tierras mediante una concesión minera (Pérez Soza, 2013).

Esta acción prohibió de forma efectiva que los mineros artesanales usaran la tierra de la que habían extraído mineral durante décadas (Witte-Lebhar, 2014). En 2011, miembros de varias pequeñas cooperativas les enviaron una carta a las autoridades municipales para denunciar su desalojo de estas tierras. Además, debido a la escala de sus operaciones, B2Gold extrae grandes cantidades de oro que a los mineros artesanales les habría llevado varios años conseguir. Los mineros artesanales coinciden en que es necesario que haya minería con B2Gold y se centran en obtener una parte justa de la minería actual.

Salvemos Santo Domingo participó en varias estrategias de movilización contra B2Gold, incluidos bloqueos de carreteras, plantones, marchas, peticiones escritas e incluso demandas<sup>120</sup>. Estas estrategias eran reactivas, no preventivas, como las que se describieron en los capítulos anteriores. Aunque dichas acciones acapararon mucha atención, que haya demandas de rechazo y de redistribución a la vez debilita en cierto modo el poder de negociación de las organizaciones locales y ha llevado a pocas concesiones por parte de B2Gold. Para mantener la mina en funcionamiento, por ejemplo, la empresa negoció con las cooperativas artesanales por separado. Mientras que algunas aceptaron la contraoferta de indemnización que hizo la empresa, otras se retiraron de las negociaciones y siguieron protestando. También fue común que reprimieran a los manifestantes. A principios de 2013, el Gobierno envió más de mil policías antidisturbios a que desalojaran por la fuerza un bloqueo, en lo cual utilizaron balas de goma y gases lacrimógenos. En el enfrentamiento resultaron heridos unos 12 policías y 140 ciudadanos, y varios manifestantes fueron encarcelados por más de un mes (Pérez Soza, 2013; Witte-Lebhar, 2014)<sup>121</sup>.

Comparativamente, el conflicto en torno a Santo Domingo guarda sorprendentes similitudes con el de la mina de Somkhele (véase el capítulo 5). Al principio, las comunidades de Somkhele aceptaron la mina con la mirada puesta en las oportunidades económicas, pero, después de que ella entrara en funcionamiento, surgió una amplia gama de efectos adversos, incluida la escasez de agua, la lluvia de polvo de carbón y el agrietamiento de las casas por las explosiones de la mina.

<sup>120</sup>En 2011, Salvemos Santo Domingo redactó una petición con 550 firmas para denunciar la destrucción por parte de B2Gold de un arroyo cercano, principal fuente de agua para la comunidad. La petición también solicitaba pausar las operaciones hasta que la alcaldía municipal realizara una consulta pública transparente y una EIA. El Gobierno nacional ignoró las peticiones (Centro Humboldt, 2015a; véase también EJAtlas, 2016).

<sup>121</sup>La policía logró detener a más de 50 personas, 14 de las cuales fueron encarceladas en Juigalpa (capital del departamento de Chontales) y 12 trasladadas directamente a Managua y encarceladas en la prisión de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).

En Somkhele, había pocas pruebas de movilización preventiva en la etapa de preproducción de los recursos, cuando se hizo la concesión minera por primera vez. Sin embargo, dadas las consecuencias tangibles relacionadas con la minería –algunas positivas, pero la mayoría negativas–, se formó la MCPA de Somkhele, que comenzó a articular tanto las demandas de rechazo como las de redistribución.

Se pueden sacar dos amplias conclusiones si se compara la participación social en la etapa de preproducción con la de producción. Una de ellas gira en torno a la transición de actitudes a demandas. En las zonas de preproducción de la minería, donde están muy extendidas las estrategias de movilización preventiva, como en Tía María y Rancho Grande, el bando que está a favor de las demandas de rechazo es más notorio y parece estar mejor organizado que el de los defensores de la minería. Se detecta un discurso claro que destaca las amenazas de la minería, tanto materiales como inmateriales. No obstante, en las zonas posteriores a la minería, en las que son comunes las estrategias de movilización reactiva, como Santo Domingo o Somkhele, no es claro qué bando –el del rechazo o el de la redistribución– está más o mejor organizado, ni tampoco cuál va ganando. En segundo lugar, el hecho de que las demandas sean limitadas en la etapa de preproducción de los recursos, pero que se confronten entre sí en la etapa de producción, no solo sugiere que la comunidad está dividida, también supone un grado de dependencia de la trayectoria en su nivel de participación social. Las organizaciones que son débiles y fragmentadas al inicio de la concesión siguen siéndolo después de que inicie la explotación minera, lo que permite que las operaciones continúen sin interrupción. Si hubiera habido una mayor participación social en las primeras etapas de la cadena de suministros, quizás el destino de estas comunidades que están cerca de la frontera extractiva habría sido diferente.

### **Otras características de fondo**

Hemos discutido principalmente acerca de la participación social y su impacto en el apoyo a la minería, pero algunas variables de control de nuestro análisis fueron estadísticamente significativas en todos los casos y vale la pena mencionarlas (véase la tabla 8). En tres de las cuatro encuestas, por ejemplo, la variable relacionada con la importancia de la minería, que recoge la opinión de un individuo sobre su importancia para el desarrollo económico, es un predictor consistente del apoyo a la minería. Como nuestras encuestas se llevaron a cabo cerca de las zonas de conflicto, podemos decir que los encuestados estuvieron generalmente de acuerdo con la importancia de la minería para el país, pero lo más probable es que no quieran que haya minería en sus alrededores. Asimismo, la variable que mide los

ingresos de los hogares es un predictor del apoyo a la minería en dos de las cuatro encuestas. Hasta cierto punto, este hallazgo pone en duda el argumento de que los defensores de la minería son demasiado pobres o están marginados y que, por estas razones, aceptan la minería. Por el contrario, los encuestados con mayores ingresos familiares podrían estar dando prioridad a la economía. Estas fuentes de apoyo individuales permanecen ocultas y no se conocen de antemano del mismo modo que las opiniones de la oposición. Ciertamente, estas dos variables –la importancia de la minería y los ingresos de los hogares– están interrelacionadas y revelan información importante sobre los factores que respaldan la minería más allá de las demandas de redistribución.

### **Implicaciones más amplias**

Los individuos se sienten comprometidos con sus comunidades de diferentes maneras. Es posible que residan en barrios cercanos, que frecuenten los mismos negocios y que asistan a las mismas escuelas o fiestas locales; sin embargo, algunos de ellos participan en varias organizaciones locales con mayor frecuencia que otros y esta participación social los diferencia en cuanto a opiniones (y posteriores demandas) sobre la minería. Nuestros hallazgos sobre cómo diferencia la participación social a estos individuos tienen amplias implicaciones para el inicio de los conflictos, la importancia de las estrategias preventivas, las relaciones entre empresa y comunidad, así como los mecanismos de participación relacionados con las decisiones sobre la minería.

Aunque el auge de los precios de las materias primas ha multiplicado la incidencia de los conflictos por recursos, la literatura suele agrupar diferentes tipos de conflictos y, al hacerlo, aún no queda claro por qué estallan los conflictos cuando esto pasa. Nuestro enfoque, que se centra en las actitudes individuales, nos da pistas para explicar por qué estallan los conflictos en las diferentes etapas de la cadena de suministros. Vale la pena considerar dos puntos. En primer lugar, dada la creciente demanda de minerales y de nuevos descubrimientos energéticos –fuentes de las que es más difícil extraer porque están más cerca de zonas vulnerables–, los conflictos en la etapa de preproducción de los recursos son fundamentales para la expansión de la frontera extractiva y, por este motivo, cobran gran importancia frente a los conflictos que se producen en etapas posteriores de la cadena de suministros. En segundo lugar, en cuanto al inicio de los conflictos, es más probable verlos en las primeras etapas (o en la etapa de preproducción o de acceso a los recursos) en las comunidades que prosperan con la participación social. Aquí, al igual que en Tía María y Rancho Grande, las demandas de rechazo

estarán en primer plano y la naturaleza de estos conflictos será principalmente preventiva. Por el contrario, es más probable que experimenten conflictos en las últimas etapas de la cadena de suministros (es decir, en la etapa de extracción) las comunidades en las que la participación social es un recurso escaso. Al igual que en Somkhele y Santo Domingo, estos conflictos serán en su mayoría reactivos y con demandas intermitentes de rechazo y de redistribución.

Dada esta variación de conflictos, no puede subestimarse la importancia de las estrategias preventivas. Comparativamente, dos estudios recientes que intentaron cuantificar el número de conflictos por recursos en todo el mundo revelan que se revierte solo una pequeña parte de las concesiones que están en la etapa de preproducción de los recursos: aproximadamente uno de cada cuatro casos (Özkaynak *et al.*, 2015; Scheidel *et al.*, 2020). Cuando se interponen demandas, sobre todo las que contienen objeciones formales a los informes de impacto ambiental, los proyectos no deseados se cancelan en un 15% de los casos. Esta cifra aumenta ligeramente –hasta el 17%– cuando solo se producen movilizaciones preventivas. Sin embargo, cuando los opositores siguen una combinación de estrategias, incluidas las movilizaciones preventivas, las demandas judiciales y las objeciones formales a los informes de impacto ambiental, la tasa de cancelaciones de proyectos aumenta al 26% (Scheidel *et al.*, 2020). Estos resultados confirman que es muy difícil impugnar una concesión extractiva, más aun cuando los actores de la industria y del Gobierno convergen en el «imperativo extractivo» (Arsel *et al.*, 2016). Otros factores, como los consejos de liderazgo tradicionales en Sudáfrica o la criminalización de la oposición a la minería, hacen que sea más difícil para las comunidades anfitrionas enfrentarse a las concesiones mineras.

Aunque estas cifras no son muy tranquilizadoras para los opositores a la minería, las estrategias preventivas, ya sean movilizaciones, demandas judiciales o una combinación de ambas estrategias, son siempre la mejor opción si las comunidades no quieren la minería en sus alrededores. De hecho, cuando los opositores se movilizan para hacer retroceder un proyecto en la etapa de extracción, como el de Santo Domingo o el de Somkhele, la tasa de éxito de cancelación desciende al 8% (Scheidel *et al.*, 2020, p. 8)<sup>122</sup>. Los costos de cancelación de los proyectos son muy elevados para los actores de la industria y del Gobierno, por lo que es probable que rechacen o ignoren esas peticiones. Las estrategias preventivas son importan-

---

<sup>122</sup>Scheidel y otros (2020) caracterizan estas movilizaciones como reactivas porque la minería ya comenzó.

tes porque permiten ganar tiempo para responder adecuadamente a una explotación minera inminente. Con estrategias preventivas, los miembros de la comunidad pueden preparar un discurso sobre «el riesgo y la incertidumbre» (Haslam, 2021) para hacer frente a las campañas de relaciones públicas que emprenden los actores de la industria y a la postura a favor de la minería de sus aliados políticos. Tales estrategias permiten que los miembros de la comunidad redefinan sus preocupaciones materiales sobre la tierra o el agua en términos de territorio, identidad o cultura y, en última instancia, empoderan a los actores para que busquen una amplia gama de opciones alternas para detener la minería. Lógicamente, una comunidad que prospera gracias a la participación social obtendrá mayores logros de las estrategias preventivas en comparación con las comunidades en las que la participación en las organizaciones locales es débil o fragmentada.

Las comunidades que son ricas en participación social se encontrarán con los actores de la industria, así como con los mecanismos de participación relacionados con las decisiones sobre la minería, de forma diferente a como lo harían las comunidades en las que la participación social es un recurso escaso. En su estudio sobre las relaciones entre empresa y comunidad, por ejemplo, Haslam (2021) examina ocho propiedades mineras diferentes, tres en la etapa de acceso a los recursos y cinco en la de extracción. Las tres primeras son de especial interés porque los actores de la industria y las organizaciones locales se enfrentan por la apertura de la frontera extractiva. Están en una carrera contra la incertidumbre para maximizar (o minimizar) las amenazas y las oportunidades que presenta la minería. Los tres proyectos mineros son Famatina de la canadiense Osisko en Argentina, las arenas de hierro de Putú de la australiana South American Iron & Steel (SAIS) y Pascua Lama de la canadiense Barrick Gold, estos dos últimos en Chile.

En Famatina y Putú, había bajos niveles de compromiso empresarial con la RSE, pero altos niveles de movilización social. En Famatina, cerca de la comunidad campesina del mismo nombre, las mujeres de las asambleas vecinales desempeñaron un papel activo al visitar casas a diario y «sobrecargar» de información a los miembros de la comunidad (Origlia, 2015). Los opositores también adoptaron estrategias preventivas desde el principio (por ejemplo, plantones, daños a propiedades y bloqueos de carreteras) y rápidamente intensificaron el conflicto. En el punto álgido de este, en 2012, Haslam escribió: «el equipo de RSE fue expulsado de la ciudad por una turba enfurecida» (2021, p. 8). A diferencia de Famatina, hubo muy poca RSE en Putú. Allí, señala Haslam, «la comunidad se organizó rápidamente, forjó vínculos con las jurisdicciones vecinas y puso en marcha una sofisticada estrategia para involucrar a los medios de comunicación, a los políticos

y a las instituciones estatales, en un intento por obligar a la empresa a que saliera de las sombras» (2021, p. 8). Los bajos niveles de compromiso de las empresas con la RSE en Famatina y Putú dejaron un vacío político que acertadamente aprovecharon los opositores para ganar la carrera contra los riesgos y la incertidumbre.

Un caso más interesante es aquel en el que los actores de la industria siguieron los más altos estándares de RSE (también conocido como RSE «estándar de oro», con consulta y compromiso abierto de las partes interesadas), pero a la vez se enfrentaron a altos niveles de movilización. Uno de estos casos es Pascua Lama. Allí, los opositores rechazaron las mesas redondas municipales que organizó la empresa y, como la resistencia seguía, las autoridades municipales locales se distanciaron de la empresa porque no querían que las vieran como «compradas». Al no poder llevar a cabo consultas abiertas ni adquirir compromisos, la empresa quedó cada vez más aislada. Haslam describe Pascua Lama como un caso de RSE ineficaz y explica las relaciones entre la empresa y la comunidad como «un círculo vicioso que da lugar a que la percepción de los costos y los beneficios se incline drásticamente a favor de la acción colectiva contra la empresa» (2021, p. 8).

En cuanto a los mecanismos de participación, Jaskoski (2020) analiza los múltiples usos de instituciones como la consulta previa y las audiencias de EIA para obstaculizar la extracción. Dado que estas instituciones son débiles y no dan a las comunidades poder de veto sobre las concesiones mineras, los miembros de la comunidad las politizan de diferentes maneras. Las comunidades pueden negarse a participar, impugnar su omisión cuando no hay tales instituciones o cuestionar su legitimidad cuando sí las hay. Solo en uno de los cinco casos de Jaskoski —el de Cosigo, en Colombia— hay un conflicto en la etapa de reproducción de los recursos, que, como ya argumentamos, es más relevante frente a otros en las etapas posteriores de la cadena de suministros<sup>123</sup>. Ante la posibilidad de que hubiera una explotación minera, las organizaciones indígenas locales y sus redes de apoyo se movilizaron de forma preventiva para crear un parque protegido y, de ese modo, bloquear la extracción. El parque protegido hizo que fueran discutibles los futuros mecanismos de participación sobre las decisiones relacionadas con la minería. Los tribunales colombianos también se pusieron de lado de los opositores y ordenaron suspender todas las actividades mineras de la zona.

En Famatina, Putú, Pascua Lama y Cosigo observamos altos niveles de movilización preventiva en las primeras etapas de la cadena de suministros. De acuerdo

---

<sup>123</sup>No son siempre precisos los términos para describir el proyecto a lo largo de la cadena de suministros, pero Jaskoski (2020, p. 4) describe los otros cuatro casos como conflictos durante la etapa de proyecto.

con nuestros hallazgos, atribuiremos estas estrategias a las consecuencias que tuvo la participación social en las opiniones sobre la minería y las demandas de rechazo. Esta participación social también se basa en las organizaciones ya existentes, pues sería difícil explicar una oposición sostenida a la minería si no hubiera tales (Arce, 2014; Akchurin, 2020). En Famatina y Putú, los opositores ocuparon el espacio que dejó la carencia de RSE y construyeron un discurso movilizador que maximizaba las amenazas que representaba la minería a la vez que minimizaba sus oportunidades. En Pascua Lama, los miembros de la comunidad se vieron atrapados en el fuego cruzado de los discursos de los opositores y los discursos contrarios que daban los actores de la industria; los últimos se volvieron ineficaces gracias a la importante movilización (Haslam, 2021). En Cosigo, las comunidades indígenas bloquearon preventivamente la minería «antes de que se produjera cualquier consulta previa asociada» (Jaskoski, 2020, p. 13).

Estos cuatro casos muestran la diferencia que marca la participación social en las relaciones entre empresa y comunidad, así como los mecanismos de participación sobre la minería en la etapa de preproducción de los recursos. La imagen sobre la participación social que dejan los conflictos que estallan en la etapa de extracción, como los de Somkhele o Santo Domingo –que examinamos brevemente, ya que resulta difícil hablar de cómo se forman o refuerzan las actitudes hacia la minería– es de fragmentación y debilidad. En los otros casos que analiza Jaskoski (2020), por ejemplo, la autora habla de actores internos y externos, en función de quiénes se consideran afectados por el proyecto minero. Dichos actores cuestionan los límites que definen el impacto de estos proyectos y sus propias posiciones sobre la extracción. Sin embargo, en cada uno de los casos, los desafíos de la comunidad a la minería fueron reactivos, por lo que los mecanismos de participación sirvieron principalmente como catalizadores de la movilización.

Pensando en los actores internos y externos de forma más amplia, en su estudio del proyecto Las Bambas en la región de Apurímac en Perú, cuya etapa de explotación empezó en 2015, Gustafsson (2016, p. 96) sugiere que la corporación suiza Xstrata no creó divisiones dentro de la comunidad anfitriona, sino más bien las reforzó. Describe las comunidades que rodean el proyecto –38, para ser exactos– como comunidades con identidades colectivas débiles y organizaciones campesinas fragmentadas. También es difícil que estas comunidades encuentren puntos en común porque se enfrentan a diferentes «vulnerabilidades objetivas» (Eisenstadt & West, 2017b) relacionadas con la extracción en curso, como la contaminación del agua, la construcción de carreteras, la compra de tierras y el aumento de los precios (Gustafsson, 2016, p. 97). Además, las investigaciones

sugieren que, cuando los líderes de las organizaciones indígenas negocian con las empresas mineras, la mayoría de las veces pierden influencia política con sus propias organizaciones o redes de organizaciones (Bebbington, 2010). Estos líderes son vistos con desconfianza porque algunas empresas mineras se empeñan en dar recompensas materiales exclusivamente a un pequeño número de personas (Amengual, 2018).

En resumen, nuestro enfoque basado en las actitudes individuales hacia la minería no solo nos acerca a las raíces de la participación que subyacen tras los conflictos por recursos; también puede ayudar a explicar por qué algunos conflictos estallan en las primeras etapas de la cadena de suministros a diferencia de otros. Cuando las comunidades anfitrionas prosperan con la participación social, también son más comunes las estrategias preventivas que sirven para ganar tiempo para agrupar las amenazas materiales y las no materiales que representa la minería. Las estrategias preventivas marcan la diferencia porque son más amplias las oportunidades de realizar intervenciones constructivas en las primeras etapas de la cadena de suministros, pero esas oportunidades se reducen en las etapas posteriores y serán establecidas por los acuerdos o prácticas institucionales que ya existen (UNEP, 2012). Por último, las comunidades anfitrionas ricas en participación social estarán más o menos equilibradas en cuanto a poder respecto a los actores de la industria y los mecanismos de participación sobre la minería que patrocina el Gobierno. Pueden presentar con éxito un discurso sobre amenazas e incertidumbre, como en Famatina o Putú, o bloquear preventivamente la minería, como en Cosigo. Dicho esto, se podrían mitigar las asimetrías de poder que separan a los actores de la industria y las comunidades anfitrionas.

### **Los nuevos retos de la minería**

Como recuerdan Boulding y Holzner (2021), la participación en organizaciones comunitarias es relativamente alta en América Latina; estas organizaciones pueden marcar la diferencia sobre si los pobres participan o no en política. Ellas reducen las barreras a la acción colectiva y, al mismo tiempo, permiten que las élites políticas se conecten con amplios grupos de miembros de la comunidad. Los prolongados conflictos por la minería en Perú, Nicaragua y Sudáfrica revelan la creciente criminalización de la disidencia y la represión de la oposición por parte del Estado y no deben subestimarse las consecuencias que tuvieron estas acciones en la participación social. Los Gobiernos suelen someter a las organizaciones de justicia ambiental, como el Frente de Defensa del Valle de Tambo y los Guardianes de Yaoska, a campañas de desinformación como medio para ilegalizar

sus actividades. De hecho, varios activistas han sido detenidos o hacen frente a una confrontación política con el Gobierno. En la encuesta de Tía María, el 65% de los encuestados conocía a Pepe Julio Gutiérrez, el entonces líder del Frente de Defensa del Valle de Tambo. Gutiérrez permaneció en prisión preventiva por casi 3 años y luego, a principios de 2021, fue condenado a 16 años de prisión y a pagar una reparación civil de US\$ 145 mil. Fueron varios los cargos: desde extorsión hasta alteración del orden público, así como incitación al desorden civil (Beltrán, 2021). Los manifestantes de Santo Domingo también fueron encarcelados durante semanas y, para empeorar las cosas, supuestamente el Gobierno los utilizó como palanca para que la comunidad negociara con B2Gold (Pérez Soza, 2013; Witte-Lebhar, 2014).

Los Gobiernos de otros países también han criminalizado la resistencia contra la minería. En 2008, por ejemplo, el presidente Rafael Correa de Ecuador proclamó una nueva Constitución que introdujo los «derechos de la naturaleza». Ecuador se convirtió así en el primer país del mundo en hacer de la propia naturaleza un sujeto de derechos legales (Akchurin, 2015). No obstante, al mismo tiempo, Correa adoptó tácticas de mano dura para hacer frente a la resistencia contra la minería, por ejemplo, detener a líderes comunitarios como Javier Ramírez por cargos dudosos. Correa calificó a los ambientalistas de «infantiles», «románticos» y «terroristas» y exigió a las ONG que se registraran ante el Estado (Billo & Zukowski, 2015). Además, Global Witness (2015) registra 1.024 muertes de activistas ambientales entre 2002 y 2014 en todo el mundo, un período que coincide con la escalada de conflictos por extracciones a nivel mundial. En 2017, casi el 60% de los asesinatos registrados ocurrieron en América Latina. Brasil fue el país con más muertes: 57 personas (Global Witness, 2018). Scheidel y otros (2020, p. 10) también encuentran que los defensores indígenas ambientalistas tienen más probabilidades de sufrir diversas formas de violencia. Son más elevadas las cifras relacionadas con asesinatos, violencia física contra los defensores y criminalización de la disidencia (por ejemplo, encarcelamiento o restricción de derechos) cuando los pueblos indígenas están involucrados en conflictos por recursos.

Cuando los actores del Gobierno optan por criminalizar los tipos de actuaciones de protesta que suelen realizar las organizaciones locales (por ejemplo, los bloqueos de carreteras, como se explicó en los capítulos anteriores), pueden dejar a las comunidades sin voz, ya que probablemente los miembros de las comunidades no querrán ser vistos o identificados como líderes de organizaciones ante el riesgo

de que los encarcelen o les restrinjan sus derechos<sup>124</sup>. Será más difícil llevar a cabo las relaciones entre empresa y comunidad, lo mismo que las mesas redondas que patrocina el Gobierno y los mecanismos de participación sobre la minería en un contexto de comunidades «sin voz». Volviendo a nuestro estudio, la participación social es una pieza central de las actitudes hacia la minería. Nuestros casos demuestran que la participación social es, de hecho, un factor clave para determinar cuándo las organizaciones son lo suficientemente duraderas como para soportar la presión externa al adaptar las estrategias para enfrentar los nuevos desafíos. Si los Gobiernos logran neutralizar las demandas de estas organizaciones, los costos para el medio ambiente y los medios de vida de las comunidades serán muy elevados y, potencialmente, irreversibles.

Al cierre de este libro, la pandemia de Covid-19 ha devastado las economías del Sur Global y, muy probablemente, ha acabado con los beneficios sociales y económicos que se le atribuyen al auge de los precios de las materias primas. También parece que la pandemia exacerbó las desigualdades entre las comunidades anfitrionas y los conglomerados multinacionales en términos de poder de negociación y capacidad para oponerse a los proyectos mineros. Las comunidades afectadas por la minería, como las de los alrededores de Somkhele y Santo Domingo, ya tienen escasez de recursos hídricos debido a las sequías y porque la minería del carbón usa cada vez más las reservas locales; sin embargo, las estrategias para controlar el virus son un reto cuando el acceso al agua es limitado (NGO Pulse, 2020). Los grupos de la sociedad civil se han organizado y han abogado en nombre de las comunidades locales para que los Gobiernos aborden el problema del acceso básico al agua, pero no han ganado mucha fuerza. Además, las empresas mineras ven la pandemia como una oportunidad para avanzar en proyectos estancados y buscar una renovada autonomía frente a las restricciones gubernamentales. Southern Copper Corporation cree que la pandemia, y la recesión económica que esta ha provocado en Perú, es un buen argumento para avanzar en el proyecto Tía María —que ha sido suspendido temporalmente hasta 2024—. En medio de los confinamientos que impuso el Gobierno para controlar la pandemia en Perú, se desplomó la producción minera (BBC News, 2020). Así, debido a la caída de la actividad económica de Perú en un 40% en abril de 2020 en comparación con el año anterior, las empresas mineras pidieron excepciones a esas restricciones para evitar el cierre de la producción (Vila Benites & Bebbington, 2020; BBC News,

---

<sup>124</sup>Entrevista telefónica de los autores a David Velasco Rondón, abogado y director de la Fundación EcuMénica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) (Lima, noviembre de 2021).

2020). Aún están por verse los efectos totales de la pandemia en la industria minera, pero es poco probable que el «imperativo extractivo» cambie pronto. Puede que el auge de los precios de las materias primas haya terminado alrededor de 2014, pero la demanda de materias primas y todos sus efectos externos –tanto positivos como negativos– siguen siendo una característica notable de las economías de los países del Sur Global.

Tabla 8  
Resumen de los casos

Características relativas a los proyectos	Tía María	Rancho Grande	Fuleni	Santo Domingo
Cadena de suministros	Etapas de preproducción	Etapas de preproducción	Etapas de preproducción	Etapas de producción
Amenaza principal	Agricultura	Agricultura	Vida silvestre, cultura	Agricultura
Participación social	Sí	Sí	No	No
Demandas de rechazo	Sí	Sí	No	Sí
Demandas de redistribución	Sí	Sí	Sí	Sí
Importancia de la minería	Sí	Sí	Sí	No
Ingreso	Sí	No	Sí	No



## Referencias

- 5050 Community. (21 de octubre de 2018). Hluluwe Imfolozi threatened by mining. South African Broadcasting Company. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=-4w3qSU5TEk>
- Acosta, J., Boza, B., Oliveros, E., Rosado, E., & Zambrano, M. (2019). *Peru's mining and metals investment guide*. ProInversión.
- Adger, W. N. (2006). Vulnerability. *Global Environmental Change* 16(3), 268-281. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.02.006>
- Adler, R. A., Claassen, M., Godfrey, L., & Turton, A. R. (2007). Water, mining, and waste: An historical and economic perspective on conflict management in South Africa. *The Economics of Peace and Security Journal*, 2(2), 33-41.
- African Development Bank Group. (22 de mayo de 2015). Draft African Natural Resources Center Strategy (2015-2020). AFBC. <https://www.afdb.org/en/documents/document/draft-african-natural-resources-center-strategy-for-2015-2020-53022>
- Akchurin, M. (2015). Constructing the rights of nature: Constitutional reform, mobilization, and environmental protection in Ecuador. *Law & Social Inquiry*, 40(4), 937-968. <https://doi.org/10.1111/lsi.12141>
- Akchurin, M. (2020). Mining and defensive mobilization: Explaining opposition to extractive industries in Chile. *Sociology of Development*, 6(1), 1-29. <https://doi.org/10.1525/sod.2020.6.1.1>
- Almeida, P. D. (2010). Globalization and collective action. En K. T. Leich, & J. Craig Jenkins (Eds.). *Handbook of politics: State and society in global perspective* (pp. 305-326). Springer.
- Almeida, P. D., & Pérez Martín, A. (2020). Economic globalization and social movements in Latin America. En X. Bada, & L. Rivera-Sánchez (Eds.). *The Oxford handbook of the sociology of Latin America*. Oxford University Press.

- Álvarez Huwiler, L. I., Godfrid, J., & Duárez Mendoza, J. L. (2015). Expansión minera y protesta social en Argentina y Perú. *Investigaciones Sociales*, 19(35), 169-186. <https://doi.org/10.15381/is.v19i35.12126>
- Amengual, M. (abril de 2018). Buying stability: The distributive outcomes of private politics in the Bolivian mining industry. *World Development*, 104, 31-45. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.11.008>
- Arce, M. (2005). *Market reform in society: Post-crisis politics and economic change in authoritarian Peru*. Pennsylvania State University Press.
- Arce, M. (2014). *Resource extraction and protest in Peru*. University of Pittsburgh Press.
- Arce, M. (2015). *La extracción de recursos naturales y la protesta social en el Perú*. Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Arce, M. (2016). The political consequences of mobilizations against resource extraction. *Mobilization*, 21(4), 469-483. <https://doi.org/10.17813/1086-671X-21-4-469>
- Arce, M., Miller, R. E., Patane, C. F., & Polizzi, M. S. (2018). Resource wealth, democracy, and mobilisation. *The Journal of Development Studies*, 54(6), 949-967. <https://doi.org/10.1080/00220388.2017.1311408>
- Arce, M., & Moran, R. (2020). Extractive conflicts in the developing world. *Journal of International Affairs*, 73(2), 77-94. <https://www.jstor.org/stable/26939967>
- Arce, M., Polizzi, M., & Reeder, B. (2020). Willingness to protest over resource extraction in Latin America. *The Extractive Industries and Society*, 7(2), 716-728. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.03.005>
- Arellano-Yanguas, J. (2011). *¿Minería sin fronteras? Conflicto y desarrollo en regiones mineras del Perú*. Instituto de Estudios Peruanos y Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Arellano-Yanguas, J. (2014). Religion and resistance to extraction in rural Peru: Is the catholic church following the people? *Latin American Research Review*, 49, 61-80. <https://doi.org/10.1353/lar.2014.0056>
- Arsel, M., Hogenboom, B., & Pellegrini, L. (2016). The extractive imperative and the boom in environmental conflicts at the end of the progressive cycle in Latin America. *The Extractive Industries and Society*, 3(4), 877-879. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2016.10.014>
- Associated Press. (11 de junio de 2015). Peru Anti-Mining Farmers. Associated Press. <https://apimagesblog.com/blog/2015/06/11/peru-anti-mining-farmers>
- Atlas de Justicia Ambiental, EJAtlas. (18 de agosto de 2014). Proyecto minero El Pavón en municipio Rancho Grande, Nicaragua. <https://ejatlas.org/conflict/proyecto-minero-el-pavon-municipio-rancho-grande-nicaragua>
- Atlas de Justicia Ambiental, EJAtlas. (15 de marzo de 2016). Libertad mining project, Chontales, Nicaragua. <https://ejatlas.org/conflict/santo-domingo-mining-project-nicaragua>
- Atlas de Justicia Ambiental, EJAtlas. (2020). Proyecto minero El Pavón en municipio Rancho Grande, Nicaragua. <https://ejatlas.org/conflict/proyecto-minero-el-pavon-municipio-rancho-grande-nicaragua>

- Balakrishnan, R., & Toscani, F. (21 de junio de 2018). How the commodity boom helped tackle poverty and inequality in Latin America. IMF Blog. <https://blogs.imf.org/2018/06/21/how-the-commodity-boom-helped-tackle-poverty-and-inequality-in-latin-america/>
- Balbi, M. (21 de noviembre de 2011). Carlos Herrera Descalzi: El éxito del Perú se asienta en la minería. *El Comercio*. [https://archivo.elcomercio.pe/politica/gobierno/carlos-herrera-descalzi-exito-peru-se-asienta-mineria-noticia-1336889?ref=flujo\\_tags\\_16752&ft=nota\\_19&e%20=titulo](https://archivo.elcomercio.pe/politica/gobierno/carlos-herrera-descalzi-exito-peru-se-asienta-mineria-noticia-1336889?ref=flujo_tags_16752&ft=nota_19&e%20=titulo)
- Banco Central de Nicaragua. (2020). *Anuario de estadísticas macroeconómicas (1960-2020): Sector real, empleo y salarios, sector externo*. Banco Central de Nicaragua. [https://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/anual/anuario\\_estadistico/anuario\\_estadistico\\_2019.pdf](https://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/anual/anuario_estadistico/anuario_estadistico_2019.pdf)
- Banco Central de Reserva del Perú, BCRP. (2012). *Memoria 2012*. BCRP. <https://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual/memoria-2012.html>
- Banco Central de Reserva del Perú, BCRP. (2017). *Memoria 2017*. BCRP. <https://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual/memoria-2017.html>
- Banco Central de Reserva del Perú, BCRP. (2020). Estadísticas. BCRP. <https://www.bcrp.gob.pe/estadisticas.html>
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. W. H. Freeman and Company.
- BBC news (16 de junio de 2020). Coronavirus: Peru economy sinks 40% in april amid lockdown. BBC News. <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-53051157>
- Bebbington, A. J. (2007). Social movements and the politicization of chronic poverty. *Development and Change*, 38(5), 793-818. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2007.00434.x>
- Bebbington, A. (2009). Contesting environmental transformation: Political ecologies and environmentalisms in Latin America and the Caribbean. *Latin American Research Review*, 44(3), 177-186. <https://www.jstor.org/stable/40783675>
- Bebbington, A. (2010). Extractive industries and stunted States: Conflict, responsibility and institutional change in the Andes. En K. Ravi Raman, & R. D. Lipschutz (Eds.). *Corporate social responsibility: Comparative critiques* (pp. 97-115). Palgrave Macmillan.
- Bebbington, A., & Bebbington, D. H. (2011). An Andean avatar: Post-neoliberal and neoliberal strategies for securing the unobtainable. *New Political Economy*, 16(1), 131-145. <https://doi.org/10.1080/13563461003789803>
- Bebbington, A. J., Bebbington, D. H., Bury, J., Langan, J., Muñoz, J. P., & Scurrah, M. (2008). Mining and social movements: Struggles over livelihood and rural territorial development in the Andes. *World Development*, 36(12), 2888-2905. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.11.016>
- Bebbington, A. J., & Bury, J. (2013). *Subterranean struggles: New dynamics of mining, oil and gas in Latin America*. University of Texas Press.
- Beltrán, C. (7 de enero de 2021). Arequipa: sentencian a prisión a dirigentes por protestas contra Tía María. *La República*. <https://larepublica.pe/sociedad/2021/01/08/arequipa-sentencian-a-prision-a-dirigentes-por-protestas-contratia-maria-lrsd/>

- Berman, N., Couttenier, M., Rohner, D., & Thoenig, M. (2017). This mine is mine! How minerals fuel conflicts in Africa. *American Economic Review*, 107(6), 1564-1610. <https://doi.org/10.1257/aer.20150774>
- Berry, S. (18 de mayo de 2015). South Africa: Fuleni communities tell Ibutho Coal to leave and never return! Save Our iMfolozi Wilderness. <http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=12995>
- Billo, E., & Zukowski, I. (2 de noviembre de 2015). Criminals or citizens? Mining and citizen protest in Correa's Ecuador. *Nacla Reporting on the Americas*. <https://nacla.org/news/2015/11/02/criminals-or-citizens-mining-and-citizen-protest-correa%E2%80%99s-ecuador>
- Blair, G., Christensen, D., & Rudkin, A. (2021). Do commodity price shocks cause armed conflict? A meta-analysis of natural experiments. *American Political Science Review*, 115(2), 709-716. <https://doi.org/10.1017/S0003055420000957>
- Boley, B. B., Strzelecka, M., Yeager, E. P., Alector Ribeiro, M., Aleshinloye, K. D., Woosnam, K. M., & Prangle Mimbs, B. (abril de 2021). Measuring place attachment with the abbreviated place attachment scale (APAS). *Journal of Environmental Psychology*, 74, 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2021.101577>
- Boulding, C. (2014). *NGOs, political protest, and civil society*. Cambridge University Press.
- Boulding, C., & Holzner, C. A. (2021). *Voice and inequality: Poverty and political participation in Latin American democracies*. Oxford University Press.
- Brady, H. E. (2000). Contributions of survey research to political science. *PS. Political Science and Politics*, 33(1), 47-57. <https://doi.org/10.2307/420775>
- Bulmer-Thomas, V. (1987). *The political economy of Central America since 1920*. Cambridge University Press.
- Butel, J., & Braun, K. L. (2019). The role of collective efficacy in reducing health disparities: A systematic review. *Family and Community Health*, 42(1), 8-19. <https://doi.org/10.1097/FCH.0000000000000206>
- Carnie, T. (18 de marzo de 2015). Coal mine's effects would be huge. Independent Online, IOL. <https://www.iol.co.za/business-report/economy/coal-mines-effects-would-be-huge-1833756>
- Castillo Fernández, M., Gallardo Marticorena, M., Chávez Quijada, M., Del Carpio Lazo, D., & Gómez Urquiza, J. (2011). *Valle de Tambo-Islay: Territorio, agua y derechos locales en riesgo con la minería a tajo abierto*. Red Muqui y CooperAcción.
- Centre for Applied Legal Studies. (abril de 2018). Victimisation experiences of activists in South Africa. Open Society Foundation for South Africa, Ford Foundation and the Raith Foundation. <https://www.osf.org.za/wp-content/uploads/2018/09/Centre-for-Applied-Legal-Studies-Victimisation-Experiences-of-Activists-in-South-Africa-report.pdf>
- Centro Humboldt. (2008). Monitoreo ambiental de sistemas productivos. Centro Humboldt. [https://www.simas.org.ni/media/sistemas\\_productivos\\_Nicaragua.pdf](https://www.simas.org.ni/media/sistemas_productivos_Nicaragua.pdf)
- Centro Humboldt. (2014). Estado actual del sector minero y sus impactos socioambientales en Nicaragua, 2012-2013. Centro Humboldt. <https://humboldt.org.ni/estado-actual-del-sector-minero-y-sus-impactos-socioambientales-en-nicaragua/>

- Centro Humboldt. (2015a). En Santo Domingo, la ciudadanía promueve la defensa de su derecho humano al agua. IBIS. <https://www.simas.org.ni/publicaciones/6667/en-santo-domingo-la-ciudadania-promueve-la-defensa-de-su-derecho-humano-al-agua/>
- Centro Humboldt. (2015b). Rancho Grande una herencia natural y productiva amenazada por la minería. IBIS. <https://humboldt.org.ni/rancho-grande-una-herencia-natural-y-productiva-amenazada-por-la-mineria/>
- Centro Humboldt. (2015c). *Valoración de riesgos e impactos socioambientales de la minería metálica en Nicaragua, 2013-2015*. IBIS.
- Centro Humboldt, & Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEEPP. (2017). *La minería industrial en Nicaragua: Una mirada desde la óptica fiscal*. Centro Humboldt e IEEPP.
- Cervantes, M. (9 de agosto de 2019a). Peru suspends key permit for Southern Copper in U-turn on Tía María project. Reuters. <https://www.reuters.com/article/us-peru-southern-copper/peru-suspends-key-permit-for-southern-copper-in-u-turn-%20on-tia-maria-project-idUSKCN1UZ2GO>
- Cervantes, M. (30 de octubre de 2019b). Peru won't «impose» troubled Tía María copper project after green-light given. Reuters. <https://www.reuters.com/article/us-peru-copper/peru-wont-impose-troubled-tia-maria-copper-project-after-green-light-given-idUSKBN1X9208>
- Christensen, D. (2019). Concession stands: How mining investments incite protest in Africa. *International Organization*, 73(1), 65-101. <https://doi.org/10.1017/S0020818318000413>
- Chuhan-Pole, P., Dabalen, A. L., & Land, B. C. (2017). *Mining in Africa: Are local communities better off?* World Bank y Agence Française de Développement. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26110>
- Conde, M. (2016). Resistance to mining. A review. *Ecological Economics*, 132, 80-90. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.08.025>
- Conde, M., & Le Billon, P. (2017). Why do some communities resist mining projects while others do not? *The Extractive Industries and Society*, 4(3), 681-697. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2017.04.009>
- CooperAcción. (2019). *Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte segundo semestre 2019*. CooperAcción.
- Cuffe, S. (2015). *Nicaragua: Govt. to cancel B2Gold's El Pavón mining project due to environmental impacts after years of community protests*. Business and Human Rights Resource Center.
- Davenport, J. (2013). *Digging deep: A history of mining in South Africa*. Jonathan Ball Publishers.
- De Echave, J., Diez, A., Huber, L., Revesz, B., Ricard Lanata, X., & Tanaka, M. (2009). *Minería y conflicto social*. Instituto de Estudios Peruanos.
- Defensoría del Pueblo. (septiembre de 2009). *Reporte de conflictos sociales*. Defensoría del Pueblo.
- Defensoría del Pueblo. (2015). *¡Un llamado a la remediación! Avances y pendientes en la gestión estatal frente a los pasivos ambientales mineros e hidrocarburiíferos*. Defensoría del Pueblo.

- Díaz Gonzales, D. (14 de agosto de 2021). Aidesep: Buscaremos la representación de los pueblos indígenas en el Congreso. Ojo Público. <https://ojo-publico.com/2949/aidesep-buscaremos-la-representacion-indigena-en-el-congreso>
- Dougherty, M. L. (2019). How does development mean? Attitudes toward mining and the social meaning of development in Guatemala. *Latin American Perspectives*, 46(2), 1-21. <https://doi.org/10.1177/0094582X18820273>
- Dougherty, M. L. & Olsen, T. D. (2014a). Taking terrain literally: Grounding local adaptation to corporate social responsibility in the extractive industries. *Journal of Business Ethics*, 119(3), 423-434. <https://doi.org/10.1007/s10551-013-1643-0>
- Dougherty, M. L. & Olsen, T. D. (2014b). «They have good devices»: Trust, mining, and the microsociology of environmental decision-making. *Journal of Cleaner Production*, 84, 183-192. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.04.052>
- Dunlap, A. (2019). «¡Agro sí, mina no!» The Tía María copper mine, State terrorism and social war by every means in the Tambo valley, Peru. *Political Geography*, 71, 10-25. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2019.02.001>
- Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Eclac. (2013). *Natural resources: Status and trends toward a regional development agenda in Latin America and the Caribbean*. Eclac.
- EcuRed. (2020). Santo Domingo (Nicaragua). EcuRed. [https://www.ecured.cu/Santo\\_Domingo\\_\(Nicaragua\)](https://www.ecured.cu/Santo_Domingo_(Nicaragua)).
- Eisenstadt, T. A., & Jones West, K. (2017a). Indigenous belief systems, science, and resource extraction: Climate change attitudes in Ecuador. *Global Environmental Politics*, 17(1), 40-58. [https://doi.org/10.1162/GLEP\\_a\\_00389](https://doi.org/10.1162/GLEP_a_00389)
- Eisenstadt, T. A., & Jones West, K. (2017b). Public opinion, vulnerability, and living with extraction on Ecuador's oil frontier: Where the debate between development and environmentalism gets personal. *Comparative Politics*, 49(2), 231-251. <https://doi.org/10.5129/001041517820201404>
- Eisenstadt, T. A. & West, K. J. (2019). *Who speaks for nature? Indigenous movements, public opinion, and the petro-State in Ecuador*. Oxford University Press.
- El Comercio*. (12 de abril de 2015). Tía María: Los factores detrás del conflicto. *El Comercio*. <https://elcomercio.pe/peru/arequipa/tia-maria-factores-detras-conflicto-informe-351505-noticia/?ref=signwal>
- El Comercio*. (10 de julio de 2019a). Tía María: Residentes de valle de Tambo anuncian paro indefinido desde el 15 de julio. *El Comercio*. <https://elcomercio.pe/peru/arequipa/arequipa-tia-maria-residentes-valle-tambo-anuncian-paro-15-julio-noticia-ecpm-654036-noticia/>
- El Comercio*. (10 de julio de 2019b). Tía María: Todo lo que debe saber tras la entrega de licencia a Southern. *El Comercio*. <https://elcomercio.pe/peru/arequipa/tia-maria-debes-entrega-licencia-southern-noticia-ecpm-654060-noticia/>
- El Comercio*. (30 de enero de 2020a). Martín Vizcarra sobre Tía María: «No [están] dadas las condiciones» para ejecución del proyecto. *El Comercio*. <https://elcomercio.pe/economia/peru/martin-vizcarra-sobre-tia-maria-no-estan-dadas-las-condiciones-para-ejecucion-del-proyecto-arequipa-valle-del-tambo-nndc-noticia/>

- El Comercio*. (11 de junio de 2020b). Southern Copper Perú: «Creemos que la mayoría de la población está a favor de Tía María». *El Comercio*. <https://elcomercio.pe/economia/southern-copper-peru-creemos-que-la-mayoria-de-la-poblacion-esta-a-favor-de-tia-maria-nndc-noticia/>
- El Comercio*. (24 de septiembre de 2021). Tía María: La salida del proyecto «no es viable» en estos momentos, sostiene titular del MEF. *El Comercio*.
- El Diario*. (16 de enero de 2020). Perú prevé que se aclaren críticas a proyecto minero Tía María antes de 2024. *El Diario*. [https://www.eldiario.es/economia/peru-criticas-proyecto-tia-maria\\_1\\_1075517.html](https://www.eldiario.es/economia/peru-criticas-proyecto-tia-maria_1_1075517.html)
- EThekwini Municipality. (7 de agosto de 2014). KZN sets sights on becoming SA's skills capital. EThekwini Municipality. [http://www.durban.gov.za/Resource\\_Centre/new2/Pages/KZN-sets-sights-on-becoming-SA%27s-%27skills-capital%27-.aspx](http://www.durban.gov.za/Resource_Centre/new2/Pages/KZN-sets-sights-on-becoming-SA%27s-%27skills-capital%27-.aspx)
- Farooki, M. (2018). China's mineral sector and the belt & road initiative. *European Policy Brief*. Strategic Dialogue on Sustainable Raw Materials for Europe, Strade. [https://www.stradeproject.eu/fileadmin/user\\_upload/pdf/STRADE\\_PB\\_02-2018\\_One\\_Belt\\_One\\_Road.pdf](https://www.stradeproject.eu/fileadmin/user_upload/pdf/STRADE_PB_02-2018_One_Belt_One_Road.pdf)
- Fine, B. & Rustomjee, Z. (1996). *The political economy of South Africa: From minerals-energy complex to industrialization*. Routledge.
- Fundación Enrique Bolaños. (2003). Propuesta de Plan Nacional de Desarrollo. República de Nicaragua. <https://sajurin.enriquebolanos.org/docs/Plan%20Nacional%20de%20desarrollo.pdf>
- García, M., & Pantigoso, P. (2020). *Peru's mining and metals investment guide 2020/2021: Economic overview*. Ernst & Young Global Limited, EYG. [https://www.ey.com/es\\_pe/mining-metals/mining-metals-investment-guide](https://www.ey.com/es_pe/mining-metals/mining-metals-investment-guide)
- Gardner, J. (1993). *Community building: An overview report and case profiles*. Teamworks.
- Garvan, M. (10 de julio de 2019) ¿Qué es el canon minero y cómo se utiliza en el Perú? *El Comercio*. <https://elcomercio.pe/economia/peru/canon-minero-utiliza-peru-mef-impuesto-renta-igv-ecpm-noticia-641959-noticia/>
- Gerring, J. (2007). *Case study research: Principles and practices*. Cambridge University Press.
- Gerring, J., & Cojocar, L. (2016). Selecting cases for intensive analysis: A diversity of goals and methods. *Sociological Methods & Research*, 45(3), 392-423. <https://doi.org/10.1177/0049124116631692>
- Givan, R. K., Roberts, K. M., & Soule, S. A. (Eds.). (2010). *The diffusion of social movements: Actors, mechanisms, and political effects*. Cambridge University Press.
- Global Environmental Trust, GET. (4 de abril de 2019) Update: August 2018 to now status of the Save Our Wilderness campaign. GET. <https://globalenvironmentaltrust.org/update-august-2018-to-now-status-of-the-save-our-wilderness-campaign/>
- Global Witness. (2015). *Global Witness annual review 2014: 20 years of impact*. Global Witness Limited. <https://www.globalwitness.org/en/about-us/global-witness-annual-reports/>
- Global Witness. (2018). *At what cost? Irresponsible business and the murder of land and environmental defenders in 2017*. Global Witness Limited. <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/at-what-cost/>

- Goldstone, J., & Tilly, C. (2001). Threat (and opportunity): Popular action and State response in the dynamic of contentious action. En R. R. Aminzade, J. Goldstone, & D. McAdam (Eds.). *Silence and voice in the study of contentious politics* (pp. 179-194). Cambridge University Press.
- groundWork. (21 de septiembre de 2016). S. A. coal communities meet at KZN coal hotspot. groundWork. <https://www.groundwork.org.za/archives/2016/news%2020160921%20-%20SA%20COAL%20COMMUNITIES%20MEET%20AT%20KZN%20COAL%20HOTSPOT.php>
- groundWork. (2019). Down to zero: The politics of just transition. The groundWork Report 2019. [https://www.groundwork.org.za/reports/gW\\_Report\\_2019.pdf](https://www.groundwork.org.za/reports/gW_Report_2019.pdf)
- Guha, R. & Martinez-Alier, J. (1997). *Varieties of environmentalism: Essays North and South*. Earthscan.
- Gumboh, E. (2018). *Victimisation experiences of activists in South Africa*. Centre for Applied Legal Studies. <https://www.osf.org.za/wp-content/uploads/2018/09/Centre-for-Applied-Legal-Studies-Victimisation-Experiences-of-Activists-in-South-Africa-report.pdf>
- Gustafsson, M.-T. (2016). Private conflict regulation and the influence of peasant communities over natural resources. *Latin American Research Review*, 51(2), 86-106. <https://doi.org/10.1353/lar.2016.0027>
- Gustafsson, M.-T. (2018). *Private politics and peasant mobilization: Mining in Peru*. Palgrave Macmillan.
- Gutiérrez Elizondo, H. M. (2015). *Mining and resource mobilization for social development: The case of Nicaragua*. Unrisd. [http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/\(httpAuxPages\)/1524AC2902E8323DC1257E310031BA2E/\\$file/Gutierrez.pdf](http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/1524AC2902E8323DC1257E310031BA2E/$file/Gutierrez.pdf)
- Harper, P. (27 de julio de 2014). Fighting for hearts and minds. *City Press*.
- Haslam, P. A. (2021). The micro-politics of corporate responsibility: How companies shape protest in communities affected by mining. *World Development*, 139(105322), 1-14. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105322>
- Haslam, P. A., & Ary Tanimoune, N. (2016). The determinants of social conflict in the Latin American mining sector: New evidence with quantitative data. *World Development*, 78(16), 401-419. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.10.020>
- Herrera, V. (2017). From participatory promises to partisan capture: Local democratic transitions and Mexican water politics. *Comparative Politics*, 49(4), 479-499. <https://doi.org/10.5129/001041517821273008>
- Herrera, V. (2020). The case for studying urban environmental politics in the developing world. *APSA Comparative Politics Newsletter*, 30(1), 43-49.
- Huamanchumo, J., Peña, Y., Silva, L., & Hendriks, J. (2008). Developing capacity in water users organizations: The case of Peru. *Irrigation and Drainage*, 57, 300-310.
- Instituto Nacional de Información de Desarrollo, Inide. (2005). *Censo 2005*. <https://www.inide.gob.ni/Estadisticas/censoCEPOV2005>
- International Federation for Human Rights. (29 de octubre de 2020). South Africa: The killing of Somkhele wnviromental activitst, Fikile Ntshangase. International Federation for Human Rights. <https://www.fidh.org/en/region/Africa/south-africa/south-africa-the-killing-of-somkhele-enviromental-activist-fikile>

- Ipsos. (18 de mayo de 2015). Opinión data: Resumen de encuestas a la opinión pública. Ipsos.
- Ipsos. (agosto de 2019). *Estudio de opinión*. El Comercio e Ipsos.
- Jaskoski, M. (2014). Environmental licensing and conflict in Peru's mining sector. *World Development*, 64, 873-883. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.07.010>
- Jaskoski, M. (2020). Participatory institutions as a focal point for mobilizing: Prior consultation and indigenous conflict in Colombia's extractive industries. *Comparative Politics*, 52(4), 537-556. <https://doi.org/10.5129/001041520X15757670821639>
- Jenkins, H., & Yakovleva, N. (2006). Corporate social responsibility in the mining industry: Exploring trends in social and environmental disclosure. *Journal of Cleaner Production*, 14(3-4), 271-284. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2004.10.004>
- Jenkins, J. C. (1983). Resource mobilization theory and the study of social movements. *Annual Review of Sociology*, 9, 527-553. <https://doi.org/10.1146/annurev.so.09.080183.002523>
- Jolly, T. (1 de junio de 2016). Somkhele communities seek mine closure. *Zululand Observer*. <https://zululandobserver.co.za/114064/somkhele-communities-seek-mine-closure/>
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1981). *The simulation heuristic*. Stanford University CA-Dept. of Psychology.
- Ka-Manzi, F., & Bond, P. (2016). «Leave the coal in the hole» say women from KwaZulu-Natal's mining war zone. CCS. <http://ccs.ukzn.ac.za/files/Leave-the-coal-in-the-ground-somkhele.pdf>
- Klare, M. T. (2012). *The race for what's left: The global scramble for the world's last resources*. Metropolitan Books.
- Knutsen, C. H., Kotsadam, A., Hammersmark Olsen, E., & Wig, T. (2016). Mining and local corruption in Africa. *American Journal of Political Science*, 61(2), 320-334. <https://doi.org/10.1111/ajps.12268>
- Kolstad, I., & Søreide, T. (2009). Corruption in natural resource management: Implications for policy makers. *Resources Policy*, 34(4), 214-226. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2009.05.001>
- Kruijt, D., & Vellinga, M. (1979). *Labor relations and multinational corporations: The Cerro de Pasco Corporation in Peru (1902-1974)*. University of Texas Press.
- Kuttschreuter, M. (2006). Psychological determinants of reactions to food risk messages. *Risk Analysis*, 26(4), 1045-1057. <https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2006.00799.x>
- Lapa Romero, J. A. (2017). *Lo que los ojos no ven: El caso del conflicto Tía María en la región Arequipa*. Grupo Editorial Arteidea.
- Lapegna, P. (2016). *Soybeans and power: Genetically modified crops, environmental politics, and social movements in Argentina*. Oxford University Press.
- La República*. (4 de diciembre de 2019). Arequipa: Reiniciarían protestas en el valle de Tambo contra proyecto Tía María. *La República*. <https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/05/arequipa-reiniciarian-protestas-en-el-valle-de-tambo-contra-proyecto-tia-maria-lrsd/>

- La República*. (30 de enero de 2020). Elmer Cáceres sobre Tía María: Martín Vizcarra se dio cuenta que tenemos que estar al lado del pueblo. *La República*. <https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/05/arequipa-reiniciar-protestas-en-el-valle-de-tambo-contra-proyecto-tia-maria-lrsd/>
- Lazenby, L. (11 de marzo de 2014). Nicaragua an attractive mining destination, says «Open for business». *Mining Weekly Online*. <https://www.miningweekly.com/article/nicaragua-an-attractive-mining-destination-says-open-for-business-2014-03-11>
- Leonard, L. (julio de 2019). Traditional leadership, community participation and mining development in South Africa: The case of Fuleni, Saint Lucia, KwaZulu-Natal. *Land Use Policy*, 86, 290-298. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.05.007>
- Leonard, L. (2020). How mining is threatening the sustainability of the South African nature tourism sector and civil society response. En J. M. Rogerson & G. Visser (Eds.). *New directions in South African tourism geographies* (pp. 317-332). Springer.
- Lewicka, M. (2011). Place attachment: How far have we come in the last 40 years? *Journal of Environmental Psychology*, 31(3), 207-230. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2010.10.001>
- Li, F. (2015). *Unearthing conflict: Corporate mining, activism, and expertise in Peru*. Duke University Press.
- Llanes Salazar, R., & Torres-Mazuera, G. (2017). Perdidos en la traducción: Redes de (in)comunicación en la consulta a las comunidades mayas sobre la siembra de soya transgénica en México. *Revista Indiana*, 34(2), 183-207. <https://doi.org/10.18441/ind.v34i2.183-207>
- López, P., & Dávila, E. (octubre de 2014). We're going to defend our paradise against mining. *Envío*. <https://www.envio.org.ni/articulo/4931>
- López-Calva, L. F., & Lustig, N. C. (Eds.). (2010). *Declining inequality in Latin America: A decade of progress?* Brookings Institution Press.
- Macrotrends (15 de octubre de 2020). Gold prices-100 year historical chart. *Macrotrends*. <https://www.macrotrends.net/charts/precious-metals>
- Mahapa, R. (26 de mayo de 2020). Coal mine's bid for KZN land puts compensation criteria to test. *Daily Maverick*. <https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-05-26-coal-mines-bid-for-kzn-land-puts-compensation-criteria-to-test/>
- Mähler, A., & Pierskalla, J. H. (2015). Indigenous identity, natural resources, and contentious politics in Bolivia: A disaggregated conflict analysis, 2000-2011. *Comparative Political Studies*, 48(3), 301-332. <https://doi.org/10.1177/0010414014545012>
- Mail & Guardian. (14 de noviembre de 1997). The battle for St Lucia is far from over. *Mail & Guardian*. <https://mg.co.za/article/1997-11-14-the-battle-for-st-lucia-is-far-from-over/>
- Makhanya, S. (4 de julio de 2016). Protesters demand mining benefits. *Zuzuland Observer*. <https://zululandobserver.co.za/116987/protesters-demand-mining-benefits/>
- Mangini, M. (2015). Economía política del cambio institucional en la política minera de las provincias argentinas [Tesis doctoral, Universidad Torcuato di Tella].
- Manrique, H. & Sanborn, C. (2021). *La minería en el Perú: Balance y perspectivas de cinco décadas de investigación*. Universidad del Pacífico.

- Marcus, J. (2015). Los guardianes de Yaoska de Rancho Grande: Ocho pasos para detener una empresa minera transnacional. Independent Study Project, ISP. [https://digitalcollections.sit.edu/isp\\_collection/2264](https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/2264)
- Márquez, N. (28 de septiembre de 2009). Pobladores de Cocachacra rechazan dar paso a Proyecto minero Tía María. *La República*. <https://larepublica.pe/politica/423806-pobladores-de-cocachacra-rechazan-dar-paso-a-proyecto-minero-tia-maria/>
- Martínez Cuenca, A. (1992). *Sandinista economics in practice: An insider's critical reflections*. South End Press.
- Mattessich, P. W. (2009). Social capital and community building. En R. Phillips & R. H. Pittman. *An introduction to community development* (pp. 49-57). Routledge.
- McAdam, D. (1983). Tactical innovation and the pace of insurgency. *American Sociological Review*, 48(6), 735-754. <https://doi.org/10.2307/2095322>
- McAdam, D., Tarrow, S., & Tilly, C. (2001). *Dynamics of contention*. Cambridge University Press.
- McCarthy, J. D., & Zald, M. (1973). *The trend of social movements in America: Professionalization and resource mobilization*. General Learning Press.
- McCarthy, J. D., & Zald, M. (1977). Resource mobilization and social movements: A partial theory. *American Journal of Sociology*, 82(6), 1212-1241. <http://www.jstor.org/stable/2777934>
- McDonald, M. D. (8 de noviembre de 2021). Nicaragua's president wins in landslide after jailing his opponents. Bloomberg. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-08/nicaragua-leader-ortega-hits-back-during-vote-slammed-by-biden>
- Meyer, D. S. (2004). Protest and political opportunities. *Annual Review of Sociology*, 30, 125-145. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.30.012703.110545>
- Millan Lombrana, L., & Quigley, J. (9 de junio de 2019). Giant copper mine unblocked as Peru awards Tía María license. *Bloomberg*. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-09/giant-copper-project-unblocked-as-peru-awards-tia-maria-license>
- Minerals Council of South Africa. (2018). *Facts and figures*. Minerals Council South Africa. <https://www.mineralscouncil.org.za/industry-news/publications/facts-and-figures>
- Minerals Council South Africa. (2020). *Facts and figures*. Minerals Council South Africa. <https://www.mineralscouncil.org.za/industry-news/publications/facts-and-figures>
- Ministerio de Energía y Minas de Nicaragua, MEM. (2014). *Estadísticas mineras*. [www.mem.gob.ni](http://www.mem.gob.ni)
- Miranda Aburto, W., & Chavarría, J. C. (13 de agosto de 2014). Fueron detenidos en Matagalpa cuando viajaban a la capital: Policía impide que mineros protesten en Managua. Confidencial. <https://archivo.confidencial.com.ni/articulo/18904/policia-impide-que-mineros-protesten-en-managua>
- Mitchell, M. N. (2012). *Interpreting and visualizing regression models using Stata*. Stata Press.
- Mokgalaka, R. (10 de mayo de 2015). Don't take what belongs to us. groundWork Newsletter. <https://saveourwilderness.org/2015/05/10/dont-take-what-belongs-to-us/>
- Morare, M. (octubre de 2016). Mining wars: The people vs the leaders. Southern African Catholic Bishops' Conference. <http://www.cplo.org.za/wp-content/uploads/2016/02/BP-415-Mining-Wars-The-people-vs-The-Leaders-Oct-2016.pdf>

- Moseley, M. W. (2015). Contentious engagement: Understanding protest participation in Latin American democracies. *Journal of Politics in Latin America*, 7(3), 3-48. <https://doi.org/10.1177/1866802X1500700301>
- Moseley, M. W. (2018). *Protest state: The rise of everyday contention in Latin America*. Oxford University Press.
- Muñoz Portugal, I. (2009). Grupos de regantes y acción colectiva en la distribución del agua en el valle de Virú. *Debates en Sociología*, (34). <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/debatesensociologia/article/view/2535>
- Muradian, R., Martinez-Alier, J., & Correa, J. (2003). International capital versus local population: The environmental conflict of the Tambogrande mining project, Peru. *Society and Natural Resources*, 16, 775-792. <https://doi.org/10.1080/08941920309166>
- Newell, P. (2005). Citizenship, accountability and community: The limits of the CSR agenda. *International Affairs*, 81(3), 541-557. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2005.00468.x>
- NGO Pulse. (8 de abril de 2020). The water crisis in a time of the Covid-19. NGO Pulse. <http://www.ngopulse.org/node/72926>
- Nixon, R. (2011). *Slow violence and the environmentalism of the poor*. Harvard University Press.
- Njabulo Ndlovu, R. (21 de diciembre de 2015). Rural activists get equipped with video documenting skills. Earthlore Foundation. <http://earthlorefoundation.org/rural-activists-get-equipped-with-video-documenting-skills/>
- Observatory of Mining Conflicts in Latin America, Ocmal. (2020). Conflictos mineros en América Latina. Ocmal. [https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal\\_db-v2/](https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/)
- Olalde, M. (16 de octubre de 2016). South Africa: Tales from the coalface. Pulitzer Center. <https://pulitzercenter.org/stories/south-africa-ales-coalface>
- Origlia, G. (8 de noviembre de 2015). Famatina: La historia de un pueblo que en nueve años expulsó a cuatro mineras. *La Nación*. <https://www.lanacion.com.ar/sociedad/famatina-la-historia-de-un-pueblo-que-en-nueve-anos-expulso-a-cuatro-mineras-nid1843559/>
- Orihuela, J. C., Pérez, C. A., & Huaroto, C. (2019). Do fiscal windfalls increase mining conflicts? Not always. *The Extractive Industries and Society*, 6(2), 313-318. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2018.07.010>
- Owen, J. R., & Kemp, D. (2012). Social license and mining: A critical perspective. *Resources Policy*, 38(1), 29-35. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2012.06.016>
- Özkaynak, B., Rodríguez-Labajos, B., İskender Aydın, C., Yanez, I., & Garibay, C. (abril de 2015). *Towards environmental justice success in mining resistances: An empirical investigation*. Ejolt Project.
- Paredes, M. (2016). The *glocalization* of mining conflict: Cases from Peru. *The Extractive Industries and Society*, 3(4), 1046-1057. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2016.08.007>
- Paredes, M. (marzo de 2022). One industry, different conflicts: A typology of mining mobilization. *The Extractive Industries and Society*, 9, 101052. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2022.101052>
- Peek, B., & Taylor, T. (2015). Eskom's crisis is our national crisis. groundWork. [https://www.groundwork.org.za/newsletters/March 2015 for web.pdf](https://www.groundwork.org.za/newsletters/March%202015%20for%20web.pdf)

- Pérez González, T. (2015). Minería y desarrollo en Nicaragua: Una mirada feminista del caso de Rancho Grande [M. A. thesis, Universidad Centroamericana]. <http://movimientom4.org/wp-content/docs/una-mirada-feminista-del-caso-Rancho-Grande-Nicaragua.pdf>
- Pérez Soza, N. (abril de 2013). Nicaragua: In six years the gold will all be gone. *Envío*. <https://www.envio.org.ni/articulo/4678>
- Perreault, T. (2006). From the *Guerra del Agua* to the *Guerra del Gas*: Resource governance, neoliberalism and popular protest in Bolivia. *Antipode*, 38, 150-172. <https://doi.org/10.1111/j.0066-4812.2006.00569.x>
- Petmin. (s. f.). Somkhele. Petmin Group. <https://www.petmin.co.za/somkhele.php>
- Pikoli, Z. (30 de abril de 2020). Umfolozi mining activist stares down the barrel of a gun over resistance to relocation. *Daily Maverick*. <https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-04-30-umfolozi-mining-activist-stares-down-the-barrel-of-a-gun-over-resistance-to-relocation/>
- Ponce, A. F., & McClintock, C. (2014). The explosive combination of inefficient local bureaucracies and mining production: Evidence from localized societal protests in Peru. *Latin American Politics and Society*, 56(3), 118-140. <https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2014.00243.x>
- Post, P. (15 de mayo de 2015). Tía María violence in Arequipa's Plaza de Armas. *Peru Reports*. <https://perureports.com/tia-maria-violence-in-arequipas-plaza-de-armas/992/>
- ProNicaragua. (2013). *Nicaragua: Discover the mining opportunities*. ProNicaragua.
- ProNicaragua. (2014). *Nicaragua: ¡Crecamos juntos!* ProNicaragua.
- Proshansky, H. M. (1978). The city and self-identity. *Environment and Behavior*, 10(2), 147-169. <https://doi.org/10.1177%2F0013916578102002>
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Quintanilla, P., & Rogelio, S. (2013). Teorizando la acción colectiva en los conflictos socioambientales del Perú actual: El caso del conflicto de Tía María (2009-2011). *Revista Andina de Estudios Políticos*, 3(1), 53-69. <https://doi.org/10.35004/raep.v3i1.53>
- Reeder, B. W., Arce, M., & Siefkas, A. (2022). Environmental justice organizations and the diffusion of extractive conflicts in Latin America. *World Development*, 154, 105883. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105883>
- Rimal, R. N. (2001). Perceived risk and self-efficacy as motivators: Understanding individuals long-term use of health information. *Journal of Communication*, 51(4), 633-654. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2001.tb02900.x>
- Riofrancos, T. (2020). *Resource radicals: From petro-nationalism to post-extractivism in Ecuador*. Duke University Press.
- Riofrancos, T. (7 de febrero de 2022). Shifting mining from the Global South misses the point of climate justice. *Foreign Policy*. <https://foreignpolicy.com/2022/02/07/renewable-energy-transition-critical-minerals-mining-onshoring-lithium-evs-climate-justice/>

- Salas Rodríguez, I. (2006). Quilish hora cero: Cajamarca, la lucha de un pueblo que defiende su vida y dignidad. Cajamarca, Perú. Red Voltaire. <https://www.voltairenet.org/article138012.html>
- Sanborn, C., & Torres, V. C. (2009). *La economía china y las industrias extractivas: Desafíos para el Perú*. Universidad del Pacífico y CooperAcción.
- Sánchez González, M. (2016). Los recursos en disputa. El caso del conflicto minero en Rancho Grande, Nicaragua. *Anuario de Estudios Centroamericanos*, 42, 93-131.
- Sánchez González, M. (2017). *The Rancho Grande experience: Environmentalism in rebellion*. Envío. <http://www.envio.org.ni/articulo/5383>
- Sánchez González, M., & Osorio Mercado, H. (2020). Abril 2018: Nicaragua, el desafío de la democracia frente al autoritarismo. En S. Ramírez Mercado (Ed.). *Nicaragua 2018: La insurrección cívica de abril* (pp. 73-116). Universidad Centroamericana Publicaciones.
- Scheidel, A., Del Bene, D., Liu, J., Navas, G., Mingorría, S., Avila, S., Roy, B., Ertör, I., Temper, L., & Martínez-Alier, J. (2020). Environmental conflicts and defenders: A global overview. *Global Environmental Change*, (63), 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102104>
- Scurrah, M. (Ed.). (2008). *Defendiendo derechos y promoviendo cambios. El Estado, las empresas extractivas y las comunidades locales en el Perú*. Instituto de Estudios Peruanos.
- Seawright, J., & Gerring, J. (2008). Case selection techniques in case study research: A menu of qualitative and quantitative options. *Political Research Quarterly*, 61(2), 294-308. <https://doi.org/10.1177/1065912907313077>
- Sebastián Chamorro, J. (2014). *La minería en Nicaragua: Importancia, desafíos y oportunidades*. En Congreso Internacional de Minería, Managua, Nicaragua.
- Serjeant, M. (2015). No a la minería en Rancho Grande: An investigation into the relationship between structure, agency, protest, and mining in a Nicaraguan village [Tesis de maestría, Leiden University].
- Sguazzin, A. (30 de noviembre de 2020). Eskom to be charged with misleading regulator over pollution. Bloomberg Green. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-30/eskom-to-be-charged-with-misleading-regulator-over-pollution#:~:text=Eskom%20Holdings%20SOC%20Ltd.%2C%20South,breaching%20its%20Atmospheric%20Emission%20License>
- Sharife, K., & Bond, P. (2011). Above and beyond South Africa's minerals-energy complex. En D. Pillay, J. Daniel, P. Naidoo, & R. Southall (Eds.). *New South African Review 2: New paths, old compromises* (pp. 279-299). Wits University Press.
- Sícoli Pósoleman, C., & Sallan, J. M. (2019). Social license to operate in the mining industry: The case of Peru. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 37(6), 480-490. <https://doi.org/10.1080/14615517.2019.1585142>
- Silva, E., Akchurin, M., & Bebbington, A. (2018). Policy effects of resistance against mega-projects in Latin America: An introduction. *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, 106, 27-47. <http://doi.org/10.32992/erlacs.10397>
- Silva, J. A., & Martínez, L. E. (23 de marzo de 2013). Rancho Grande contra minería. *La Prensa*. <https://www.laprensa.com.ni/2013/03/22/nacionales/139178-rancho-grande-contra-mineria>

- Simmons, E. (2016). *Meaningful mobilization: Market reforms and the roots of social protest in Latin America*. Cambridge University Press.
- Sjöberg, L. (1998). World views, political attitudes, and risk perception. *Risk*, 9(2), 137-152.
- Southern Copper Grupo Mexico. (2018). *Annual report*. Mexico City.
- Spalding, R. (2011). *Transnational activism and national action: El Salvador's anti-mining movement*. Tulane University.
- Spalding, R. (27-30 de mayo de 2015). *Mining booms and mining bans: Divergent outcomes of anti-mining movements in Nicaragua and Costa Rica*. En International Congress of the Latin American Studies Association, San Juan, Puerto Rico.
- Spalding, R. (27-30 de mayo de 2016). *Mining and protest in Central America. Interpreting alternative outcomes*. En International Congress of the Latin American Studies Association, Nueva York, Estados Unidos.
- Spalding, R. (2020). *The policy divide: Comparative analysis of mining policy in Nicaragua and El Salvador*. Research Group Mega Workshop.
- Statistics South Africa. (2011). Local municipality statistics. Mfolozi. [http://www.statssa.gov.za/?page\\_id=993&cid=mfolozi-municipality](http://www.statssa.gov.za/?page_id=993&cid=mfolozi-municipality)
- Steinberg, J. (2015). Strategic sovereignty: A model of non-state goods provision and resistance in regions of natural resource extraction. *Journal of Conflict Resolution*, 60(8), 1503-1528. <https://doi.org/10.1177/0022002714564429>
- Steinberg, J. (2019). *Mines, communities, and States: The local politics of natural resource extraction in Africa*. Cambridge University Press.
- Sullivan, L. (11 de junio de 2015). Peru's Tía María mining conflict: Another mega imposition. *Upside Down World*. <https://upsidedownworld.org/archives/peru-archives/perus-tia-maria-mining-conflict-another-mega-imposition/>
- Svampa, M. (2019). *Neo-extractivism in Latin America: Socio-environmental conflicts, the territorial turn, and new political narratives*. Cambridge University Press.
- Sztompka, P. (1999). *Trust: A sociological theory*. Cambridge University Press.
- Taj, M. (22 de abril de 2015). Peruvian foes of Tía María copper mine expand month-long protest. Reuters. <https://www.reuters.com/article/peru-mining-protests/peruvian-foes-of-tia-maria-copper-mine-expand-month-long-protest-%20idUSL1N0XJ2PB20150423>
- Tarrow, S. (1998). *Power in movement: Social movements, collective action, and politics*. Cambridge University Press.
- Temper, L., Del Bene, D., & Martinez-Alier, J. (2015). Mapping the frontiers and front lines of global environmental justice: The EJAtlas. *Journal of Political Ecology*, (22), 255-278. <https://doi.org/10.2458/v22i1.21108>
- Tendele Coal Mining. (25 de septiembre de 2016). Allegations about water use at the Somkhele mine in KwaZulu-Natal. Tendele Coal Mining.
- The Crowd Versus. (25 de septiembre de 2016). The crowd vs Ibutho Coal. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=dkLHrZPHNTg>
- The Economist*. (27 de abril de 2013). Fool's gold; South Africa. *The Economist*.
- Thorp, R. & Bertram, G. (1978). *Peru, 1890-1977: Growth and policy in an open economy*. Palgrave Macmillan.

- Tilly, C. (1978). *From mobilization to revolution*. McGraw-Hill College.
- Tilly, C., & Tarrow, S. (2006). *Contentious politics*. Paradigm Publishers.
- Toledo Orozco, Z. (2020). The other extractivism: The Andean State and small-scale and artisanal gold mining. En S. Ellner (Ed.). *Latin American extractivism: Dependency, resource nationalism, and resistance in broad perspective* (pp. 239-260). Roman and Littlefield.
- Tolvanen, A. (agosto de 2001). Interviews in La Libertad and Bonanza, Nicaragua. MiningWatch. [https://miningwatch.ca/sites/default/files/Nicaragua\\_interviews.pdf](https://miningwatch.ca/sites/default/files/Nicaragua_interviews.pdf)
- Torres-Wong, M. (2018). *Natural resources, extraction and indigenous rights in Latin America: Exploring the boundaries of environmental and State-corporate crime in Bolivia, Peru, and Mexico*. Routledge.
- Torres-Wong, M., & Jimenez-Sandoval, A. (2022). Indigenous resource governance as an alternative to mining: Redefining the boundaries of indigenous participation. *The Extractive Industries and Society*, 9, 101001. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.101001>
- Trelles, N. (19 de febrero de 2018). Terruquear, terruqueo, terruqueadores. Castellano Actual. <https://2020.udep.edu.pe/castellanoactual/terruquear-terruqueo-terruqueadores/>
- Trumbo, C. W., & McComas, K. A. (2003). The function of credibility in information processing of risk perception. *Risk Analysis*, 23(2), 343-353. <https://doi.org/10.1111/1539-6924.00313>
- Tshivhengwa, T. (24 de enero de 2019). Travel and tourism: A key sector in unlocking the economy and creating jobs. Tourism Business Council of South Africa. <https://tbsa.travel/travel-and-tourism-a-key-sector-in-unlocking-the-economy-and-creating-jobs/>
- Turner, J. (2019). Tía María: Inside the commodity versus community dilemma in Peru. *Mine*, (85). [https://mine.nridigital.com/mine\\_oct19/tia\\_maria\\_inside\\_the\\_commodity\\_versus\\_community\\_dilemma\\_in\\_peru](https://mine.nridigital.com/mine_oct19/tia_maria_inside_the_commodity_versus_community_dilemma_in_peru)
- Ugarte Cornejo, M. A. (2018). Gestión estatal del conflicto socioambiental de Tía María en Arequipa: Análisis del período 2007-2017 [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú].
- uMfolozi Municipality. (2017). *2016/17 Annual report*. <http://umfolozi.gov.za/wp-content/uploads/2014/08/Annual-Report-2016-2017.pdf>
- United Nations Environment Programme, UNEP. (2012). Extractive industries and conflict: Toolkit and guidance for preventing and managing land and natural resources conflict. UNEP. <https://www.unep.org/>
- United Nations Environment Programme, UNEP. (s. f.). Our work in Africa. UNEP. <https://www.unep.org/regions/africa/our-work-africa>
- Varshney, A. (2001). Ethnic conflict and civil society: India and beyond. *World Politics*, 53, 362-398. <http://www.jstor.org/stable/25054154>
- Veltmeyer, H., & Petras, J. (2014). *The new extractivism: A post-neoliberal development model or imperialism of the Twenty-First Century?* Zed Books.
- Vila Benites, G. & Bebbington, A. (2020). Political settlements and the governance of Covid-19: Mining, risk, and territorial control in Peru. *Journal of Latin American Geography*, 19(3), 215-223.

- Walter, M., & Wagner, L. (2021). Mining struggles in Argentina: The keys of a successful story of mobilisation. *The Extractive Industries and Society*, 8(4), 100940. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.100940>
- Whyte, R., Ortega, C. & Griffin, C. (marzo de 2011). Investment regulation and promotion: Can they coexist in one body? *Investment Climate in Practice*, (16), 80253.
- Wilkinson, K. P. (1991). *The community in rural America*. Greenwood Publishing Group.
- Williams, D. R., & Vaske, J. J. (2003). The measurement of place attachment: Validity and generalizability of a psychometric approach. *Forest Science*, 49(6), 830-840.
- Wilson Becerril, M. S. (2021). *Resisting extractivism: Peruvian gold, everyday violence, and the politics of attention*. Vanderbilt University Press.
- Witte-Lebhar, B. (2014). *Nicaraguan mining boom continues, but who really benefits?* University of New Mexico-Latin America Digital Beat, LADB. <https://digitalrepository.unm.edu/noticen/10140>
- Witte-Lebhar, B. (2015). *Nicaraguan miners square off against police, Canadian gold producer*. University of New Mexico-Latin America Digital Beat, LADB. <https://digitalrepository.unm.edu/noticen/10296>
- Woolcock, M. (2001). The place of social capital in understanding social and economic outcomes. *Canadian Journal of Policy Research*, 2(1), 11-17.
- World Bank. (2005). Republic of Peru: Supplemental loan for the irrigation subsector project, Rep. N° 32353. World Bank.
- World Bank. (2015). *Despite the end of the commodity boom, African countries can sustain their economic rise*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/04/21/despite-the-end-of-the-commodity-boom-african-countries-can-sustain-their-economic-rise>
- World Bank. (11 de mayo de 2020). *Mineral production to soar as demand for clean energy increases*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/05/11/mineral-production-to-soar-as-demand-for-clean-energy-increases>
- World Travel and Tourism Council. (2018). *Travel and tourism*. <https://tbcsc.travel/wp-content/uploads/2018/03/WTTC-Report-SouthAfrica2018.pdf>
- Youens, K. (12 de septiembre de 2016). The Fuleni vs. Ibutho coal matter: A legal perspective. Save Our iMfolozi Wilderness. <https://saveourwilderness.org/2016/09/12/the-fuleni-vs-ibutho-coal-matter-a-legal-perspective/>
- Youens, K. (17 de marzo de 2018). Hope for Somkhele, place of pain. Global Environmental Trust. <http://globalenvironmentaltrust.org/hope-for-somkhele-place-of-pain/>
- Zaremborg, G., & Torres-Wong, M. (2018). Participation on the edge: Prior consultation and extractivism in Latin America. *Journal of Politics in Latin America*, 10(3), 29-58. <https://doi.org/10.1177/1866802X1801000302>

## **Bases de datos**

Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI; <https://www.inei.gob.pe/>  
Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. Estadísticas; <https://www.mef.gob.pe/>  
Ministerio de Energía y Minas del Perú, Minem. Portal de transparencia; [http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte\\_transparencia\\_enlaces.aspx?id\\_entidad=137#.YXmiTy-B0UR](http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=137#.YXmiTy-B0UR)  
Ministerio de Energía y Minas de Nicaragua, MEM. Estadísticas mineras; [www.mem.gob.ni](http://www.mem.gob.ni)  
World Bank Open Data; <https://data.worldbank.org/>  
World Mining Data; <https://www.world-mining-data.info/>

## Siglas y abreviaturas

Addac	Asociación para la Diversificación y Desarrollo Agrícola Comunal, Nicaragua
ADIC	Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario, Nicaragua
Aidesepe	Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
ARS	Análisis de redes sociales
BCRP	Banco Central de Reserva del Perú
BEE	Black Economic Empowerment (Empoderamiento Económico Negro), Sudáfrica
C\$	Córdoba (moneda nacional de Nicaragua)
Caminic	Cámara Minera de Nicaragua
CEMS	Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad, Perú
Cenidh	Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos
CPC	Cerro de Pasco Corporation, Perú
DAJ	Dirección de Auxilio Judicial, Nicaragua
Eclac (Cepal)	Economic Commission for Latin America and the Caribbean (Comisión Económica para América Latina y el Caribe)
EIA	Evaluación de impacto ambiental
EJAtlas	Atlas de Justicia Ambiental
Fedepaz	Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, Perú
Fondeagua	Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Usuarios de Agua, Perú
FSLN	Frente Sandinista de Liberación Nacional, Nicaragua
GET	Global Environment Trust (Fondo Mundial para el Medio Ambiente)
ICWA	Alianza Comunitaria y Silvestre de iMfolozi (por sus siglas en inglés), Sudáfrica
IED	Inversión extranjera directa
IEEPP	Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Nicaragua
INEI	Instituto Nacional de Estadística e Informática, Perú

Inide	Instituto Nacional de Información de Desarrollo, Nicaragua
ITB	Junta Fiduciaria de Ingonyama (por sus siglas en inglés), Sudáfrica
JUA	Junta de Usuarios de Aguas, Perú
Macua	Mining Affected Communities United in Action (Comunidades Afectadas por la Minería Unidas en Acción), Sudáfrica
MCEJO	Mfolozi Community Environmental Justice Organisation (Organización de Justicia Ambiental de la Comunidad de Mfolozi), Sudáfrica
MCN	Movimiento Comunal Nicaragüense
MCPA	Mpukunyoni Community Property Association (Asociación de Bienes Comunitarios de Mpukunyoni), Sudáfrica
MEM	Ministerio de Energía y Minas, Nicaragua
Mined	Ministerio de Educación, Nicaragua
Minem	Ministerio de Energía y Minas, Perú
Ocmal	Observatory of Mining Conflicts in Latin America
OJA	Organización de justicia ambiental
ONG	Organización no gubernamental
PBI	Producto bruto interno
PLC	Partido Liberal Constitucionalista, Nicaragua
PNP	Policía Nacional del Perú
Pty	Proprietary (propietario)
R.	Rand (moneda nacional de Sudáfrica)
RSE	Responsabilidad social empresarial
S/	Sol (moneda nacional del Perú)
SAIS	South American Iron & Steel
SoiW	Save our iMfolozi Wilderness (Salvemos los Espacios Naturales de iMfolozi), Sudáfrica
SPCC	Southern Peru Copper Corporation
UNEP	United Nations Environment Programme
Unesco	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (por sus siglas en inglés)
UNO	Unión Nacional Opositora, Nicaragua
Unops	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (por sus siglas en inglés)
UNSA	Universidad Nacional de San Agustín, Perú
Wessa	Sociedad para la Vida Silvestre y el Medio Ambiente de Sudáfrica (por sus siglas en inglés)